

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Sociología y Estudios de Género
Convocatoria 2013-2015

Tesis para obtener el título de maestría en Sociología

Sin carpeta y sin bandera. La CONAIE y el paso de la contienda contenida a la transgresiva
en la Revolución Ciudadana

María Belén Yépez Mosquera

Asesor: Edison Hurtado

Lectores/as: Lucía Yama y Christian Bravo

Quito, octubre de 2018

Dedicatoria

A la Lola

Porque no tuvimos el tiempo para disfrutarlo

Tabla de contenidos

Resumen.....	VIII
Agradecimientos.....	X
Introducción	1
Capítulo 1.....	5
El movimiento indígena: los ciclos y la dinámica de la contienda política como problema de investigación	5
1. El problema de investigación	5
1.1. Preguntas de investigación.....	12
1.2. Justificación	12
2. Estado del arte: el ciclo de la contienda del movimiento indígena	13
2.1. El auge del movimiento indígena ecuatoriano	14
2.2. El repliegue del movimiento indígena ecuatoriano	16
2.3. La CONAIE y la Revolución Ciudadana.....	21
3. Modelo analítico y herramientas conceptuales para entender el ciclo y la contienda política del movimiento indígena	23
4. Estrategia de investigación y trabajo de campo.....	28
Capítulo 2.....	31
La contienda transgresiva: el auge de la CONAIE.....	31
1. Procesos organizativos nacionales	32
1.1. Ecuador Runacunapac Riccharimui ECUARUNARI.....	32
1.2. Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE	36
2. La contienda transgresiva en la década de los 90	40
2.1. La apertura de las Oportunidades Políticas.....	41
2.2. Episodio 1: El levantamiento del Inty Raymi	44
2.3. Episodio 2: Movilización amazónica 1992.....	46
2.4. Episodio 3: El Agro y la seguridad social.....	47
2.5. Episodio 4: Caída de Bucaram, Asamblea Constituyente y derechos colectivos	50
2.6. Episodio 5: Dos años de Gobierno: pobreza, paz, base militar y dolarización.....	52
2.6.1. La huipala ondea en Carondelet.....	54

2.7. Episodio 6: El Gobierno de transición: poco diálogo y el levantamiento por el precio del gas	58
2.7.1. “Nada solo para los indios”: la lucha por el precio del gas	61
3. Mecanismos causales que explican la contienda transgresiva	67
Capítulo 3.....	72
El período de transición: Movimiento Indígena y la disputa por el poder.....	72
1. Estructura de Oportunidades políticas en período de transición del ciclo de la protesta.....	73
2. Episodios de contienda durante la transición en el ciclo de la protesta.....	80
2.1. Episodio 1: Los indígenas comparten el poder	80
2.1.1. Se alinean o se van del Gobierno... y se fueron	82
2.1.2. El ciclón fractura la casa	84
2.1.3. La Revuelta Forajida.....	89
2.2. Episodio 2: El gobierno de Palacio y la última movilización contra el neoliberalismo.....	95
2.2.1. Acciones contra el TLC y Oxy	97
3. Tres años, dos gobiernos, un ciclón: mecanismos causales de explicación	98
Capítulo 4.....	103
El contexto de la Revolución Ciudadana	103
1. El surgimiento de la Revolución Ciudadana	103
1.1. De forajido a candidato a la presidencia	105
2. Caracterización del gobierno de Rafael Correa.....	110
2.1. Aspecto político	113
2.2. Aspecto económico.....	114
2.3. Ámbito social	118
3. La población indígena en la Revolución Ciudadana	120
Capítulo 5.....	123
La contienda contenida: el repliegue en la Revolución Ciudadana	123
1. La convergencia de proyectos políticos: El Momento Constituyente	124
2. El momento de disputa: episodios de contienda	131
2.1. Episodio 1: Rechazo a las leyes de Minería y Agua.....	133
2.2. Episodio 2: La Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos	136

2.3. Episodio 3: Pequeñas contiendas durante el 2013 y 2014: ITT, educación bilingüe y la casa de la CONAIE	141
2.4. Episodio 4: Levantamiento Indígena y huelga nacional de agosto de 2015	147
3. Acciones generadas por el gobierno direccionadas al Movimiento Indígena.....	150
3.1. Descorporativización	155
3.2. Cooptación de dirigentes y creación de organizaciones paralelas	158
3.3. Criminalización de la protesta social	160
4. El caso de la COMICH como ejemplo de desmovilización indígena.....	162
5. Sin carpeta y sin bandera: mecanismos causales para entender la desmovilización	171
Conclusiones	179
Glosario	184
Lista de referencias	186

Tablas

Tabla 1. Organizaciones que forman el movimiento indígena ecuatoriano.....	6
Tabla 2. Demandas indias	7
Tabla 3. Estructura de la CONAIE	8
Tabla 4. Cronología electoral del Movimiento Pachakutik	10
Tabla 5. Demandas de las organizaciones que conforman la CONAIE	39
Tabla 6. Resumen de la contienda transgresiva	70
Tabla 7. Resumen de los episodios de contienda del período de transición	102
Tabla 8. Evolución del Índice de Gini	122
Tabla 9. Contienda contenida en la Revolución Ciudadana	175

Gráficos

Gráfico 1 Modelo Analítico	24
Gráfico 2 Pobreza por grupo étnico	121

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo María Belén Yépez Mosquera, autora de la tesis “Sin carpeta y sin bandera. La CONAIE y el paso de la contienda contenida a la transgresiva en la Revolución Ciudadana” declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría en Sociología concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, octubre de 2018



María Belén Yépez Mosquera

Resumen

El presente trabajo de investigación aborda el ciclo de la protesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, desde el momento de auge y consolidación como movimiento social y la generación de una *contienda transgresiva* en la arena política nacional, hasta su paso hacia una *contienda contenida* en el marco de las transformaciones políticas, económicas y sociales que impulsó el proyecto de la Revolución Ciudadana, considerando un período de transición que se desarrolla durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, en donde se inicia un declive de su actuación social, tras la alianza electoral que les llevó a la presidencia.

Indaga sobre las causas externas y algunos factores internos, que han generado estos cambios en la vida de las organizaciones indígenas durante los diferentes períodos gubernamentales que ha tenido el Ecuador en los últimos 25 años. Pero sobre todo, se pregunta sobre cuáles han sido los elementos que han cambiado, durante la Revolución Ciudadana, para que la contienda política ejercida por este actor social, se transforme y su capacidad de interpelación, sea cada vez más limitada.

Si bien es un trabajo que reconstruye un proceso organizativo, el principal aporte de ésta investigación, está en entender qué ha pasado durante la Revolución Ciudadana. Para comprender adecuadamente el proceso de desmovilización vivido en esta última década, es necesario abordar la problemática desde una perspectiva procesual, dinámica y amplia. Esta tesis toma como principales categorías analíticas las planteadas tanto por la Escuela de Movilización de Recursos, para analizar cada evento de contienda política, como la visión del Proceso Político, para comprender la problemática desde una perspectiva de cambios estructurales.

La reconstrucción de la historia de lucha de la CONAIE, se han hecho a través de la revisión de artículos de prensa recopilados por la revista *KIPU: el mundo indígena en la prensa ecuatoriana*, cuyas publicaciones han iniciado en el año 1983 de manera constante hasta el año 2014; el año 2015 ha sido reconstruido revisando las publicaciones de los periódicos *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo*, tanto en su versión impresa como digital. Para contrastar esta información, se ha realizado una serie de entrevistas a profundidad a dirigentes indígenas, académicos y figuras políticas con conocimiento suficiente de la temática o de

eventos puntuales en los que ha participado la CONAIE. Asimismo, en varios episodios contenciosos del año 2012 y 2015 he tenido una presencia directa durante el desarrollo de ciertos repertorios de acción colectiva. También he participado directamente en reuniones y talleres de esta organización social.

Varias de estas participaciones han sido enmarcadas dentro de funciones laborales o de apoyo puntual a determinadas actividades, por lo que, al menos en el año 2012, no tenía un interés investigativo de registrar las acciones, aun así la experiencia ha sido registrada de diversas maneras en el marco de las funciones que se desarrollaban.

El presente trabajo de investigación pretende contribuir, por un lado, a contar con una visión amplia y procesual de la vida de la organización indígena más grande y representativa del país y, por otro, entender las causas de la desmovilización social a nivel nacional durante la década de la Revolución Ciudadana. Si bien es cierto que existen varios trabajos alrededor de la CONAIE y su lucha, ninguno ha abordado todo el ciclo de la protesta para entender el momento actual en el que se encuentra.

Agradecimientos

La realización de este trabajo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi padre y mi hermana, dos personas maravillosas y generosas que han acompañado cada uno de los aspectos de mi vida, me han dado el cariño y la energía suficiente para emprender cada uno de los caminos por los que he transitado y sé que apoyaran el viaje por los muchos otros que quedan por caminar.

A todos y todas las compañeras indígenas que generosamente han compartido sus experiencias, sueños, vivencias y proyecciones políticas, permitiéndome ser parte de un pedacito de esa historia de lucha y de cambio.

A Edwar y María José que en este tiempo han sabido darme ánimo, apoyo, reflexión crítica y por su incondicional presencia en cada una de las etapas que este trabajo ha implicado.

Un agradecimiento especial a Edison Hurtado, por su confianza, apoyo, guía y acompañamiento durante todo este proceso.

Introducción

Los estudios sobre los movimientos sociales han sido abordados desde varios puntos de vista y enfoques teóricos, muchos de ellos han analizado la acción colectiva de manera estática y momentánea. Este trabajo busca reconstruir la vida de la CONAIE, para entender de manera amplia y procesual la trayectoria de un movimiento social y entender los elementos que generaron su auge y su posterior declive.

Para esto, se parte de la propuesta analítica desarrollada por Doug McAdam, Charles Tilly y Sidney Tarrow (2005) en *La Dinámica de la Contienda Política*, a través del concepto de contienda política, la misma que es definida por los autores como:

La interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando:
(a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores (McAdam, Tarrow y Tilly 2005, 5).

De este concepto se tomará las variaciones que los autores realizan entre contienda contenida y contienda transgresiva. Esta última es aquella se presenta de manera sorpresiva en la arena política, ya sea por los actores que la protagonizan, los medios y repertorios que utilizan en estas acciones o las demandas que impulsan las luchas. Por el contrario, la contienda contenida es aquella que tiene unos actores, medios, recursos y demandas previamente establecidos y ya conocidos.

En la década de los 90 del siglo pasado, el Ecuador vio la emergencia de un nuevo actor colectivo que por muchos años fue ignorado y minimizado. Miles de indígenas que vivían en los páramos o en la selva, se tomaron las principales arterias viales del país, así como la capital de la República, reclamando por su reconocimiento como parte integrante de la sociedad, la valorización de su identidad étnica y el mejoramiento de las condiciones de vida.

El modelo neoliberal y las pugnas al interior del sistema político y de las élites económicas abrieron las oportunidades para que este grupo social interpele al Estado y logre significativos avances en sus demandas.

Ya entrado en siglo XXI, el movimiento indígena logra llegar al poder en dos ocasiones. La primera, tras un golpe de Estado que duró apenas unas horas y, la segunda, a través de elecciones, que les permiten llegar a la Presidencia de la República en alianza con el Partido Sociedad Patriótica, encabezado por Lucio Gutiérrez. Varios autores afirman que este fue el inicio de la desmovilización indígena, puesto que esta alianza y la posterior traición al proyecto político, por parte de Gutiérrez, generó malestar y división en las bases comunitarias que son el elemento fundamental de la organización indígena (Ospina 2010).

El surgimiento de Rafael Correa como un líder carismático, con un discurso incluyente que reflejaba las demandas históricas no solo de los indígenas sino de un amplio sector de la sociedad, así como la bonanza económica de la que gozó su gobierno, le brindaron un amplio apoyo popular. Sin embargo, poco a poco su discurso fue mostrando una transformación y bloqueando posibilidades de acción de los movimientos sociales. La estructura de oportunidades políticas se vio cerrada y el movimiento indígena, representado por la CONAIE, cada vez más debilitado.

Este trabajo de investigación busca analizar las causas de esa desmovilización a través del análisis de la trayectoria de la CONAIE, entendiendo que el ciclo de la protesta por el que atraviesa un movimiento social incluye factores internos y externos. En esta tesis se reconstruyen los episodios contenciosos que muestran diversos eventos puntuales que hacen parte de una trayectoria procesual de esta organización social.

La tesis está estructurada en cinco capítulos. El primero realiza una presentación del problema de investigación, la importancia y las preguntas que guían el análisis, una revisión de los trabajos previamente elaborados sobre la temática, así como el marco analítico desde el cual se trabajará.

El segundo capítulo muestra el momento de auge del movimiento indígena. A través de una reconstrucción histórica de su proceso de conformación y los principales episodios de contienda desarrollados entre los años 1990 y 2002, se explica la contienda transgresiva que protagoniza la CONAIE en un contexto de apertura de las oportunidades políticas, no exento de duras tensiones políticas. Cada episodio analiza tanto los repertorios de acción colectiva, como los procesos de enmarcamiento y su estructura de movilización. El apartado concluye con un análisis de los mecanismos causales que explican este momento de surgimiento y

consolidación. Este capítulo ha sido trabajado a través de la sistematización de trabajos previamente realizados y algunos datos de publicaciones de prensa de la época, las mismas que han sido recopiladas por la revista *Kipu*.

El capítulo tres constituye el proceso de transición entre la movilización y la desmovilización. Se analiza la contienda política en un escenario político distinto, donde las disputas entre el gobierno y el actor colectivo se trastocan tras una alianza electoral que los lleva a la presidencia y posteriormente a la ruptura de este acuerdo, lo que impacta en las bases sociales y genera el inicio de una desmovilización. Al igual que en el momento anterior, cada episodio de contienda se construye con la revisión de los elementos de lo que Tilly denomina “agenda clásica” para el estudio de los movimientos sociales, es decir, estructura de oportunidades políticas (EOPs), enmarcamientos de la acción, recursos, repertorios y estructura de movilización. La evidencia empírica de este capítulo se logra a través de entrevistas a los dirigentes del movimiento indígena y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, quienes aportan con elementos complementarios a las publicaciones de prensa.

Los capítulos cuatro y cinco analizan a la Revolución Ciudadana y los impactos que ha generado en el movimiento indígena. Así, en el capítulo 4 se realiza una caracterización de este gobierno, de los modos de ejercicio del poder y de sus principales acciones en el campo político, económico y social. Además, se analiza cómo éstas acciones han transformado -o no- la realidad de la población indígena en el país. Para esto se han revisado algunos datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la plataforma del Sistema Nacional de Información (SNI) y de otros trabajos previamente elaborados por diversos académicos.

El capítulo 5 presenta la contienda contenida protagonizada por la CONAIE durante los casi 10 años de Revolución Ciudadana, diferenciado un momento de proximidad durante la redacción de la Constitución de Montecristi, con otro de confrontación durante la implementación del modelo de desarrollo centrado en el extractivismo. A manera de ejemplo se presenta la fragmentación organizativa sufrida por las organizaciones de Chimborazo, es en esta provincia donde se ha visto de manera más fuerte los efectos de la acción de la Revolución Ciudadana, pero no en la única en la que ha impactado.

La reconstrucción y el análisis de la contienda en este período se realiza mediante los testimonios de los dirigentes indígenas tanto del movimiento como aquellos ligados a Alianza País, también se incluye criterios de académicos cercanos al movimiento indígena, así como datos proporcionados por la prensa.

Finalmente este trabajo presenta, a manera de conclusiones, los principales hallazgos realizados en este estudio. Como se ha dicho, el aporte principal que pretende realizar esta tesis, es por un lado comprender las causas de la transformación de los movimientos sociales bajo un régimen de cambio político y por otro, tener una visión integral de la vida de la organización indígena más importante del país.

Sin duda, este trabajo pudo ser enriquecido con un desarrollo más profundo de los factores internos que han generado la fragmentación y el cambio de contienda en la CONAIE, sin embargo, se exploran algunos puntos alrededor de éstas. El análisis de la conflictividad interna, es un tema pendiente que debería ser abordado en futuras investigaciones.

Capítulo 1

El movimiento indígena: los ciclos y la dinámica de la contienda política como problema de investigación

Este capítulo tiene por finalidad presentar el problema de investigación del cual se ocupa esta tesis, su delimitación e importancia, así como un marco analítico que posibilite el análisis de las transformaciones experimentadas por los movimientos sociales en escenarios políticos cambiantes.

Enmarcada en el campo de la sociología política, esta investigación realiza una historia comparativa de los distintos momentos que han marcado las transformaciones en el accionar del movimiento indígena (y su relación con distintos gobiernos), representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, desde su surgimiento como actor colectivo en la década de los 90 de siglo pasado, hasta su declive durante el régimen de Rafael Correa. Reconstruye todo el ciclo de la protesta desde una perspectiva dinámica en la que se pasa de una acción colectiva transgresiva a una contienda contenida en este último período, en el que el accionar de todos los movimientos sociales en el país se han visto afectados por la acción gubernamental.

El capítulo está estructurado de la siguiente manera: primero se presenta el problema de investigación, las interrogantes que se pretende responder y su importancia. En un segundo momento, se realiza una revisión bibliográfica de los trabajos previamente realizados para marcar diferencias y determinar el aporte que supondría este trabajo académico.

Posteriormente se presenta el marco analítico desde el cual se ha construido esta investigación y, finalmente, se desarrolla un apartado metodológico que explica el proceso de recopilación y procesamiento de la información aquí presentada.

1. El problema de investigación

Esta investigación analiza los cambios en los contextos políticos que han generado el paso de una contienda transgresiva a una contienda contenida en el ciclo de la protesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Se presenta una visión amplia de su trayectoria organizativa, centrándose en la desmovilización durante la Revolución Ciudadana, la misma que ha sido generada por causas tanto internas como

externas. Este trabajo profundiza en las causas externas, aun cuando se reconoce la importancia de las causas internas, las mismas que son considerados de manera más superficial.

El movimiento indígena ecuatoriano, como un actor de alcance nacional, se constituye a lo largo de las décadas de los 70 y 80, consolidándose en los años 90. Temporalidad en la cual sus demandas estaban articuladas principalmente en la solución de los conflictos por la tierra, el reconocimiento de ciertos derechos culturales y la declaración del Estado Plurinacional, así como por la lucha en contra de la implementación de políticas neoliberales (Barrera 2001).

Este actor colectivo está conformado principalmente por cuatro organizaciones nacionales y sus respectivas organizaciones regionales y locales: el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, de clave religiosa; la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, de lógica sindical; y finalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de corte étnico clasista.¹ En la tabla 1 se presenta de manera esquemática la composición del movimiento indígena ecuatoriano.

Estas organizaciones no son un conglomerado uniforme y compacto, por el contrario, existen diversas visiones, enfoques e ideologías dentro de este gran actor colectivo. Pese a estas diferencias, en la década de los 90 lograron articulaciones políticas para alcanzar metas conjuntas en momentos coyunturales.

Tabla 1. Organizaciones que forman el movimiento indígena ecuatoriano

Carácter	Organización	Creación
Religioso	Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE)	1980
Sindical	Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)	1944
	Confederación Nacional de organizaciones campesinas, indígenas y negras (FENOCIN)	1965
Étnico clasista	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)	1986

Fuente: (Altmann 2013)

¹Tanto la FENOCIN como la FEINE, han cambiado su nombre original pero han mantenido sus siglas. Originalmente era Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN; y, Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE.

Como parte de las demandas de la movilización, se logró materializarlas en la creación de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Salud Intercultural, el PRODEPINE,² el CODENPE,³ el reconocimiento y legalización de sus tierras y territorios, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la inclusión de los derechos colectivos en la Constitución de 1998, que, entre otras cosas, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos con capacidad de generar gobierno y derecho propio.⁴ La tabla 2 recoge las principales demandas del movimiento indígena.

Tabla 2. Demandas indias

Período	Demanda	Resultado
1960 – 1974	Reforma Agraria	Leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973 – 1974.
1980 – 1982	Expulsión del Instituto Lingüístico de Verano	Decreto Ejecutivo 1159 – 1982.
1980 – 1988	Creación de Educación Intercultural Bilingüe	Decreto Ejecutivo de 1988.
1990	Derechos culturales, colectivos, autodeterminación y plurinacionalidad	Reconocimiento constitucional de la multiétnicidad, multiculturalidad (1994 – 1997 y 1998). Reconocimiento constitucional de derechos colectivos (1998). Reconocimiento constitucional de la oficialidad del idioma quichua (1998). Reconocimiento constitucional de las circunscripciones territoriales indígenas (1998). Reconocimiento constitucional del sistema jurisdiccional indígena (1998).

Fuente: (Porras Velasco 2005, 116)

La CONAIE se ha constituido en la principal organización social en el país, debido a su capacidad de movilizar a miles de indígenas de sus bases (Lalander y Ospina 2012). Los logros alcanzados en la década de los 90, no hubieran sido posibles si no fuera por la red de solidaridad, los vínculos organizativos y la trama de apoyos que se tejen desde la familia y la comunidad que permitía que miles de indígenas respondan al llamado de la dirigencia nacional. En la tabla 3 se presenta la estructura organizativa de la CONAIE.

² Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador.

³ Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

⁴ Constitución Política del Ecuador, 1998, Capítulo 5, Artículo 83 y siguientes.

Tabla 3. Estructura de la CONAIE

Nacional	Regional	Provincial	Pueblos/ Nacionalidades
CONAIE	ECUARUNARI	CCM	Pasto
		CHIJALLTA FICI	Otavalo, Karanki, Natabuela
		Pichincha Rikcharimuy	Kayambi, Kitu Kara
		MICC	Panzaleo
		MIT	Tomabela, Chibuleo, Salasaka, Kisapincha
		COMICH	Puruway
		FECAB-BRUNARI	Waranka
		UPCCC	Kañari
		UNASAY	Kañari Campesinos
		UCIA	
		FOA	
		CORPUKIS	Saraguro
		FEPROCOL	Paltas
		ZAMASKIJAT	Saraguro
		UOCE	Afroecuatorianos
		FOCCE	Manta Wankavilca
	CONFENIAE	FICSH	Shuar
		FIPSE	Shuar
		OPIP	Kanelo-Kichwa.
		FOIN	Kichwa amazónico
		FECUNAE	Kichwa amazónico
		FOISE	Kichwa amazónico
		FINAE	Achuar
		ONHAE	Waorani
		ONISE	Siona
		OISE	Secoya
		OINCE	Cofán
		ANAZPPA	Zápara
		CONAICE	FECCHE
	FCA		Awá
	Federación Epera		Epera
	FCG		Manta, Wankavilca
GTS	Tsáchila		

Fuente: (CONAIE s.f.)

Esta organización impulsó una serie de episodios de contienda en contra de la implementación del modelo neoliberal. Los principales incluyeron levantamientos para impulsar una agenda programática y movilizaciones para defender intereses populares y colectivos en coyunturas críticas. En 1990, el levantamiento del Inty Raymi que posicionó a los indígenas como un actor político relevante. En 1994, protagonizaron un levantamiento frente a las reformas en temas agrarios propuesta por Sixto Durán Ballén. El levantamiento de

1997 se activó en contra de la política económica de Abdalá Bucaram. Las movilizaciones en 1999 se oponían a las consecuencias del feriado bancario, el congelamiento de los depósitos de la banca privada y el alza de combustibles. En el 2000 protagonizaron una serie de protestas que llevaron a la caída del gobierno de Jamil Mahuad. En 2001 en rechazo a las políticas de ajuste económico del gobierno de Gustavo Noboa; y en marzo de 2006 una serie de movilizaciones, exigiendo la no suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la salida de tropas estadounidenses de la base de Manta, el no involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia, la declaratoria de caducidad del contrato con la transnacional Occidental y la instauración de una Asamblea Constituyente en el gobierno de Alfredo Palacio, entre otras.

La fortaleza de la CONAIE, en un primer momento, se debió a que su estructura organizativa contó con un proceso enmarcador muy fuerte, que fue la identidad étnica, lo que se constituyó en su motor de lucha, de una agregación de procesos organizativos previos, de al menos dos décadas, así como también una visión de clase que le permitió canalizar (y coincidir con) las demandas de diversos sectores sociales históricamente excluidos.

Por otro lado, las sucesivas acciones colectivas del movimiento indígena ecuatoriano dieron paso a su posicionamiento en la arena política electoral. En 1996 se crea el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, brazo político de la CONAIE, el mismo que logra una importante representación indígena en los distintos niveles de gobiernos, así por ejemplo, en la primera contienda electoral, en la que compitieron en alianza con Freddy Ehlers para la Presidencia de la República, obtuvieron el tercer lugar; y lograron ganar la presidencia de la república en alianza con el Partido Sociedad Patriótica en el año en 2002. Así como también han logrado representatividad en las Asambleas Constituyentes (1997 y 2008); en los gobiernos locales y en el parlamento nacional. En la tabla 4 se presentan algunos datos que reflejan esta afirmación.

Tabla 4. Cronología electoral del Movimiento Pachakutik

Año	Tipo de Elección	Resultado
1996	Presidencial	Tercer lugar en la primera vuelta
	Legislativas	7 Diputados (1 nacional y 6 provinciales). Cuarta bancada parlamentaria.
	Seccionales	2 Alcaldías
1997	Asamblea Constituyente	7 Asambleístas provinciales (No se eligen asambleístas nacionales). Cuarta bancada.
1998	Presidencial	No compite directamente, apoya a Freddy Ehlers (sexto lugar)
	Legislativa	7 Diputados (Dos diputados nacionales y 5 provinciales en alianza política). Quinto lugar
2000	Seccionales	4 prefectos provinciales, 14 alcaldías
2001	Presidenciales	Alianza con PSP 54,8% de los votos en segunda vuelta. Ganan la presidencia de la República
2002	Legislativas	11 diputados provinciales, no se eligen diputados nacionales. Cuarta fuerza parlamentaria
2004	Seccionales	3 prefecturas y 20 alcaldías. Cuarto lugar
2006	Presidenciales	2,1% de los votos sexto lugar
	Legislativas	6 Diputados provinciales, no se eligen diputados nacionales. Quinta fuerza política.
2007	Asamblea Constituyente	4 Asambleístas provinciales Sexto lugar por número de escaños
2009	Presidenciales	No compite
	Legislativas	4 Asambleístas provinciales. Séptimo lugar
	Seccionales	5 prefecturas (segundo lugar), 26 alcaldías (tercer lugar)
2013	Presidenciales	Alianza (Unidad Plurinacional de las Izquierdas) 3,26% de los votos. Sexto lugar
	Legislativas	5 Asambleístas (1 nacional y 4 provinciales) Quinta bancada legislativa
2014	Seccionales	3 prefecturas (segundo lugar) y 23 alcaldías (tercer lugar)

Fuente: CNE

Como se ha visto, durante toda la década de los 90, el movimiento indígena representado por la CONAIE tuvo como principales repertorios de contienda a la protesta callejera y los levantamientos indígenas. En el período de 2000 al 2006 la acción colectiva de este movimiento empieza a decaer, aun cuando han existido algunos episodios importantes de interpelación a los distintos gobiernos, parecería que esta etapa constituye un momento de transición en el ciclo de la protesta, entre el auge y el repliegue.

Con el surgimiento de la Revolución Ciudadana, proyecto político que discursivamente aglutinó las demandas históricas de una gran cantidad de movimientos sociales, la CONAIE al igual que muchas otras organizaciones, vivieron un importante proceso de repliegue en su actividad contenciosa. Muchas de ellas fueron cooptadas por la institucionalidad del gobierno, otras fueron fraccionadas y en el caso particular de la CONAIE, que mantuvo una postura crítica al gobierno de Rafael Correa, presentó una importante desmovilización, cambiando su actuación contenciosa de transgresiva a contenida (Mc Adam, Tarrow y Tilly 2005, 8).

Rafael Correa llega a la presidencia de la República a llenar un vacío de poder generado en el período neoliberal, planteando un discurso anti neoliberal y recogiendo las demandas históricas de varios grupos organizados; además cuenta con importantes recursos fiscales que le permitieron implementar proyectos sociales y promover procesos de reinstitucionalización estatal, lo que significó una mayor presencia del gobierno en el territorio. Todas estas acciones, a su vez, provocaron que el proyecto político de Alianza País y especialmente la gestión del Presidente de la República, cuenten con un importante respaldo popular.

Sin embargo, el discurso levantado poco a poco fue mostrando un giro, desde una supuesta postura de izquierda hacia una clara ideología de derecha, que se cimentaba en un proceso de reforma capitalista basado principalmente en una estrategia de desarrollo. Se transitaba de un modelo extractivo, primario exportador a uno basado en la mercantilización de la biodiversidad, a través de la producción y exportación de bienes y servicios especializados, aunque en un primer momento esta estrategia se sostendría en la extracción petrolera y eventualmente minera (SENPLADES 2009, 97). Esta transformación en el accionar político de la Revolución Ciudadana, generó tensión entre el movimiento indígena y el gobierno, llevándolos a transitar en caminos totalmente distanciados y de permanente confrontación.

Pese a la no coincidencia de proyectos políticos y aun cuando la redistribución de los ingresos y la reducción de la pobreza impactó poco en las poblaciones indígenas (SENPLADES 2017, 128), la CONAIE protagonizó escasos episodios de contienda política, la mayoría de ellos contó con una limitada participación de sus bases, por lo que los repertorios históricos de levantamientos y grandes movilizaciones, fueron remplazados por el uso de canales institucionales para presentar sus demandas. Es así que en este período se evidencia una clara desmovilización de las organizaciones indígenas y un cambio de tipo de contienda, siendo principalmente contenida.

El estudio que aquí se desarrolla indaga sobre las razones que generaron la desmovilización y el cambio de tipo de contienda protagonizada por el movimiento indígena ecuatoriano, representado por la CONAIE, durante el período de la Revolución Ciudadana. El estudio plantea entender el ciclo vivido por esta organización social, para así identificar momentos y circunstancias que permitieron un auge y un declive de la movilización. Los trabajos hasta aquí desarrollados contemplan, por separado, el período de auge y el de transición; poco se ha

dicho sobre las causas estructurales que han llevado a la desmovilización indígena en el período de Rafael Correa, aporte que pretende realizar esta tesis.

1.1. Preguntas de investigación

Esta investigación se interroga sobre las causas que han generado el paso de una contienda transgresiva, propiciada por la CONAIE en los años 90, a una contienda contenida durante el período de la Revolución Ciudadana. La hipótesis que se maneja es que el proyecto político del gobierno de Rafael Correa, que significó una reinstitucionalización del Estado, políticas sociales redistributivas con programas sociales y presencia estatal en el territorio, impactaron en las bases comunales, generando un proceso de desmovilización dentro del ciclo de la contienda, más aún, si se considera que este gobierno impulsó procesos de descorporativización social, disciplinamiento y secuestro de las demandas indígenas. Además, se propone que este momento del ciclo de la protesta se relaciona con las debilidades organizativas generadas durante los últimos años de neoliberalismo y a los procesos de descomunalización de la base social de la CONAIE.

Adicionalmente, se pregunta sobre las formas en las que ha impactado el accionar del gobierno de la Revolución Ciudadana en las organizaciones indígenas de la CONAIE, así como sobre las transformaciones en los repertorios de acción colectiva y de sus marcos interpretativos. También indaga sobre los cambios producidos en la estructura de oportunidades políticas durante el período neoliberal y la Revolución Ciudadana.

1.2. Justificación

Esta tesis muestra el ciclo de la contienda vivido por el movimiento indígena ecuatoriano representado por la CONAIE, para lo cual se reconstruye su vida organizativa a través de un momento de alta movilización hacia un período de desmovilización vivido durante el gobierno de Rafael Correa, contemplando el período del 2000 y 2006, como un momento de transición entre la contienda transgresiva hacia la contienda contenida.

Como se ha podido evidenciar en las páginas anteriores, la CONAIE constituye la principal organización indígena del país y durante muchos años ha tenido una importante presencia en la escena política, mientras que durante el período de la Revolución Ciudadana se han generado fracturas y divisiones en sus organizaciones de base, así como se ha producido la cooptación de varios de sus dirigentes y la criminalización de sus líderes; provocando una

desmovilización social, además de la nula capacidad de interpelación estatal para posicionar sus demandas.

A diferencia de las otras organizaciones indígenas que mantuvieron cercanía con el régimen, la CONAIE se constituyó en un agente beligerante en la escena política, aunque debilitado, situación que compartió con muchas otras organizaciones sociales, es por eso que el estudio de la problemática vivida por esta organización social, permite comprender de manera amplia el momento por el que atravesaron los movimientos sociales en el país, durante la última década.

Por otra parte, muchos de los trabajos realizados previamente sobre esta organización se centran en determinado momento de la vida de la CONAIE. Esta tesis aporta con una visión de amplio espectro que permitiría comprender todo el ciclo de la contienda, centrándose en su período de desmovilización.

2. Estado del arte: el ciclo de la contienda del movimiento indígena

El movimiento indígena ecuatoriano, y de forma particular la CONAIE, ha sido el movimiento social más analizado en el país, especialmente en su momento de auge y consolidación. Muchos de los trabajos realizados se han concentrado en los logros y los avances obtenidos durante la década de los 90 (Dávalos edit. 2001, Barrera 2001, Guerrero y Ospina 2003, Porras 2005, Sánchez Parga 2010, entre otros).

Un segundo momento de análisis se centra en el debilitamiento de movimiento indígena, especialmente luego de la alianza electoral con Lucio Gutiérrez y su posterior derrocamiento, aun cuando han existido trabajos que empiezan a marcar el inicio de una crisis de la CONAIE en momentos anteriores (Bretón 2001, 2003, 2005; Ospina 2009, Ramírez 2009, 2010; Ortiz 2012, Tello 2012, Sánchez Parga 2013). En los últimos años se ha trabajado alrededor de la relación entre las organizaciones indígenas y la Revolución Ciudadana, tratando de evidenciar los encuentros y desencuentros que se han generado entre este actor colectivo y el gobierno (Cartuche 2015, Resina 2015, Becker 2015).

La mayoría de estos trabajos analizan la vida organizativa de la CONAIE como momentos específicos, es decir, se centran en el auge o en el debilitamiento. Esto no permite tener una

mirada procesual y dinámica de la vida organizativa que reconstruya el ciclo de la contienda de manera amplia y comparada, aporte que pretende realizar este trabajo de investigación.

A continuación, se presentan los principales argumentos que sostienen algunos de los trabajos académicos antes mencionados divididos en tres grandes momentos: la literatura que se ocupa del auge y consolidación, otro bloque que se ocupa de la desmovilización y el debilitamiento de la capacidad contenciosa del movimiento indígena, y un tercer grupo que analiza la literatura más reciente sobre la relación entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana.

2.1. El auge del movimiento indígena ecuatoriano

Si bien es cierto que el proceso organizativo del movimiento indígena tiene una larga trayectoria, como se podrá ver con mayor claridad en el capítulo 2 de este trabajo, el levantamiento indígena de junio de 1990 marca un antes y un después en la historia social y política del país. Su preparación y ejecución no se trató de un acto espontáneo e inmediato, por el contrario, es el resultado de un largo proceso de trabajo organizativo que, como bien lo señala José Sánchez Parga (2010), se produce en un contexto donde los indígenas que pertenecían a una sociedad *comunal* buscaban su inserción en la sociedad *societal* del Estado nación, en el momento en el que el país vivía un proceso de transformación a una sociedad pos-societal, la misma que implica, a su vez, la desintegración de la sociedad indígena al ingresar a un modelo de individualismo que disuelve los vínculos comunales. Esto, advierte Sánchez Parga, llevará a las organizaciones indígenas a vivir un proceso de evolución particular y a tener que enfrentar una serie de retos para poder sobrevivir y que los llevó a la configuración del partido político Pachakutik.

Por su parte Augusto Barrera (2001) considera que el acumulado histórico de la década de 70 y 80, que se vieron impulsados por los intentos de modernización de la estructura agraria y el fin de la administración de poblaciones, fueron los que motivaron las acciones de los 90, en las cuales se encontraron con un Estado con una debilitada capacidad reguladora, sobre todo en el campo económico, que derivó en una crisis política: esa fue una estructura de oportunidades políticas favorable que el movimiento indígena supo aprovechar para crear condiciones ventajosas a su lucha. Las demandas dejaron de ser pedidos puntuales de infraestructura, para constituirse en una nueva forma de concepción del Estado, en el cual están inmersos y son reconocidos como parte de la sociedad. Así mismo, en el transcurso de su vida organizativa, a lo largo de esa década, sus demandas adquieren un carácter universal y

se enfrentan a las reformas neoliberales que afectan a la población en general y “no solo a los indígenas”:

Conforme avanza la década y la crisis se agrava, el contenido de los levantamientos incorpora cada vez con mayor frecuencia aspectos relativos a un típico conflicto distributivo y político (de poder); surge la necesidad y la posibilidad de emprender en nuevas dimensiones del discurso la acción contenciosa para entrar de lleno en el enfrentamiento al ajuste, al mismo tiempo ampliar el campo de alianzas sociales. En esta secuencia, el movimiento indígena ha logrado configurar un campo social, ético y cultural de disputa al programa neoliberal, en tanto él mismo se ha constituido en núcleo aglutinador, activador y desencadenante de la protesta social (Barrera 2001, 263).

Es justamente este cambio en las demandas y en la forma de organización las que Sánchez Parga considera como los factores explicativos que determinan la evolución del movimiento indígena ecuatoriano. Este autor considera que la actividad del movimiento indígena ha estado directamente relacionada con el desarrollo estatal, lo que limitó el accionar de los actores indígenas y a su vez generó la transformación de movimiento social en partido político. En ese mismo sentido la articulación organizativa también se transformó, se dejó de priorizar las acciones impulsadas por las bases para dar paso a movilizaciones generadas desde la dirigencia y que las organizaciones de segundo grado empezaron a operar como organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, y relacionado con la fuerza política que va adquiriendo debido a su actividad en la arena institucional y social, Sánchez Parga sostiene que otro factor determinante en la evolución del movimiento indígena ha sido su articulación con otros grupos sociales, lo que permitió una reivindicación de carácter clasista y, por lo tanto, generó la diversificación de sus demandas y estrategias de movilización. Esto habría dado paso a la consolidación de un partido político de carácter netamente interétnico, lo cual no se tradujo en la desaparición del movimiento social pero sí intercedió para alterar sus dinámicas.

Ambos autores concuerdan en que la acción del movimiento indígena logró posicionar en el escenario público-estatal la cuestión étnica y la plurinacionalidad. Esto permitió la incorporación de varias de las demandas históricas en el cuerpo constitucional, la promulgación de leyes y la creación de institucionalidad. Sin embargo, Barrera sostiene que

esta etnitización de la protesta social ha provocado una corporativización de la lucha por lo que la respuesta del sistema político ha sido la cooptación clientelar de la dirigencia.

Sánchez Parga concluye su trabajo planteando algunos retos para la organización indígena a corto y mediano plazo. Un gran desafío está relacionado con su capacidad de movilización. Según el autor, se deben buscar mecanismos para salvaguardar las organizaciones y a sus dirigentes: las primeras se ven afectadas principalmente por la descomunalización de sus bases y los dirigentes cuentan con una limitada capacidad de convocatoria y conducción, principalmente por la cooptación proveniente del sector público, del sector privado y de la cooperación internacional. Como se puede ver, esta postura no dista en nada con los planteamientos de Barrera respecto a las amenazas que tienen que enfrentar las organizaciones indígenas.

Otro gran reto está enfocado en diferenciar el accionar del partido con el del movimiento. Según Sánchez Parga, no se puede suplir la crisis de representatividad que sufre la democracia a través de la movilización de la población en las calles debido a que son dos fenómenos diferentes e incluso contrapuestos.

Las ideas propuestas por ambos autores reconocen la capacidad del movimiento indígena para lograr posicionarse en la agenda pública y política, sus demandas gracias a su procesos organizativo y la claridad de su proyecto, sin embargo, este proceso de lucha ha provocado algunos retos que como veremos, siguen siendo actuales y generan un constante debate al interior de las organizaciones, sobre todo en un escenario en donde se conjugan las debilidades propias del sistema político ecuatoriano de la primera década del siglo XXI, la actividad propia del movimiento social y su incursión en la arena político electoral nacional que amplía sus horizontes de incidencia.

2.2. El repliegue del movimiento indígena ecuatoriano

Muchos de los trabajos académicos de la última década se han dedicado a analizar la capacidad de movilización de los indígenas. Al parecer, desde hace algún tiempo atrás se ha podido evidenciar el debilitamiento de la actoría política del movimiento y en muchos casos se ha catalogado a este proceso como una “crisis”. A partir de esta afirmación se ha intentado dar una serie de explicaciones de las causas que la habrían generado. Tanto Sánchez Parga como Barrera al analizar el éxito de los años 90, ya hacen algunas advertencias al respecto de

las dificultades que enfrentarían los indígenas, sobre todo, debido a la cooptación de sus dirigentes y su incursión en la política electoral, la misma que necesita una importante transformación de las estrategias de actuación y respuesta a cada uno de los escenarios.

De los múltiples trabajos desarrollados, los de Víctor Bretón (2001), Luis Alberto Tuaza (2010) y Pablo Ospina (2009) presentan algunos aportes explicativos, varios de ellos antagónicos entre sí. El trabajo de Víctor Bretón (2001) *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos*, pese a ser un trabajo publicado a inicios del siglo, cuando las luchas indígenas aún eran vistas desde la perspectiva del movimiento triunfador, hace una dura crítica a la capacidad movilizadora de las organizaciones indígenas. Para este autor la causa principal que ha generado la crisis del movimiento, está dada por la presencia de las organizaciones no gubernamentales en los territorios y su trabajo con las bases.

La presencia de las organizaciones para el desarrollo en el medio rural, en muchos casos ha suplantado a la presencia estatal, generando una privatización de las políticas sociales, constituyéndose en un complemento del neoliberalismo desde la perspectiva social. Esto explicaría su proliferación, en el momento que mayoritariamente se implementaron políticas neoliberales. La presencia de las ONG, no solamente que no contribuyó a reducir la pobreza en las zonas de intervención como era su cometido, sino que incluso, el discurso de participación y consenso que se maneja para la toma de decisiones y priorización de necesidades, era manipulada por la propia agencia de cooperación a través de los dirigentes de las organizaciones de segundo grado que mantienen el control en las comunidades de base.

Con esta base, Bretón plantea seis tesis sobre la naturaleza de las OSG indígenas en la región andina del país. La primera tesis asegura que las OSG no son el resultado de un proceso organizativo propio, sino que son la consecuencia de las agencias de cooperación de las iglesias y que por lo tanto están vinculadas exclusivamente a proyectos de desarrollo. La segunda tesis está relacionada con el punto anterior, asegura que el surgimiento y división de las OSG es producto de la presencia de las ONG y de sus proyectos de desarrollo puesto que, se promovieron como requisito indispensable de la existencia de una nueva organización y una nueva dirigencia para que sea posible canalizar fondos de determinados cooperantes. Esto trae consigo una competencia entre las OSG por atraer a sus filas a mayor cantidad de bases y esto es lo que el autor considera la tercera tesis, el distanciamiento y hostilidad entre las OSG

que comparten territorio que se derivan de las competencias por liderazgo y control de fondos.

La cuarta tesis constituye el argumento central que maneja Bretón. Para este autor, las ONG y su actuación enmarcada en las políticas neoliberales ha generado un cambio en el perfil de los dirigentes de las OSG que inicialmente era muy militante y combativo por uno de carácter más tecnocrático que se adapta a los requerimientos de la cooperación lo que genera un proceso de “apolitización y de conversión de los dirigentes indígenas en meros gestores de proyectos” (Bretón 2001, 248). Esto trae como consecuencia, además de la desmovilización, y que se establece como la quinta tesis; las OSG se están transformando de un “cacicazgo de nuevo cuño”, los dirigentes que representan a las bases son los encargados de repartir regalías provenientes de los proyectos y de las agencias de desarrollo. Esta repartición no es equitativa sino que responde a lógicas clientelares con el fin de seguir controlando las organizaciones.

La sexta tesis considera los conflictos internos generados por estas prácticas. Las dirigencias nacidas en las OSG, producto de la cooperación entran en conflicto con las autoridades tradicionales que gozan de mayor legitimidad pero carecen de recursos económicos lo que fracciona las estructuras internas.

A los planteamientos de Bretón, le han surgido varias críticas por la dureza con la que concluye la acción de las organizaciones indígenas, pero sin duda ha sido uno de los principales argumentos que se ha manejado en la academia para afirmar que el movimiento indígena ha decrecido en cuanto a su acción colectiva.

Por otra parte, y cambiando el enfoque desde el cual se analiza la situación de las organizaciones indígenas, Luis Alberto Tuaza, en su tesis doctoral para Flacso – Sede Ecuador, afirma que:

La mayoría de los autores han visto la crisis a partir de las visiones de los líderes y de las luchas políticas a nivel nacional. Este punto de vista ha llevado a la mayoría de los autores a explicar la crisis del movimiento indígena como resultado de las alianzas políticas de las cúpulas del movimiento con distintos presidentes para dividir y debilitar al movimiento indígena (Tuaza Castro 2011, 308).

El trabajo de Tuaza se centra en un estudio de caso de la comunidad de Columbe en la provincia de Chimborazo; la tesis central a través de la cual gira su argumentación sostiene que la crisis se debe a un agotamiento de los comuneros, en relación al proceso organizativo:

A mi modo de entender, en el caso de las organizaciones y comunidades de Columbe y el movimiento indígena ecuatoriano existe un cierto agotamiento, por cuanto que las organizaciones no cumplen con las expectativas de la gente y las dinámicas de funcionamiento de estas organizaciones están al margen de las decisiones de las bases (Tuaza Castro 2011, 170).

A partir de esta afirmación, el autor irá identificando cuáles son los otros factores que han influido en la crisis del Movimiento, su reflexión reconoce que los logros de la década de los 90 han sido importantes para la vida de los indígenas, alcanzando derechos y reconocimientos por parte de la sociedad ecuatoriana, sin embargo, ahora la crisis se manifiesta en los siguientes factores:

La crisis del movimiento indígena está en las bases comunitarias y en las OSG que se expresa en el cansancio organizativo, en el rechazo a las iniciativas de organización, la fragmentación de las organizaciones existentes, provocadas por el autoritarismo de los dirigentes, la ausencia de novedades en la agenda de la dirigencia comunitaria, las nuevas ofertas de cooperación que exigen la creación de otra organización al interior de una misma comunidad, la falta de definición política, la ausencia de la rendición de cuentas, las exigencias de participación comunitaria por imposición y amenaza sin tomar en cuenta la edad de los miembros comunitarios y la elección del cabildo sin criterios claros (Tuaza Castro 2011, 181).

Sobre la base de las ideas expuestas por Tuaza, el agotamiento de las comunidades, la fragmentación de las organizaciones, el autoritarismo de los dirigentes, parecen ser más que factores explicativos de la crisis, efectos de la misma, en suma, resultan insuficientes, dado que no llega a profundizar a qué se debe el cansancio de la comunidad y su relación con la OSG o con la federación provincial. En su argumentación quedan varios puntos sin un análisis profundo que permita un mayor entendimiento de su línea argumental.

Por otra parte, el trabajo de Pablo Ospina (2009) *“Nos vino un huracán político” La Crisis de la CONAIE*, hace un análisis crítico de las explicaciones que, por lo general, se hacen de la crisis del movimiento indígena. Parte de tres afirmaciones sobre el debilitamiento

organizativo: el primero, se debe a la participación electoral. Según varios estudios realizados por los intelectuales, el hecho de competir para cargos de elección popular ha sido la principal causa de ruptura entre la dirigencia y las bases, se ha utilizado a la organización como plataforma para ascender a otros cargos, descuidando los intereses colectivos por sobreponerlos a los intereses personales, una estatización del Movimiento Indígena y a la cooptación política que esta supone. Esta sería la consecuencia al segundo reto que aseguraba Sánchez Parga tenían las organizaciones indígenas y que también coincidiría con las afirmaciones de Barrera y Tuaza.

El segundo factor que menciona Ospina como una de las explicaciones tradicionales que se ha hecho de la crisis es la que se presentó anteriormente planteada por Bretón, la relación de las ONG y las organizaciones indígenas y la consecuente apolitización de los líderes que debilita cualquier capacidad de respuesta a la acción contenciosa. El tercer factor han sido las alianzas con sectores sociales o políticos que les han utilizado y generado desconfianza de las bases.

Ospina dice que estas razones no son suficientes para explicar la crisis por la que atraviesa el Movimiento, su crítica se basa en que:

No es la participación electoral “en general”, ni la intervención de las ONG “en general”, ni las alianzas políticas “en general”, las que conducen al debilitamiento; sino ciertas condiciones específicas en las que se producen el manejo de las instituciones conquistadas, de las alianzas creadas y de los proyectos de desarrollo implementados (Ospina 2009, 129).

La hipótesis que Ospina maneja es que la CONAIE no tuvo la capacidad de adaptar la organización a los cambios que supuso su participación política y al constituirse como el referente de la lucha social en el país. El ser candidatos, diputados, prefectos, alcaldes o presidentes de junta parroquial no implicaba solamente pensar en un proyecto para los indígenas, sino un proyecto de país que incluya a varios sectores y eso no logró realizar el movimiento indígena.

El autor afirma que los tiempos políticos se han modificado, ya no se puede convivir con acuerdos mínimos como fue al inicio, se necesita dar respuestas inmediatas a todos los cambios que se producen en la coyuntura nacional. No cuentan con un equipo técnico lo suficientemente diverso que pueda dar respuesta a estas necesidades y tampoco con los

recursos suficientes como para financiarlos, por lo tanto, cada vez más el proyecto político ha ido perdiendo vinculación con la vida cotidiana tanto de las comunidades como de las lógicas y las necesidades del país.

De lo planteado, quedan muchas interrogantes. Desde el surgimiento del Movimiento Indígena, todos los gobiernos han intentado debilitar la organización, cooptar a sus dirigentes, las ONGDs han estado presentes en las comunidades desde hace mucho tiempo, la participación electoral se inicia en la década de los 90 con la creación del Movimiento Plurinacional Pachakutik y el no participar electoralmente también suponía un riesgo, el de quedar por fuera del sistema político nacional.

En un documento de 1999, Luis Macas ya afirmaba que:

No siempre los gobiernos han respetado este proceso, más bien por el contrario han buscado fraccionarlo como fue el caso de Bucaram, de neutralizarlo, como fue en los gobiernos de Durán Ballén y Alarcón, de tolerarlo en el caso de Borja o de cooptar a su dirigencia como es el actual caso de Mahuad y sus cogobernantes social-cristianos (Macas 1999, <http://icci.nativeweb.org/boletin/abril99/macas.html>).

Si esta afirmación es verdadera, entonces, ¿qué ha cambiado con la Revolución Ciudadana? Hasta el gobierno de Alfredo Palacio se evidenciaba una relativa fuerza del movimiento indígena, sin embargo, con la llegada del Gobierno de Rafael Correa existe menor acción colectiva en las calles del país. Este trabajo de investigación intenta indagar sobre la desmovilización generada en la CONAIE durante la última década analizando la contienda de manera procesual.

2.3. La CONAIE y la Revolución Ciudadana

En los últimos años, los trabajos académicos sobre el movimiento indígena han estado enfocados sobre todo en la relación que ha mantenido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con el gobierno de Rafael Correa, los mismos que abordan, principalmente las las razones por las cuales se ha generado un distanciamiento entre estos dos actores, así como la falta de capacidad movilizadora de este actor colectivo.

Así por ejemplo, Cartuche (2015) afirma que el gobierno de Alianza País, encabezado por Rafael Correa, ha propiciado un fortalecimiento del Estado, el mismo que ha impactado sobre el movimiento indígena, puesto que el Estado excluye del diálogo político a las organizaciones sociales, tanto en la respuesta que da hacia la presión social que pueden generar los movimientos sociales, como a nivel institucional, donde desmonta los canales de participación que se habían establecido en el período neoliberal. En este contexto, la CONAIE ha radicalizado la confrontación, mostrándose en “resistencia” al gobierno y rechazando cualquier intento de diálogo.

El discurso de correísmo ha sido, por mucho tiempo, el de comparar a las organizaciones sociales con los grupos que responden a una ideología de derecha, para Cartuche, el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha generado una constante crítica al accionar de las organizaciones, sobre todo de las indígenas, con el fin de dividir y subordinarlas. Pero el accionar gubernamental, en ningún momento, cuestiona o afecta a los poderes económicos, representados por la burguesía nacional.

Según el estudio de Cartuche, existe un reconocimiento, por parte de los dirigentes indígenas, de las obras del gobierno de Correa, sin embargo existe una dura crítica a las formas de participación que se han implementado, las mismas que anulan cualquier posibilidad de intervención por parte de los sectores sociales, negando cualquier espacio de diálogo, puesto que solo son escuchadas las voces que comparten la misma línea de pensamiento. Esto sucede exclusivamente con los movimientos sociales pues, con los sectores empresariales se muestra apretura.

Por otra parte, la historia de lucha de las organizaciones indígenas y los contextos económicos, políticos y sociales por los que han atravesado desde su surgimiento como movimiento social, ha transformado, no solo a las bases indígenas, sino que ha desviado el proyecto político original, hacia escenarios totalmente distintos. En estos nuevos momentos de confrontación con el poder, es necesario que se revean el proyecto político, y para varios dirigentes, incluso se debe retomar la línea histórica.

Así mismo, Jorge Resina De La Fuente (2015), sostiene que el apareamiento del Movimiento País, generó una centralización en la toma de decisiones lo que generó un desplazamiento del

resto de actores, impidiendo su injerencia en la institucionalidad estatal, en este escenario, lo que le quedó a la CONAIE es la confrontación como estrategia política.

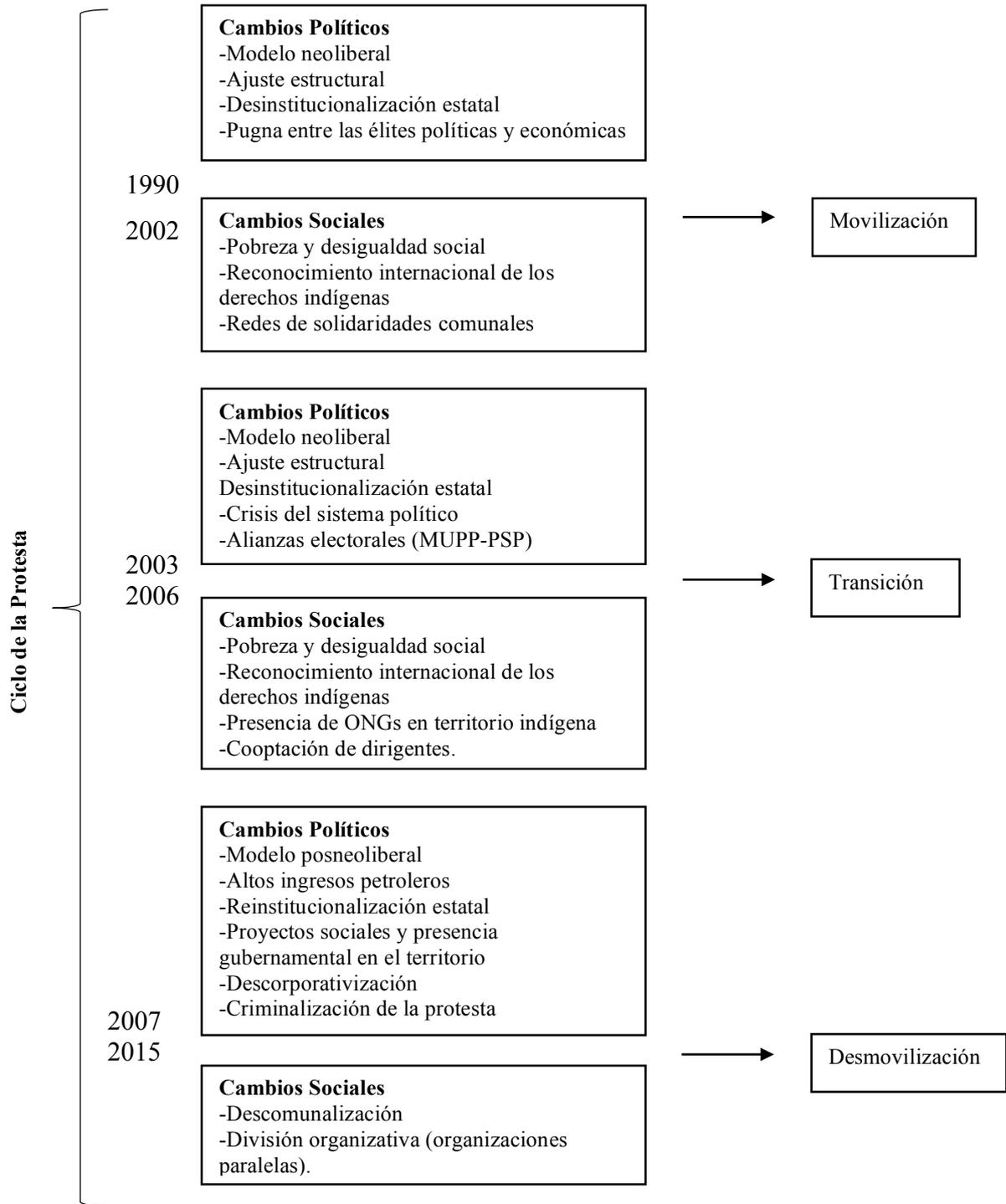
Por su parte Becker (2015) analiza la transformación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el mismo que es considerado el brazo político electoral de la CONAIE. En esta obra, se sostiene que los hechos suscitados entre 2003 y el 2006, en el país, es decir el período de presidencial de Lucio Gutiérrez, son los que permiten explicar el momento actual que atraviesa el movimiento indígena en general y de manera particular la CONAIE.

Con el derrocamiento de este presidente, la historia nacional dio un giro, que encontró resonancia en los proyectos progresistas que se venían gestando en la región, y permitió el surgimiento del gobierno de Correa, el mismo que, con un discurso que reproducía algunas de las demandas históricas de las organizaciones sociales, era difícil mostrar su inconformidad, así, el autor plantea que nos es lo mismo enfrentarse al neoliberalismo que pretende, de alguna manera generar espacios de diálogo y participación que a este nuevo momento que se opone al extractivismo, reconoce el Estado Plurinacional y los derechos de la naturaleza, lo que genera, necesariamente una transformación de la organización social y política, que se ve limitada en su capacidad de acción.

3. Modelo analítico y herramientas conceptuales para entender el ciclo y la contienda política del movimiento indígena

Este trabajo de investigación analiza la trayectoria organizativa de la CONAIE, desde su auge y consolidación hasta el declive de su actividad contenciosa. Para esto es necesario contar con un modelo analítico que permita comprender las transformaciones tanto en el campo político en esta última década, así como la evolución del movimiento social desde un momento de una muy alta confrontación política hasta un momento de repliegue, sin perder de vista que se establece un proceso relacional en el que, tanto las acciones gubernamentales influyen en la vida organizativa del movimiento, como la acción colectiva modifica la política gubernamental.

Gráfico 1 Modelo Analítico



Fuente: Información obtenida del trabajo de investigación

En el Gráfico 1. se muestra el modelo explicativo a través del cual se articula esta tesis. Partimos de la idea de que en la década de los 90 existían unas condiciones internas y externas que permitieron un fuerte accionar de la CONAIE y la interpelación constante al Estado para la incorporación de sus demandas. Durante el año 2003 y 2006, tras la alianza

electoral con el PSP y la posterior ruptura de ese acuerdo, inició un proceso de declinación en su accionar organizativo. Con este antecedente, la llegada de la Revolución Ciudadana y su modelo de gobierno descorporativizador y que impulsaba una reforma capitalista basada en la intensificación de un modelo productivo extractivista, generó la desmovilización de las organizaciones indígenas.

Para lograr este objetivo, se toman elementos teórico analíticos tanto de la teoría de movilización de recursos así como de la propuesta del proceso político, puesto que el primero permite tener una visión detallada pero estática de cada uno de los episodios de contienda, mientras que el segundo, alimentado con el concepto de contienda política, permite un análisis procesual de un movimiento social.

El permanente interés de Tilly de establecer relaciones causales entre las transformaciones estructurales del Estado y el desarrollo del capitalismo en el accionar de los movimientos sociales, le obligó a abandonar una mirada estática establecida por la agenda clásica en el estudio de los movimientos sociales y buscar un marco analítico que permita entender de mejor manera el contexto en el que se desarrollan las acciones colectivas de los movimientos sociales, las mismas que siempre son consideradas como acciones políticas, así:

Tilly (1978, 1994) vinculaba la emergencia de los movimientos sociales a un amplio “proceso político”, donde los intereses excluidos intentaban tener acceso a la política establecida. Tilly analizaba este proceso desde una perspectiva histórica, estableciendo las fases de conflicto intenso en la historia contemporánea y trazando los cambios en los repertorios de acción colectiva. En contraste con McCarthy y Salud, enfatizaba la dinámica general que determinaba la agitación social y sus características, en lugar de destacar la idea de movimientos sociales como actores específicos organizados. Esta perspectiva teórica se reflejaba en la definición de movimientos sociales como “series continuas de interacciones entre los detentadores del poder e individuos que reclaman con éxito hablar en nombre de un sector de la sociedad carente de representación formal, en el curso de la cual estas personas realizan públicamente demandas de cambio en la distribución o ejercicio del poder, y respaldan estas demandas con manifestaciones públicas de apoyo” (Tilly 1984, 303). Es decir, los movimientos sociales eran vistos como entidades organizadas, con continuidad en el tiempo y portadoras de cambios reflexivos, lo que implicaba una identidad compartida entre los participantes (Diani 2015, 5).

Esta visión permite entender las variaciones en la estructura de oportunidades políticas tanto en el momento de auge como de desmovilización, períodos que se modifican tanto por factores externos al movimiento (cambios en la estructura política, económica y social impulsada por los gobiernos), como por la propia acción de los movimientos sociales, es decir, cuando los contendientes demandan al Estado transformaciones legales o reivindicaciones de derechos, estos también abren para sí mismos y para otros sujetos colectivos, la posibilidad de incidir y transformar la realidad social (Tarrow 1998 en Aguilar y Ballesteros 2005). Para el caso de estudio que aquí se analiza, esta visión permite entender con claridad la relación establecida entre la CONAIE y los gobiernos neoliberales, en el momento de auge del movimiento indígena; así como, las transformaciones sufridas tanto en la estructura estatal como en la acción colectiva, en el momento de repliegue durante el régimen correísta.

En este mismo sentido, es importante considerar el concepto de ciclo de la protesta de Tarrow (1997) puesto que analiza el desarrollo de la acción contenciosa de un movimiento social dentro de un contexto histórico que varía y no como una evolución independiente al sistema en el cual se encuentra. Así el autor afirmará que:

Quando empleo el término «ciclo de protesta», me refiero a una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución (Tarrow 1997, 263-264).

Este concepto permite establecer la relación entre apertura y cierre del sistema político para la acción contenciosa, es por eso que resulta de vital importancia al momento de analizar las variaciones entre el contexto de la década de los 90 y el período comprendido entre el 2007 y 2015, donde se evidencia una alta represión por parte del gobierno de Alianza País que trae consigo la consecuente desmovilización de las organizaciones indígenas alineadas con la CONAIE.

Entendiendo que al actor que se está analizando está en una constante interacción con los detentores del poder, es necesario contar con otra categoría que permita caracterizar a las organizaciones y su accionar, especialmente porque el interés principal de este trabajo es determinar su actuación en un escenario que se transforma constantemente y en el cual existen múltiples interacciones entre diversos actores, especialmente frente a los diversos gobiernos, para esto es necesario tomar en consideración la definición de *acción contenciosa* que realizan los movimientos sociales y en la arena en la que estos se desarrollan. En ese sentido una acción:

Se convierte en contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros. Da lugar a movimientos sociales cuando los actores sociales conciertan sus acciones en torno a aspiraciones comunes en secuencias mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades. La acción colectiva contenciosa es la base de los movimientos sociales (Tarrow 1997, 19).

Con esta base este trabajo de investigación tomará como eje central de su marco analítico lo propuesto por McAdam, Tarrow y Tilly (2005) en la *Dinámica de la Contienda Política*, principalmente porque este enfoque posibilita realizar una lectura de la evolución de la actividad generada por el movimiento social y los gobiernos en momentos de despliegue de acciones convencionales y no convencionales. Los autores definen a la contienda política como:

La interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores (Mc Adam, Tarrow y Tilly 2005, 5).

Los autores además, para superar los límites puestos por los estudios de ciencias políticas que consideraban a la política no institucionalizada como un fenómeno anómalo, proponen la categoría de contienda política desde dos perspectiva (Diani 2015)s. En primer lugar, la de contienda transgresiva que irrumpe en el escenario sociopolítico ya sea por el tipo de demandas, los actores, los canales o los repertorios utilizados, y la de contienda contenida, la misma que se produce en los límites establecidos, es decir los repertorios de acción son

conocidos así como las demandas, los reivindicadores y los canales por los cuales se presentan las reivindicaciones están dentro de los límites establecidos

Esta propuesta a diferencia de la agenda clásica⁵ desde la cual se estudian los movimientos sociales, pone énfasis en mecanismos dinámicos, contemplando los debates internos y los procesos interactivos sobre los que se realizan las acciones; bajo un sentido compartido de la finalidad y la identidad colectiva. Considera que el actor colectivo opera mediante interacciones, que no solo involucra a sus miembros; sino a desafiantes y otros sujetos. Es decir, este planteamiento se ocupa de la interacción social y de cómo, a través de esta interacción, se construyen las sociedades (Mc Adam, Tarrow y Tilly 2005, 55).

Esta propuesta analítica contempla realizar un trabajo a dos niveles. El primero sería analizar al movimiento desde los episodios de contienda incorporando las categorías de la agenda clásica: estructura de oportunidades políticas, estructura de movilización de recursos, repertorios y procesos enmarcadores. Esto se complementará con el segundo nivel de análisis que permite ampliar la visión desde la Dinámica de la contienda política. Se realiza esta combinación de visiones porque la morfología de los movimientos sociales, permite entender cómo se encuentra en cada momento, en cada episodio de análisis y la dinámica de la contienda permite revisar el proceso y evidenciar las transformaciones en un periodo de análisis de largo plazo.

4. Estrategia de investigación y trabajo de campo

Para realizar esta investigación, además de la revisión bibliográfica existente alrededor de la acción colectiva y los movimientos sociales, se recurrió a literatura específica sobre el movimiento indígena ecuatoriano, que dé cuenta de los análisis desarrollados sobre esta temática y sirva para contrastar las distintas versiones de la problemática aquí planteada.

Además, se realizó una sistematización de las publicaciones de la prensa desde el año 2000 hasta el 2015 con el propósito de, por un lado, hacer una reconstrucción cronológica de los acontecimientos generados por el movimiento indígena a nivel nacional y local y, por otro,

⁵ Los propios autores se refieren a la agenda clásica de estudio de los movimientos sociales en la que se incorpora exclusivamente en su análisis las categorías de Estructura de Oportunidades Políticas, Estructura de Movilización, Procesos Enmarcadores y Repertorios. Es necesario incorporar a estos elementos otros aspectos que den cuenta de la acción contenciosa como un elemento móvil que evoluciona conforme despliega su acción.

identificar a los actores y visualizar los cambios en las formas de relacionamiento e interacción entre el actor colectivo y los diferentes gobiernos. Para esto se tomó como fuente principal a la publicación realizada por la editorial Abya Yala de la revista *Kipu: él mundo indígena en la prensa ecuatoriana* que presenta una recopilación de noticias de los principales diarios de país; lastimosamente solo ha sido editada hasta el número 63 que corresponde al semestre enero – junio del 2014. Para cubrir la segunda mitad de 2014 y todo 2015 se revisó las publicaciones de *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo*, tanto en su versión digital como física. Las noticias del período comprendido entre 1990 y el año 2000 fueron reconstruidas, principalmente con información de trabajos previamente realizados como son los de Barrera 2001 y Porras Velasco 2005. La sistematización de esta información se la realizó a través de matrices de análisis en las cuales se colocaba la información en función de las categorías analíticas. Debido a la extensión de este trabajo inicial, se omiten dichas matrices en la presentación de este trabajo.

Para tener una mirada directa desde los protagonistas, se realizaron entrevistas a profundidad con dirigentes indígenas nacionales y provinciales, líderes históricos del movimiento indígena ecuatoriano, académicos y autoridades electas cercanas al régimen de la Revolución Ciudadana, con el propósito de contar, desde los propios actores, con una lectura del contexto en el cual se realizaron las acciones, para contrastar lo publicado en la prensa y tener una visión más amplia de la problemática, especialmente haciendo énfasis en los marcos interpretativos que primaron en cada actuación colectiva.

Por último, se utilizó la técnica de observación participante en varias de las reuniones, encuentros y acciones colectivas realizadas por la ECUARUNARI – CONAIE, desde donde se logró obtener mayores elementos tanto del proceso histórico de la organización, que ha servido para tener la claridad sobre su vida organizativa, como de las transformaciones que ha sufrido el movimiento y sus limitaciones a la hora de emprender una acción colectiva en el momento actual. En el evento contencioso del año 2012 se tuvo una participación directa aunque sin una perspectiva investigativa, ya que el contexto en el que me encontraba era de colaboración con la organización y no académica; si bien no se contó con un diario de campo, si existe un registro personal de las actividades realizadas en el marco de esta colaboración que permiten alimentar la narrativa de la implementación de los repertorios en este año. Para la Marcha por el Agua y la Vida del 2015, se registró la participación en un diario de campo, el mismo que sirve de insumo para graficar esta experiencia.

Como se ha dicho, en los capítulos siguientes se realizará una revisión de todo el ciclo de la protesta protagonizada por la CONAIE, desde su auge hasta su declive, poniendo especial atención a las condiciones internas y externas que generaron cada uno de estos momentos. El capítulo siguiente se ocupará del surgimiento de las organizaciones y de las principales contiendas transgresivas protagonizadas por el movimiento indígena.

Capítulo 2

La contienda transgresiva: el auge de la CONAIE

Como se ha dicho, esta tesis aborda el ciclo de la protesta de la CONAIE desde una perspectiva procesual. En ese sentido, éste capítulo tiene por objetivo presentar el contexto de surgimiento y consolidación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para con esa base comprender tanto el período de transición, como el de desmovilización que ha vivido ésta organización indígena y su paso de una acción colectiva transgresiva a una contenida durante la Revolución Ciudadana.

Para entender estos momentos de la acción colectiva, se utiliza el concepto de ciclo de la protesta introducido por Tarrow (1997), así como, la categoría de contienda política (McAdam, Tarrow y Tilly 2005) para establecer las relaciones que se generan entre este movimiento social y los distintos gobiernos en cada uno de los períodos que se analiza.

El capítulo está dividido en tres partes, primero se describe el surgimiento de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuador Runacunapak Richarimuy – ECUARUNARI, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. Se ha seleccionado a estas dos organizaciones porque la ECUARUNARI es considerada la columna vertebral de la CONAIE y esta última, como ya se ha dicho, es la más representativa de todas las que forman el movimiento indígena. En un segundo apartado se presenta la contienda transgresiva de esta organización indígena, para lo cual se ha contextualizado el escenario social, político y económico que vivió el país en la última década del siglo XX, para posteriormente, reconstruir los principales episodios de contienda protagonizados por esta organización indígena, poniendo especial énfasis en los procesos enmarcadores, los repertorios, la estructura de movilización y la EOP. Finalmente, el capítulo se cierra con un análisis de este período presentando los principales mecanismos causales que explican el auge del movimiento social así como su contienda transgresiva.

La evidencia empírica aquí presentada está compuesta principalmente por datos de las entrevistas realizadas a los dirigentes históricos de la CONAIE y la sistematización de las noticias publicadas en la prensa cuando era necesario ampliar la información proporcionada en los trabajos previos que han realizado varios autores.

1. Procesos organizativos nacionales

Como se evidenció en el capítulo 1 de este documento, el movimiento indígena está conformado por cuatro organizaciones de alcance nacional, siendo la CONAIE la que mayor representatividad y relevancia presenta al momento de reivindicar sus demandas, es por eso que resulta importante conocer de manera general el proceso de conformación que han vivido esta organización. Al ser la ECUARUNARI la organización regional más importante de la CONAIE y además la base desde la cual se originó la organización nacional, en este apartado se presentará el proceso de conformación de estas dos agrupaciones.

1.1. Ecuador Runacunapac Riccharimui ECUARUNARI

(...) desde finales de los 60 y comienzos de los 70, se comienza a reivindicar una lucha directamente contra el racismo, y la reivindicación de recuperar las tierras y esto ya como que se concreta al inicio de los 70 con el asunto este de la cercanía a la nueva iglesia, de la Teología de la Liberación, que permite reagrupar y reafirmar una vez más la necesidad de tener una organización exclusivamente de los pueblos indígenas. Es ahí cuando aparece la ECUARUNARI, pero enmarcada en la lucha de tierras, la recuperación de tierras, por la cuestión de la educación indígena y su afirmación de la lucha contra el imperialismo. (...) En esos inicios el ECUARUNARI tuvo dificultades con otras organizaciones por creer que era una organización folclórica, indigenista. No entendían aún la necesidad de que los indígenas tienen que tener su propia organización, tuvo dificultades. Sin embargo se logra impulsar la organización y tenemos varios compañeros caídos por la lucha por la recuperación de la tierra (Blanca Chancoso, vicepresidenta de la ECUARUNARI, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Pese a que el ECUARUNARI, es una organización regional, que representa a los pueblos indígenas de la sierra, cronológicamente nace antes que la organización nacional a la que actualmente forma parte. El surgimiento del Ecuador Runakunapak Rikchairmuy, hoy conocida como Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI no fue fácil, tomó más de una década para que las luchas que se originaban en las provincias de la sierra, e incluso a nivel cantonal o comunal, confluyan en una lucha conjunta y bajo una estructura determinada (ECUARUNARI 2012).

Desde mediados del siglo XX, los indígenas de la sierra contaban con varias estructuras de movilización que, si bien no constituían hasta ese momento una plataforma sólida para la acción colectiva, permitían tejer lazos de solidaridad y articular acciones puntuales en defensa

de sus intereses. La existencia de comunidades que funcionaban bajo la dirección de un cabildo y cooperativas con juntas directivas, generaron un sentido de pertenencia hacia estos modelos de organización que, con el paso del tiempo, lograron transformarse en el movimiento social con la estructura que cuenta actualmente. Según se narra en un recuento de la historia organizativa del ECUARUNARI (2012), esta identificación de los indígenas, tanto a las comunidades como a las cooperativas, fue lo que permitió enfrentar las agresiones como las sufridas en Iltuz,⁶ y Toctezinín⁷ o desarrollar acciones en contra de varios ministerios e instituciones gubernamentales, especialmente, frente al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC.

Otro de los factores que favorecieron la construcción de un tejido social fueron las experiencias educativas, tanto a través de los centros de enseñanza formal como aquellos que fueron impulsados por la iglesia católica, además de los talleres de formación encaminados a mejorar sus prácticas agropecuarias; lo que condujo a reflexionar sobre el tipo de educación que necesitaban los indígenas. Las Escuelas Radiofónicas Populares abrieron la oportunidad de acceder a los medios de comunicación y difundir sus acciones, necesidades y luchas (ECUARUNARI 2012, 24).

⁶ En 1971 campesinos de Iltuz, ubicado en el cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo, demandaron la devolución de tierras arrebatadas por la hacienda “Maga-Chirvo”. Este conflicto se venía desarrollando desde el siglo XIX y no encontraba una solución adecuada pese a la intervención de las autoridades nacionales. Como represalia a esta nueva demanda, los dueños de la hacienda ordenaron el ataque a los campesinos, de cuyo hecho resultaron heridos de gravedad 20 campesinos. Los medios de comunicación locales y nacionales hicieron eco sobre lo sucedido, sin embargo, mucha de la información difundida era tergiversada. Con esta coyuntura, el propietario de la hacienda denunció la agresión a su propiedad por parte de los campesinos; a consecuencia de ello se ordenó la detención del párroco de Chunchi, padre Delfín Tenesaca acusado de promover la revuelta indígena, así como también se aprendió a otros miembros de la comunidad. El hecho generó la solidaridad de innumerables organizaciones y cooperativas tanto indígenas como mestizas, sindicatos y clubes deportivos. Las represalias y consecuencias de este suceso duraron hasta el año 1978 cuando varios de los integrantes de la diócesis de Riobamba fueron detenidos por la policía. (ECUARUNARI 2012, 60-68)

⁷ La comunidad de Toctezinín, también en la provincia de Chimborazo, vivió un proceso de hostigamiento sistemático por miembros de la fuerza pública y propietarios de las haciendas aledañas a la comunidad. Los comuneros habían ocupado las tierras de las haciendas cercanas a cambio de entregar a los hacendados la mitad de la producción que conseguían. Uno de los hacendados decide arrendar su propiedad sin informar previamente a los indígenas. El arrendatario exige que se le entregue la totalidad de la cosecha y ante la negativa de los campesinos se inician los enfrentamientos que traen como consecuencia la detención de varios indígenas acusados de rebelión, como evidencia de esto, se incluyen en los expedientes los testimonios de varios vecinos de las haciendas que aseguran haberlos oído cantar canciones subversivas en contra del gobierno, además la intendencia de Riobamba pide detener al párroco de la iglesia acusándolo de comunista. Estas disputas duraron varios años y fueron conocidas no solo a nivel nacional sino que superaron las fronteras. Los comuneros de Toctezinín recibieron cartas de respaldo y solidaridad de varias comunidades aledañas, sindicatos y organizaciones de varios países europeos. (ECUARUNARI 2012, 69-78)

Yo creo que uno de los elementos básicos en este proceso es, precisamente, que nos apoyó, nos ayudó muchísimo es esto que le decía la formación, y la formación se hace cuando hay debate, cuando hay análisis, sino, no existe simplemente. En el caso nuestro por ejemplo, y creo que toda la gente de mi generación nunca tuvimos una escuela de formación política, jamás. El centro de formación política era, precisamente, estos encuentros donde se debatía temas que en realidad eran problemas de las comunidades, problemas de la gente. Eso me parece que ha sido el sustento de la base para que esto vaya levantando (Luis Macas, dirigente indígena, en conversación con la autora, abril de 2015).

La migración hacia las principales ciudades del país, trajo consigo la posibilidad de encuentro y diálogo entre indígenas de distintas provincias de la sierra. Al tener que viajar a Quito, Guayaquil o Cuenca para vender su fuerza de trabajo, se vieron en la necesidad de conseguir lugares donde alojarse durante las temporadas en las que permanecían fuera de sus comunidades; para el efecto contaron con las Hospederías Campesinas⁸ que, además de proporcionar un lugar para dormir, se constituyeron en espacios de reflexión e intercambio de experiencias. “La hospedería es un punto de referencia, encuentro, les da sentido de seguridad, dentro de ella todos hablan quichua” (ECUARUNARI 2012, 26).

Así como existían estas estructuras organizativas previas que fueron potencializadas posteriormente para la formación de la organización nacional, la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización en 1964 fue una oportunidad política muy bien aprovechada por los indígenas para visibilizar las condiciones de explotación en las que se encontraban y acceder a la tierra. Los campesinos organizados conocían a la perfección la ley pues su análisis y discusión había iniciado varios años antes, cuando aún se trataba de un anteproyecto de ley,⁹ incluso se habían beneficiado de las primeras experiencias de redistribución de la tierra desde el año de 1954, puesto que la:

Diócesis que era terrateniente (...), que poseía latifundios como Zula con 36.000 hectáreas, ha entregado sus propiedades agrícolas para que se realice el proceso de Reforma Agraria, pero con una planificación con organizaciones técnicas de iniciativa privada como CESA, CEAS.

⁸ Fueron espacios de llegada de los indígenas principalmente en la ciudad de Quito, ubicados en el Tejar y la Tola. Estaban bajo la administración de las monjas Lauritas y la comunidad Salesiana.

⁹ “Inicialmente, la Ley de Reforma agraria en 1964 habría sido promovida por la Iglesia ecuatoriana, pues, según el obispo de Cuenca, “es buena, justa y provechosa, no destruye la propiedad privada, sino que la respeta y parte de ella” (ECUARUNARI 2012, 29).

En la hacienda Tepeyac de 2.850 hectáreas fueron beneficiadas 210 familias, con la dirección de CESA (ECUARUNARI 2012, 27).

Si bien la Reforma Agraria incrementó los episodios de contienda sobre la propiedad de la tierra, desde la década del 50 del siglo pasado ya existían varios casos relevantes de demandas campesinas sobre la tenencia de la tierra, tal es el caso de Galte, ubicado en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. En el año 1957, se creó un sindicato campesino con el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores de la hacienda, así como reclamar la propiedad de las tierras no producidas. Durante seis años se interpusieron demandas para legalizar su propiedad sobre esos terrenos; sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta favorable. En 1970, y al no encontrar otra alternativa, los indígenas de la comunidad se tomaron la hacienda con los consecuentes hechos de violencia y represión.

Otro caso significativo es el levantamiento de los comuneros de Salamac Chico y la comuna “La Provincia” en Tungurahua quienes, entre 1959 y 1960, se tomaron la hacienda; como consecuencia de estos actos, varios dirigentes fueron encarcelados. Existieron varios momentos de lucha en Azuay, Cañar, Loja, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura; en muchos de estos, fue necesario conformar organizaciones provinciales que impulsen las luchas de forma colectiva, por ejemplo, la Federación Campesina de Tungurahua creada con este propósito en 1971.

Todos los factores hasta ahora expuestos, y con el apoyo decidido de la Iglesia católica influida por la teología de la liberación y el Concilio Vaticano II, apoyaron el proceso organizativo de los indígenas en varias provincias conduciéndoles posteriormente, a realizar un Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas.

La primera reunión preparatoria a la cual asistieron delegados y delegadas de Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha se llevó a cabo el 12 de octubre de 1971. En el encuentro se discutió sobre la urgencia de fomentar la unidad a nivel nacional y analizar los problemas que tenían en las comunidades. Dos meses más tarde, se organizó una segunda reunión que resaltó la importancia de reunirse en las comunidades para generar conciencia en los indígenas sobre la situación política en la que se encontraban, anular su voto en las próximas elecciones y trabajar por la liberación desde sus propias luchas.

En enero del año siguiente, se cumplió con la tercera reunión preparatoria al Encuentro nacional en la cual se establecieron comisiones que viabilicen la realización de dicho encuentro. En el mes de junio de 1972 en el Instituto de Formación Tepeyac, provincia de Chimborazo, con la presencia de representantes de Tungurahua, Cañar, Bolívar, Pichincha y de la provincia anfitriona, se crea el Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, Movimiento Nacional Campesino Indígena ECUARUNARI, una organización con proyección nacional que desde su nacimiento ha permitido la confluencia de una amplia agenda de demandas de la población indígena.

En el primer encuentro fueron establecidos 12 “temas globales”, presentados textualmente como sigue:

- Exoneración de impuestos
- Agencias de Desarrollo
- Ocupación de tierras
- Educación Liberadora
- Las manifestaciones de paralización de la Reforma Agraria
- Importancia de las parcialidades indígenas
- Pago de las tierras adquiridas
- Coordinación de actividades en las provincias
- El indigenado como fuerza social en el cambio
- Creación de un Organismo Indigenista autónomo
- Actitud crítica frente a las Organizaciones de desarrollo y su trabajo, en este caso descoordinadas (ECUARUNARI 2012, 108).

Actualmente esta organización se denomina Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador y articula a los indígenas de las provincias de la sierra, a los amazónicos de Zamora y a organizaciones de base en Esmeraldas y Guayas. La ECUARUNARI es parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

1.2. Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE

Y en esa etapa, en ese proceso se alimenta (...) la constitución de la CONAIE pero previamente hubo un proceso preparatorio que se vive como 6 años, desde finales de los 70 hasta inicios de los 80. Entonces para mí la CONAIE es lo que logró sintetizar de manera más explícita la propuesta política, es recogido lo que se ha venido reivindicando, luchando, de manera más directa como pueblos indígenas, como organizaciones. Entonces en el proceso de

lo que fue la celebración de los 500 años tuvo esa oportunidad de aparecer, de visibilizarse con esta propuesta directamente, con una síntesis de propuesta política al Estado, ese es el salto que se viene dando, ya no es una reivindicación por una casa comunal o solo por la tierra, sino que ya se transforma en propuesta política más amplia (Blanca Chancoso, vicepresidenta de la ECUARUNARI, en conversación con la autora, abril de 2015).

La conformación de una organización nacional que permita aglutinar a los pueblos y nacionalidades en un frente común era una problemática que debían enfrentar las organizaciones, es por eso que a partir de la década de los 70 se empiezan a buscar mecanismos que faculten la convergencia de las demandas sociales de cada una de las regiones en una sola propuesta política.

Superados los temores iniciales, con la iniciativa de dirigentes del ECUARUNARI y de la COFENIAE, se realizó en Sucúa, entre el 20 y 25 de Octubre de 1980, el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En esta reunión vimos la necesidad de constituir un Consejo de Coordinación, que permita en el futuro la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas a nivel nacional. Esta instancia coordinadora era necesaria para superar las diferencias existentes al interior de las diferentes organizaciones indígenas. Al mismo tiempo era indispensable para unir la doble dimensión de nuestra lucha, la de clase y étnica (CONAIE 1988, 261).

Resultado de este encuentro se conformó el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONACNIE. Desde su inicio una de las principales preocupaciones ha sido el fortalecimiento organizativo, por lo cual promovió la creación de organizaciones de base y de segundo grado en las zonas donde no existían, trabajó en la formación de cuadros políticos que, en el futuro, puedan encabezar el proceso organizativo y mantuvo las alianzas y cercanías con otros sectores sociales con los que se compartían los principios políticos, como es el caso de los obreros y otros movimientos clasistas.

En el mes de noviembre de 1986, en la parroquia La Merced de la ciudad de Quito, se celebró el primer congreso de conformación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A la cita asistieron 500 delegados de las nueve nacionalidades existentes en el país representadas en 27 organizaciones. En este encuentro se discutió el proyecto político de la organización, la estructura organizativa y las principales acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo.

Se definió como objetivos de la nueva organización nacional: - la devolución total de las tierras indígenas en una forma de propiedad comunitaria, - la defensa de las culturas indígenas, incluida la medicina tradicional, - la educación y concientización de los indígenas en programas de educación bilingüe en todas las lenguas indígenas del país, - la búsqueda de alianzas y financiamiento con el fin de formar un banco indígena, - la coordinación de las políticas de todas las organizaciones indígenas del Ecuador (Altmann 2013, 13).

La CONAIE es la organización nacional indígena que coordina a las tres filiales; en la Costa la CONAICE creada en 1999, en la Sierra el ECUARUNARI creada en 1972 y la CONFENIAE de la Amazonía creada en 1980; cada una de ellas mantiene su autonomía y coordina directamente con sus organizaciones de base, que también son autónomas. A través de su proyecto político la CONAIE ha logrado converger tanto la propuesta étnica como de clase y hacer varios planteamientos, no solo para el sector indígena del país, sino para la sociedad en general. Su lucha ha encaminado a detener la implementación de políticas neoliberales, al encarecimiento del costo de la vida y a mantener la soberanía económica y territorial, al impedir la firma de los tratados de libre comercio. Es por esto que, a partir de los años 90, se constituye en una de las organizaciones sociales más grandes del país y un actor político relevante en el escenario nacional e internacional.

A manera de síntesis se presenta la tabla 5 en la que se resume el contexto de surgimiento de las organizaciones así como también sus principales demandas.

En el período de conformación de las organizaciones indígenas se vivió un importante proceso de autoreconocimiento y configuración de una identidad colectiva que será la que facilite la movilización social, esto es conocido como enmarcamiento y constituye la forma de interpretar, apropiarse e identificarse al interior del movimiento.

Tabla 5. Demandas de las organizaciones que conforman la CONAIE

Organización	Año de creación	Contexto de surgimiento	Demandas¹⁰
Ecuador Runacunapac Riccharimui Ecuarunari	1972	- Promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización en 1964. - Apoyo decidido de la Iglesia Católica influida por la teología de la liberación, que promovió la enseñanza formal. - Creación de las Escuelas Radiofónicas Populares que abrieron la oportunidad de acceder a los medios de comunicación y difundir sus acciones, necesidades y luchas. - Creación de las Hospederías Campesinas, espacio de encuentro de los indígenas	-Exoneración de impuestos -Agencias de Desarrollo -Ocupación de tierras -Educación Liberadora -Las manifestaciones de paralización de la Reforma Agraria -Importancia de las parcialidades indígenas -Pago de las tierras adquiridas -Coordinación de actividades en las provincias -El indigenado como fuerza social en el cambio -Creación de un Organismo Indigenista autónomo -Actitud crítica frente a las Organizaciones de desarrollo y su trabajo, en este caso descoordinadas
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE	1980	- Apoyo de los misioneros salesianos para la conformación de la Federación Shuar en 1961. - Retorno a la democracia en 1979 abre la posibilidad de una mayor participación política - Reconocimiento del derecho al voto indígena	- Reconocimiento de tierras ancestrales de carácter comunal.
Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE	1986	- Sucretización de la deuda externa y primeras medidas de ajuste estructural bajo el modelo neoliberal - Gobierno de León Febres Cordero, líder del partido Social Cristiano, caracterizado por una alta represión a cualquier tipo de asociación.	-El fortalecimiento organizativo, por lo cual promovió la creación de organizaciones de base y de segundo grado en las zonas donde no existían. - Trabajo en la formación de cuadros políticos que, en el futuro, puedan encabezar el proceso organizativo. -Unidad entre los sectores excluidos especialmente obreros y otros movimientos clasistas. -Devolución total de las tierras indígenas en una forma de propiedad comunitaria. -Defensa de las culturas indígenas, incluida la medicina tradicional. -La educación y concientización de los indígenas en programas de educación bilingüe en todas las lenguas indígenas del país. -La búsqueda de alianzas y financiamiento con el fin de formar un banco indígena. -La coordinación de las políticas nacional.

Fuente: (CONAIE 1988) (ECUARUNARI 2012), (Altmann 2013)

¹⁰ Se incluyen demandas de las organizaciones hacia el Estado y la Sociedad y también demandas de las bases sociales para la organización nacional, al tratarse de un momento de consolidación, los aspectos internos como externos se deben ver como demandas.

Un frame o marco de sentido para la acción ayuda a construir identidad colectiva y aprovechar las oportunidades que el medio presenta; asimismo, permite realizar una lectura e interpretación del contexto de la contienda. La existencia de una oportunidad política y una estructura de movilización no significa que exista una acción colectiva. Es necesario un marco:

Resulta imprescindible que las personas, como mínimo, se sientan agraviadas por una situación determinada y creen que la acción colectiva puede contribuir a solucionar esa situación. Faltando alguna de estas dos percepciones resulta altamente improbable que la gente se movilice aunque cuente con la oportunidad de hacerlo (McAdam, McCarthy y Zald 1999, 26).

Como se ha visto, el principal enmarcamiento que se produce en los indígenas ecuatorianos es el reconocimiento y valorización de su identidad étnica y de clase que les hace iniciar el proceso organizativo y la movilización para la reivindicación de sus derechos y una inclusión en la sociedad ecuatoriana. Como veremos a continuación, las demandas indígenas reivindican su condición étnica, pero además su lucha apunta a mejorar sus condiciones de vida así como también la del resto de clases populares del Ecuador.

2. La contienda transgresiva en la década de los 90

Siguiendo el marco analítico planteado, para entender el auge del movimiento indígena, es necesario comprender el ciclo de protesta en el momento de apertura y expansión de las oportunidades políticas.¹¹ Así Tarrow afirma que, en un momento de apertura los primeros luchadores plantean reivindicaciones al gobierno que genera resonancia en otros sectores sociales que se suman a la contienda provocando una inestabilidad entre las élites (Tarrow 1997, 173). El caso de la CONAIE durante la década de los 90 se convirtió en la organización que encabezó la lucha contra el neoliberalismo y logró la convergencia de las demandas de los sectores sindicales, de las organizaciones estudiantiles, de jóvenes, de mujeres, entre otras.

¹¹ Como categoría de análisis, la estructura de oportunidades políticas, EOP, es un intento por articular teóricamente la política institucionalizada y los movimientos sociales. Se la define como el “el grado de probabilidades que los grupos tienen de acceder al poder e influir sobre el sistema político” (McAdam 1999 49-50). Esta categoría, en términos generales, permite analizar el contexto en el que aparece o se desarrolla un movimiento social. Se trata de identificar los elementos del entorno que permite que las acciones de los movimientos sociales tengan un éxito relativo en su acción y a la vez creen otros que favorezca la materialización de sus demandas. Es una relación constante entre los movimientos sociales y la política institucionalizada.

Por otra parte, la contienda política comprende una gran variedad de acciones que se establecen entre unos reivindicadores y un gobierno, el cumplimiento de dichas demandas, afecta los intereses de alguna de las partes (Mc Adam, Tarrow y Tilly 2005, 5). Los autores hacen una diferenciación entre la contienda que se realiza por actores conocidos, con demandas establecidas y canales aceptados dentro del régimen de gobierno y aquella contienda que presenta actores, repertorios y demandas nuevas, a este tipo de contienda se la denomina transgresiva:

La contienda transgresiva consiste en la interacción episódica, política, colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, b) las reivindicaciones en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores; y c) al menos algunos de los participantes en el conflicto son actores políticos recientemente autoidentificados y/o d) al menos algunas de las partes emplean acciones colectivas innovadoras (Mc Adam, Tarrow y Tilly 2005, 8).

Como se pondrá de evidencia a continuación, durante estos años en el Ecuador se generó una apertura de las oportunidades políticas para el movimiento indígena, quien al autoreconocerse y constituirse en un actor colectivo con un programa político que cuestiona a los gobernantes, canaliza y amplifica las demandas de otros sectores sociales. Así también, el repertorio¹² de *levantamiento indígena*, utilizado en este período, tomó de sorpresa a la clase política que en un primer momento minimizó la capacidad organizativa de la CONAIE y posteriormente reconoció su capacidad interpoladora. Además, durante estos años las demandas propuestas por las organizaciones indígenas eran novedosas para la sociedad ecuatoriana.

2.1. La apertura de las Oportunidades Políticas

El concepto de oportunidades políticas trabajado por McAdam (1999) permite determinar las posibilidades de éxito de un movimiento social y depende tanto de las condiciones del escenario como de la capacidad de la organización para detectar y aprovechar dicha oportunidad. La apertura depende de al menos cuatro factores: a) el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado; b) la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre élites, alineaciones que ejercen una gran influencia en el ámbito de lo político; c) la

¹² Los repertorios son las formas en las que los actores colectivos manifiestan su acción. Son creaciones culturales de lo que se sabe hacer y de lo que se espera que un actor haga en una interacción contenciosa.

presencia o ausencia de aliados entre las élites; y d) la capacidad del Estado y su propensión a la represión (McAdam 1999, 54). Si bien estos elementos resultan importantes para el entendimiento del escenario en el que se puede gestar una acción colectiva, muchos de los trabajos analíticos realizados utilizando esta categoría amplían su visión y la utilizan para describir el contexto general en el cual se desenvuelve un movimiento social. Aun cuando esta visión no es del todo aceptada, para esta investigación se usará el término estructura de oportunidad política en este último sentido.

La emergencia del movimiento indígena como nuevo actor social y político, durante la última década del siglo XX, se produce en un contexto de cambio de las estructuras globales económicas y sociopolíticas que afectan a los sistemas de producción y reproducción social. En el campo económico, el modelo neoliberal promueve la formación de un mercado global libre de las regulaciones estatales nacionales y establece una nueva relación con las periferias, que generó en el Ecuador un nuevo proceso de regresión hacia el modelo agroexportador. Las medidas de ajuste económico, durante la primera mitad de la década de los 90 fueron implementadas de forma gradual debido a la debilidad gubernamental frente a la oposición y la permanente latencia de una crisis económica; en la segunda mitad de esa década se recurrió a medidas de *shock* que desestabilizaron el sistema político (Porrás Velasco 2005, 127 - 128)

Las políticas de ajuste buscan mejorar la acumulación de capital pero ponen poca atención en la distribución de la riqueza, lo que, dada la tendencia de la acumulación del capital, agranda la brecha social. Las condiciones de vida de los habitantes ecuatorianos ha desmejorado desde el boom petrolero que facilitó la implementación del Estado desarrollista. El Ecuador registra uno de los índices de crecimiento económico per cápita más bajos de América del Sur, aunque se sitúa a nivel medio bajo, según el indicador de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas a nivel mundial.

Según el índice Gini o de Concentración de Ingreso, no registra cambios significativos desde 1975 hasta 1990; sin embargo, alcanza un drástico deterioro hacia 1995, acentuado en el nivel urbano. Por tramos de ingreso se puede observar que, mientras en 1975 el 40% de los hogares más pobres recibían el 17% del ingreso, en 1995 apenas recibe el 9%; en cambio el 20% de los hogares de más altos ingresos pasa del 48% en 1975 al 62% en 1995 (Porrás Velasco 2005, 129-130).

Durante la década de los 80 las pugnas políticas y los intereses particulares impidieron la consolidación de un proyecto político ni permitieron la profundización del liberalismo. Por el

contrario presionaron al Estado para la dotación de recursos generando una alta confrontación entre las élites económicas y políticas, lo que provocó que se implemente un modelo político y económico de carácter populista.

Por otro lado, en el contexto internacional existía una preocupación y debate por la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es así que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realiza una revisión del convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales y en 1989 se marca un hito en cuanto al derecho internacional con la suscripción del convenio 169, en el que se realiza una ampliación a los derechos especialmente en el reconocimiento de sus territorios y de sus formas de organización social, política y jurídica (Porrás Velasco 2005, 130-132).

En julio de 1990 se realiza en Quito una reunión de representantes de ciento veinte “naciones indias”, para llevar a cabo una reunión y posterior declaración sobre los actos preparatorios de la campaña continental de los 500 años. Esta declaración rechaza la celebración del quinto centenario de la conquista; realza la lucha indígena y la resistencia y, por otra parte, reclama una serie de reivindicaciones: “el pleno ejercicio de la autodeterminación”, que se expresa como “plena autonomía para los pueblos indios”, pues sin gobierno indio y sin control de sus territorios, no puede existir autonomía; reclaman para sí el reconocimiento de sus sistemas jurídicos; la conservación de los recursos naturales y la defensa de la cultura en todas sus expresiones (Declaración de Quito 1990 2, 3 y 4).

En cuanto a la fortaleza estatal, durante toda la década de los 90 existió una tensa relación entre los poderes ejecutivo y legislativo lo que generó inestabilidad del sistema político, lo que dio lugar a la conformación de alianzas entre distintos partidos políticos y dirigentes y permitió una amplia capacidad de negociación entre los actores políticos y sociales.

En este contexto se desarrollan las acciones contenciosas durante el período de auge y consolidación de la CONAIE como parte del movimiento indígena ecuatoriano. A continuación se desarrollan los principales episodios de contienda desarrollados por la organización indígena poniendo especial intensidad a las categorías analíticas de la agenda clásica en el estudio de los movimientos sociales.

2.2. Episodio 1: El levantamiento del Inty Raymi

En agosto de 1988 asumía la Presidencia de la República Rodrigo Borja, quien había alcanzado la primera magistratura con un discurso democrático, de apertura y de profunda reforma social. El país salía de un régimen de “mano dura” bajo el mandato de León Febres Cordero, de corriente social cristiana, que reprimió cualquier intento de subversión o incluso de organización popular. El partido político Izquierda Democrática, no solo controlaba el poder Ejecutivo, sino que además poseía un importante bloque parlamentario, la fuerza y respaldo popular con el que había llegado al poder, con el pasar del tiempo se iba deteriorando debido a las medidas económicas de ajuste y de corte neoliberal que se venían implantando.

Las reformas económicas de ajuste gradual generaron, entre otras cosas, un importante proceso inflacionario que impactó principalmente en las clases media y baja. Las economías campesinas e indígenas se vieron seriamente afectadas; se dio un incremento en el costo de los insumos y herramientas agrícolas y esto a su vez repercutió en la canasta básica de alimentos. En la zona rural se generó una importante pérdida de empleos y un deterioro de los salarios. La crisis fiscal por la que atravesaba el país luego de la bonanza petrolera afectó la inversión estatal en las zonas indígenas, el Estado no tenía ningún tipo de presencia en esas áreas y por lo tanto el procesamiento de demandas de este sector era deficiente.

La desindustrialización por la que atravesaba el Ecuador había debilitado al sindicalismo, el mismo que ya se encontraba golpeado por la caída del muro de Berlín, eliminando muchos de los cimientos ideológicos de la izquierda, esto generaba a su vez un vacío en la sociedad civil puesto que no se contaba con interlocutor válido que pueda transferir las demandas sociales hacia el Estado con algún tipo de éxito; en este contexto surge el movimiento indígena como un movimiento social sólido y fuertemente estructurado.

El 28 de mayo de 1990, un grupo de dirigentes indígenas hicieron una toma simbólica de la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Quito, mientras otros miles salían de sus comunidades y paralizaban las principales carreteras de la sierra ecuatoriana, impidiendo así el abastecimiento de alimentos hacia las principales ciudades. Con el pasar de los días las acciones fueron subiendo de tono, hubo enfrentamientos entre indígenas, policías y militares, varios heridos de bala, un fallecido del lado indígena y un grupo de militares retenidos en la

provincia de Chimborazo, los mismos que posteriormente fueron liberados y expulsados de la zona.

Inicialmente las acciones gubernamentales estaban encaminadas a minimizar las medidas de hecho, asegurando que la presencia indígena en las calles era insignificante y sus acciones no respondían a una demanda propia sino a la manipulación de ciertos “agitadores profesionales” que utilizaban a los indígenas con fines políticos electorales. El discurso también estaba encaminado a exaltar las acciones desarrolladas por el gobierno a favor de los indígenas, pues aseguraban ser el gobierno que más se había preocupado por esta población.

Con el pasar de los días y el incremento de la intensidad de las medidas de hecho, que incluían la huelga de hambre de los dirigentes que se encontraban en la iglesia, el gobierno de Borja no tuvo más opción que abrir una mesa de diálogo con los indígenas. En la ciudad de Quito la medida se depuso el 7 de junio de ese año, sin embargo en el resto de provincias, la normalidad se logró unos días más tarde.

La acción contenciosa llevada a cabo por los indígenas poseía una serie de reivindicaciones de carácter coyuntural, pero principalmente estaba volcado a hacer una profunda crítica a la estructura misma de la sociedad ecuatoriana y al sistema político que los había excluido por siglos. El pliego de demandas presentado en la mesa de negociación era el siguiente:

- 1) La lucha por la tierra y la lentitud en el tratamiento en los conflictos de tierras, 2) trato equitativo en la distribución del coste de la crisis, 3) la necesidad de fortalecer la identidad étnica, 4) el derecho a una vida digna y a la autodeterminación, 5) el cumplimiento de los acuerdos de Sarayacu, 6) ser reconocidos como nacionalidades indígenas al interior de un Estado Plurinacional, 7) discutir y aprobar la ley de Nacionalidades Indígenas, 8) conformar una comisión para el estudio de reformas, 9) derogar leyes como: Colonización, Fomento Agropecuario, Patrimonio Forestal, Reforma Agraria, Seguridad Nacional, Aguas, Caminos, Hidrocarburos, Comunas y Educación, 10) reestructuración del IERAC, CREA, PRODESUR, PETROECUADOR, 11) reconocimiento de la medicina tradicional, 12) la voluntad de constituirse en sujetos políticos, 13) la urgencia de participar en la sociedad sin intermediarios, 14) profundizar la democracia cuestionando la estructura centralista del Estado, la limitada capacidad de representación de los partidos políticos, la debilidad de las instituciones democráticas y la incapacidad del sistema político para procesar las demandas sociales (Tello 2012, 75).

Como se evidenció en los párrafos anteriores, el país atravesaba un complicado momento económico que afectaba a la población rural, la lucha por la tierra se había convertido en un importante catalizador de la movilización, a eso se sumó luchas étnicas como son Estado plurinacional, la educación bilingüe y la salud desde su propia cosmovisión. En definitiva los procesos enmarcadores estaban alineados al reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y al mejoramiento de sus condiciones de vida desde su propia autodeterminación. Para lograr esta conciencia, lo que Sánchez Parga (2010) llamaría, la “etnia para sí”, se debió vivir un largo proceso organizativo el cual se fue capitalizando durante toda esa década.

2.3. Episodio 2: Movilización amazónica 1992

La respuesta por parte del Estado a las demandas presentadas en el primer levantamiento eran insuficientes. El “tema indígena” había sido postergado en el Congreso Nacional y las veces que se iniciaba el debate sobre la plurinacionalidad se lo equiparaba con el separatismo y la desintegración nacional. Pese a esto, esta primera acción contenciosa sumó un gran número de simpatizantes de otros sectores sociales, organizaciones de mujeres, trabajadores, estudiantes, maestros entre otros habían encontrado en los indígenas el actor protagónico para trasladar sus demandas al escenario político y esto se vio reflejado en las urnas, la Izquierda Democrática había perdido su hegemonía en el Congreso y un importante grupo de diputados pertenecientes al partido Socialista habían logrado ser electos. Borja enfrentaba su último año de mandato con poca aceptación popular y con un nuevo levantamiento indígena.

La mañana del 23 de abril Quito se paralizó. Todos se volcaron a las calles a recibir a la marcha indígena que desde muy temprano salió de Guamaní (sur de Quito) para entrar a primera hora a la ciudad. (...) Los obreros que entraban a las fábricas de la panamericana sur al turno de las 6 de la mañana saludaron a los “orientales”, lo mismo que los colegios, escuelas, grupos cristianos y populares que se habían apostado a los costados de la carretera para vivir y aplaudir a los orientales.

El gobierno dispuso un impresionante –e innecesario- dispositivo de seguridad que incluía centenares de policías, carros anti-motines, caballería, perros amaestrados, etc. con el objeto de acordonar las calles aledañas al palacio presidencial. El lugar donde se iban a reunir los indígenas, la Plaza de San Francisco, fue cercado por los policías quienes impidieron el paso de los ciudadanos (*Kipu 18*, 1992, 159).

Casi un mes atrás, una marcha indígena había salido de la ciudad del Puyo con destino a la capital del país. El propósito de estas acciones era el reconocimiento de la propiedad sobre los territorios que habitan ancestralmente. Este pedido iba de la mano con los ejes del proyecto político de la CONAIE, era la forma de materialización de la plurinacionalidad puesto que los pueblos amazónicos pretendían firmar un “acuerdo de territorialidad” con el Estado ecuatoriano, lo que una vez más fue interpretado como un intento divisionista. (Barrera 2001, 124)

El régimen rechazó los términos del acuerdo, sin embargo de forma paralela entregaba tierra a comunidades indígenas de Pastaza. Esta dualidad y la poca capacidad del Estado para manejar las demandas indígenas, hicieron que la CONAIE incorpore una nueva demanda, el llamado a una Asamblea Constituyente que modifique el marco constitucional del país y el tema de la plurinacionalidad pueda ser incorporado.

A diferencia del primer levantamiento, en esta ocasión el repertorio incluyó una larga caminata desde la Amazonía, la misma que iba sumando respaldos locales en cada poblado por el que atravesaba, se abastecía con la solidaridad ciudadana y poseía una cobertura mediática nacional e internacional, generando así mayor simpatía y legitimidad en su lucha.

El escenario político había cambiado, la presidencia de la República se disputaban dos actores que anteriormente formaban parte del mismo partido, Jaime Nebot y Sixto Durán Ballén, sus planteamientos se centraban en una reducción del Estado y la profundización del neoliberalismo. Finalmente, Durán Ballén ganó la segunda vuelta electoral y asumió el poder en un escenario social conflictivo y con poca aceptación por parte de los indígenas, los mismos que se encontraban consolidados como un movimiento social.

2.4. Episodio 3: El Agro y la seguridad social

El 10 de agosto de 1992 asumía la presidencia Sixto Durán Ballén, al poco tiempo de iniciado su mandato decretó una serie de reformas económicas, que, entre otras cosas incluía la devaluación monetaria, la elevación de tarifas de energía y de los derivados de petróleo (Barrera 2001, 156), posteriormente se creó el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, que fue la entidad encargada de la privatización de los servicios públicos como parte de la modernización neoliberal que impulsaba el régimen. Estos actos impactaron significativamente en la aceptación y respaldo popular hacia el gobierno de Durán Ballén.

En respuesta a estas acciones, las organizaciones sociales, encabezadas por la CONAIE y el Frente Único de Trabajadores, FUT, convocaron a una paralización nacional. A diferencia de acciones contenciosas anteriores, la respuesta indígena fue mínima, el actor protagónico en esta ocasión fue la Unión Nacional de Educadores, UNE, quien logró paralizar el sistema educativo a nivel nacional. El Movimiento Indígena, por su parte utilizó la conmemoración de los 500 años de conquista española para capitalizar su lucha a nivel internacional.

Representantes de la CONAIE estuvieron presentes en la conferencia de Naciones Unidas durante la declaración del año y del decenio de los pueblos indígenas lo que daba un sustento más amplio a su reivindicación histórica.

Durante el año 93, la conflictividad social no disminuyó, por el contrario las acciones contenciosas eran frecuentes aunque los actores eran diversos. Cuando el CONAM propuso la privatización de la seguridad social, una nueva organización se posicionó en la opinión pública, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, CONFEUNASSC, cuyas bases en algunos lugares eran compartidos por la CONAIE, pero que eran más amplias pues estaba conformado por población rural no indígena. Esta coyuntura posibilitó la articulación de diversos sectores que se oponían a las privatizaciones estatales y se conformó la “Coordinadora por la Vida”, esta agrupación replicaba y refinaba varios de los repertorios de acción colectiva usados tanto por el Movimiento Indígena, como fue la toma de iglesias, así como el repertorio de los sindicatos de trabajadores que planteaban huelgas nacionales. El pliego de demandas era extenso y diverso, la CONAIE sustentaba su accionar en la Ley Agraria.

La CONAIE intentó presentar un proyecto de Ley Agraria ante el Congreso Nacional, una nueva forma de accionar en el reclamo de sus demandas, sin embargo no fueron recibidos, se iniciaron nuevas medidas de hecho, las mismas que duraron algunas semanas, aunque con poca presencia de las bases, esto llevó a los dirigentes a realizar un repliegue de las acciones contenciosas e iniciar un trabajo interno de socialización y discusión de la Ley al igual que la búsqueda de aliados y respaldos nacionales e internacionales hacia la causa indígena.

En junio de 1994 se aprobó una Ley Agraria enviada por las cámaras de la agricultura, la misma que entró en vigencia de inmediato, El Movimiento Indígena que había seguido de cerca el tema inició un nuevo levantamiento en rechazo al texto aprobado. La Sierra central se

paralizó por completo, la provincia de Chimborazo era una de las más activas en estas acciones, los enfrentamientos con la fuerza pública generaron varios detenidos, heridos y un indígena fallecido, así como la destrucción de la sede de la filial de la ECUARUNARI en Cañar. El gobierno central declaró el estado de emergencia a nivel nacional debido a la fuerte confrontación, mientras que la iglesia católica se ofrecía de mediadora para entablar un diálogo entre los indígenas y el gobierno.

El Tribunal de Garantías Constitucionales suspendió los efectos de la ley y se instaló una mesa de negociación presidida por el propio presidente de la república. Se acordó la incorporación de varias enmiendas al texto, debido a la negativa del Congreso por tratar las enmiendas, se llamó a consulta popular en la que se discutiría una profunda reforma del Estado y también los acuerdos alcanzados en las negociaciones. El deterioro de los partidos políticos, de la legitimidad del Congreso Nacional y del Gobierno Central serviría para que las organizaciones sociales se articulen y trabajen en función de un nuevo modelo.

La CONAIE hizo público su proyecto político, que recogía su temas centrales de lucha, pero además planteaba una reforma en la representación parlamentaria para los pueblos y nacionalidades a través de las cuales se pueda nombrar directamente y de forma independiente a sus representantes, lo que generó ciertos rechazos en varios sectores.

En 1995 el Ecuador tuvo que enfrentar un conflicto armado con Perú, lo que generó que la contienda interna se vea suspendida. Los indígenas, especialmente los amazónicos, jugaron un rol importante en ese enfrentamiento bélico, que a su vez sirvió para posicionar su importancia dentro de la sociedad nacional. Además de los costos que implicaba la guerra, ese año se vivió una crisis energética que trajo consigo una serie de racionamientos en la electricidad con altos costos para la producción nacional. Frente a ello, Durán Ballén presentó un nuevo paquete de reformas económicas. De forma paralela, el Congreso discutía la reforma a la Seguridad Social enviada por el CONAM, que pretendía que las entidades financieras privadas capitalizaran de forma individual la seguridad social de los trabajadores más jóvenes, lo que rompía así el principio de solidaridad con la que se sustenta las jubilaciones y el seguro social campesino.

Los militantes del seguro social campesino, agrupados en la CONFEUNASSC, iniciaron acciones de protesta repitiendo repertorios puestos antes en práctica por la CONAIE como

fueron la toma de iglesias y paralización de carreteras. Se conformaron espacios de coordinación de acciones entre varios de los actores colectivos dando paso a la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales, CMS, que tuvo una fuerte presencia en las calles por casi tres meses. El régimen llamó a una nueva consulta popular para analizar dichas reformas. La CMS abandonó las calles y cambió de arena, esta vez se internó en la campaña por el NO mediante encuentros pacíficos, charlas, actos culturales y propaganda electoral, usando para esto a todas las alianzas y simpatías que tenía en diversos espacios culturales y académicos. Finalmente el 26 de noviembre de 1995, en las 11 preguntas que contenía el referéndum triunfó el NO.

Ante esta pérdida, además de los escándalos de corrupción que manchaban al gobierno de Durán Ballén, la destitución de su vicepresidente y la poca legitimidad de los partidos políticos, se veía la necesidad de contar con un nuevo espacio político electoral que recogiera las necesidades de los sectores sociales de izquierda, es así que en 1996 compite electoralmente, por primera vez, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, MUPP.¹³

2.5. Episodio 4: Caída de Bucaram, Asamblea Constituyente y derechos colectivos

La disputa electoral de 1996 trajo consigo una serie de sorpresas, por un lado el triunfo en segunda vuelta del populista representante del Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, Abdalá Bucaram; así como la votación indígena que respaldó a los candidatos MUPP que competía por primera vez y alcanzó 7 diputados, varias alcaldías y un 20,6% de la preferencia a su propuesta presidencial que corría en alianza con el Movimiento Nuevo País.

La propuesta de campaña de Bucaram estaba encaminada a derrocar a la oligarquía y a trabajar por los pobres, sin embargo, una vez llegado al poder continuó con las medidas de corte neoliberal que ya habían fracasado en el gobierno de Durán Ballén. Presentaba un nuevo paquete de ajustes económicos que incluía la elevación en los precios del gas y los combustibles, la privatización de varios sectores estratégicos y la convertibilidad monetaria. Generó una fuerte confrontación entre las élites económicas del país e inició un proceso de “creación de una nueva oligarquía” que dejaba de lado a los grupos económicos tradicionales tensando las relaciones con varios sectores de la producción.

¹³ Para una mejor comprensión de la importancia de MUPP en la vida organizativa de la CONAIE se puede revisar los trabajos de Barrera 2001, Sánchez Parga 2010, Becker 2015.

Los escándalos de corrupción salían a la luz pública y eran naturalizados por el régimen.¹⁴ el poco cuidado al manejar temas sensibles para el imaginario social como el conflicto con el Perú y su poca solemnidad en el ejercicio del cargo, fueron otros de los factores que promovieron las acciones contenciosas iniciadas en enero de 1997.

La CONAIE, CONFEUNASSC, FEINE y otros sectores sociales replicaron repertorios de acción colectiva ya antes usados, la toma de iglesias, esta vez la Catedral Metropolitana de Quito, bloqueo de carreteras y multitudinarias marchas en las cabeceras provinciales, estas, a diferencia de otras muestras de descontento popular convocaban a una gran número de ciudadanos no organizados. Se instalaron Asambleas Populares en varias ciudades donde se discutía el futuro del país, incluso en algunas, como en la de Riobamba se logró destituir a varios funcionarios públicos y nombrar nuevas autoridades.

En vista del conflicto social, el Congreso Nacional buscó la forma de llegar a una salida constitucional a la crisis, es así que declaró “incapacidad mental para ejercer el cargo” y pasó a destituir a Abdalá Bucaram, nombrando a Fabián Alarcón, presidente del parlamento, como su sucesor interino, adelantar las elecciones presidenciales y llamar a una Asamblea Constituyente.

Luego de la caída de Bucaram el movimiento indígena logró capitalizar aún más su lucha, por un lado consiguió una participación más directa en la planificación nacional a través de la creación del PRODEPINE,¹⁵ los gobiernos locales implementaron formas de planificación y rendición de cuentas participativas; el trabajo parlamentario logró la ratificación del Acuerdo 169 de la OIT, la creación de la Defensoría del Pueblo y una imagen de honestidad y lucha contra la corrupción al denunciar el uso indebido de fondos públicos.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente permitió que las organizaciones indígenas ampliaran su campo de acción, por un lado les permitió continuar participando electoralmente con resultados bastante satisfactorios al lograr contar con siete asambleístas,

¹⁴ Parte de estos escándalos consta el pago de una fiesta privada de los hijos del presidente en la ciudad de Cuenca con fondos de la gobernación de Azuay y la fiesta en la cual se celebraba la ganancia del primer millón de dólares de Jacobo Bucaram por su vinculación con las aduanas

¹⁵ El Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, fue la forma de viabilizar las competencias del Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Negros y minorías étnicas, su objetivo era combatir la pobreza, fortalecer la autogestión y lograr una integración democrática de los pueblos indios y negros. Estaba gestionado por las organizaciones indígenas (Barrera 2001, 235-236).

por otro lado se logró realizar una convergencia de varios actores que veían en el Movimiento Indígena la posibilidad de materializar sus demandas en la nueva Constitución, es así que se creó una Asamblea de la Sociedad Civil que se encargó de discutir, analizar y proponer un proyecto de Constitución que fue trabajado de forma colectiva en los territorios a través de talleres y asambleas provinciales. En este documento se recogían las propuestas de organizaciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes, ecologistas, jóvenes e indígenas.

Se realizó la entrega del documento a través de una gran movilización en la ciudad de Quito, además se generaba presión social a través de la presencia en las calles de las diversas organizaciones sociales, se realizaba incidencia política con los asambleístas de Pachakutik y otros aliados. El resultado fue una Constitución progresista en materia de derechos aunque en el modelo económico y del sistema político no hubo mayores avances. Si bien es cierto no se logró incorporar la plurinacionalidad, demanda de los pueblos indígenas, se declaró al país como un Estado pluricultural y multiétnico, además de la incorporación de los derechos colectivos que les permite, entre otras cosas desarrollar sus propias formas de gobierno, autodeterminación y reproducción cultural y vida comunitaria.

Casi de inmediato a la aprobación de la nueva Constitución el país elegía a un nuevo presidente de la República, esta vez el triunfador era Jamil Mahuad, ex alcalde de Quito y representante de la Democracia Popular.

2.6. Episodio 5: Dos años de Gobierno: pobreza, paz, base militar y dolarización

Jamil Mahuad llegó al poder en agosto de 1998 y se mantuvo en él hasta enero del 2000. En materia internacional su gobierno se centró por un lado en la firma definitiva de la paz con el Perú,¹⁶ y por otro en un apoyo a los Estados Unidos, tanto en las recomendaciones económicas de las multilaterales de crédito como en respaldo al Plan Colombia.¹⁷

¹⁶ Luego del conflicto armado de 1995 en el que se logró mantener los límites territoriales, sin embargo, para muchos, las negociaciones diplomáticas que pusieron fin los conflictos limítrofes, no fueron satisfactorios pues nuevamente se cedía territorio al vecino del sur. Este malestar se puso de manifiesto principalmente en la tropa y mandos medios de las fuerzas armadas, inconformidad que años después se pondría de manifiesto.

¹⁷ Este proyecto impulsado por Bill Clinton pretendía contrarrestar el narcotráfico y el conflicto armado del vecino del norte. Este respaldo significó la instalación de una base militar norteamericana en el puerto de Manta en 1999. El rechazo por parte de los movimientos sociales, especialmente de la CONAIE, a esta decisión se puso de manifiesto de inmediato, no solo por las implicaciones de la presencia militar estadounidense en el país y la pérdida de soberanía, sino por las condiciones en las que se había instalado la Base, las mismas que no favorecían en nada a la economía y seguridad de la población manabita.

En el campo político interno el partido de gobierno se constituyó en la bancada parlamentaria¹⁸ más grande, por lo que le resultaba fácil la aprobación de determinadas leyes que beneficiaban especialmente a las élites económicas. Pese a esto, el respaldo popular era limitado, la credibilidad de la que gozaba el Parlamento no era nada buena, apenas el 8% de la ciudadanía creía y respaldaba la gestión de la legislatura; el rechazo popular no era exclusivo de esta instancia de poder, la función judicial contaba con una falta de aceptación igual o mayor que el Congreso, esto se debía principalmente a la poca agilidad al momento actuar frente a los casos de corrupción (Barrera 2000).

Para el binomio Mahuad-Noboa, el tema económico fue el frente más complicado y urgente que atender. La crisis económica era generalizada y a la vez debía responder a los compromisos adquiridos con los banqueros que habían financiado su campaña electoral. Las complicaciones económicas venían desde hace unos años atrás; factores externos como los precios internacionales del petróleo incidían de forma negativa en la empresa nacional Petroecuador y esto generaba una reducción del presupuesto nacional. La costa ecuatoriana se encontraba destrozada por el fenómeno de El Niño y el gobierno no había podido responder de manera adecuada en la reconstrucción y a la recuperación agrícola, por lo que las condiciones de vida eran precarias en esa región (Romero 1998). La deuda externa se había incrementado considerablemente en los últimos años; se vivía un racionamiento energético que impactaba gravemente en la producción y la política económica del gobierno favorecía al sistema financiero privado.

La deuda externa asciende a 14 millones de dólares, equiparable al PIB del país; para atender al pago de esta deuda el Estado ha dedicado el 40% de su presupuesto, monto que contrasta groseramente con el 13 dedicado a educación y el 3 dedicado a salud. A pesar de ello, o precisamente por ello, la inflación superó el 60% en 1999 mientras la economía se contrajo en un 7,3%, el déficit fiscal subió al 5.4% del PIB (Ramírez 2000, 17).

El evento más significativo, en materia económica y que evidentemente favorecía a un poder

¹⁸ Según los resultados de las elecciones realizadas en mayo de 1998 la Democracia Popular logró obtener 36 de los 121 puestos que se disputaban; la segunda fuerza estaba conformado por el Partido Social Cristiano con 27 curules, seguidos del Partido Roldosista Ecuatoriano con 24. Estos tres partidos, en varias ocasiones, sobre todo en aquellas que reformaban la legislación tributaria en beneficio de los grandes empresarios costeños, funcionaban como una verdadera “aplanadora” en el Congreso Nacional. Por su parte el Movimiento Pachakutik contaba con siete diputados, dos nacionales y cinco provinciales lo que le convertía en la quita bancada por número de legisladores, si bien su presencia era significativa, en temas económicos no podía realizar mayor incidencia.

oligárquico, fue el salvataje bancario. Además se eliminó el impuesto a la renta y fue reemplazado por el de circulación de capitales, que causó un efecto especulativo, en la que muchos depositantes retiraron su dinero del sistema financiero que ya se encontraba debilitado; además impactó en la recaudación fiscal, las clases altas y empresariales dejaron de pagar impuestos y la carga cayó sobre las clases medias y populares con el aumento del IVA, de los precios de los servicios básicos y la eliminación de subsidios.

En ese contexto, el 8 de marzo de 1999, en cadena nacional, el Presidente de la República, decreta un feriado bancario con el fin de salvar a los bancos en quiebra, días más tarde “amanecieron congelados los depósitos bancarios en sucres y en dólares, las cuentas de ahorros, las cuentas corrientes y los depósitos a plazo, pertenecientes a los particulares” (Acosta 2012, 190).

Frente a estas medidas antipopulares, la conflictividad social aumentó drásticamente, entre marzo y julio de 1999, el movimiento indígena y otras organizaciones sociales se tomaron las calles como medida de protesta, las acciones emprendidas por el gremio de los taxistas paralizó por completo el país; la presión ante el gobierno fue tan grande que por momentos se temía por la estabilidad del régimen, ante esto las fuerzas políticas en el Congreso cedieron ante las demandas de los partidos de centroizquierda y de las organizaciones sociales, sin embargo, tiempo después, el Partido Socialcristiano y las cámaras de la producción se opusieron al régimen debido a la obligación del pago de tributos (Acosta 2012, 190-191), esto generó una ruptura en las élites políticas y económicas del país, que, sumado al sentimiento de agravio de las clases populares debido a la dolarización¹⁹ y las condiciones de pobreza que habían aumentado, generaría una apertura de la estructura de oportunidades políticas.

2.6.1. La huipala ondea en Carondelet

“Indios instalan congreso paralelo”. Así titulaba la prensa nacional a los acontecimientos que se vivían en la provincia de Chimborazo el 4 de enero de 2000. Las calles de Riobamba estaban tomadas por los estudiantes secundarios que eran reprimidos por la Policía Nacional, mientras indígenas de 11 provincias de las sierra y la Amazonía instalaban el Parlamento

¹⁹ El domingo 9 de enero, el entonces Presidente de la República del Ecuador, Dr. Jamil Mahuad, anunció su decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, después de anclar el precio de la divisa en un nivel de 25.000 sucres; para lo cual dijo: “El sistema de dolarización de la economía es la única salida que ahora tenemos, y es el camino por donde debemos transitar” (Barzallo Mendieta 2002).

Regional de los Pueblos. El objetivo de ésta reunión era buscar alternativas a las medidas económicas y llevar una propuesta conjunta al Congreso que dichas organizaciones iban a realizar en Quito en los días posteriores. La propuesta principal de la dirigencia indígena estaba encaminada a promover una transformación económica. “Estamos insistiendo en un cambio profundo de modelo económico y que venga nueva gente, con otra mentalidad, que valore el trabajo del pueblo” (Kipu 34, 2000, 4) afirmaba Salvador Quishpe, presidente de ECUARUNARI, en declaraciones de prensa. El 11 de enero, se instaló en la ciudad de Quito el Parlamento Indígena Nacional, el mismo que llamó a un levantamiento indígena y popular a partir del 15 de enero.

Para el 14 de enero los titulares de la prensa hacían referencia al inicio de las movilizaciones. Cientos de indígenas, especialmente de la sierra centro, habían empezado a abandonar sus comunidades para bloquear las principales carreteras del país.

Los indígenas están decididos a enfrentar al gobierno. Desde ayer empezaron a salir de sus comunidades a pie y a lomo de mula para el gran levantamiento previsto para este sábado. Bajaron por la montaña portando picos, palas y machetes. Son hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que aspiran un cambio radical en la conducción del país (Kipu 34, 2000, 17).

La demanda de este levantamiento era el exigir la renuncia del presidente Mahuad e instaurar un “Gobierno de Salvación”. Los dirigentes indígenas de las provincias alentaban la participación de sus comunidades asegurando que el gobierno mataba de hambre al pueblo. El agitación en las calles era evidente y la represión policial y militar intensa. En Quito la dirigencia indígena nacional, sumada a la Coordinadora de Movimientos Sociales, se reunían con la cúpula militar en el Ministerio de Defensa con el propósito de buscar su apoyo para instaurar una “Junta de Gobierno” que sustituya a los tres poderes del Estado.

Con el transcurrir de los días las protestas se fueron tornando más intensas, el número de personas que participaba aumentaba en todas las ciudades del país. El objetivo era lograr llegar a la capital de la República, tomarla y cercarla con no menos de 50 mil indígenas. Los controles en las vías para impedir el paso de los manifestantes eran constantes, indígenas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, viajaban en transporte interprovincial “disfrazados de mestizos” para poder llegar a la capital.

En grupos pequeños, por vías alternas y chaquiñanes, de dos en dos, de uno en uno, partes a pie y partes en carro; “disfrazados de mestizos”, soportando preguntas y revisiones de los policías en cada tramo, así llegaron a Quito, hasta el mediodía de ayer, alrededor de 2000 indígenas.

Los indios -cuya presencia masiva y repentina en la capital sorprendió a la mayoría-, salieron el lunes de sus comunidades. Gran parte de ellos llegó en horas de la noche, sin embargo, ayer, durante todo el día el número fue incrementándose (Kipu 34 2000, 48).

El 21 de enero, en alianza con los mandos medios de las Fuerzas Armadas, los indígenas se toman el Palacio Legislativo. Antes del mediodía se proclamó el “Gobierno de Salvación” liderado por el Coronel Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. Debido a la convulsión nacional, en horas de la tarde la cúpula militar pidió la renuncia del presidente Mahuad y le retiró el respaldo, pese a eso el presidente afirmó que no dejaría el cargo.

Como respuesta a esas declaraciones los indígenas decidieron tomarse el Palacio de Carondelet; lo que obligó a que Jamil Mahuad abandone la casa de gobierno y se dirija en ambulancia a la Base Aérea de Quito. Indígenas y militares asumieron el poder durante pocas horas puesto que tras una serie de negociaciones se dio paso al régimen de transición. Ya entrada la madrugada, asumió la presidencia Gustavo Noboa Bejarano, quien hasta ese entonces cumplía las funciones de vicepresidente de la República.

La presencia indígena en el gobierno nacional duró apenas unas horas, pero para muchos este acto fue considerado como la primera vez que los indígenas llegaron a gobernar, lo que sin duda marcó un hito en la historia del movimiento indígena y en el país. La poca duración del gobierno indígena da claras muestras de la negativa de la sociedad ecuatoriana de aceptar a los indígenas y a las clases populares como actores válidos para dirigir la nación.

Tanto indígenas como de otros sectores sociales, responden a una estructura orgánica y alineados a los acuerdos nacionales a los que se llega. Se genera un sistema de toma de decisiones desde abajo hacia arriba, desde las bases comunitarias que se declaran en asambleas permanentes y emiten sus resoluciones hacia las dirigencias nacionales y, a su vez estas últimas, informan permanentemente a sus bases de los avances y retrocesos que provocados en el centro político. Este respaldo y coordinación se mantiene hasta el momento en el que se desintegra el Gobierno de Salvación; en ese momento, mientras los dirigentes

nacionales se retiran de la escena política, en lo local se reactivan las protestas, incluso llegando a actos de violencia.

Una multitudinaria marcha indígena, que cubrió unas 20 cuadras del centro urbano, rechazó la ascensión del Dr. Gustavo Noboa como presidente de la República.

Miles de indígenas evangélicos y del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), comerciantes minoristas y otros sectores sociales partieron desde el parque Guayaquil bajo la dirección de Carlos Vimos, coordinador del Parlamento Indígena y nombrado la noche del viernes Gobernador de Chimborazo. Portaban carteles alusivos a su rechazo a la dolarización y privatización del Estado, armados con palos y otros objetos.

Sin embargo, en la iglesia de San Alfonso, la marcha fue dispersada por militares y policías que utilizaron abundantes bombas lacrimógenas perjudicando incluso a niños, mujeres y civiles que estaban en el santo recinto o transitaban por el casco urbano.

Simultáneamente, alrededor de 400 indígenas saquearon y destruyeron mostradores de los mercados La Condamine y La Merced, ante la mirada impávida de los propietarios y sin control policial.

Pasado el mediodía, los manifestantes se volvieron a concentrar en la plaza de La Concepción y parques Sucre y Maldonado. Las vías se mantuvieron cerradas (Kipu 34 2000, 89).

La estructura de oportunidades políticas se encontraba claramente abierta, las decisiones tomadas en materia económica generaron una ruptura entre las élites financieras y las políticas lo que debilitó al gobierno central y se constituyó en el escenario óptimo para canalizar el sentimiento de agravio de las clases populares. El gobierno contó con un aparato represor fuerte durante los primeros días de enero del 2000, se utilizó tanto a la policía como a las fuerzas armadas para militarizar importantes zonas de población indígena y amedrentar a los manifestantes, sin embargo, la alianza generada con los mandos medios de la fuerza terrestre revirtió la capacidad represiva del Estado, puesto que la tropa militar abrió paso a los indígenas para que la toma de los edificios de poder y proclamar el triunvirato. Ante esta sublevación, las cúpulas militares no tuvieron más opción que retirar el apoyo al Presidente de la República y así evitar una confrontación nacional.

Por supuesto y como ya se ha dicho anteriormente, esta apertura duró poco. La negociación entre las élites llegó prontamente a un acuerdo, es así que se sacrificó la figura de Mahuad para mantener los privilegios de clase, se negoció con la cúpula militar para que los mandos

medios entreguen el poder y permitan un régimen de transición enmarcado en la ley, para lo cual los diputados rápidamente buscaron una salida jurídica que permita a Gustavo Noboa asumir la presidencia; siendo los grandes perdedores de la jornada los dirigentes indígenas que no tuvieron ninguna capacidad de maniobra ni lograron ningún avance en su agenda política.

A diferencia de los levantamientos desarrollados en la década de los 90, este presentó una importante variación en las demandas, hasta la fecha, la interpelación al Estado había sido por su inclusión dentro de la sociedad ecuatoriana, la disputa por el poder se había enmarcado en los parámetros institucionales compitiendo en las contiendas electorales. Era la primera vez que se incluía como parte de las demandas del Movimiento Indígena a la clase política y a la sociedad en general la decisión de conformar un gobierno popular que suplante a todos los poderes del Estado. Así mismo, el repertorio utilizado de la toma del edificio parlamentario, que simbólicamente significó también la toma del poder, fue una importante modificación de las acciones ya desarrolladas anteriormente. Durante las contiendas desarrolladas en la década precedente se había recurrido al bloqueo de carreteras, desabastecimiento de mercados y toma de edificios de gobierno en las provincias, esta era la primera vez en la que la infraestructura del Congreso y del Palacio de Gobierno era objetivo de las organizaciones sociales.

2.7. Episodio 6: El Gobierno de transición: poco diálogo y el levantamiento por el precio del gas

Pese al rechazo de los indígenas de varias provincias, el Gobierno de Salvación se disolvió y Gustavo Noboa Bejarano era el nuevo presidente de la República. En los dos años que se mantuvo en el poder, hasta terminar el período en el que fue electo como vicepresidente, se vivieron momentos de alta conflictividad pero poca capacidad de acción por parte del movimiento indígena y el resto de organizaciones sociales, a excepción del levantamiento por el alza del gas a inicios del 2001, episodio que se analizará más adelante.

El régimen de Noboa mantuvo la estructura de oportunidades políticas cerrada, esto se dio por la reconfiguración de las élites financieras y políticas, que como se dijo anteriormente, habían sacrificado la figura de Jamil Mahuad para volver a tomar el control del país; el rol de Gustavo Noboa era el de mantener cierto grado de estabilidad económica y política, concluir el período de gobierno y mantener los intereses económicos de los grupos de poder. En ese sentido se continuó apoyando al sistema financiero quebrado, como lo recuerda Alberto Acosta: “el

gobierno siguió entregando ingentes recursos a la banca, en particular a Filanbanco, que en total obtuvo 1.400 millones, incluyendo los 414 millones recibidos en 1998, cuando todavía estaba en manos privadas” (Acosta 2012, 264).

Es así que la política económica mantuvo los mismo parámetros que en el gobierno de Mahuad, se continuó con el proceso de ajuste neoliberal y ahora se imponían mayores condicionamientos desde las multinacionales; las presiones desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se hicieron más fuertes por un lado por asumir al dólar como moneda oficial y por otro debido a los préstamos contingentes entregados al país. Como parte de estas medidas se aprobó la Ley Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador, conocida como Ley Trole 1.

En esta ley Trole 1 se aprobaron la dolarización oficial, reformas para flexibilizar más el mercado de trabajo, esquemas privatizadores de las telecomunicaciones y las compañías generadoras y distribuidoras de electricidad, la concesión para construir nuevos oleoductos por parte de empresas privadas, así como nuevas reformas en el sector financiero. (...) se estableció la obligación de superar lo antes posible la moratoria de la deuda externa bilateral y comercial, así como el alza de los combustibles derivados de petróleo, incluyendo el gas doméstico. (...) la reforma tributaria (especialmente el alza del IVA, una reducción al impuesto a la renta, así como nuevos impuestos a los combustibles) (Acosta 2012, 262-263).

Desde las organizaciones indígenas y sociales se rechazó permanentemente las medidas adoptadas en el campo económico, se realizaron movilizaciones y paralizaciones que concluían con la instalación de mesas de diálogo que al poco tiempo se disolvían por la negativa del gobierno a negociar con los movimientos sociales. En varias ocasiones, por parte del gobierno, se catalogó como fracaso a las acciones emprendidas principalmente por la CONAIE. El Ministro de Gobierno de ese período, Juan Manrique, se referiría al levantamiento indígena como “un escenario obsoleto y antiguo,” por su parte los indígenas reivindicaban la vigencia y fuerza de ese repertorio como parte de su cultura y como medio de presión para los gobernantes; efectivamente dicho repertorio demostró ser efectivo en la lucha contra el alza del gas.

Como estrategia para contrarrestar los ánimos caldeados, el presidente Noboa realizó varias visitas a los territorios, especialmente a aquellos que poseen mayor presencia indígena y que

históricamente habían sido descuidados por el Estado, la primera población en visitar fue la ciudad de Guamote, en la provincia de Chimborazo. Vestido con un característico poncho rojo con rayas, y acompañado por el presidente del Congreso Juan José Pons, y los ministros de vivienda, energía y comercio exterior, se dirigió a unas dos mil personas. En su discurso, el primer mandatario, reconoció el aporte de los indígenas al país y el abandono que han sufrido por parte de las autoridades. Se comprometió a terminar la vía Guamote–Macas, a mejorar e impedir la privatización del Seguro Social Campesino y bajar los aranceles de los artículos importados para la ganadería y la agricultura. Además firmó el acta de creación de la Cámara de Comercio Indígena. También anunció que llegarían un préstamo desde el FMI y que las condiciones se aplicarán desde junio (Kipu 34 2000, 401).

(...) “El acuerdo con el FMI es como un visto bueno que dice: Ecuador es confiable y ahora empezarán a venir recursos”, dijo Noboa. Aclaró “que esos fondos no serán para la banca, que hizo tanto daño llevándose el dinero”. (...) “Los ajustes se han dado antes y hasta en un 150% y no hay por qué asustarse”, indicó, respecto a la eliminación de subsidios y otras medidas recomendadas por el FMI (Kipu 34 2000, 403).

Estas acciones han sido usadas frecuentemente por los gobiernos para tratar de dividir a las bases indígenas al ofrecer proyectos o atención a cambio del respaldo a determinada propuesta de gobierno, sin embargo, durante el período que analiza este capítulo, dicho procedimiento no logra fragmentar en su totalidad a las organizaciones indígenas, sí bien es cierto que logra desmovilizar a un sector, la estructura organizativa de la CONAIE-ECUARUNARI logra recuperar el control y mantener la unidad del movimiento.

Paralelamente a las acciones gubernamentales, internamente las organizaciones indígenas viven un cambio en su conformación política. La ECUARUNARI elige a su nuevo Consejo de Gobierno, el mismo que estuvo presidido por Estuardo Remache,²⁰ representante de la provincia de Chimborazo, este dirigente buscaba darle una nueva imagen al movimiento. Las resoluciones del Congreso de esta organización, se centraban en insistir en el pedido de amnistía para los civiles y militares que participaron el 21 de enero del 2000; analizar los

²⁰ Oriundo de la parroquia San Juan en Chimborazo, es un indígena puruhá de 40 años que desde su juventud ha sido parte de las organizaciones indígenas, desde su comunidad Chaupi Pomaló, para pasar a integrar el consejo de gobierno del Movimiento Indígena de Chimborazo y como dirigente de Organización y Pueblos del ECUARUNARI, asumiendo temporalmente la vicepresidencia de esa organización. (“¿Quién es el nuevo presidente de la Ecuarunari?” en: Revista Kipu 34 El Mundo Indígena en la Prensa Ecuatoriana, Abya Yala, enero-junio 2000, 424).

impactos de la dolarización, la salida de los directores de la DINEIB²¹ y del PRODEPINE y potencializar el sistema de salud intercultural. Meses más tarde y tras el inicio de la recolección de firmas para la consulta popular impulsada por el movimiento indígena, en la que se pedía que se consulte, ente otras cosas la dolarización y la desaparición del sucre como moneda nacional, se genera una disputa al interior de la CONAIE debido a que el Tribunal Supremo Electoral rechazó la solicitud del proceso de consulta, debido a una inconsistencia en las firmas entregadas, puesto que se presume que existe falsificación. Esto genera una fricción entre las organizaciones de la sierra y las de la Amazonía.

2.7.1. “Nada solo para los indios”: la lucha por el precio del gas

El Gobierno inició la semana poniendo más atención a las protestas sociales. En la tarde de ayer, el presidente Noboa convocó a una reunión de Gabinete, para evaluar las tres semanas de manifestaciones. Luego del encuentro, Alfredo Negrete, secretario de Comunicación, minimizó las jornadas y dijo que el país regresa a la calma (Kipu 36 2001, 23).

Así iniciaba la tercera semana del año 2001,²² el que se constituiría en el mes más álgido en el mandato de Noboa. Las organizaciones sociales habían interpuesto una demanda de inconstitucionalidad frente a las medidas económicas. Al no recibir respuesta, deciden radicalizar las protestas y declararse en movilización nacional. Pese a la desestimación de las acciones por parte del vocero oficial, Alfredo Negrete, en las carreteras, especialmente en la Panamericana norte y sur, las cosas se vivían de manera diferente. La prensa reportaba bloqueos en Azuay, Cañar, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. En esta última provincia se reportaban la ruptura del pavimento en Guamote para bloquear las vías, en la carretera Riobamba-Guaranda los pobladores de San Juan también se habían tomado esa arteria vial.

A partir del 25 de enero las medidas de hecho se tronaron más radicales. Las organizaciones indígenas de Chimborazo y Tungurahua cerraron las carreteras y desabastecieron los mercados. Como saldo de los enfrentamientos, en Chimborazo resultó una persona herida y dos detenidos por el cierre de la vía a Guayaquil. La CONAIE y el Parlamento de los Pueblos

²¹ La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, es uno de los principales logros del Movimiento indígena en la década de los 90. La dirección de esta instancia, al igual que la del PRODEPINE, Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, se constituía en un elemento de disputa entre dirigentes de las diferentes organizaciones indígenas.

²² Se iniciaba el año con un nuevo “paquetazo económico” que planteaba el aumento de los precios de los combustibles en un 25%, del gas de uso doméstico en un 100% y del transporte en un 75%, esto generó los procesos de indignación de la ciudadanía.

del Ecuador se tomaron las instalaciones de la Cadena Internacional de Noticias CNN en Quito, para alertar a la comunidad internacional del impacto del Plan Colombia en la población ecuatoriana.

En un ambiente de protestas, Gustavo Noboa inició una serie de visitas a las comunidades indígenas, especialmente a las de la Amazonía. En una comunidad Shuar de Morona Santiago se entregó 8,5 millones de dólares para el mejoramiento vial y para programas de vivienda, además pidió a las bases indígenas que dialoguen con los Ministros de Estado para que se puedan viabilizar otros proyectos. Con estos actos, se evidencia el carácter clientelar de su gobierno y las intenciones de generar división al interior de las organizaciones, desconociendo la estructura organizativa del Movimiento Indígena, práctica que será constante en su mandato. En varias ocasiones suspendió las mesas de diálogo con los representantes de la CONAIE, FENOCIN y FEINE para iniciar negociaciones con los alcaldes indígenas, desconociendo la estructura y forma de toma de decisiones al interior de las organizaciones.

Debido a la falta de resultados de las medidas de presión que se habían desarrollado por casi un mes, el 29 de enero se decide convocar a un levantamiento indígena, el cual logra atraer a las más grandes organizaciones que forman el Movimiento Indígena Nacional, estas son la CONAIE con sus filiales, a la FEINE, la FENOCIN, la CONFEUNASSC y la FEI, igualmente con sus organizaciones locales y regionales. El principal objetivo era impedir la subida del costo del gas. Pese a que en muchas de las comunidades indígenas no se usaba este combustible de forma regular, la posibilidad de la eliminación del subsidio, que afecta a toda la población pero especialmente a las clases populares urbanas, genera un enorme sentimiento de indignación y agravio, por lo que se pone de manifiesto el repertorio más poderoso que tienen las organizaciones indígenas y demuestran su fuerza, vigencia e impacto.

Las medidas de hecho se desarrollan tanto en las provincias y parroquias, como en la capital de la república. La provincia de Chimborazo y la zona centro en general jugaron un papel importante en la paralización del país, impidiendo la normal movilidad de productos y personas hacia la región sur, así como también hacia la costa, especialmente hacia Guayaquil. Además de esto, por resolución de Asociación de Cabildos de Cacha, cerca de 10 mil personas se tomaron las antenas de 14 radiodifusoras y de un canal de televisión con el propósito de que los medios difundan a la ciudadanía las acciones realizadas, la represión

sufrida por parte de la fuerza pública y las razones que impulsaban dichas acciones. Este fue un repertorio ya usado anteriormente, en la década de los 90, en uno de los grandes levantamientos los indígenas de Tungurahua principalmente, se tomaron las instalaciones de los medios de comunicación para que sus voces sean difundidas y consideradas como parte de la opinión pública.

El gobierno, por su parte demostró su capacidad de uso de la fuerza para retomar el control y mantener el orden en las carreteras y alrededor de las comunidades. Como resultado de los enfrentamientos hubo varias personas heridas, especialmente manifestantes afectados por mordeduras de perros policías (Kipu 36 2001, 69-80).

En todos los levantamientos de los últimos años, a excepción del de 1990, el lugar tradicional de concentración para los indígenas, ha sido el parque de El Arbolito, ubicado en el centro norte de la capital. Este lugar es un lugar estratégico por la proximidad hacia el palacio Legislativo y otras instancias gubernamentales que se encuentran en la zona, por la relativa cercanía al Palacio de Gobierno y porque la presencia indígena no pasa desapercibida al estar concentrados en un lugar abierto y de alta circulación. En esta ocasión las autoridades impidieron que se instalen en este espacio tradicional. En muestra de solidaridad y respaldo ante la represión policial, el rector de la Universidad Politécnica Salesiana, autorizó su permanencia en ese centro educativo que se ubica a pocas cuadras del parque.

En los días siguientes, la Universidad se constituyó en el lugar de resistencia para los indígenas que contaban con el respaldo de los docentes y estudiantes salesianos, así como también de organizaciones urbanas y de la ciudadanía quiteña. Por su parte el gobierno aumentó la represión como estrategia para que se depongan las medidas de hecho, dejando al menos seis heridos de bala. Además se detuvieron a los principales dirigentes de las organizaciones sociales, Antonio Vargas presidente de la CONAIE, Luis Villacís del Frente Popular y Mario Morales de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). Estas medidas solamente generaron mayor indignación y movilización de las bases; así, en los siguientes días más de 10 mil indígenas agrupados en la CONAIE llegaron a Quito para pedir la liberación de Vargas (Barrera 2001, 106-110).

Para limitar la capacidad de acción de los indígenas que se encontraban en la Universidad Salesiana, el gobierno ordenó suspender el suministro de agua potable del edificio

universitario, así como también la fuerza pública decomisó los camiones de alimentos que abastecían a los manifestantes e impedían la entrega de donaciones de estudiantes y otras personas particulares. Estas medidas empezaron a afectar especialmente a los niños y niñas indígenas que sufrían de enfermedades respiratorias y diarreicas, lo que se complicaba aún más por la falta de medicinas y atención médica.

En un ambiente de conflictividad cada vez mayor, Gustavo Noboa inicia los diálogos con los indígenas y crea una comisión mediadora encabezada por Auki Tituaña, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, e integrada por delegados de la ONU, de organizaciones de derechos humanos y de la iglesia católica. Las organizaciones indígenas presentan una serie de condiciones mínimas para iniciar las conversaciones las mismas que eran: 1) que el diálogo se realice en base a la agenda de las organizaciones, 2) autorizar el ingreso de agua, alimentos y medicinas a la Salesiana, 3) detener la represión policial y militar, 4) participar en el diálogo con funcionarios de alto nivel. 5) autorización para que los indígenas puedan movilizarse libremente, y 6) libertad a todos los detenidos.

Días más tarde se decreta el Estado de Emergencia. Aun bajo ese estado especial, las medidas de hecho y la represión por parte de las autoridades no se detienen. Los dirigentes mantienen los diálogos con el vicepresidente de la República, Pedro Pinto. En medio de la reunión, la CONAIE recibió la noticia de la muerte de tres personas en la provincia de Napo a causa de la represión estatal, por lo que se retira de la mesa de negociaciones.

El miércoles 7 de febrero el gobierno acepta las condiciones de las organizaciones indígenas y sociales y se logra llegar a un acuerdo:

En el Salón de Banquetes de Carondelet en la ciudad de Quito, la CONAIE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FENOCIN), la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) y la CONFEUNASSC, firman un acuerdo con el Gobierno Nacional que establece el congelamiento por un año de los precios de los combustibles, la reducción inmediata de \$ 2 a \$ 1,60 del precio del gas de uso doméstico, la revisión de las tarifas de transporte nacional y provincial, la libertad de todas las personas detenidas durante el levantamiento, indemnización para familiares de fallecidos y

heridos, entre otros puntos. El ministro de Gobierno informa que el estado de emergencia seguirá vigente hasta que se restablezca el orden en el país (Barrera 2001, 109).

Una vez firmado el acuerdo, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, en marcha pacífica recorren varias calles de la ciudad de Quito y abandonan definitivamente la Universidad Salesiana donde permanecieron casi 10 días desde que inició el levantamiento indígena.

La narrativa presentada en este acápite, muestra por un lado, que los mecanismos seguidos por el movimiento indígena y otras organizaciones sociales se repite de procesos anteriores, se parte utilizando los medios establecidos en la ley, es decir, presentando una demanda de inconstitucionalidad a las medidas adoptadas por el régimen. Debido a que las instancias judiciales no procesan o niegan dicha demanda, no por que carezca de validez sino por su proximidad y cercanía a las élites políticas y económicas, las contiendas se tornan transgresivas, desconociendo incluso el Estado de Emergencia que limita el ejercicio de derechos, sobre todo aquellos de reunión y de tránsito, por lo que el cierre de vías y marchas por las ciudades deberían haber desaparecido, sin embargo, debido al malestar existente y a la fuerte cohesión organizativa, las medidas de hecho continúan e incluso aumentan su fuerza.

El levantamiento por el precio del gas, como fue llamado a este episodio de contienda pone de manifiesto, por un lado, que las demandas indígenas son amplias porque no se limitan temas que los afectan de forma exclusiva, pero que también son coyunturales. Si bien es cierto que existe un proyecto político formulado en la década de los 90 que plantea una reivindicación étnica y de clase que transforme las relaciones de la sociedad ecuatoriana, los levantamientos de gran magnitud responden a decisiones gubernamentales, principalmente en materia económica. Los grandes ejes de lucha, como el Estado Plurinacional, no son impulsados en esta contienda.

Los logros alcanzados, sí bien es cierto benefician a la gran mayoría de la población agrupada en las clases populares y medias, no constituye una transformación en el pacto de dominación, por el contrario, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1998, con la que se inauguró el gobierno de Mahuad, el reconocimiento de los derechos colectivos y del estado pluricultural y multiétnico que fueron los grandes avances de este período, no fueron ejercidos, ni se apropiaron de manera adecuada. En esta contienda se hace uso de un acumulado histórico. La sociedad ecuatoriana reconoce al Movimiento Indígena, sobre todo

cuando se moviliza de forma masiva, como un poder social, esta ha sido una de las ganancias y las mínimas transformaciones en el pacto de dominación de la última década, se ha logrado reconocer a los indígenas como autoridades legítimas que ostentan un poder específico ganado en la sociedad.

Nuestra pelea era de poder a poder, nosotros teníamos poder de movilización, poder con el pueblo. Claro el gobierno tenía poder militar, poder económico, poder político, entonces nosotros vimos como fundamental que las negociaciones deben ser de poder a poder. Si es a nivel de presidentes, entre el presidente de la República y nuestro presidente; sí es a nivel de vicepresidentes, entre el vicepresidente de la República y nuestro vicepresidente. En este caso a mí me encomendaron que asuma esa comitiva de mucha responsabilidad, igual asumí y constituimos un equipo de apoyo técnico y tuvimos que acercarnos para dialogar con el vicepresidente de la República.

(...) Una anécdota es que nosotros estábamos sentados entre vicepresidentes, vicepresidente de la República y vicepresidente de la CONAIE, frente a frente, eso también para mí, personalmente, me sirvió para valorar mucho más la fuerza, el poder que tiene el movimiento indígena, que llegamos a ese nivel (Entrevista a Ricardo Ulcuango) (Cucurella 2001, 17-18).

Como se ha dicho anteriormente, el sentimiento de agravio e injusticia producen agencia, sin embargo esto no es suficiente para tener éxito en una acción colectiva. Se ha dicho también que el período de gobierno de Noboa se caracterizó por el cierre de las oportunidades políticas, eso se evidenció en los intentos de movilización que desarrollaron las organizaciones indígenas y sociales en el último trimestre del 2000, cuando no se logró articular a las bases ni incidir en el poder gubernamental para frenar la entrada en vigencia de la Ley Trole o llevar a consulta popular el tema de la dolarización; por el contrario, estas acciones mostraron fisuras al interior de las organizaciones regionales de la CONAIE.

Pero ¿qué fue lo que cambió en este levantamiento? ¿Por qué se abrieron las oportunidades políticas? Ciertamente la apertura se dio por la acción de las organizaciones indígenas, las decisiones políticas y económicas habían generado malestar en la ciudadanía en general y la movilización la iniciaron los estudiantes y trabajadores de la capital de la república pero sin mayores resultados. Cuando la CONAIE, en asamblea extraordinaria decide iniciar una serie de consultas, visitas programadas de las autoridades nacionales a las comunidades y construcción de una propuesta alternativa a las medidas económicas, permitió reactivar y

articular la red de solidaridad, respetos y lealtades con la que se estructura la organización indígena.

Las demandas no solamente estaban centradas en las medidas económicas, se construyó una agenda desde lo local con el fin de que todos los actores de base se sientan parte de esa lucha. Así, recuperando su forma de organización propia basada en la comunidad y la toma de decisiones en consenso y desde las bases se logró que el gobierno revea las medidas económicas y se mantenga el subsidio al gas de uso doméstico, pero sin duda, y como lo reconoce Ricardo Ulcuango, el principal triunfo de este levantamiento fue político y enmarcado en la unidad de las organizaciones indígenas que forman el movimiento.

Fue un triunfo porque tuvimos la unidad, en primer lugar, de todas las organizaciones sin excepción alguna; aquí no se apareció ni la religión, ni los partidos, sino que todos nos unimos por un objetivo común; entonces, eso por un lado, fue un triunfo. Por otro lado, fue un triunfo también porque la sociedad en general nos respaldó; casi el 80% de la población ecuatoriana nos respaldó porque no estuvimos peleando solamente por los indígenas, sino que siempre estábamos defendiendo los intereses de los más pobres, entonces eso fue un siguiente paso. El otro paso es que para nosotros sí fue un triunfo político, yo diría, el hacer sentar al gobierno para revisar las medidas económicas implantadas. Entonces ese es un triunfo político, organizativo, que el movimiento indígena ha logrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin ser partido político el movimiento indígena, con toda esa fuerza que tiene, logra incidir en el quehacer político, económico y social del Estado ecuatoriano (Cucurella 2001, 15).

3. Mecanismos causales que explican la contienda transgresiva

Como se ha podido ver en este capítulo, las organizaciones que forman el movimiento indígena del Ecuador se logran consolidar luego de un largo proceso de concienciación y trabajo desde sus bases comunitarias. En los años setenta y ochenta, cuando muchos indígenas aún estaban sometidos al régimen de hacienda y sus condiciones de sobrevivencia eran precarias, se inició el trabajo de fortalecer el tejido organizativo a través de las relaciones de confianza y familiaridad existentes entre los comuneros, ampliando cada vez su red hasta formar organizaciones provinciales.

El trabajo que se realizaba se centraba en el análisis de las condiciones de vida en las que se encontraban, las limitaciones y deficiencias económicas por las que atravesaban, así como

también la revalorización de su condición étnica frente a una sociedad homogenizante como es la ecuatoriana.

Antes del primer levantamiento de 1990, los indígenas eran vistos por los mestizos como “ciudadanos de segunda” a los que había que civilizar, sin ninguna capacidad más allá del trabajo agropecuario o de la construcción. Esta visión se vio totalmente trastocada al demostrar su capacidad organizativa y de paralización del país. En varias sondeos ciudadanos que se realizaban a propósito de la llegada de los indígenas a las capitales provinciales y principalmente a la ciudad de Quito, muchos pobladores mestizos reconocían su desconocimiento sobre la real situación por la que atravesaban los pueblos, sus valores culturales y su clara visión política de transformación, no solamente para los pueblos y nacionalidades, sino para la población en general, es así que se logra consolidar un importante apoyo de diversos sectores, concretar alianzas y convertirse en el actor social con mayor fortaleza y capacidad de incidencia con el gobierno.

Como lo dice Edgar Tello (2012) el movimiento surge en un contexto favorable y como respuesta a:

- La histórica discriminación social, cultural, económica y política que la sociedad y el Estado han generado durante un largo tiempo.
- Los efectos de la profundización de las situaciones de desigualdad socioeconómica que ocasionaron las políticas de ajuste implementadas bajo la orientación neoliberal y que produjeron cambios significativos en las relaciones económico-sociales a nivel agrario.
- El creciente descontento ante los límites e incapacidad del régimen y del sistema democrático para canalizar los conflictos sociales y generar espacios de participación y representación de la dinámica socio-política emergente (Tello 2012, 61).

A lo largo de una década de contienda, el Movimiento Indígena no solamente logra consolidarse como un movimiento social, sino que logra reformar algunas de las formas de relacionamiento social y legal existentes hasta ese entonces. Si bien es cierto que no se consigue una transformación radical del pacto de dominación, sí se logra introducir elementos importantes que permitan distribuir de mejor manera, tanto los recursos económicos como el poder político entre indígenas y mestizos.

La primera y más grande de esas transformaciones fue el reconocimiento, por parte de la ciudadanía y de los gobernantes, de la existencia de una diversidad cultural y de su capacidad organizativa. Por muchos años cualquier acción colectiva de protesta en contra de las medidas gubernamentales, eran lideradas, convocadas y consolidadas por el movimiento indígena puesto que era el único capaz de condensar las demandas e interpelar al Estado. Además de esto ha logrado conseguir una institucionalidad estatal que le ha permitido mejorar sus condiciones de vida desde una visión cultural propia, es así que se creó la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Salud Intercultural, el PRODEPINE,²³ el CODENPE,²⁴ el reconocimiento y legalización de sus tierras y territorios, la ratificación del Convenio 169 de la OIT que ampara sus demandas en el campo internacional, entre otros. Esto permitió destinar recursos económicos para atender las zonas rurales y mejorar el trabajo agrícola, así como también disminuir el analfabetismo y que más jóvenes indígenas accedan a educación media y superior.

En el campo legal se logró incluir en la Constitución de 1998 los derechos colectivos, que entre otras cosas reconoce su existencia como pueblo, pero que en lo más relevante consta su capacidad para generar derecho y gobierno propio, es decir, el Estado reconoce su autodeterminación y en sus territorios, es posible crear y aplicar leyes independientes a las del resto del territorio ecuatoriano, las mismas que rigen en vigor de sus saberes consuetudinarios.

El poder también fue distribuido, muchas de las instituciones creadas a favor de las organizaciones indígenas fue entregada a los dirigentes nacionales del movimiento, así también lograron alcanzar gobiernos locales, especialmente alcaldías donde la presencia indígena era mayor a la mestiza y varias representaciones parlamentarias y en la Asamblea constituyente que sirvieron para canalizar las demandas en los dos niveles, el de la contienda y en la institucionalidad.

Ya entrado el año 2000, las medidas económicas implementadas por el gobierno avivaron la indignación y generaron el derrocamiento del presidente Mahuad, el ascenso al poder de la mano de los militares impactó profundamente en las estructuras organizativas, el repertorio de la toma del poder nunca antes había sido usada y generó rechazo de algunos sectores sociales.

²³ Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador.

²⁴ Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

Esta acción generó una aparente ruptura e inestabilidad al interior del movimiento indígena, sin embargo, las acciones del año 2001, en contra del precio del gas lograron colocarlos nuevamente en la arena política e iniciar una acción contenciosa contra el gobierno de Noboa, el que trajo consigo el reposicionamiento de este actor colectivo, así como demostrar que su proyecto político es incluyente y abarcador a toda la sociedad ecuatoriana, especialmente a los que comparten una condición de clase similar.

A manera de síntesis, la tabla 6 se resume los episodios de contienda, el contexto de su desarrollo, los repertorios y las demandas impulsadas en cada una de ellas.

Tabla 6. Resumen de la contienda transgresiva

AÑO	CONTEXTO/ EOP	REPERTORIO	ESTRUCTURA	DEMANDAS
1990	Borja – ID	Toma de Santo Domingo/ huelga de hambre	Comunidades articuladas en OSG y provinciales apoyan acciones nacionales	Propiedad de la tierra
	Ajuste económico	Bloqueo de carreteras		Reconocimiento de diversidad étnica
	Falta interlocutores	Enfrentamiento con militares		Educación
	Neoliberalismo	Secuestro de militares		Salud
	Cámara de la producción dividida	Diálogo		Estado Plurinacional
1992	Borja - crisis parlamentaria	Caminata desde la Amazonía	OPIP	Territorios indígenas
	Ajuste neoliberal	Campamento en el Arbolito	CONAIE (Bases)	Plurinacionalidad
				Asamblea Constituyente
1994	Duran Ballén	Huelga / poca participación	CMS	
	Poca legitimidad institucional	Levantamiento	CONFUNASSC	Rechazo a las privatizaciones de los servicios básicos
	Ajuste neoliberal			Ley Agraria
	Guerra del Cenepa	Toma de iglesias	CONAIE (Bases)	Representación parlamentaria de los pueblos indígenas
	Bloqueo de carreteras			
1996	Gobierno de Abdalá Bucaram	Bloqueo de carreteras	CONAIE CONFUNASSC FEINE	Asamblea Constituyente
	Paquete de ajustes económicos (elevación de precios de combustibles y servicios básicos)	Toma de la catedral de Quito		Salida de Bucaram del Poder
	Confrontación con las élites tradicionales	Asambleas Populares		
2000	Gobierno de Mahuad	Movilización sociales	CONAIE FENOCIN FEINE	Derrocamiento presidencial
		Levantamiento indígena		Revisión de las medidas económicas

	Ruptura entre las élites por ley tributaria.			Recuperación de los depósitos bancarios congelados en la banca privada
	Crisis del sistema financiero	Junta de Gobierno de Salvación		
	Feriado bancario			
	Dolarización			
	Alianza con los mandos medios militares	Toma del poder		No pérdida de la soberanía monetaria
2001	Gobierno de Noboa	Levantamiento indígena	CONAIE FENOCIN FEINE	Revisión de las medidas económicas (subsidio al gas)
	Reestructuración de las élites	Uso de la UPS		
	Incremento del precio del gas	Cierres viales		
	Alta represión estatal	Negociación con el gobierno		

Fuente: Información tomada del trabajo investigativo

Como se pudo ver, esta década representa el momento de auge y consolidación de la CONAIE como representante del movimiento indígena a nivel nacional y el canalizador de las demandas de diversos sectores sociales. La posibilidad de consolidarse en el actor interpelador del Estado se dio gracias a factores internos como un proceso enmarcador sólido que logró combinar la identidad étnica con una conciencia de clase. Una estructura de movilización basada en la comunidad indígena que se vio fortalecida desde la promulgación de la Ley de Comunas las de Reforma Agraria que fomentaron la organización en todo el país y la creación de organizaciones con un proyecto político claro. Así como de factores externos como la implementación de un modelo neoliberal que afectaba la economía de las clases más desfavorecidas que generaban procesos de indignación que se tradujeron en agencia para la movilización; disputas entre las élites y aliados en diversos sectores como la iglesia ligada a la teología de la liberación, los intelectuales de izquierda y algunos representantes parlamentarios que canalizaron sus demandas a la consecución de sus demandas.

En los años siguientes, las decisiones políticas y las alianzas electorales traerán consigo impactos en las organizaciones de base que darán paso a una paulatina desmovilización que se ve aumentada por factores externos como el cambio de modelo económico y político. Para seguir con el análisis del ciclo de la protesta de la CONAIE y entender las causas de la de desmovilización, el siguiente capítulo analizará el proceso de transición entre la contienda contenida y la transgresiva que se genera entre los años 2002 y 2006 durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio.

Capítulo 3

El período de transición: Movimiento Indígena y la disputa por el poder

En el capítulo anterior se presentó el momento de auge del movimiento indígena ecuatoriano encabezado por la CONAIE. Siguiendo la lógica del ciclo de la protesta, este capítulo tiene por propósito presentar una fase intermedia, un período de transición entre la movilización y la desmovilización sufrida por los indígenas. Este momento de análisis comprende el periodo 2002-2006. Durante estos años, la forma de relacionamiento entre la organización indígena y el gobierno muestra un radical cambio de la confrontación a la alianza y logran llegar a la presidencia de la República. Para muchos autores, este hecho marca el inicio del proceso de desmovilización (Ospina 2009). Sin duda, este momento marca un hito de la vida del movimiento, pero no se evidencia con total claridad la desmovilización, puesto que aún hay muestras de fortaleza en algunos de los episodios contenciosos en los que participa.

Siguiendo el concepto de ciclo de la protesta (Tarrow 1997) se podría comprender el momento de la difusión de las oportunidades políticas a diversos luchadores, en donde el Estado pasa de enfrentar a un solo gran luchador, la CONAIE en el caso de este análisis, a múltiples reclamadores como son los movimientos de mujeres, jóvenes y sobre todo a una gran cantidad de ciudadanos no organizados que se movilizan frente al descontento que generan el manejo económico y político del gobierno. Esta categoría, aunque importante, resulta insuficiente al momento de analizar este período, sobre todo si se considera, como se ha dicho, los cambios en el escenario político, de confrontación a alianza.

Para poder resolver esta limitante teórica vamos a utilizar la categoría de contienda política (McAdam, Tarrow y Tilly 2004), puesto que constituye una forma generalizable de conflicto social, colocando en el centro de la ecuación al agente estatal que se relaciona de manera compleja con los sectores sociales (Arteaga Pérez y Brachet-Marquez 2011, 24-28).

Este capítulo está organizado en tres momentos. El primero explica la estructura de oportunidades políticas que se ha generado durante este período para determinar la actuación del movimiento indígena. Luego, se presentan los episodios de contienda tanto en el gobierno de Gutiérrez, como en el de Alfredo Palacio. Finalmente se concluye este capítulo con un balance analítico del período. La reconstrucción de cada uno de los eventos de contienda se ha realizado mediante los testimonios de los dirigentes de la CONAIE y de sus organizaciones

provinciales, especialmente de Chimborazo y lo publicado en la prensa a través de las revistas Kipu. Algunos datos son proporcionados por la literatura especializada del movimiento indígena desarrollada hasta ahora.

1. Estructura de Oportunidades políticas en período de transición del ciclo de la protesta

Como se pudo ver en el capítulo anterior, el accionar del movimiento indígena ecuatoriano y de la CONAIE de forma particular, durante la década de los noventa estuvo encaminado a reivindicar su condición étnica y al reconocimiento de los indígenas como parte integrante de la sociedad ecuatoriana bajo el respeto y valoración de sus diferencias culturales; pero sin duda, sus procesos enmarcadores también estaban alineados a una identidad de clase, reconociéndose a sí mismos como una población explotada y empobrecida. Este hecho permitió que, rápidamente, otros actores sociales como los sindicatos de trabajadores públicos y privados, el magisterio, los estudiantes y las organizaciones de mujeres, consideren al movimiento indígena como el colectivo capaz de poner en el debate público y político los temas de sus agendas particulares.

Como se ha dicho, en el período de análisis que comprende este capítulo, las demandas indígenas presentan una importante variación. Uno de los temas que sobresale dentro su agenda política es el de alcanzar el poder estatal. Si bien con la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, MUPP, se inicia una legítima aspiración electoral para viabilizar las reivindicaciones populares desde el ejercicio del poder, en este período logran ser parte del gobierno central, en alianza electoral con el coronel Gutiérrez, que al igual que lo sucedido en el derrocamiento de Jamil Mahuad y la instauración de la Junta de Gobierno de Salvación. Esta experiencia resulta ser traumática y con un alto costo político y organizativo.

Para poder entender la relación que se establece entre el gobierno y el movimiento social, en este período, es necesario incluir en la categoría de contienda política que forma parte del marco analítico propuesto en el capítulo 1 de este trabajo de investigación. Como se dijo en esas páginas, esta categoría permite establecer una relación dinámica entre los reclamantes y los reclamados. La idea de contienda hace referencia a la acción política colectiva que va más allá de las acciones convencionales y no convencionales, con la intención de tejer un puente entre estos dos tipos de actuación social (McAdam, Tarrow y Tilly 2005, XIX).

Como se verá más adelante, los episodios aquí narrados parten de una lucha no contenciosa como son las elecciones presidenciales que son el pretexto para el nacimiento de la contienda política entre indígenas y gobierno. Aquí, pese a que las condiciones estructurales, marcadas por el neoliberalismo no cambian, se transforma la manera de relacionarse con el poder, los primeros momentos de desmovilización de la CONAIE.

Los primeros años del nuevo siglo presentaron una alta conflictividad política, como ya se vio, hubieron importantes momentos de contienda que se expandieron hasta el año 2002²⁵ en el que la atención política se centró en las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en ese año.

El intento por llegar a la presidencia fue un tema ampliamente debatido al interior de las organizaciones a nivel nacional. Antonio Vargas, expresidente²⁶ de la CONAIE había anunciado sus intenciones de ser candidato a finales del 2001 e incluso habría afirmado que lo haría con o sin el apoyo de sus organizaciones, esto generó una fuerte confrontación entre el ECUARUNARI y la CONFENIAE, puesto que la primera creía que no era oportuno que Pachakutik apoye a candidato alguno y menos a Antonio Vargas luego de los cuestionamientos que tuvo su gestión como presidente; por su parte, la filial amazónica consideraba que Vargas era presidenciable y no estaban dispuestos a retirarle el apoyo. Las provincias de la sierra se inclinaban por ir con alianza con un candidato de la centroizquierda o en su defecto apoyar a Auki Tituaña, quien finalmente no aceptó la candidatura. En ese momento se inició una intensa búsqueda del posible candidato.

Habíamos previsto el escenario de lo propio y ahí estaba desde Pachakutik la candidatura de Auki Tituaña, en la CONAIE como estuvo de presidente Antonio Vargas, él quería ser el candidato porque había participado en la caída de Mahuad, estaba el triunvirato; entonces eran los puntos de tensión del momento, y tanto la ECUARUNARI y después la CONAIE

²⁵ Como ejemplo de esta confrontación podemos mencionar el paro biprovincial (Orellana y Sucumbíos) en los meses de febrero y marzo del 2002, que dejó grandes pérdidas humanas y económicas tanto por la represión policial, como por la paralización petrolera. Así mismo se rechazaron las nuevas medidas económicas (se anunció incremento del 15% en el precio de los combustibles y la posible elevación a 5 dólares de la bombona de gas) y el intento de privatización de las empresas eléctricas lo que hizo que en varias ocasiones las organizaciones salgan a las calles y se instalen mesas de diálogo con el gobierno. A demás a finales de año se realizaron intensas movilizaciones en contra del Área de Libre Comercio de la Américas, ALCA, la misma que convocó a intelectuales y políticos de toda la región, quienes se solidarizaron y apoyaron las acciones del Movimiento Indígena ecuatoriano.

²⁶ En el mes de octubre fue electo Leonidas Iza como presidente de la CONAIE con el respaldo de la Amazonía y de Antonio Vargas, frente al candidato impulsado por la ECUARUNARI, Ricardo Ulcuango.

refrendaron en que ni la CONAIE ni ECUARUNARI apoyan a candidatura indígena alguna (...) Fuimos a hablar en ese momento con Alberto Acosta, Alberto Acosta no aceptó. (...) Se intentaron los diálogos con la propia Izquierda Democrática para ver hasta dónde llegan, y el ex presidente Rodrigo Borja, (...) señalaba que, como punto de inicio lo más fácil decíamos para ver si por ahí comenzamos a ver que haya acercamientos de la campaña electoral, no podían ir las dos insignias la 12 y la 18 porque cuando han visto ustedes que haya una propaganda conjunta entre la Finta y la Coca Cola, esa fue la respuesta que nos dijo, y ese escenario también quedó a un lado (Nina Pacari, dirigente indígena, en entrevista con la autora, 2015).

La posibilidad de hacer una alianza con León Roldós también había sido descartada debido a que ese candidato había afirmado que no participaría en la contienda. Sin embargo, Roldós decide lanzar su candidatura a última hora y el Partido Socialista, que hasta ese entonces apoyaba la candidatura de Lucio Gutiérrez, lo deja solo por apoyar a Roldós. En esas circunstancias, Pachakutik decide apoyar a Gutiérrez, mientras que Amauta Jatari, de la línea evangélica, inscribe a Antonio Vargas como su candidato a la presidencia.

Para llegar a la alianza con Gutiérrez ya con su organización, con Sociedad Patriótica, se hizo él intento con todas las fuerzas políticas del centro a la izquierda, estaba: León Roldós, él cura Delgado, la Izquierda Democrática; pero con ninguno pudimos concretar el acuerdo y nos quedó Sociedad Patriótica para llevar adelante la alianza, y esta alianza se hizo con la presencia de la CONAIE, de la ECUARUNARI, de la CONFENIAIE, la máxima dirigencia que, en ese entonces, estábamos (Miguel Llucó, exdirigente de Pachakutik en entrevista con la autora, agosto de 2016).

El 25 de octubre, una vez se había oficializado que la alianza 3-18 había pasado a la segunda vuelta electoral, para enfrentar a el empresario Álvaro Noboa, la CONAIE-Pachakutik firman con Sociedad Patriótica un acuerdo para ratificar la alianza y un plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia. El documento buscaba consolidar un nuevo modelo de desarrollo para el país, definir una política de relaciones exteriores soberana y crear oficinas provinciales de la alianza. Gutiérrez se compromete a buscar una posición unitaria de la región sobre la integración. Buscar a los mejores hombres y mujeres para formar el equipo de gobierno, planificar conjuntamente la campaña electoral y determinar las vocerías (Kipu 40 2002, 233).

Un mes después, Gutiérrez ganó la Presidencia de la República de la mano de Pachakutik, sin embargo, a lo largo de la campaña ya se empezaba a evidenciar un giro en la propuesta de gobierno. Por ejemplo, anunció que priorizaría la inversión extranjera para aumentar la producción petrolera, buscó acercamientos con banqueros y empresarios, decisiones totalmente distanciadas del proyecto político del Movimiento Indígena. Con esas declaraciones, la relación empezó a ser tensa entre los miembros de la alianza, sin embargo se intentó buscar canales de diálogo para superar este impase.

La CONAIE se reunió con sus bases para diseñar un documento de gobernabilidad para seguir las acciones del gobierno de Gutiérrez. Se resolvió que la CONAIE siga siendo una organización social y su participación política dentro del gobierno sea a través de Pachakutik, el documento contenía, entre sus principales puntos los siguientes:

Área política: participar en la toma de decisiones, reconocimiento al derecho al territorio, autonomía política y administrativa. Nueva Asamblea Constituyente. Política de rendición de cuentas.

Área económica: eliminación de inyección de capitales para salvar a los bancos, control de las inversiones del Estado, construcción del presupuesto desde lo local. Cupos en los supermercados para producción campesina. Venta del petróleo a los consumidores finales.

Área social: crear programas de becas para pueblos y nacionalidades y proyecto de alfabetización. Fondo de apoyo a la cultura y espiritualidad indígena, legalización de territorios indígenas. Acceso a frecuencias de radio y televisión (Kipu 40 2002, 323-324).

Parte de los acuerdos alcanzados para asumir el cogobierno entre los militares retirados y los indígenas, fue el asignar de forma equitativa las carteras de Estado, así en las áreas que Sociedad Patriótica colocó Ministros, Pachakutik designó a los subsecretarios y viceversa. A los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura se asignó a Nina Pacari y Luis Macas respectivamente, además formaron parte del Gobierno de Gutiérrez, Lourdes Tibán, Mariano Curicama, Augusto Barrera, Fernando Buendía, Virgilio Hernández, Hugo Jijón, Lourdes Rodríguez, Rosa María Torres y Doris Solís, que militaban en Pachakutik.

En este contexto los dirigentes indígenas asumen el reto de gobernar a un país y el de cumplir con las ofertas de campaña realizadas, así como también de materializar un proyecto político

por el cual se venía luchando por más de diez años. Sin embargo el modelo neoliberal fue más poderoso y generó una contienda política que resquebrajó la estructura de movilización de la CONAIE, así como también obligó a dar un paso al costado y ceder el protagonismo en la área política a otros actores sociales.

Como se dijo, el año 2002 fue un año electoral, pero ese 20 de octubre, no solamente se elegían a los representantes del Ejecutivo, sino que también se determinaba la conformación del Parlamento. Era la primera elección que se realizaba con la modificación a la Constitución que eliminaba a los diputados nacionales y elegía 100 legisladores provinciales. La primera fuerza política continuaba siendo el partido Social Cristiano con 25 escaños, le seguía la Izquierda Democrática con 16, el PRE tenía 15, el Movimiento Pachakutik 11, que sumados a los 6 de Sociedad Patriótica y los 3 del MPD podían hacer contrapeso a la postura de la derecha tradicional impuesta por el PSC.

En teoría, la figura del Gutiérrez significaba un cambio en la forma de ver la política partidista y un rechazo a los partidos políticos tradicionales que habían gobernado al país y que lo habían sumergido en la crisis económica y de legitimidad de sus instituciones en la que se encontraba actualmente, sin embargo, la votación popular para el Legislativo y como se evidenció en las siguientes elecciones seccionales²⁷ continuaba siendo mayoritaria para esos grupos políticos tradicionales, es decir, las oligarquías se mantenían intactas, la caída presidencial de Mahuad no había alterado radicalmente el mapa de reparto electoral. Como se analizará más adelante, la alianza de Pachakutik con Sociedad Patriótica y la supuesta coincidencia en algunos planteamientos con el Movimiento Popular Democrático, se fraccionó y los diputados de gobierno se alinearon a los postulados socialcristianos para formar una nueva mayoría en la legislatura, lo que permitía el impulsar reformas legales alineados a los planteamientos neoliberales.

Por otro lado, la economía del país había empezado a mejorar desde la el año 2002; como se ha dicho, la crisis financiera por la que atravesó el Ecuador desde finales del siglo XX había

²⁷ Las elecciones seccionales se realizaron el 17 de octubre de 2004 y se elegían Prefectos provinciales, Alcaldes, consejeros municipales y miembros de juntas parroquiales, el Partido Social Cristiano obtuvo 4 de las 22 prefecturas y 58 de los 219 municipios, siendo el partido que más dignidades locales logró, el siguiente fue la ID con 4 prefectos y 23 alcaldes, la Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana obtuvo 3 prefectos y 21 alcaldes, Pachakutik 3 prefectos y 19 alcaldes, mientras que Sociedad Patriótica se ubicó noveno en la lista de los partidos más votados a nivel nacional, no obtuvo ningún prefecto pero si 22 alcaldes.

impactado profundamente en las clases medias y populares lo que significó un proceso de migración masivo, principalmente hacia España, Italia y Estados Unidos. En el 2002, las remesas de los migrantes constituyeron un importante impulso a la economía nacional así como también de los precios internacionales de las materias primas que dinamizaron los mercados beneficiando a países como el Ecuador. Sin embargo la política económica impulsada desde Carondelet distó mucho de lo planteado en campaña, las inversiones en el sector social se vieron drásticamente disminuidas para obtener fondos que permitan el pago de la deuda externa y de los nuevos compromisos asumidos con el FMI.

Para cumplir con el pago del servicio de la deuda, el Estado debe generar los excedentes financieros necesarios, a través de la aplicación de las consabidas políticas de ajuste, que incluyen medidas tanto para aumentar los ingresos del presupuesto, en base al incremento de los precios de los bienes y servicios públicos, como para disminuir los gastos, contrayendo la inversión y el gasto público en general. Por las dos vías, se afecta negativamente la situación económica de las familias, por el encarecimiento del costo de vida, la reducción de sus ingresos reales, la reducción de las fuentes de empleo; y, el deterioro de las prestaciones de servicios públicos, resultantes de los recortes presupuestarios (Equipo de Coyuntura CAAP 2003, 5).

La carta de intención del FMI contemplaba que se tomen medidas tales como, el incremento de casi un 40% en los precios de los combustibles y eliminación del subsidio al gas doméstico; la reducción de la masa salarial mediante el congelamiento de las remuneraciones del sector público, eliminación de horas extras, reducción gradual de los empleados públicos, congelamiento de las pensiones jubilares, reducción de créditos a los afiliados del IESS, entre otras (Equipo de Coyuntura CAAP 2003, 5-6).

La inversión en educación pasó de 638 millones de dólares en el 2003, a 464 millones de dólares en 2004 (esto explica por qué la mitad de las escuelas en la Costa ecuatoriana no estaban aptas para iniciar el año lectivo 2005 y por qué cientos de miles de niños no accedían a las aulas). En salud cayó la inversión de 323 a 211 millones de dólares (esto explica el paro médico que cumplió dos meses el día en que se fugó de la presidencia el coronel Gutiérrez, quien no estaba dispuesto a transferir 15 millones de dólares que adeudaba a los galenos para no afectar las cuentas fiscales... pero sí destinó 14 millones de dólares para organizar el concurso de Miss Universo en Ecuador). Y en desarrollo agropecuario bajó de 151 millones a 71 millones de dólares (por eso también el agro se hundió en franca recesión). El monto

transferido para inversiones sociales apenas sumó 746 millones de dólares, menos de la mitad de las remesas de los emigrantes que alcanzaron 1.064 millones de dólares en 2004 (Acosta 2012, 266).

Pero no solo su giro en los planteamientos de campaña y la política económica fueron las causas de que el período presidencial de Gutiérrez se acorte a casi la mitad, al poco tiempo se evidenció su intención de concentrar todos los poderes y su carácter autoritario, implementó una serie de estrategias militares en contra de todo aquel que ejerciera oposición a su gobierno.

De acuerdo a una denuncia a la Fiscalía presentada por varias organizaciones como ALDHU y APDH, durante el gobierno de Gutiérrez se registraron 62 “graves afectaciones a la integridad de los derechos humanos y a la paz social”. Estas afectaciones incluyeron delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, actos de terrorismo y lesiones contra personas, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas de oposición. Mención especial merece la elaboración y difusión de la llamada “lista negra de enemigos del gobierno” (Montúfar 2006, 24).

El autoritarismo iba más allá que los enfrentamientos puntuales con sus disidentes, en realidad estaba encaminado a un control total de los poderes estatales.

Juntando fuerzas con el PRE y con el PRIAN -y obteniendo el “cambio de camisetas” de un grupo de diputados-, convirtió su minoría parlamentaria en mayoría y pasó a la ofensiva a partir del 8 de diciembre. Primero, haciendo uso de una sui generis lectura de la Constitución, defenestró a los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia (que tenía una mayoría del PSC y la ID) y nombró otros provenientes de sus filas. En seguida, hizo lo propio con el Tribunal Supremo Electoral y con el Tribunal de Garantías Constitucionales. En enero, finalmente, coronó su esfuerzo obteniendo la presidencia del Congreso. El conflicto expresaba una pugna entre dos grupos de poder, una pugna inter-oligárquica entre un sector que había venido controlando los aparatos de Estado casi desde el inicio del “retorno a la democracia” en 1979 y otro que pugnaba por reemplazarlo, ambos vinculados con poderosos intereses económicos. La izquierda se había dividido, sumándose unos al grupo tradicional (Pachakutik) y otros al grupo emergente (MPD y PS-FA) (Unda 2005, 130-131).

Además, existió un sinnúmero de casos de corrupción que generaron inconformidad e indignación en la ciudadanía que los llevaron a emprender jornadas de protesta intensas. Se ha

escrito mucho alrededor de la Rebelión de los Forajidos,²⁸ como se llamó a la jornada de ocho días de contienda callejera que se vivió en Quito en el mes de abril del 2005 y que dio como resultado la salida del poder del Coronel Gutiérrez. En este apartado, se hará una rápida revisión de esos acontecimientos, puesto que el análisis que aquí se desarrolla, se centrará en los impactos que generó la alianza electoral entre el Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, para la estructura organizativa y el proyecto político del Movimiento Indígena, especialmente de la CONAIE y sus filiales.

2. Episodios de contienda durante la transición en el ciclo de la protesta

Desde el año 2003 hasta el año 2006, cuando se elige a un nuevo mandatario la actividad contenciosa de las organizaciones indígenas es limitada debido a su participación en el gobierno. Siendo parte de un proyecto, no podían oponerse a las acciones gubernamentales, esto generó un malestar entre las bases, muchas de las cuales fueron cooptadas y mantuvieron su apoyo a Gutiérrez. Tras su derrocamiento se logró articular una gran acción en contra del TLC y por la caducidad del contrato con la transnacional Occidental, esa contienda será la última gran manifestación del período neoliberal. A continuación se revisan los episodios de contienda generados en estos tres años de análisis.

2.1. Episodio 1: Los indígenas comparten el poder

El 15 de enero del 2003 asumió la presidencia el coronel retirado, Lucio Gutiérrez. En su discurso de posesión, al igual que en toda su campaña electoral su oferta principal era refundar la Patria, cambiar de rumbo al país, alejarse de las ideologías de izquierda y de derecha que tanto daño había hecho en el pasado. Se planteó transformar la economía, erradicar la corrupción, considerar al Estado “como expresión soberana de una población plurinacional y multiétnica llamado a impulsar activamente el desarrollo a crear las condiciones de justicia, educación, salud y bienestar” (Gutiérrez 2003). Su triunfo se debió, en gran medida al respaldo que le dio la CONAIE y para esta organización era la posibilidad de concretar un proyecto histórico de lucha una vez alcanzado el poder.

²⁸ Alrededor del gobierno de Lucio Gutiérrez y de la revuelta de los forajidos hay una extensa literatura de distintos tipos, periodística, académica e incluso poética y humorística. Se podría revisar los trabajos de: Pablo Andrade, “Democracia liberal e inestabilidad política en Ecuador. Apuntes para una interpretación política”, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Rafael Quintero, *Electores contra partidos*. Quito, ABYA-YALA - ILDIS, 2005; Pablo Celi, “La silla prestada: Fragilidad del presidencialista y descomposición de la política son sujeto social”, Quito, Revista Ciencias Sociales, 23, segundo trimestre 2005; Franklin Ramírez, *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*. Quito. Ediciones Abya-Yala, 2005; Carlos de la Torre, “El Gobierno se cayó en las calles” en *Diario Hoy*, El abril de los forajidos. Quito, Edimpres, mayo de 2005; entre muchos otros.

Sin embargo el escenario fue otro, desde el primer día, incluso desde la campaña para la segunda vuelta electoral ya se habían notado algunas ambigüedades en la postura política de Gutiérrez. Las discrepancias estaban dadas principalmente en el manejo de la política económica, visiblemente neoliberal y la serie de viajes a los Estados Unidos con el fin de solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional, para lo cual era necesario cumplir de forma irrestricta las condiciones de las multilaterales de crédito, condiciones que afectaban a las clases más bajas de la sociedad ecuatoriana y a lo que la CONAIE y Pachakutik se oponían radicalmente.

Un claro ejemplo de esto fueron las declaraciones que realizó el primer mandatario ecuatoriano luego de uno de sus viajes a Estados Unidos en donde se reunió con el Secretario de Estado norteamericano y la Consejera de Seguridad Nacional de ese país. Luego de esta cita, en la que también participó la Canciller Nina Pacari, Gutiérrez afirmó: “quiero convertirme en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos en la lucha por alcanzar la paz, fortalecer la democracia, combatir el narcotráfico y terminar con el terrorismo” (Kipu 41 2003, 176). Estas declaraciones estaban enmarcadas en su estrategia para conseguir respaldos internacionales mediante el apoyo al Plan Colombia y marcaron negativamente la relación entre las organizaciones indígenas y el régimen de Gutiérrez.

Las organizaciones indígenas intentaron dialogar con el Presidente de la República y los delegados de Sociedad Patriótica para que se enmendaran las acciones realizadas y no se ponga en peligro la alianza entre Pachakutik y el partido de gobierno, los pedidos estaban encaminados principalmente a rever su política económica y a su relación con Estados Unidos. La postura ideológica y las demandas históricas del Movimiento Indígena siempre han sido contrarias al neoliberalismo impulsado desde la Casa Blanca y en esta ocasión que ellos formaban parte del gobierno, era contradictorio apoyar dichas tesis, por ese motivo, en varias ocasiones los dirigentes indígenas que formaban parte del gobierno tuvieron que dar declaraciones de prensa tratando de minimizar las afirmaciones del primer mandatario.

Los medios de comunicación nacionales e internacionales rápidamente difundieron las discrepancias a interior del gobierno, un ejemplo de ello es el titular publicado por la Agencia de Noticias *Inter Press Service*, él mismo que decía: “ECUADOR: Movimiento indígena se distancia del gobierno” (Lucas 2003).

(...) “Ya comenzó a correr el plazo. Si en 30 días el gobierno no rectifica su forma de actuar le retiraremos el apoyo y actuaremos de otra forma”, aseguró el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien no descartó un futuro levantamiento indígena (Lucas 2003 <http://www.ips.org/institutional/>).

Aun cuando este tipo de anuncios se empezaron a dar desde el mes de febrero de 2003, la decisión de separarse del gobierno tardó algún tiempo en materializarse. En el mes de abril, la ECUARUNARI realiza el Congreso para elegir una nueva directiva, la presidencia es entregada a Humberto Cholango en reemplazo de Estuardo Remache y como parte de las resoluciones de dicho congreso se decide mantener independencia del gobierno por considerar que el primer mandatario ha incumplido con lo ofrecido en campaña. A partir de ese entonces la CONAIE inicia una serie de consultas y análisis con sus bases para definir la postura del Movimiento frente al gobierno de Gutiérrez; Pachakutik se mantuvo a la espera de una decisión definitiva de todas las organizaciones.

2.1.1. Se alinean o se van del Gobierno... y se fueron

Nosotros toda la vida hemos luchado por el no pago de la deuda, contra el FMI, y, de repente, Lucio —que forma su gobierno con representaciones y ministros indígenas, ministros del Pachakutik— firma una carta de intención con el FMI, donde se dice que se aumentarán los precios de las tarifas del transporte, el precio de la gasolina y se promovería la privatización y todo eso. Eso nos dejó a todos nosotros desconcertados, mirando que hacer. No sabíamos si levantarnos contra nosotros mismos, porque éramos nosotros mismos los que estábamos en el gobierno (Harnecker 2010, 9).

La dirigencia indígena se encontraba en un gran dilema, como bien lo señala Blanca Chancoso, renunciar a su lucha histórica por permanecer en el poder o revelarse contra el poder del cual formaban parte. Desde las organizaciones sociales, eran varias las voces que se sumaban al pedido de abandonar la alianza y retornar a la contienda desde la sociedad civil.

Por su parte, Sociedad Patriótica, tanto desde el ejecutivo como desde el legislativo continuaban tomando medidas contrarias a los planteamientos de los sectores sociales. Contrarios a la alianza electoral, en el Congreso el PSP impedía que se designe la segunda vicepresidencia y sus votos estaban alineados con los del Partido Social Cristiano. Por otra parte el Presidente de la República creó una oficina de asuntos indígenas, desde esta instancia

y sin consulta con las organizaciones de base, realizaba visitas a las comunidades indígenas, especialmente de la sierra centro, para repartir computadoras, picos y palas y fundas de arroz. En varias ocasiones visitó la provincia de Chimborazo, sin el conocimiento y la coordinación del MICH, estas acciones de corte populista molestaban seriamente a los dirigentes locales y nacionales puesto que consideraban que este tipo de acciones pretendían “romper” a las organizaciones de base al no respetar la estructura interna del Movimiento Indígena.

La última visita del presidente Gutiérrez a Chimborazo reactivó las críticas de los dirigentes de Pachakutik. El coordinador provincial, Patricio Miranda, calificó como “populista” el comportamiento del Mandatario en las comunidades indígenas de Cintaguzo, Tsalarón y Majipamba (Colta).

(...) “El Presidente quiere solucionar los problemas agrícolas con picos y el hambre de la gente con unas cuantas libras de arroz. Este tema se analiza cada semana en las bases del movimiento”, indicó Miranda. No obstante, explicó que los encuentros en las tres comunidades fueron organizadas por militantes del PRE y del MPD y no descartó la posibilidad de que “se intente formar otro grupo político” (Kipu 41 2003, 343).

El carácter autoritario del presidente Gutiérrez era cada vez más notorio; el primer mandatario afirmaba que ningún miembro de su gobierno podría contradecir ninguna de sus decisiones, puesto que él era el presidente y él debía tomar todas las decisiones, por ese motivo fue removida de su cargo Rosa María Torres, ministra de educación y cuota política de Pachakutik, pues había dado unas declaraciones de prensa en las que mostraba sus discrepancias con alguna decisión del Ejecutivo. Esta fue la primera disidencia de la alianza PSP-MUPP.

Todos estos hechos aumentan las críticas hacia la CONAIE por parte de los otros sectores sociales y se sienten los malestares internos. Para intentar llegar a una posición consensuada sobre su permanencia o no dentro del gobierno, la CONAIE se declaró en asamblea permanente y vigilante a las acciones del gobierno. Para contrarrestar cualquier impacto político que pudiera generar la decisión de la organización indígena, Sociedad Patriótica negó que tuviera un acuerdo político firmado con Pachakutik o alguna organización indígena.

Posteriormente Mario Canessa también deja el gobierno, el funcionario había servido de puente entre los indígenas y el primer mandatario para tratar de mantener la alianza, con él

fuera, las cosas se tensionan aún más. Para demostrar que tiene una base social indígena, Gutiérrez se reúne en Quito con representantes de las nacionalidades de la Amazonía con el propósito de analizar los derechos colectivos y que se autorice la explotación petrolera en sus territorios. Los representantes de la provincia de Napo no asiste por estar opuestos a cualquier tipo de actividad extractiva.

Finalmente la primera semana de agosto se anuncia la ruptura de la alianza y la salida del gobierno de los indígenas y partidarios de Pachakutik que ocupaban cargos en este. Además se solicitó la expulsión de cuatro legisladores la lista 18 por no haberse presentado en el pleno del Congreso y poner en peligro la mayoría para negar la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. La aprobación de esta ley estaba auspiciada por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica.

Por su parte en Chimborazo se realiza una asamblea provincial para analizar el rompimiento, en la cita estuvieron presentes Miguel Lluco, Virgilio Hernández, Estuardo Remache y Mariano Curicama, acompañados por 500 indígenas quienes felicitaron la actitud de la dirigencia al separarse del gobierno, además pidieron sancionar a los diputados que apoyaron al gobierno y a los socialcristianos en la votación de la antes mencionada ley (Kipu 42, 2003, 172). La sanción debía estar enmarcada en las tradiciones culturales de los indígenas de la sierra, es decir mediante el baño de agua fría y ortiga.

2.1.2. El ciclón fractura la casa

Cuando pasa un huracán, arrasa, ¿no es cierto?; al momento quedan unos medios de pie; pero otros fueron arrasados. Y cuando arrasa tratamos de recomponer. Así es lo que nos ha pasado con el movimiento indígena: lo de Gutiérrez fue como si pasara un ciclón. Algunos nos hemos quedado tambaleantes queriendo recuperarnos, otros se fueron con la corriente (Harnecker 2010, 9).

La alianza política y la “traición” de Gutiérrez dejaron sus huellas. El Gobierno necesitaba contar con la base indígena, más aún cuando se aproximaban las elecciones seccionales del año 2004. En ese sentido, tanto Pachakutik como Sociedad Patriótica delinearon estrategias que permitan condensar la votación indígena que en las elecciones anteriores había sido conjunta.

Las organizaciones indígenas y Pachakutik recurrieron a repertorios ya conocidos, reunieron a sus organizaciones locales y provinciales en asambleas para analizar la situación del país, poniendo énfasis en las medidas económicas y el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se pretendía firmar. También se analizaron las razones de la salida de los indígenas del gobierno, circunstancia que se dio por el giro a la derecha del Partido Sociedad Patriótica que contradecía los planteamientos del proyecto político de la CONAIE y que es una lucha histórica de los pueblos. Para hacer frente a estas acciones, las organizaciones iniciaron jornadas de movilización en las principales ciudades del país, con el fin de mostrar su inconformidad con las decisiones gubernamentales.

Por su parte, el Gobierno de Lucio Gutiérrez encaminó su aparato político al debilitamiento y ruptura de las bases indígenas, para eso intensificó su visita y reparto de “donaciones” a las poblaciones indígenas, especialmente a las comunidades de la zona centro, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi; y en la Amazonía.

Las comunidades de Guantopolo, Quiloa, Mana, Maca Grande, Toacazo, entre otras, prometieron no apoyar el levantamiento indígena, ante las dádivas ofrecidas por el presidente Lucio Gutiérrez.

Ayer, el mandatario junto a varios ministros, visitaron la comunidad de Tigua Cahami (Cotopaxi) donde se hizo ofrecimientos a estos sectores (Kipu 43 2004, 14).

La disputa por el control de las zonas indígenas se ve incrementado, en varios lugares en los que la CONAIE tiene poder de convocatoria, la presencia del primer mandatario es rechazada por completo, sin embargo se empiezan a notar un importante proceso de fraccionamiento en las comunidades puesto que Gutiérrez aún mantiene una gran popularidad en varios sectores rurales.

El 01 de febrero de ese año, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, es víctima de un atentado en la puerta de esa organización. Personas no identificadas realizan varios disparos a Iza y sus acompañantes, uno de sus hijos resulta gravemente herido y debe ser internado en una casa de salud, también son impactados por las balas su hermano y sobrino. Este hecho, del cual fue responsabilizado el gobierno de Gutiérrez, fue uno de los detonantes de una fuerte movilización y protesta en Cotopaxi principalmente, de donde es oriundo Iza, que repercutió en otras zonas del país.

En Azuay por los enfrentamientos con la policía muere María Lalbai de 63 años debido a un impacto de bala. Las acciones se suspenden luego que un comité negociador integrado por el prefecto de Cotopaxi, Lourdes Tibán y otros dirigentes lleguen a acuerdos con el gobierno respecto al financiamiento de obras de vialidad y riego para la provincia de Cotopaxi.

Los medios de comunicación que recogieron estas noticias hicieron hincapié en la poca convocatoria y presencia indígena en la mayoría de provincias. Así por ejemplo el diario El Comercio publicaba el 25 de febrero una noticia con el titular “La división indígena se vuelve más evidente”, la misma que intenta recoger las causas por las cuales no tuvo éxito la convocatoria realizada por la CONAIE en Chimborazo. Al respecto dice:

Los dirigentes del Movimiento Indígena del Chimborazo (MICH) se niegan a admitir que su organización no tiene la convocatoria de antes.

La semana pasada, la participación de las comunas en movilizaciones convocadas por la Conaie fue una muestra de que algo no está bien en esta provincia.

En años anteriores el MICH se convirtió en uno de los puntales del movimiento ya que contribuía a la paralización de la Sierra centro con el cierre de carreteras y manifestaciones.

Pero la situación del 16 fue distinta: las vías estuvieron despejadas y en la marcha que recorrió Riobamba apenas participaron unas 200 personas.

Para un dirigente evangélico, quien pide el anonimato, la falta de convocatoria obedece a la división que hay entre indígenas evangélicos y católicos “En nuestro movimiento la prioridad es hacer que nuestra gente progrese. Dicen que somos aliados del Gobierno pero no es cierto. La dirigencia del MICH no toma en cuenta a las bases para sus decisiones”. (...)

Pero el director de la escuela de formación de líderes y miembro de MICH, Gerardo Chacón, dice que las movilizaciones del 16 solo fueron una estrategia. “Las acciones serán progresivas” (Kipu 43 2004, 177).

Debido a que la FEINE, Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, era una de las organizaciones que apoyaba la gestión de Lucio Gutiérrez, la división existente entre católicos y evangélicos se agudizaba en algunos sectores, el gobierno utilizaba esta separación para conseguir mayor base social a través de la entrega de obras en las zonas que le mostraban su respaldo y evadía la estructura orgánica de las organizaciones, visitaba directamente a las comunidades, muchas veces sin el conocimiento de las autoridades u organizaciones de segundo grado o provinciales.

La vista del presidente Lucio Gutiérrez ratificó que el interés de su Gobierno es consolidar su relación con los indígenas. Ayer, en la comunidad evangélica San Rafael Alto (Colta) entregó 50000 dólares para la construcción del sistema de agua potable 2 de Septiembre y ofreció empedrar una vía de la localidad.

Además, el Mandatario y funcionarios del Banco Nacional de Fomento entregaron créditos productivos y enumeró las asignaciones que desde el año pasado se entregan a varias comunas de Chimborazo. En el listado, Gutiérrez dijo que había asignado 6950 dólares para un congreso de líderes, 18500 para la instalación de un molino, una quesera y un criadero de porcinos; 3400 para un grupo de mujeres (Kipu 43 2004, 211).

En vista de las acciones emprendidas por el gobierno, las organizaciones sociales empiezan a buscar alianzas que les permita acortar el período de gobierno de Gutiérrez. Se realizan varias reuniones y asambleas con otras organizaciones sociales e indígenas principalmente con la FENOCIN quien se comprometieron a trabajar conjuntamente con la CONAIE para pedir la renuncia del primer mandatario. Estas alianzas también apuntan a sumar votos para las elecciones seccionales.

Así Pachakutik inició una serie de congresos y el ECUARUNARI convocó a levantamientos. En Chimborazo por ejemplo, alrededor de 500 indígenas se tomaron simbólicamente el monumento a Maldonado para reclamar por sus derechos y rechazar al Gobierno de Gutiérrez, además realizaron un congreso popular para analizar sus problemas locales en los campos político, social y cultural, así como también la realidad del país. Ese congreso en el que no solo participan indígenas, intentó fortalecer a Riobamba y sus distintas parroquias, fomentar la democracia participativa y eliminar la corrupción (Kipu 43 2004, 321).

A finales del mes de mayo e inicios de junio se reunió en Quito la Organización de Estados Americanos, los indígenas aprovecharon el hecho para reclamar por las políticas implementadas por el gobierno y los tratados de libre comercio. Mientras se realizaban los preparativos para dicho levantamiento, el Presidente de la República designa a Antonio Vargas como Ministro de Bienestar Social, hecho que causó molestias en la dirigencia y fragmentó aún más a las bases, especialmente a las amazónicas. Mientras unos niegan la representatividad de Vargas, otros se reúnen con el recién nombrado Ministro y Lucio Gutiérrez en el Palacio de Gobierno para demostrar la base social de ese dirigente indígena.

En Chimborazo los rasgos de esa división se van haciendo más evidentes, muchos de los comuneros afirmaron que no respaldarán la convocatoria realizada por la CONAIE, mientras los dirigentes tratan de volver a cohesionar sus organizaciones. Se recorren las comunidades buscando apoyo, los dirigentes centraron sus acciones en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Morona Santiago para lograr apoyo. Este trabajo dio como resultado que una delegación de Tungurahua, vaya a Quito para apoyar el paro, y que Chimborazo cierre algunas vías. Sin embargo estos logros no dejan de preocupar a la dirigencia por la débil movilización que se ha generado pese a tantos esfuerzos de convocatoria.

La división del movimiento indígena de Chimborazo es evidente. Mientras la dirigencia de la provincia se prepara para las movilizaciones, miembros de las bases dijeron a HOY que no plegarán al llamado de la Conaie.

Pedro Janeta, presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo (Mich), quien el pasado jueves se reunió con dirigentes de los trabajadores y comerciantes para coordinar acciones, señaló que algunos sectores evangélicos causan división, “están confundidos, sobre todo con la posesión de Antonio Vargas”. (...)

El Mich, según Janeta, no tiene como prioridad la salida de Gutiérrez, pues aspira a que cumpla con lo ofrecido en campaña “Nosotros luchamos mientras la gente común y corriente simplemente está cruzada de brazos” (...)

Mariano Curicama, dirigente nacional de Pachakutik, reconoció que hay división al interior de las organizaciones de Guamote. “La gente que apoya a Gutiérrez está ciega o posiblemente los dirigentes recibieron alguna cosa” (...)

En Guamote, la división es profunda pues el Parlamento Indígena de ese cantón decidió participar en la posesión de Vargas (Kipu 43 2004, 387).

Pese a que se lograron cerrar algunas vías importantes en todo el país y se contó con la presencia de indígenas de varias localidades en Quito, el levantamiento no tuvo el impacto esperado, muchos fueron los cuestionamientos a los dirigentes nacionales y locales, se dijo que, pese a los trabajos de socialización con las bases, la mayoría de personas de las comunidades desconocen lo que es el TLC y las posibles afectaciones, la decisión de movilización no ha respondido a la lógica indígena de ser dada desde las necesidades reales de la gente, es por eso la falta de respuesta.

Para los dirigentes del MICH esta debilidad se debe, principalmente a que los dirigentes de la CONAIE se han alejado de las bases y no saben cómo llegar a estos sectores ni cómo explicarles con claridad las implicaciones que tienen las privatizaciones, el ALCA y los tratados de libre comercio, así también pidieron que le Congreso de la CONAIE se empiece a planificar para poder renovar la directiva (Kipu 43 2004, 431).

En el mes de diciembre se cambió la directiva de la CONAIE y fue electo como presidente de la organización el líder histórico Luis Macas con la consigna de unificar a la organización y realizar un trabajo más articulado con las bases.

2.1.3. La Revuelta Forajida

El 2005 inicia complicado para las organizaciones indígenas agrupadas en la CONAIE, la división es profunda sobre todo en la Amazonía donde la CONFENIAE cuenta con dos presidentes y por lo tanto las organizaciones también están divididas, unas apoyan al gobierno y otras respaldan la postura de la CONAIE. Luis Macas, en su discurso de posesión a la presidencia de esa agrupación nacional, hizo un llamado a todas las filiales para trabajar por la unidad y resolver sus problemas internos antes de pensar en movilizaciones en contra del régimen.

El país, pero especialmente Quito, vivía intensas jornadas de movilizaciones y protesta impulsadas por sectores ciudadanos, principalmente por la poca legitimidad con la que contaba la Corte Nacional de Justicia luego de que fueran destituidos 27 magistrados, en diciembre de 2004 y nombrados otros afines a Sociedad Patriótica.

Pese a la negativa inicial de la CONAIE de no apoyar estas acciones, se empezaron a generar acciones de apoyo a la población movilizada en contra del Gobierno. A mediados de febrero se había convocado una gran movilización nacional. Por su parte, el primer mandatario organizaba una “contramarcha” para minimizar las acciones de los grupos opositores a su gestión, es decir, movilizaba a ciudadanos de diversas partes del país para respaldar su gestión, el gobierno financiaba dichas movilizaciones. Muchos de los participantes de estas marchas gubernamentales eran parte de las organizaciones indígenas ya fragmentadas.

El apoyo del movimiento indígena evangélico de la Sierra centro a la contramarcha del Gobierno está dividido. En Chimborazo, los evangélicos de Amauta Nuñay informaron que estarán en Quito para apoyar al Presidente.

Los militares de PSP también convocaron a la “gran marcha”. Se ofrecerán buses.

En tanto, dirigentes indígenas y partidos políticos, como la ID, se movilizarán en Riobamba en contra del Gobierno (Kipu 45 2005, 89).

Constantemente la respuesta del régimen a las acciones indígenas y ciudadanas era realizar contra marchas para lo cual trasladaba a Quito a partidarios de Sociedad Patriótica, principalmente provenientes de zonas rurales de Los Ríos y de Guayas.

En el mes de abril la inconformidad social ya era insostenible para el gobierno, sí bien el Movimiento Indígena no tuvo una participación principal en estas acciones, un gran número de sus integrantes se había sumado a las acciones de la ciudadanía quiteña que intentaban sacar del poder a Lucio Gutiérrez. Incluso Pachakutik había impulsado, en el Congreso Nacional, una resolución en la que se declare al presidente incapaz de gobernar y que por lo tanto se declare el abandono del cargo. El 20 de abril de 2005 fue derrocado del poder el Coronel Lucio Gutiérrez.

A diferencia de los levantamientos indígenas, de las huelgas de los trabajadores y de transportistas que se habían vivido en el pasado, esta era una manifestación de la sociedad civil, que no contaba con una estructura organizativa sólida que promoviera la movilización, eran acciones auto convocadas que se iban gestando al calor de las acciones y en las calles, se usaron los medios de comunicación, como Radio La Luna y los mensajes de texto, para organizar las jornadas de protesta, que además se desarrollaban hacia el final de la tarde y durante la noche, no se pretendía paralizar el país, sino cambiarlo por completo. Lo que había comenzado con el pedido de rectificación en la política de Gutiérrez, con el paso del tiempo se transformó en un pedido por que se cambie todo, porque se refunde el país, para que se “vayan todos”.

La caída del gutierrato ha sido analizada e interpretada desde múltiples aristas, como ya se ha mencionado. Por ejemplo Catalina Pazmiño plantea que la principal causa de la destitución del primer mandatario fue dada por un proceso sistemático de pérdida de credibilidad y legitimidad debido a sus constantes contradicciones y rectificaciones de su accionar político,

la falta de experiencia y de un proyecto político definido le hicieron cometer errores tales como las alianzas legislativas para nombrar a la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, además de las denuncias de corrupción, nepotismo y “piponazgo” que aumentaron el descontento por la gestión de Gutiérrez que claramente se alejaba de sus planteamientos de campaña, en los cuales ofrecía, principalmente, ser una alternativa a la clase política partidista que poseía una imagen absolutamente deteriorada en el país (Pazmiño 2005).

Para Mario Unda, por su parte, considera que la crisis se desarrolló desde dos aristas, la una tenía que ver con una crisis inter-burguesa, que se solucionó con un nuevo reparto del poder una vez defenestrado el presidente de la República, en la que volvieron a recuperar el control los partidos tradicionales como son los socialcristianos y la Izquierda Democrática que representan a ciertas clases empresariales y financieras tanto de la costa como de la sierra; la otra arista era una crisis del sistema político, que fue expresada en las calles por los ciudadanos que tenía una composición absolutamente heterogénea, sí bien en su mayoría eran miembros de la clase media y alta de Quito, también se encontraban sectores populares que no formaban parte de una estructura previa de movilización, ni organizativa ni partidista lo que le daba un sentido diferente a la contienda. Estas demandas no fueron solucionadas con la transición al gobierno de Palacio (Unda 2005).

Sin duda, la revuelta forajida tuvo muchos elementos que llamaron la atención de los analistas sociales, la innovación de repertorios, la carente estructura de movilización, la autoconvocatoria e incluso las demandas eran diversas, no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a cuáles fueron los procesos enmarcadores que detonaron la jornada de movilización, algunos dicen que fue por la alta politización de la sociedad y la necesidad de contar con un sistema democrático que realmente los represente, otros que en el fondo se escondía una alta dosis de racismo y regionalismo que no podía permitir que alguien como Gutiérrez, carente de estética política los represente, entre muchas otras interpretaciones. Pero para el movimiento indígena, que tuvo una marginal participación en la caída presidencial ¿qué significó? ¿qué impactos tuvo?

Para Blanca Chancoso, la decisión de una alianza electoral con Gutiérrez trajo consigo más perjuicios que beneficios, a esta parte de la historia del país en general y del movimiento indígena de forma particular, ella lo llama “el ciclón político” porque fue arrasando con la

estructura, con el proyecto. Como en un fenómeno atmosférico de esta naturaleza, la destrucción es grande, pero no total, siempre queda algo de donde volver a construir.

Y claro, creo que eso nos da una lección a mirar internamente también, porque sí hubo una alianza, pero ¿quién tuvo el poder realmente, quien controlaba, que seguimiento se dio? Queda todavía esas incógnitas, una búsqueda de respuestas a eso. Porque sí ya estando en esa alianza, supuestamente en el poder, por qué no se hizo cosas que se debía hacer y quedó ahí y claro por otro lado, desde nuestra mirada como Movimiento Indígena, cuando se da el rompimiento con Gutiérrez, se da el rompimiento porque hay desacuerdos políticos de no estar de acuerdo con esas políticas de estado que empieza a aplicar Gutiérrez (Blanca Chancoso, vicepresidenta de la ECUARUNARI, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Pero esta lectura no es compartida por toda la línea histórica del Movimiento, Nina Pacari, por ejemplo no lo considera como un error, fue una decisión que se la tomó en vista de las circunstancias en las que se encontraba el país y las organizaciones, que fue pensada y analizada y esa fue la única alternativa que poseían en ese momento.

Yo creo que es limitado decir aquello porque los problemas que han tenido del movimiento indígena para decir a ver la debilidad del movimiento indígena o algo, no es solamente la alianza con Lucio Gutiérrez, o la alianza con cualquiera otro, por así decirlo, porque decir aquello sería no dimensionar todo el contexto, y yo creo que hay elementos de fondo que están de por medio por ejemplo el modelo económico que tiene que ver con la repercusión en las nuevas generaciones, también mirar como tenemos todavía los rezagos del clientelismo de las décadas pasadas anteriores a los ochenta, entonces; sí no consideramos toda esa situación lo más absurdo lo que se presenta para nosotros es *no, están mal desde que participan en política* que es otra de las cosas. Bueno sí se participa en proceso electoral, ¿qué querrá, que no se participe?, ¿cómo se considera un Estado Plurinacional entonces?, ¿será con indígenas que solo estén para la agricultura, solo para los trabajos manuales?, ¿de qué estamos hablando?; ¿que tienen que hacer las ciencias sociales desde esa reflexión?, ¿quiere afirmar esta misma hegemonía de conceptos que, yo diría, también tienen su dosis de racismo? Entonces claro, lo malo es la alianza, y han hecho la alianza con Lucio Gutiérrez, eso es. Y por qué no se analiza cuáles fueron las circunstancias en ese momento para tomar la decisión; por eso el trabajo hermenéutico que hay que hacer, porque sí no se analiza en el contexto, linda cosa es analizar con las realidades de ahora para analizar lo que pasó hace diez años y decir, en base a eso, es la responsabilidad, la debilidad o la culpa y no es así; porque se vienen acarreado debilidades por esa relación que existe en puntos de tensión entre los estados y los gobiernos en su

respectivo momento y porque van cambiando también, por ejemplo, con las reformas normativas, constitucionales sobre todo, respecto de las dinámicas de los pueblos también (Nina Pacari, dirigente indígena, entrevista con la autora, abril de 2015).

Así mismo, para el dirigente de Pachakutik y hombre cercano al gobierno de Gutiérrez, el hecho de haber realizado una alianza electoral no fue el problema, esa era la mejor alternativa para el movimiento indígena en ese momento, puesto que era la oportunidad histórica de materializar un proyecto político de lucha que se impulsaba desde hace ya varios años de forma abierta, pero que constituía una forma de vida y de pensamiento milenario, el problema radicó en la falta de claridad política de Sociedad Patriótica que rápidamente traicionó a los acuerdos alcanzados con los indígenas.

Por la traición al proyecto político de Gutiérrez, ese es el definitivo, la alianza no era; porque fue así en ese momento, porque había un desgaste tenaz de todos los gobiernos que iniciaron 1979, los gobiernos democráticos y llegábamos al 2000, habían pasado diez años, y no había ninguna esperanza de la que el pueblo aspiraba. Por eso estaba cansado el pueblo y por eso confió, confió en la propuesta de Pachakutik y con el candidato Gutiérrez y por eso ganamos y Gutiérrez lo que hizo es traicionar a esa decisión que tomó el pueblo ecuatoriano (Miguel Lluco, dirigente indígena, entrevista con la autora, junio de 2016).

Pero en el imaginario indígena, al menos de un sector, la tesis de que el derrocamiento de Gutiérrez se debió a una fuerte dosis de racismo, se mantiene.

Cuando se da el rompimiento con Gutiérrez, se da el rompimiento porque hay desacuerdos políticos de no estar de acuerdo con esas políticas de estado que empieza a aplicar Gutiérrez. Eso es nuestro desacuerdo y nuestro rompimiento, pero por ejemplo el otro sector que también se moviliza contra Gutiérrez más que contra la política que hace Gutiérrez es más bien por esa situación subjetiva que se tiene de racismo. Por qué este indio nos tiene que gobernar, por la cercanía, por esa alianza, entonces de pesar que eran los indios los que estaban a través de Gutiérrez. Entonces quedó con esa factura, de que como que los indios somos incapaces, de que no estamos en condiciones de gobernar, a parte de esa subjetividad del racismo de pensar que son los indios. Yo miro eso y eso claro para el movimiento indígena, yo siempre digo, fue un ciclón político que sufrió el movimiento indígena. (Blanca Chancoso, vicepresidenta de la ECUARUNARI, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Estas afirmaciones de haber sido ciertas, demuestra, el mantenimiento de una estructura social racista, que no reconoce a los indígenas como sujetos iguales ni en lo social ni en lo político y que su papel está principalmente para ser la fuerza de choque cuando de reclamar por las medidas económicas y sociales interpuesta por los gobernantes se trata. Varios análisis se han encargado de minimizar esta percepción, al menos en el campo académico. Pese a estos intentos por leer los hechos de abril del 2005 desde otras entradas, distintas al racismo, el hecho de que para un sector del Movimiento Indígena, esta siga siendo la principal causa es un hecho sintomático de que la exclusión no ha logrado ser superada, la integración armónica a la vida social ecuatoriana por parte de los pueblos y las nacionalidades sigue siendo un tema que no se ha logrado saldar y que se debe seguir trabajando para superar procesos discriminatorios de toda índole.

Tomando en cuenta los testimonios de los actores y los trabajos realizados sobre el impacto del gutierrato en la estructura de movilización indígena, se podría afirmar que su estrategia de división de las comunidades indígenas, especialmente de la zona centro de la sierra y de la región amazónica, se basaron en dos elementos importantes, la primera, de generar una mínima presencia estatal en zonas históricamente abandonadas por los gobiernos locales y nacionales, que desde una práctica populista y clientelar, entregaron recursos y pequeñas obras para lograr convencer a las poblaciones rurales de que un cambio era posible, lo que generó ciertas simpatías por parte de los sectores populares, a esto se sumó la desvinculación de la dirigencia nacional y regional de las organizaciones indígenas con sus bases que no supieron orientar e informar adecuadamente sobre los alcances y las repercusiones de ciertos actos emprendidos por el gobierno, este “descuido”, se dio justamente, porque también se encontraban en un proceso de recomposición interna.

El otro factor y posiblemente el más importante para lograr fraccionar a las bases indígenas fue la cooptación de dirigentes a los cuales se les entregó la libertad de gestionar el poder y los recursos de la forma en la que creyeran convenientes, esta apertura generó que se intercambien puestos de trabajo, obras, proyectos, etc. a cambio de respaldos personales fragmentando la estructura del consenso y los acuerdos colectivos.

La política de división de Gutiérrez fue más exitosa que la de Correa precisamente por esto, porque manejaba, porque les permitía hacer ciertas cosas a nivel local que favorecía los arreglos locales, los arreglos familiares medio clientelares, que esos dirigentes y esos grupos

locales podían tener (Pablo Ospina, docente de la UASB-E, entrevista con la autora, mayo de 2015).

Sin embargo y como se verá en el siguiente capítulo, los resquebrajamientos que dejó el ciclón político se harán cada vez mayores. Pero antes de analizar la década de Correa, que se considera un período de un importante decline en la acción contenciosa, es necesario revisar el última gran movilización social y anti neoliberal que se da en este periodo que es la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el pedido de expulsión de la transnacional OXY.

2.2.Episodio 2: El gobierno de Palacio y la última movilización contra el neoliberalismo

La revuelta de los forajidos finalizó con la transición democrática. Alfredo Palacio asumió la presidencia y realizó su juramento en el Auditorios de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina) ante un grupo de 62 legisladores que encabezado por la socialcristiana Cynthia Viteri, habían declarado el abandono del cargo por parte de Lucio Gutiérrez y tomaban juramento de su sucesor. Sin embargo la ciudadanía, especialmente la quiteña, no se encontraba contenta con la salida del presidente de la República y continuaban con su pedido de “que se vayan todos”. Las marchas pacíficas que se habían iniciado una semana antes, se iban tornando cada vez más violentas y los manifestantes estaban dispuestos a “eliminar” a todos los políticos y refundar un nuevo país.²⁹ Poco a poco el país retornó a la calma y los poderes políticos y económicos se volvieron a alinear.

Al igual que el gobierno de transición de Gustavo Noboa, Alfredo Palacio tenía la tarea de mantener cierta estabilidad política y económica hasta que se realicen las nuevas elecciones presidenciales. Palacio, en su discurso de posesión ofreció, nuevamente, refundar el país, instaurar una asamblea constituyente y emprender un gobierno más democrático, sin embargo las políticas emprendidas y la relación con los movimientos sociales, no fueron muy diferentes a los que se habían vivido en los últimos años y gobiernos anteriores.

²⁹ Para un análisis más detallado de los hechos de CIESPAL se puede revisar el trabajo de Edison Hurtado, “*Lo que pasó en Ciespal*” *Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia*, en Iconos 23, septiembre 2005, Flacso-Ecuador.

Los primeros meses de gobierno Palacio se mostró abierto y afin a las demandas indígenas, le permitió a la CONAIE recuperar el control y la administración de las organizaciones que Gutiérrez había entregado a sus aliados como el CODEMPE y los sistemas de Educación Bilingüe y el de Salud Intercultural, entre otros acuerdos. Sin embargo, algunos meses después las relaciones se vuelven nuevamente tensas, los indígenas exigen a Palacio que revea los contratos petroleros, puesto que, con el incremento de los precios internacionales, las empresas transnacionales obtenían una ganancia del 200% de lo pactado en los contratos. Rafael Correa, Ministro de Economía de ese período promovió la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, Feirep, que destinaba un importante porcentaje de los ingresos petroleros para el pago de la deuda externa del país, esta era una de las exigencias de las multilaterales de crédito que promovían las políticas neoliberales.

A poco más de 100 días de labores, el Ministro Correa renunció a su cargo por discrepancias con Palacio e inició su carrera por alcanzar la presidencia de la República, conformar un movimiento político y buscar alianzas electorales. Por su parte, las organizaciones sociales mostraron su descontento con el primer mandatario por la salida del ministro de economía e iniciaron jornadas de protesta, por su parte el movimiento político de la CONAIE, también marcó distancia con el régimen.

Pachakutik quiere desmarcarse de la imagen gobiernista que proyectó en los primeros días de gestión del presidente Alfredo Palacio. Ayer en rueda de prensa, declaró su oposición frontal al Gobierno, por “burlarse del pueblo”.

“Las iniciativas políticas y económicas del Régimen son erróneas y no obedecen a las demandas ciudadanas”. Por eso, expresó su rechazo a la consulta popular del Gobierno.

Gilberto Talahua, coordinador de Pachakutik, dijo que esa es superficial, pues no recoge temas como el TLC con los EE.UU.... También recordó que Palacio, cuando asumió el poder, el 20 de abril ofreció que el TLC se incluiría en la consulta y convocaría a una asamblea nacional (Kipu 46 2005, 99).

En los meses siguientes tanto la ECUARUNARI como la CONAIE, se sumarán a las voces de oposición al gobierno y para el mes de octubre llamarán a una manifestación frente al edificio de la legislatura ya que los diputados se oponían a tramitar el pedido de una Asamblea Constituyente. Sus demandas también estaban encaminadas a suspender las negociaciones del

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que se continuaba negociando, pese a la oposición de los sectores sociales.

2.2.1. Acciones contra el TLC y Oxy

El año 2006, además de ser un año electoral, fue un año de lucha contra las grandes empresas transnacionales y en contra del Tratado de Libre Comercio. La bandera anti imperialista era ahora la que cobijaba a los indígenas agrupados en la CONAIE-ECUARUNARI y sería también una de los intentos por cohesionar nuevamente a las organizaciones.

Las 32 organizaciones del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH) decidieron cerrar hoy las carreteras para exigir que el Gobierno no firme el Tratado de Libre Comercio y que la empresa petrolera Oxy salga del país.

Esta movilización tiene el apoyo del prefecto Mariano Curicama. Él informó ayer que meses atrás envió un comunicado al presidente Alfredo Palacio explicándole que la firma del TLC no beneficiará al sector campesino e indígena, especialmente.

El presidente del Movimiento, Delfín Tenesaca, dijo que el bloqueo de vías se acordó el mes pasado. “Los indígenas planteamos al Gobierno una consulta popular sobre el TLC, pero esta no hubo”. (...)

El Comandante de la Brigada Galápagos, Luis Garzón, dijo que sí la Policía no habilita las carreteras, el Ejército intervendrá (Kipu 47 2006, 145).

Acciones como esta se repetían en al menos 8 provincias del país. Los repertorios utilizados por los indígenas eran los mismos empleados en otros levantamientos, bloqueo de carreteras que genera el desabastecimiento de los mercados de las grandes ciudades, toma de iglesias y edificios públicos, además de las marchas en las capitales provinciales. Por su parte Alfredo Palacio, calificaba de “inalcanzables” a las demandas de las organizaciones indígenas y que detrás de estas movilizaciones se esconde un “plan malévolo de demolición de las instituciones democráticas”, esto debido a que según el mandatario la dirigencia indígena está al tanto de las negociaciones del TLC.

En la provincia de Chimborazo nuevamente se vuelve a sentir la división indígena causada por las preferencias religiosas y de pertenencia organizativa. Mientras las bases afines al ECUARUNARI, y pertenecientes al MICH continúan con el bloque de carreteras, los indígenas evangélicos, liderados por Marco Murillo y agrupados en la FEINE, aseguran que las reivindicaciones impulsadas por el primer grupo no son estructurales, que lo que se

necesita es la salida de poder del presidente Palacio para instalar una Asamblea de plenos poderes. Delfín Tenesaca asegura que ese pedido lo que busca es regresar a la presidencia a Lucio Gutiérrez (Kipu 47 2006, 166-167).

Los empresarios de todo el país se encuentran molestos por las pérdidas ocasionadas a causa de las paralizaciones, muchos de ellos se reúnen con las autoridades locales para buscar alternativas a las medidas de hecho. Las Cámaras de la Producción de Chimborazo, por ejemplo, buscaron que Mariano Curicama, prefecto de esa provincia negocie con los indígenas para que depongan el paro, pese a haber aceptado, finalmente el prefecto no llegó a ningún acuerdo con los dirigentes.

Debido a la intensidad de las medidas de hecho en la provincia de Chimborazo se decretó el Estado de Emergencia en esa y en cuatro provincias más, pese a esto los indígenas del MICH continuaron sus acciones y frecuentemente se reunían con la dirigencia nacional para evaluar las acciones. Se tomaban medidas de seguridad como hablar solo en kichwa y reunirse en lugares alejados de Riobamba para evitar ser apresados. Se mantiene la decisión de no negociar con el régimen y se planifica la Asamblea de la CONAIE para definir si se realiza o no un levantamiento indígena en contra del TLC.

Casi 15 días luego de iniciadas las paralizaciones y tras haber suspendido las mesas de negociación con los Estados Unidos, los indígenas repliegan su acción pero anuncian que se movilizarán nuevamente en caso de que se restablezca la intención de firmar el TLC, además queda pendiente resolver la salida de la empresa Oxy del país, a quien ya se le había notificado de la caducidad de su contrato, pero la empresa había interpuesto una demanda internacional, para que dicha suspensión quedara sin efecto.

Una vez alcanzados estos triunfos y sobretodo haber recuperado en parte la capacidad de movilización social, las organizaciones indígenas que se agrupan en la CONAIE, junto con Pachakutik iniciaron nuevamente el análisis y conformación de candidaturas para el nuevo período electoral. Este tema será analizado en el siguiente capítulo.

3. Tres años, dos gobiernos, un ciclón: mecanismos causales de explicación

En este capítulo se analizó el período de gobierno de Lucio Gutiérrez y el gobierno de transición luego de su derrocamiento. La lucha social durante casi 16 años ha estado

cantarada en combatir el neoliberalismo, modelo que impulsa unas transformaciones en el modo de acumulación del capital y un nuevo orden económico lo que genera que se pase, de un ciclo de conflictividad a uno distinto de protesta social. El modelo neoliberal que se impone en América Latina, con su respectivo ajuste estructural, se basa en la no distribución de la riqueza, es decir, para que el modelo neoliberal sea exitoso requiere profundizar la inequidad social.

Ahora bien, el conflicto social tiene una base profundamente democrática puesto que sus reivindicaciones están enmarcadas en la búsqueda de una mayor equidad social, así el Estado orienta su accionar y sus instituciones en una mejor redistribución de la riqueza. Aun cuando la conflictividad pareciera que se sale de control, las instituciones democráticas logran canalizar de alguna manera las demandas sociales ya sea vía programas sociales o a través del sistema de partidos mediante la representación parlamentaria de cada uno de los demandantes.

En este nuevo ciclo político de la economía y bajo el nuevo modelo de desarrollo capitalista, se establece un régimen de constante y creciente exclusión social, al impedir o reducir a mayor o menor escala la participación social. Las reivindicaciones y demandas de mayor participación, que habían dado lugar a los movimientos y conflictos sociales, y sobre las cuales se había "ordenado" el conflicto democrático, se desgastan y comienzan a declinar, para ir siendo progresivamente sustituidas por las protestas contra los gobiernos y políticas neoliberales, contra el nuevo orden económico mundial y más directamente contra el despojo que supone la creciente exclusión social (Sánchez Parga 2005, 55).

Todo esto implica un proceso de deslegitimación democrática y poca credibilidad en el sistema político, en ese sentido, los movimientos sociales van abandonando cada vez más sus demandas reivindicativas, para emprender reclamos sobre las formas de administración económica y política que emprenden los gobiernos y en contra del Estado. Las demandas programáticas no desaparecen por completo, pero sí pasan a un segundo plano de la acción del movimiento. Además, al ser una lucha en contra del sistema económico que afecta la distribución y la participación en la generación de riqueza, las clases medias, que simbolizan el equilibrio social, se ven cada vez más afectadas por lo que forman parte activa en el nuevo ciclo de la protesta (Sánchez Parga 2005).

Esto nos permite explicar, primero, la gran cantidad de movilización social que se vive durante este período hasta aquí analizado (tanto en el capítulo anterior como en este), segundo el tipo de demandas que son impulsadas por los movimientos sociales; en el caso del movimiento indígena, se deja de lado su proyecto político que en la década de los 90 promovía una reestructuración social amplia, para centrarse en el rechazo al modelo neoliberal, la oposición a los gobierno y unas acciones mucho más coyunturales que se activan conforme los mandatarios van tomando ciertas decisiones. Y tercero, explica la conformación poblacional de las movilizaciones de los últimos años, especialmente de la revuelta de los forajidos, puesto que ésta estaba conformada principalmente por la clase media quiteña y su proceso enmarcador era un rechazo a todo el sistema político, a toda la institucionalización gubernamental que excluía a la mayor parte de la sociedad ecuatoriana.

El ciclo de la protesta no sólo hace declinar los movimientos sociales, sino que altera la misma sociología del conflicto. Mientras que los conflictos sociales basados en intereses y demandas diversificados de acuerdo a las diferencias propias de cada grupo social, la protesta tiene el efecto contrario de unificar las distintas clases, grupos y sectores sociales, compartiendo todas ellas los mismos rechazos, y convergiendo de manera más o menos amplia en comunes impugnaciones y enfrentamiento contra el gobierno, sus políticas y programas. La protesta adopta una forma de confrontación y enfrentamiento nueva, con una específica politicidad, la cual ni es ejercida desde los espacios e instituciones políticos (partidos, Congreso), sino desde la misma sociedad civil. Lo que supone una alteración del mismo sistema político de la democracia, donde los diferentes ámbitos o instituciones (sociedad civil, sociedad política, régimen político, Estado y gobierno) operan de manera autónoma a través de sus recíprocas mediaciones (Sánchez Parga 2005, 61).

En lo que tiene que ver con sus repertorios, el más significativo y que mayores réditos les genera, sigue siendo el levantamiento indígena, siempre y cuando éste esté planificado y ejecutado siguiendo los canales regulares de toma de decisiones, es decir, desde el consenso entre las bases y la dirigencia nacional. Por lo narrado a lo largo de este capítulo, resulta evidente que la forma ancestral de llegar a acuerdos sigue vigente y su respeto marca el éxito de la jornada de protesta. Otros repertorios como la toma de instituciones públicas e iglesias han ido quedando en desuso y se han ido incorporando otras formas de presión política provenientes de sectores urbanos, las marchas y plantones.

El Movimiento Indígena se constituyó en un actor político válido, desde la década del 90 a través de su fuerza movilizadora y organizativa que tiene la posibilidad de poner a dialogar a los representantes del Estado mediante su acción contenciosa, pero también por medio de su participación electoral que le permitió ser parte de los gobiernos locales en varias ocasiones y de forma muy corta y sin mayor capacidad de acción en el gobierno nacional. La relación Movimiento Indígena-Estado, ha sido de diálogo y oposición. Sus mecanismos de presión han estado enmarcados en la institucionalidad mediante la presentación de demandas de inconstitucionalidad, entrega de propuestas alternativas a las decisiones gubernamentales, proyectos de ley y participación activa en el legislativo, para pasar a la acción contenciosa transgresiva de ruptura del orden social y violación del estado de emergencia, bloqueo de carreteras y paralización de pozos petroleros; para pasar a una fase final de negociación y diálogo.

Aunque el movimiento indígena ha desarrollado relaciones con diversos actores de la sociedad, sin duda el más importante ha sido el Estado (en sus diferentes instancias nacionales, regionales y locales), con quien mantiene una relación simultánea de diálogo y oposición, tanto para negociar las reivindicaciones y propuestas de programas orientados a superar la marginación y discriminación de los pueblos indígenas, como para acordar el nombramiento de ciertos funcionarios que hacen parte del Ejecutivo, los gobiernos locales y el Legislativo (Tello 2012, 96).

En cuanto al reparto de los recursos y el poder, durante este período, pese a las luchas sociales y políticas emprendidas por el movimiento indígena, no existe una real transformación en el Pacto de Dominación, por el contrario se podría afirmar que el capital político y social que poseen las organizaciones indígenas y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik fueron absorbidos por el gutierrato para llegar a la presidencia y mediante acuerdos con las oligarquías representadas por los socialcristianos y el PRE, se aumentó la exclusión política de este sector, lo que impactó, a su vez, en la estructura organizativa del movimiento, puesto que se logró cooptar a cierta dirigencia y algunas organizaciones de base a través de la mínima presencia gubernamental en los territorios y acciones de tipo clientelar. En la tabla siguiente se pueden ver, en síntesis, los episodios de contienda analizados en este período.

Tabla 7. Resumen de los episodios de contienda del período de transición

Año	Contexto/ EOP	Repertorio	Estructura	Demanda
2005	Alianza electoral entre MUPP-PSP que los lleva a la presidencia.	- Innovación en el uso de repertorios.	Sociedad auto convocada (forajidos)	Que se vayan todos: reestructuración del modelo democrático
	Implementación de un modelo neoliberal apegado a los pedidos de las multilaterales de crédito	-Marchas nocturnas pacíficas y creativas que imponen un ambiente festivo al reclamo.	En menor medida organizaciones de mujeres, barriales y de jóvenes	Cambio del modelo económico
	Incompatibilidad de los proyectos políticos de la CONAIE y del gobierno de Gutiérrez		Casi ninguna participación indígena desde sus bases estructuradas.	Trasformación del sistema político
	Ruptura de la alianza electoral			
	Cooptación de dirigentes y fractura de la estructura organizativa de la CONAIE			
2006	Gobierno de Alfredo Palacio	Los tradicionales utilizados por los indígenas: bloqueo de carreteras que genera el desabastecimiento de los mercados de las grandes ciudades, toma de iglesias y edificios públicos, además de las marchas en las capitales provinciales	CONAIE ECUARUNARI Sindicatos Organizaciones de estudiantes	Suspender la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos
Intentos de instauración del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos				
Resistencia Latinoamericana a la implementación de los TLC y al neoliberalismo				
Lucha antiimperialista en la región.				

Fuente: Información tomada del trabajo investigativo

Estas acciones generaron, como ya se ha dicho, algunos procesos de fragmentación al interior del movimiento y de las organizaciones que forman parte de la CONAIE, en este contexto y con estas debilidades se tendrá que hacer frente a la llegada de un nuevo período de gobierno que cambia por completo las reglas del juego e impacta fuertemente en la capacidad contenciosa del movimiento indígena. Siguiendo la lógica del ciclo de la protesta, en los próximos capítulos se analizan las causas y los efectos de la aplicación de este modelo de un modelo postneoliberal que profundiza la desmovilización social y provoca el paso a una contienda contenida.

Capítulo 4

El contexto de la Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana cambia la forma de relacionamiento entre el gobierno y los diversos movimientos sociales. Como se ha dicho, este trabajo de investigación busca determinar las causas que generaron la desmovilización social, especialmente de la CONAIE, a través de la reconstrucción de su ciclo de la protesta para tener una mirada procesual. En los capítulos anteriores hemos analizado dos momentos importantes de este ciclo, el auge en el capítulo 2 y el momento de la difusión de las oportunidades políticas en el capítulo 3. El propósito de este capítulo es mostrar el contexto de surgimiento del Gobierno de Rafael Correa y caracterizar este modelo de gobierno para posteriormente, en el capítulo siguiente, revisar la contienda contenida que se desarrolla entre las organizaciones indígenas y el régimen.

Este capítulo está estructurado en tres partes, la primera analiza el contexto de surgimiento del gobierno de Rafael Correa, el segundo realiza una caracterización de su modelo de gobierno y el tercer momento muestra los impactos de las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno en la población indígena del país. Estos elementos nos permitirán entender de mejor manera los episodios de contienda desarrollados por el movimiento indígena durante la última década. Los datos empíricos aquí presentados corresponden a trabajos previamente realizados por diversos autores así como datos estadísticos obtenidos de fuentes oficiales como el INEC y el Sistema Nacional de Información.

1. El surgimiento de la Revolución Ciudadana

Desde la década de los 80 hasta el año 2006, el Ecuador vivió la implementación del neoliberalismo, lo que generó una serie de conflictos tanto sociales, políticos, así como económicos. Por ejemplo, en lo político, el Estado vivió un proceso de debilitamiento de sus instituciones, puesto que la modernización estatal implicaba la privatización de los servicios públicos y de los sectores estratégicos; la reducción del tamaño del Estado que limitaba su capacidad de regular la economía, así como también se limitaba su capacidad para viabilizar el ejercicio de los derechos de ciudadanos.

El impulso de estas medidas fue dada por los organismos multilaterales de crédito, los ejecutores eran los representantes de los partidos político, quienes en campaña electoral

ofertaban un cambio de modelo mientras que en el poder seguían al pie de la letra las recetas neoliberales. Esto generó un deterioro del sistema de partidos y una apatía política por parte de los ciudadanos. Así Sánchez Parga (2009) siguiendo a O'Donnell afirma que:

Ya a mediados de los 90 O' Donnell señalaba un cambio radical en la representación política, expresión de un nuevo modelo de "democracia delegativa". Se trataba entonces de conceptualizar una representación política, que en sus presupuestos y procedimientos de derecho público se transformaba en un (sic) modelo de representación característico del derecho privado, haciendo que los representantes políticos, actuaran como simples abogados de intereses particulares; que lejos de responder al bien común y al interés público y colectivo de toda la sociedad, aparecieran más bien sujetos a una suerte de contractualidad de servicios privados; sujetos a sus representados, ante los cuales deberían rendir cuentas (Sanchez Parga 2011, 80).

En este escenario surgen actores colectivos que plantearon reivindicaciones específicas para su sector, pero también cuestionaron el sistema de representación política, la estructura estatal y el modelo económico neoliberal, tal es el caso del movimiento de mujeres, de las organizaciones juveniles y especialmente del movimiento indígena encabezado por la CONAIE, como se ha demostrado anteriormente. Estas impugnaciones se vieron concretados en la presentación de varias propuestas de reforma que fueron canalizadas por vías institucionales, pero también hicieron uso de repertorios de acción colectiva con los que demostraron su fortaleza organizativa impidiendo así la implementación de varias medidas antipopulares e incluso al derrocamiento de tres presidentes de la República: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en el año 2000 y Lucio Gutiérrez en el 2005.

La situación socioeconómica del país, durante el período neoliberal (a excepción de la recuperación económica del gobierno de Gutiérrez por factores externos a la política implementada) era precaria, siendo la población indígena la más empobrecida y desatendida a nivel nacional. Para el año 1990, la pobreza urbana a nivel nacional bordeaba el 50% de la población y fue presentando una disminución significativa hasta el año 1997 cuando alcanzó el 28% del total nacional, a partir de entonces se inicia un nuevo crecimiento de la pobreza siendo 1999, durante la crisis financiera, el pico más alto alcanzando el 46% (Albornoz 2010, 1-2). Para el Banco Mundial, las estadísticas presentan una pequeña variación, pero la tendencia se mantiene, así:

La tasa nacional de pobreza basada en el consumo era del 45% en 2001, mientras en 1990 era del 40%. Durante el mismo período, el número de personas que viven en la pobreza aumentó de 3,5 a 5,2 millones.

Los aumentos de la pobreza no estaban distribuidos de manera uniforme en todo el territorio nacional. Fueron mayores en las zonas urbanas de la Costa y de la Sierra, donde la tasa de pobreza aumentó en más de 80% entre 1990 y 2001. En cambio, la pobreza se mantuvo constante en las zonas rurales de la Costa y se elevó en 15% en las zonas rurales de la Sierra. En consecuencia, el número de pobres que viven en las zonas urbanas se elevó de 1,1 millones a 3,5 millones, de tal manera que, en 2001, el número de pobres urbanos superó al de los pobres rurales, lo que llevó a una urbanización de hecho de la pobreza. Al mismo tiempo, las tasas de pobreza continuaron siendo las más altas en las zonas rurales, donde viven los más pobres de los pobres (Banco Mundial 2005, 22).

En el año 2003, la población indígena alcanzaba el 45,8% de indigencia en comparación con el 26,6% del promedio nacional. Incluso cuando los porcentajes nacionales llegaron a su punto más bajo (16,9%) en el año 2006, antes de la Revolución Ciudadana, el 36% de los indígenas vivían en indigencia (Acosta y Ponce 2010, 13).

En este contexto de inestabilidad política y vaciamiento del poder, surge la figura de Rafael Correa, quien cuenta con importantes recursos económicos producto de los fondos provenientes de los altos precios internacionales del petróleo, un mayoritario respaldo político; la necesidad y apertura social para iniciar un proceso de cambio y la debilidad de los partidos políticos.

Desde sus intenciones de ser candidato a la presidencia, las relaciones con el movimiento indígena se tornaron tensas, pese a esto, en un primer momento existió una proximidad y coincidencia en cuanto demandas indígenas que fueron asumidas por el discurso correísta. Antes de caracterizar al modelo de gobierno, resulta importante conocer este período de la historia entre el movimiento indígena y el gobierno para poder enmarcar adecuadamente los posteriores episodios de contienda.

1.1. De forajido a candidato a la presidencia

Tras la crisis del sistema político que se exacerbó con el derrocamiento del presidente Gutiérrez y el pedido popular de destituir a los integrantes de los distintos poderes del Estado bajo el lema “que se vayan todos”, surge la figura de Rafael Correa Delgado, primero como

Ministro de Economía de Alfredo Palacio y posteriormente como líder del Movimiento Alianza País. Se trataba de una figura nueva, alejada de los partidos políticos tradicionales y de las viejas prácticas electorales, con una propuesta de campaña que prometía grandes transformaciones sociales, políticas y económicas. Logra generar confianza en un amplio sector de la ciudadanía y de los movimientos sociales por su proximidad hacia varios actores que en algún momento fueron parte de las organizaciones e incluso militaron en Pachakutik.

También tiene un antecedente la presencia de este gobierno. Al salir Palacio, doctor cardiólogo creo que es, él por el mundo académico debió ser muy conocido. Guayaquileño con Rafael Correa, entonces, él le trajo para alguna función dentro de su gobierno, el Alfredo le llevó. Ahí asoma, se le conoce; pero en el mundo estudiantil se dice que era muy bueno, le he oído que fue no sé qué no más, que fue el primer tipo, le he oído decir al presidente. Pero entonces, ahí estuvo un tiempo y luego salió; pero ya se conoció con la gente de Pachakutik, cito nombres: Augusto Barrera, Betty Tola, Virgilio Hernández para decir unos pocos porque era como 400 gentes. Estas gentes conversan sobre el asunto de la realidad del país y conversan del requerimiento de una persona para que sea candidato y pueda llevar adelante una propuesta que estaba de los Pachakutik (Miguel Lluco, dirigente indígena, en entrevista con la autora, agosto 2016).

La conformación de las listas electorales, tanto para el binomio presidencial como para los candidatos a la legislatura. Desde los primeros meses el año los nombres de los posibles candidatos empezaban a sonar, así como también las tentativas de alianzas entre partidos y movimientos que permitan llegar al poder. Muchas de las personalidades que conformaban las listas de candidatos para las distintas dignidades habían participado, de una u otra manera en la Revuelta de los Forajidos o cumplido algún papel en la salida de Gutiérrez de la presidencia.

Para Pachakutik la participación electoral debía ser analizada cuidadosamente. El fracaso de la alianza con Sociedad Patriótica tuvo una repercusión importante en sus bases, muchas de las cuales se encontraban fragmentadas, especialmente en la Amazonía y en la Sierra Centro. Por estas razones Luis Macas, en ese momento presidente de la CONAIE planteó que el Movimiento Pachakutik suspenda su participación por dos años hasta evaluarlo y de ser el caso reconfigurarlo, sin embargo su directiva nacional no consideró oportuna la recomendación de Macas y se empezaron a conformar las listas. Al igual que en las

elecciones anteriores se analizaron varios escenarios, el primero de ellos era ir en alianza con alguien más, pero creían que esta vez los indígenas debían encabezar las listas.

Hay que recordar que en el 2006 fue la movilización contra la firma del Tratado del Libre Comercio y eso reposicionó al movimiento indígena y a la CONAIE, la reposicionó en el escenario político nacional; fue muy importante su movilización, entonces, aparecía como una fuerza actuante y que podía vincularse a la emergencia de Alianza País. Lo que pasa es que, lo que impidió que la CONAIE y Pachakutik hicieran alianza con Correa, no fue que estuviera debilitados ni fue estuvieran divididos, tampoco que estuvieran desacreditados; lo que impidió fue la lectura que hicieron la mayoría de sus dirigentes de las experiencias de participación política del pasado. (...) Todo el tiempo, a lo largo desde 1996 en adelante, estuvieron buscando un dirigente, un líder que los representara políticamente, que los ayudara en la lucha electoral, y claro, lo hicieron primero con Freddy Elhers, después con Lucio Gutiérrez y, en las dos experiencias, tenían una lectura muy negativa de su participación y decidieron no apoyar a un nuevo llegado como era Rafael Correa y por eso no entraron alianza. Porque hubo un debate interno, había una corriente que quería volver a intentarlo y otra corriente que no quería volver a intentarlo y, finalmente, ganó la que planteó la que había que hacer con dirigentes y con gente probada, con dirigentes propios (Pablo Ospina, académico UASB-E, en entrevista con la autora, mayo de 2015).

Rafael Correa, buscó una posibilidad de realizar una alianza electoral con el Movimiento Indígena, a través de su brazo político el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Según afirman los propios dirigentes, hubo varias reuniones para plantear la posibilidad de formular una sola lista para llegar a la presidencia, sin embargo, no se lograron acuerdos porque ninguna de las partes aceptó los condicionamientos del otro.

Rafael Correa sí se fue a algunas reuniones anteriores a ser candidato. Estuvo en el congreso, no recuerdo si fue en el de la CONAIE o en el del Pachakutik, pero la relación no fue transparente, no fue abierta; él fue a visitar y a saludar y nada más. Justo en esa época el movimiento indígena tenía un candidato y era Auki, una propuesta desde acá, desde norte y Auki estuvo con toda su propaganda, tenía sus afiches, su pancarta y todo eso que estaba en este congreso entonces llegó Correa y claro, esto le enfureció a Auki. Se puso de pie, y le saludó en inglés.

Desde ahí empiezan estos forcejeos. Si hubiera sido de una manera abierta ‘bueno tenemos un compañero que viene, no para decir quiero ser candidato sino para ser parte de Pachakutik, del proceso de lucha’, hubiese sido otra cosa. Ahí nos dijeron desde la mesa que le han invitado al

compañero Rafael Correa y que es una persona que (...) puede ser presidente de la República; ahí hicieron enrabiarse más al compañero Auki.

Ahí me acuerdo que se exigió ¿cuál iba a ser el programa de gobierno y cuál es, en realidad, el objetivo de ser candidato?, ¿qué es lo que va a hacer? y tuvimos unas dos reuniones más y Correa fue absolutamente claro cuando se dijo ¿quiénes son los que participan en este proceso? y él dijo: ‘no lo que se tiene que tener listo es el candidato a la presidencia y el de la vicepresidencia, el resto viene por añadidura, la gente votará’. Nos quedamos anonadados, qué movimientos sociales, para nada. Y el programa dijo que en ese momento no se escogería gente para que haga un programa brillante, es una tarea posterior y fue efectivamente como sucedió (Luis Macas, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril 2015).

La actitud de Correa, de querer ser el protagonista principal, fue leída por los dirigentes indígenas como una actitud beligerante y generó desconfianza, principalmente porque consideraban que más allá de un proyecto político colectivo, de un movimiento político, estaba un ego personal que movía la candidatura de Correa.

Al inicio yo diría que no hubo mucha cercanía porque estaba claro su comportamiento cuando se intentaba hacer alianza con Correa, pero cambió el sentido de la alianza en el sentido de que, ese acercamiento y la negativa de Correa a esa alianza en los términos que se proponía ya hubo un alejamiento. (...) Los términos de la alianza eran que acepte la candidatura indígena, que presida, y que él vaya como vicepresidente. (...) Él planteaba que aceptemos la vicepresidencia, que aceptemos el binomio de la vicepresidencia, pero en nosotros ya no era el ego sino las experiencias pasadas, decíamos otra vez entregarnos e ir de segundos, dijimos no, era eso, entonces dijimos no. Ese comportamiento de su ego ya hizo que nos distanciemos de alguna manera, fue el inicio del distanciamiento, después ya los hechos fueron creando desconfianzas (Blanca Chancoso, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Debido a que Rafael Correa no acepta ser candidato a la vicepresidencia y que la CONAIE y especialmente el ECUARUNARI, no apoyan una candidatura de alguien que no sea parte del movimiento indígena y en vista de que Auki Tituaña había declinado su candidatura, se plantea que Luis Macas sea el candidato a la Presidencia de la República por parte de Pachakutik y Rafael Correa junto a Lenin Moreno, participarían con su propio movimiento político.

Durante la campaña electoral muchos de los planteamientos y de las consignas fueron las mismas, el pedido que meses atrás hicieran los indígenas y la ciudadanía del país al presidente Palacio de llamar a una Asamblea Constituyente de plenos poderes era recogida por Correa; la no renovación del convenio sobre la Base de Manta, el no involucramiento en el Plan Colombia y la no firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos eran sus principales planteamientos en temas internacionales. Pagar la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; aumentar el presupuesto para salud y educación eran sus ofrecimientos en el área social, y en lo que tiene que ver con lo tributario planteó reducir el Impuesto al Valor Agregado de 12% al 10% (El Universo 2006, <http://www.eluniverso.com/2006/11/27/0001/8/7665F10B13E34E0A940BF499E5671960.html>). Todos estos planteamientos hacían parte de la agenda de lucha de las organizaciones indígenas desde hace ya varios años.

Finalmente en las elecciones llevadas a cabo el 15 de octubre de 2006, el binomio Correa-Moreno³⁰ pasó a la segunda vuelta para disputar la presidencia con Álvaro Noboa, empresario bananero que ya había competido anteriormente con Gutiérrez y llegado hasta la misma instancia. Muchos de los votos que anteriormente se habían dispersado entre los candidatos de la centroizquierda y muchos de los ciudadanos cansados de los partidos tradicionales decidieron apoyar a Correa para que llegue a la presidencia y empezar a tejer acercamientos para construir un proyecto conjunto. Sin embargo la posibilidad de trabajo coordinado, según comenta Luis Macas, no fue posible construirlo en ningún momento.

Pachakutik decidió votar por Correa y votamos por Correa, yo también voté ahí la primera y última vez que voté por Correa. La gente estaba muy inquieta y sobre todo algunos sectores apurados por construir una propuesta y entregarle a Correa y me pareció bien, pensé, no perdemos nada, hay que acercarse y entregar la propuesta.

Desde ahí empezó a decir no, ustedes no van a decirme aquí traigo la propuesta y esto quiero que haga; yo como Presidente de la República voy a estudiar, voy a compartir con los demás

³⁰ En esas elecciones también se debía renovar el parlamento, sin embargo el movimiento Alianza País decidió no presentar ningún candidato para ocupar esas dignidades, por el contrario, en su campaña electoral se dedicó a desprestigiar, aún más, la imagen del Congreso Nacional, caricaturizándolo, mediante spots televisivos, como si se tratara de un espacio lleno de payasos, se puede revisar la propaganda en <https://www.youtube.com/watch?v=h7q-s48sEJw>. Como resultado de las elecciones legislativas, el PRIAN de Álvaro Novoa se convirtió en la primera fuerza política con 28 de los 100 escaños disponibles, PSP obtuvo 24, el PSC 13 y la ID 11. El PRE y Pachakutik obtuvieron 6 escaños cada uno.

compañeros y vamos a ver si esto es realizable (Luis Macas, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Como se ha dicho, así inicia una época de poca posibilidad de acción contenciosa para los movimientos sociales en general y del Movimiento Indígena de forma particular. La principal arena de contienda en este período está centrado en el campo electoral y en la utilización de otros mecanismos institucionales. Como se analizará más adelante ha habido importantes momentos en la relación Gobierno correísta-Movimiento indígena, muchos de los cuales han sido principalmente de oposición pero casi sin ninguna capacidad movilizadora.

2. Caracterización del gobierno de Rafael Correa

El gobierno de Correa es un gobierno con un proyecto modernizador mucho más claro que ha ido teniendo una evolución, por supuesto, una evolución; pero incluso esa evolución ha ido como mostrando cierta coherencia, una evolución desde la izquierda hacia la derecha, en términos ideológicos y, incluso esa evolución se va viendo como un cambio que sigue una cierta secuencia digamos “ordenada” hacia la derecha.

En ese sentido, tiene un proyecto de Estado, tiene políticas públicas, porque el gutierrezismo no tenía para nada. Entonces este es un gobierno que se puede clasificar como un gobierno desarrollista, estatista y, cada vez menos; pero nacionalista. Esos tres elementos o esos tres adjetivos, esas tres caracterizaciones, tres elementos de caracterización del proyecto político del correísmo se han mantenido a lo largo de todos estos años y se han ido expresando, eso sí, cada vez más hacia un pragmatismo empresarial y que se notó claramente en el cambio de su vicepresidente en el año 2013 (Pablo Ospina, académico UASB-E, en entrevista con la autora, mayo de 2015).

El gobierno de Correa se enmarca en una transformación de la política que se vive en varios países de América Latina, en la que una nueva generación de gobernantes asumió las presidencias en Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador que manejaban un discurso incluyente, transformador y de ruptura con las viejas formas de gobernar. Rafael Correa planteó la posibilidad de realizar una transformación real de todo el modelo político, logró aglutinar demandas dispersas de varios sectores y condensarlos en una sola propuesta política que atacaba a enemigos comunes, la banca privada, los empresarios, la vieja clase política, la prensa, es decir a todo un sector oligárquico distinto del “pueblo” que ha sido el más afectado siempre por las prácticas políticas (Jaramillo, Unda y Michelena 2016)

Pero este modelo poco a poco fue cambiando el rostro y pese a que en su discurso hacía referencia a una ideología de izquierda, cada vez más en sus actos se evidenció una postura conservadora y alineada con el capitalismo. Para definir a estos gobiernos se ha ensayado varias categorías, así por ejemplo se lo ha definido como “un régimen (...) de corte bonapartista/cesarista, que pone por delante la representación personal o el carisma del liderazgo y una fuerte presencia y dirección vertical de corte populista (Jaramillo, Unda y Michelena 2016). Otros autores (Modonesi 2015, Zibechi y Machado 2016) por su parte, denomina los gobiernos de este tipo como “progresismo latinoamericano” y se caracterizan, entre otras cosas por “el fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados; la aplicación de políticas sociales compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades; el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de la economía; y la realización de grandes obras de infraestructura” (Machado y Zibechi 2016, 11).

Así también, otros tantos autores han denominado a los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, entre otros como posneoliberales (Dávalos 2016). Este autor afirma que el gobierno de Correa, que se enmarca en esta categoría se caracteriza por presentar un discurso alejado de los planteamientos del neoliberalismo y de las recomendaciones del FMI para el ajuste estructural, sin embargo en el fondo solo se trata de un cambio de estrategia para favorecer al modelo de acumulación.

Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal. Estos gobiernos cambiaron el sentido de las políticas públicas hacia políticas más inclusivas y con mayor sensibilidad social, preocupándose por la inversión social y la lucha contra la pobreza. En un inicio, algunos de estos gobiernos latinoamericanos incluso acudieron a la ideología del socialismo para legitimarse (Dávalos 2016, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=212580>).

Como parte de su estrategia de posicionamiento político-electoral, establecieron como necesidad primordial la recuperación y restauración del Estado, que había sido minimizado en el neoliberalismo. Nuevamente, las instituciones gubernamentales tenían la potestad de controlar la economía y promover una mejor distribución de los recursos, que en el caso

ecuatoriano, coincidió además con una bonanza económica gracias a los altos precios internacionales del petróleo.³¹

Así un Estado fuerte empezó a generar políticas redistributivas que fortaleció su imagen política, pero además era necesario generar un disciplinamiento de la sociedad, por lo que se recurrió a la judicialización de cualquier tipo de oposición para garantizar una nueva etapa en el modelo capitalista. Esta transformación en el modo de producción se basa en la profundización de la relación centro-periferia global por lo tanto es necesario que economías como la ecuatoriana se reprimaricen y recurran a la explotación de sus recursos naturales como la minería, la producción agroindustrial y se comercialicen servicios ambientales y biológicos, para lo cual es necesario una acumulación por despojo, siendo los pueblos indígenas los mayormente afectados.

Son estas dinámicas de la acumulación del capital las que están constantemente produciendo una división internacional del trabajo, en la que países como el Ecuador se especializan en la producción de bienes sin valor agregado y vinculados al mercado mundial (commodities), en una profundización del extractivismo y la reprimarización de la economía, al tiempo que toda su estructura jurídica converge hacia los formatos jurídicos establecidos desde la Organización Mundial del Comercio (OMC), los derechos de propiedad y la seguridad jurídica para los inversionistas. Se trata de un formato que desterritorializa al Estado y pone en subasta su soberanía política. Estos procesos son característicos, precisamente, del posneoliberalismo (Dávalos 2016, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=212580>).

El modelo postneoliberalista no significa una ruptura con el neoliberalismo, sino una actualización del mismo modelo y una refuncionalización de las demandas sociales para poder mantener el modelo capitalista. En ese sentido, el discurso revolucionario y de izquierda expresado por el gobierno nacional se ha ido transformando y ha ido mostrando su rostro real. Ninguno de sus planteamientos económicos, sociales o políticos está enmarcado en una ideología de izquierda y mucho menos socialista.

³¹ Los ingresos petroleros con los que contó el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron los más altos en comparación con los gobiernos anteriores. Así por ejemplo el total de ingresos nominales de petróleo en el gobierno de Jamil Mahuad fue de 1702,8; en el de Gustavo Noboa 5485,4; en el de Lucio Gutiérrez 6346,8, en el de Alfredo Palacio 8084,7 y en el de Rafael Correa en el periodo 2007-2010 recibió 18836,4 (Acosta y Ponce 2010, 8).

El gobierno que estamos analizando ha impulsado una reforma capitalista, que según el propio Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea el cambio del eje de acumulación a través de la implementación de una estrategia de desarrollo que permita ir de un modelo extractivo, primario exportador, a uno de producción y exportación de bienes y servicios especializados. Esta estrategia requiere que en un primer momento la economía se sustente en la dependencia de la explotación petrolera y tentativamente de la minería a gran escala. Esta reforma además, requiera que el Estado asuma un papel protagónico, pues es éste es el que maneja la economía a través de la inversión pública, los incentivos tributarios y el crédito público (SENPLADES 2009, 91-98).

Este cambio de modelo ha tenido repercusiones tanto en el ámbito político como en el económico y social, a continuación revisaremos rápidamente cada uno de estos aspectos como elemento fundamental para entender los impactos en los movimientos sociales y su desmovilización.

2.1. Aspecto político

Como se ha dicho, el período neoliberal generó un desmantelamiento del Estado que disminuyó por completo su capacidad reguladora. El principal enfoque en el campo político impulsado desde la Revolución Ciudadana ha sido la recuperación de la institucionalidad desde cuatro aspectos. Primero ha recuperado su rol en la regulación de la economía; el segundo aspecto se ha enfocado en la planificación estatal, cuyo rol es central y genera que todos los niveles de gobierno e instituciones apunten a un proyecto nacional. Tercero ha generado una amplia reforma normativa especialmente desde el cambio de la Constitución en 2008; y finalmente ha promovido un nuevo modelo institucional. Todas estas reformas han apuntado principalmente al fortalecimiento de preeminente de la función ejecutiva y de forma particular de la presidencia de la República, el resto de institucionalidad estatal han mantenido su debilidad.

En esta reconfiguración, la participación social se ha visto altamente afectada. La Constitución de 2008 prevé una serie de mecanismos de participación tanto de sujetos individuales como de actores colectivos, sin embargo todos estos canales han sido reducidos a las vías institucionalizadas y los movimientos sociales han visto limitada su accionar por lo que no pueden ser parte de la toma de decisiones. El modelo de participación social impuesta por el proyecto de Alianza País ha estado centrada en el ciudadano como sujeto individual

dejando de lado todas las expresiones colectivas especialmente de los pueblos y nacionalidades cuya fortaleza radica en la articulación de sus bases. Adicionalmente, la Revolución Ciudadana ha reforzado la idea de democracia representativa frente a la democracia participativa.

Mario Unda (2009) afirma que este cambio de modelo político implica un desplazamiento de la razón del mercado a la razón de Estado y muy particularmente a la razón del gobierno, así:

(...) si antes, bajo el reinado neoliberal, se pretendía que la sociedad sea resumida, subsumida y diluida en el mercado, ahora, bajo el paradigma neo desarrollista, se pretende que la sociedad sea resumida, subsumida y diluida en el Estado -y en el gobierno, único representante y garante del bien común (Comité de Seguimiento del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana 2009, 6).

Lo dicho se visualiza en declaraciones vertidas por el Presidente de la República en varias ocasiones, pero sobre todo durante el informe a la nación de 2010:

Por elemental responsabilidad no puedo creer en novelorías tales como (...) la pretensión de que la democracia participativa es tratar de contentar a todo el mundo, y, peor aún, que ésta es excluyente de la democracia representativa, cuando en realidad la complementa.

Algunas veces pienso que para algunos el fin en sí mismo es debatir por debatir, para satisfacer sus egos y que todos los reconozcan como insignes demócratas. Yo prefiero recordar cada día que no tenemos un segundo que perder, y que todas esas discusiones absurdas, estériles, superadas por la evidencia y por la historia, lo único que hacen es hacernos malgastar tiempo (Correa 2010, 36-37).

2.2. Aspecto económico

En el campo económico es necesario visualizar, como ya se ha dicho, el nuevo eje de acumulación capitalista que se enfoca en la mercantilización e industrialización de la biodiversidad, lo cual responde a un modelo global. El PNBV 2009-2013 en la parte correspondiente a las fases de la estrategia de acumulación y redistribución económica, hace referencia a este cambio de modelo y lo menciona en los siguientes términos:

Podríamos resumir que el centro de la estrategia endógena de generación de riqueza es convertir a la principal ventaja comparativa que tiene el Ecuador, su biodiversidad, en valor agregado, gracias al disfrute del eco-turismo comunitario y de la transformación de esa información en conocimiento, bienes y servicios industriales para la satisfacción de las necesidades básicas (SENPLADES 2009, 97).

Para alcanzar este objetivo, el gobierno planteaba una estrategia de mediano y largo plazo que estaba estructurado en cuatro etapas: 1) sustitución selectiva de importaciones incentivando el desarrollo de industrias petroquímica, de bioenergía y biocombustibles, metalmecánica, biomedicina, farmacéutica y genéricos, hardware y software, bioquímica y servicios ambientales; 2) generar un superávit energético a través de la producción y consumo de bioenergía y de energías limpias; 3) diversificación y sustitución de exportaciones por bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente dependientes de procesos extractivos; y 4) el despegue de los bio-servicios y su aplicación tecnológica en que el peso económico de esta industria sea superior al del sector primario (SENPLADES 2009, 91-98).

Independientemente de esta estrategia, el modelo de desarrollo continúa teniendo una alta dependencia a la extracción de materias primas especialmente de petróleo y minería metálica, que ya desde hace muchos años ha generado una alta conflictividad social principalmente por la ampliación de la frontera petrolera vía licitación de nuevos pozos para exploración en el suroriente de la Amazonia (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica s.f.) y el inicio de la explotación de proyectos de minería a gran escala.³²

Al inicio de su mandato, el gobierno de Rafael Correa presentaba un discurso nacionalista impulsando la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas estatales,³³ sin embargo, con el paso del tiempo delegaba dicha tarea a empresas extranjera, incluso se dio

³² Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, se prevén cinco primeros proyectos estratégicos en Ecuador: Mirador y Fruta del Norte, ambos en la Provincia de Zamora Chinchipe; Panantza – San Carlos en la Provincia de Morona Santiago; y Quimsacocha y Río Blanco en la Provincia de Azuay, todas a cargo de capitales transnacionales.

³³ Diálogo de Rafael Correa con Paco Velasco, entonces periodista en Radio la Luna en el año 2006: “Quieren hacerse los patriotas de este país para mejorar la producción petrolera regalando los pozos a la empresa privada y somos los nacionalistas retardatarios los que nos oponemos a esto (...). Vender a precio de gallina enferma los campos de Petroecuador a la empresa privada... Es un atraco al país... Es un negocio redondo que le queremos dar graciosamente a las compañías privadas eso tiene que ser para el país.” en: [http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=164279&umt=ivencion en campos petroleros es un atentado contra patrimonio inalienable irrenunciable e imprescindible ecuador](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=164279&umt=ivencion%20en%20campos%20petroleros%20es%20un%20atentado%20contra%20patrimonio%20inalienable%20irrenunciable%20e%20imprescindible%20ecuador)

paso a la explotación de los campos maduros (Sacha, Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Cononaco y Libertador) tradicionalmente en manos de la empresa estatal Petroecuador a las empresas internacionales Halliburton, Schlumberger y Baker, acciones que no se pudieron lograr en el período neoliberal. Caso similar se vive en materia minera, donde los capitales chinos y canadienses son los promueven la explotación.

En cuanto a la democratización de los medios de producción, problemática que ha sido presentada tanto en el discurso gubernamental como en el PNBV, poco o nada se ha logrado revertir. Así por ejemplo, la propiedad de la tierra continua manteniendo una estructura inequitativa. El “Plan de Fomento del acceso de tierras a los productores familiares del Ecuador” pretendía una redistribución de la tierra no producida entre los campesinos sin tierra, en una primera etapa se entregaría a los agricultores los terrenos estatales y de la banca cerrada, sin embargo esta iniciativa ha fracasado.

Datos proporcionados por la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (antes Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA) a este Diario dan cuenta de que en este periodo apenas nueve fincas (4.657 hectáreas) han sido entregadas a organizaciones campesinas, mientras que otras cuatro (998 ha) están “en proceso”. Señalan, además, que hay 53 predios (22.114 ha) en “planificación para su entrega” y corresponden al número de solicitudes de agrupaciones agrícolas aprobadas, las cuales deben tener proyectos productivos para acceder a créditos (El Universo 2011, <https://www.eluniverso.com/2011/04/24/1/1356/plan-tierras-deuda-agro-litigios-legales.html>).

El cambio de discurso, característico del régimen, a pretexto de la presentación del borrador de Ley de Tierras elaborado por Conferencia de Soberanía Alimentaria, mostró una negativa a la redistribución de las tierras privadas, afirmando que la gran propiedad es privada más productiva que la pequeña, por lo que ésta debe mantenerse, cerrando la puerta a cualquier tipo de afectación a la propiedad de los terratenientes.

Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio...! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo... Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor... Para que todos seamos propietarios partamos estas 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa

baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen sólo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres (Línea de fuego, 2011, <https://lalineadefuego.info/2011/10/17/borrador-ley-de-tierras-palabras-de-rafael-correa-y-luis-andrango/>).

En lo referente a grupos económicos se puede visualizar que tampoco han sido afectados. Así y sólo para ejemplificar, en el sector financiero, si bien el gobierno levantó inicialmente un discurso de rechazo a los excesos del capital especulativo,³⁴ éste es uno de los sectores de la economía que más ha crecido en este período, en efecto en el año 2011 las utilidades de la banca crecieron en un 51% en relación al 2010, registrando utilidades, entre enero y octubre de este año, por 439 millones de dólares (más de la mitad de lo que se obtuvo el año pasado). Este crecimiento fue impulsado, entre otros factores, por la inyección de recursos en la economía provenientes del gasto público (Buró de Análisis Informativo 2011, <http://za44.blogspot.com/2011/12/el-gasto-publico-impulso-el-crecimiento.html?m=0>).

Del mismo modo, se observa que el gobierno se acercó a grandes grupos empresariales los cuales, como refiere Mario Unda, aprovechándose de este acercamiento han utilizado al Estado como una palanca de acumulación, así algunas empresas participan en programas del gobierno:

En las ferias libres, o “ferias ciudadanas”: La Fabril, Panadería California, Nirsa, Ingenio La Troncal, Huevos Casanova, Fideos Toscana, Avícola Fernández, Big Cola, Rey Leche, La Europea, Supermercados de Carnes Orellana, Huevos Hércules, gremios arroceros de Salitre. En el programa “socio solidario”: Danec, La Fabril, Epacem, Nirsa, Zaimella, Quicornac, Tiosa, El Ordeño, Pronaca, entre otros. (Unda y Bethania 2010, 23).

³⁴ “Uno de los primeros conflictos que enfrentó el gobierno de la “revolución ciudadana” se desató con la banca privada, cuando Correa se empeñó en bajar las tasas de interés y recortar los costos al público de algunos servicios bancarios (entrega de saldos, utilización del cajero automático,...)” (Unda y Bethania, 2010).

2.3. **Ámbito social**

En el marco de la recuperación del Estado impulsado por este gobierno, el presupuesto general (PGE) pasó de 6000 millones de dólares en 2006 a 32.703,65 millones de dólares en el 2016, y el monto de inversión social por persona pasó de 141 dólares en 2006 a 575 dólares en 2014. Este aumento, tanto del PGE como del monto destinado a inversión social, se ha debido principalmente a los elevados ingresos petroleros y al mejoramiento de la recaudación tributaria (El Ciudadano 2015, <http://www.elciudadano.gob.ec/en-ecuador-la-inversion-social-paso-de-141-a-575-dolares-por-persona-entre-2006-2014/>).

Dicho aumento en el monto de inversión social se ha materializado principalmente en la adopción de dos tipos de políticas públicas, unas de carácter universal (educación, salud, seguridad social), y otras de carácter asistencial (bono de desarrollo humano, Programa Aliméntate Ecuador, planes “socio”, entre otras).

Correa promovió en el área rural, el programa de vivienda ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI), la continuación del pago del bono de desarrollo humano, la entrega de abonos químicos e insumos agropecuarios, líneas de crédito de 5000 dólares y el Proyecto socio páramo. Por otro lado, defendió la continuidad del subsidio universal del gas doméstico y de la gasolina, e impulsó el decreto de la llamada “tarifa de la dignidad”, que redujo los altos precios de los pagos de “los servicios de la electricidad, agua potable y telefonía” (...). Los programas de vivienda, el bono de desarrollo humano, la entrega de insumos agropecuarios, aliméntate Ecuador, el crédito 5-5-5, las becas a los abanderados de las escuelas y colegios, el proyecto socio páramo, la titularización de las tierras, son las políticas de intervención que han sido ejecutadas directamente en las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo (Tuaza 2011, 128).

Esta presencia estatal ha generado un incremento en la aceptación y la simpatía hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana, puesto que para muchos sectores, sobre todo rurales, ha sido la única vez en la que un gobierno central se ha hecho presente con la construcción de obras de infraestructura y políticas sociales como la dotación de uniformes y textos escolares. Sin embargo, estas medidas no constituyen una transformación estructural en las condiciones de vida de la población indígena, si bien se constata una presencia permanente y sostenida de las carteras de Estado en el territorio, no se distancia mayormente de las medidas clientelares emprendidas por los gobiernos anteriores, como la entrega de picos y palas a los campesinos en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Como lo constata el trabajo de Alberto Tuaza (2011) y las narraciones que se han podido obtener durante el trabajo de campo³⁵ varios comuneros manifiestan que el beneficio de los proyectos sociales no responde a un criterio técnico o a una evolución socioeconómica de la población, por el contrario, responde a prácticas clientelares dadas por funcionarios públicos de la localidad o dirigentes comunitarios que han sido cooptados por el gobierno nacional o provincial. Según se informa, el MAGAP promovió un proyecto de mejoramiento de la producción lechera en Chimborazo, los beneficiarios debían ser seleccionados por el Consejo Sectorial Campesino, presidido por Delia Caguana³⁶ luego de su salida de la COMICH, ninguna comunidad que se ha alineado con la postura de la ECUARUNARI-CONAIE, han recibido los beneficios de dicho proyecto. Así como también indican que las obras de infraestructura promovidas por la prefectura responden a criterios similares de respaldo a la gestión de Mariano Curicama y su disposición a movilizarse para las contramarchas impulsadas por el gobierno central.

Los fondos entregados desde las distintas carteras de Estado para la implementación para programas sociales focalizados, son usados como herramienta para la búsqueda de alianzas y respaldos, no solamente hacia determinados dirigentes indígenas, sino hacia autoridades locales y nacionales. Bretón (2001) al analizar la relación indígenas-ONG afirmaba que la intervención de la cooperación internacional había convertido a los dirigentes en técnicos y promovido la formación de nuevos cacicazgos. Por lo que se puede evidenciar con la presencia estatal y la gestión de los gobiernos locales, en el período actual se ha establecido una relación similar.

Sin embargo, pese a la implementación de estas políticas y programas, la reducción de la pobreza ha sido mínima durante este gobierno. Así se evidencia del estudio ya citado de Ponce y Acosta que manifiesta que en cuanto a la medición de pobreza por ingresos se ha producido:

(...) un estancamiento en los niveles de reducción de la pobreza entre el 2006 y el 2009, a pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno. Mientras entre el 2001 y el 2006 la pobreza se redujo en alrededor de 20 puntos (y la extrema pobreza también). En el 2006 y el

³⁵ Durante el trabajo de campo en la provincia de Chimborazo y en otras reuniones con el Movimiento Indígena, varios comuneros de Chimborazo compartieron sus experiencias y percepciones fuera del espacio de entrevistas, muchos de ellos porque no querían ser identificados como contrarios a la visión gubernamental.

³⁶ Sobre el rol jugando por la dirigente en la división organizativa de Chimborazo se trabajará más adelante.

2007 la pobreza se redujo en 1 punto (al igual que la extrema pobreza) (Acosta y Ponce 2010, 11).

Así también, el mismo documento en relación a la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas señala que:

[a] nivel nacional se observa una reducción importante, tanto de la pobreza como de la extrema pobreza, entre el 2005 y el 2008 (de alrededor de 5 puntos). En el último año el nivel de reducción se estanca (el cambio no es estadísticamente significativo). En este sentido se tendría una tendencia similar a la observada en la pobreza medida por el método del ingreso (Acosta y Ponce 2010, 15).

A continuación veremos el impacto de las medidas gubernamentales en la población indígena.

3. La población indígena en la Revolución Ciudadana

Según el Censo de población y vivienda de 2010, en el Ecuador existen 1'018.176 personas que se autoidentifican como indígenas, que representa aproximadamente el 7% del total de la población nacional. De estos, el 50,9% son mujeres y el 49,1% hombres. El promedio de edad bordea los 26 años, por lo que se puede afirmar que la población indígena ecuatoriana es relativamente joven. La nacionalidad Kichwa es la que mayor representación posee al constituir el 85,9% del total de los indígenas. La mayoría de ellos se encuentran en la zona rural, aunque en los últimos años se ha visto una importante movilización hacia las zonas urbanas. El 50,2% de la población indígena económicamente activa se dedica a la agricultura y ganadería, el 12,3% al comercio menor y 8,5% a la construcción, apenas el 0,4% a actividades profesionales científicas y técnicas (INEC 2012).

Históricamente, la población indígena ha sido la que mayores niveles de pobreza presenta, como se puede evidenciar en gráfico 2.

En 1998, el 87% de esta población vivía bajo la línea de pobreza y en 1999 llegó a la cifra histórica de 91,8%. Para el 2014, la población indígena sigue siendo el grupo étnico más pobre en Ecuador. A diferencia de la reducción observada para los no indígenas -en promedio 15,6 puntos o 40,8%- la población indígena reduce 6,1 puntos o 8,6% (INEC 2016, 130)

Gráfico 2 Pobreza por grupo étnico

POBREZA POR GRUPO ÉTNICO, 2006-2014										
Etnia	Distribución poblacional			Tasa de pobreza			Contribución			
	2006	2014	Δt	2006	2014	Δt	2006	2014	Δt	$\Delta t'$
Indígena	7,1	7,8	0,7	70,9	64,8	-6,1	5,7	5,0	-0,7	-0,7
Afroecuatoriano	5,4	5,2	-0,2	48,9	29,6	-19,3	2,8	1,5	-1,3	-1,3
Montubio	n,d	5,7	n,d	n,d	37,5	n,d	n,d	2,1	2,1	
Mestizo	79,8	77,8	-2,0	34,8	21,2	-13,6	27,4	16,5	-11,0	-10,2
Blanco	7,6	3,5	-4,1	31,5	17,7	-13,8	2,3	0,6	-1,7	-0,3
Nacional	100%	100%					38,3	25,8	-12,5	-12,5

Fuente INEC 2016

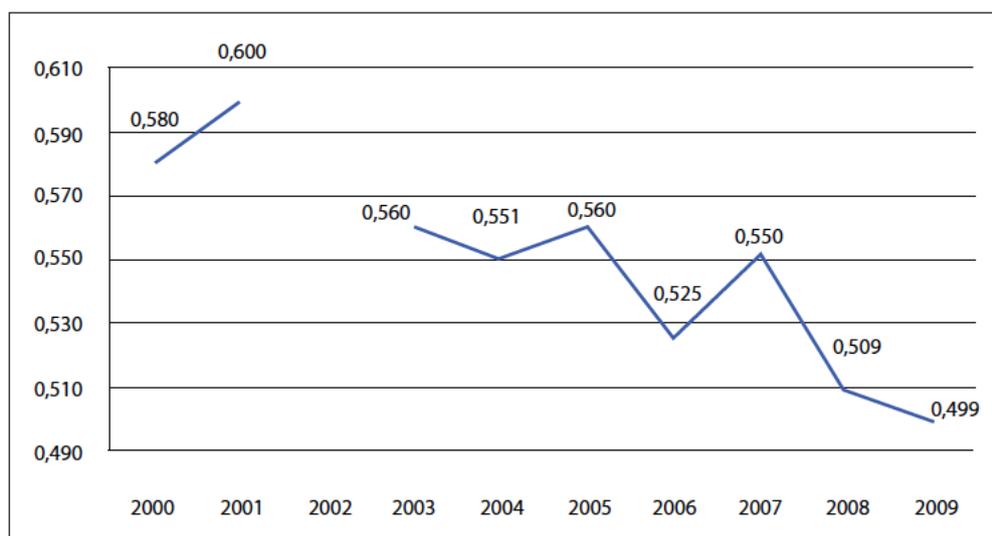
Pese a los altos ingresos petroleros y a la importante inversión social generada por el gobierno que pasó de pasó de 4,8% en relación al PIB en el año 2006 a 8,1% en el año 2009 y se espera que llegue a un 7,9% en el 2010 (Acosta y Ponce 2010, 7), la población indígena sigue siendo la menos favorecida. Así lo reconoce la propia Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2017)

Los retos principales en reducción de pobreza y desigualdad tienen que ver con la necesidad de cerrar las brechas existentes entre las distintas etnias, zonas, territorios y género. Las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias registran los mayores niveles de pobreza: 51,41%; 30,83% y 33,74% en 2015, respectivamente.

Existe una importante diferencia entre el nivel de pobreza en las zonas urbanas y rurales. La tasa de pobreza urbana fue de 15,7% y la tasa de pobreza rural fue de 39,3%; la misma tendencia se encuentra en la pobreza extrema: 4,4% en zonas urbanas y 17,0% en zonas rurales (SENPLADES 2017, 128).

En cuanto a la reducción de la inequidad social, durante el período de la Revolución Ciudadana no se ha visto una importante reducción del índice de Gini, el mismo que se encontraba en 0,499, en el año 2009.

Tabla 8. Evolución del Índice de Gini



Fuente: Acosta y Ponce 2010

Como se puede ver, pese a que los programas y políticas sociales han sido la prioridad del gobierno de la Revolución Ciudadana, estos no han significado una real transformación en las condiciones de vida de la población históricamente excluida y principalmente no han contribuido a superar la pobreza del sector indígena.

Sin embargo, la presencia estatal en el territorio y los programas clientelares a través de las autoridades locales, han fracturado la ya debilitada estructura organizativa de la CONAIE, que sumado a factores internos como la descomunalización y el distanciamiento de los dirigentes de las bases y la falta de actualización del proyecto político, han generado una desmovilización organizativa.

En el siguiente capítulo se analizan los episodios de contienda, de características principalmente contenidas, y la debilidad de los repertorios utilizados. Si bien es cierto que el caso aquí analizado es el del movimiento indígena, las acciones implementadas por el régimen de Correa y las consecuencias generadas, aplican a la mayoría de organizaciones sociales del país, las mismas que se han visto seriamente afectadas o incluso diluidas durante este período.

Capítulo 5

La contienda contenida: el repliegue en la Revolución Ciudadana

Hasta aquí hemos realizado una revisión de la acción contenciosa de la CONAIE, desde su surgimiento hasta mediados de la década de 2000, poniendo de manifiesto que, según el ciclo de la protesta ha atravesado por un momento de movilización durante el neoliberalismo y otro de inicio de la desmovilización posterior a la alianza electoral con Lucio Gutiérrez, que le generó ciertas debilidades en su estructura organizativa.

Como se ha anunciado, este trabajo busca establecer las causas que han generado el cambio en la contienda de la CONAIE, de transgresiva a contenida (McAdam, Tarrow y Tilly 2005). En el capítulo anterior se caracterizó de manera general el gobierno de Rafael Correa. Este capítulo tiene por objetivo mostrar los distintos episodios de contienda mantenidos entre el movimiento social y el gobierno de Alianza País, determinando los puntos de tensión en dicha relación, así como las acciones del gobierno dirigidas hacia los indígenas con el fin de determinar los mecanismos causales que han generado la contienda contenida.

Para lograr este objetivo, el capítulo se lo ha dividido en cinco partes. El primero analiza el momento de coordinación de acciones entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana durante el período Constituyente en el cual existían convergencias de ideales y proyectos. El segundo presenta los episodios de contienda desarrollados durante el 2007 y el 2015 entre los indígenas y el gobierno de acuerdo a los distintos temas de tensión que están centrados principalmente en el modelo de desarrollo implementado en el país. El tercer momento presenta las acciones gubernamentales desarrolladas por el gobierno para profundizar el debilitamiento de la CONAIE. En la cuarta parte se presenta, a modo de ejemplo, los efectos de la Revolución Ciudadana en las organizaciones indígenas de la provincia de Chimborazo. Finalmente se realiza un análisis de este período comparando las acciones externas y los factores internos que provocaron en cambio de tipo de contienda y una debilidad en los repertorios.

Los datos que han servido para construir las narrativas de las contiendas y los análisis son respaldados con la información obtenida en las entrevistas a dirigentes indígenas, académicos y autoridades electas, tanto del régimen como aquellos vinculados a la CONAIE. También se

sistematiza información de prensa y se incluyen datos de la participación directa en eventos de acción colectiva registrados en el diario de campo.

1. La convergencia de proyectos políticos: El Momento Constituyente

Durante los casi diez años de gobierno que se analizan en este capítulo, ha existido un serie de eventos importantes que marcaron la relación entre las organizaciones indígenas y el régimen, muchas de ellas estuvieron relacionadas a procesos electorales, que han permitido ir posicionando temas y demandas dentro de la agenda política. El llamado a una Asamblea Constituyente fue la primera acción del gobierno de Rafael Correa y el que logró aglutinar a la mayoría de actores sociales en respaldo a esta iniciativa. Esta intención de transformación del país fue puesta de manifiesto durante el discurso de posesión del primer mandatario en el año 2007:

La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. El reparto que refleja la Constitución vigente, a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etc., ha desestabilizado e inmovilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época. El momento histórico de la Patria y de toda el continente, exige una nueva Constitución que prepare al país para el Siglo XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado.

El instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional Constituyente. En pocos minutos más, cumpliendo el mandato que el pueblo ecuatoriano me entregara el 26 de Noviembre pasado, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Política del Estado me confiere, convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra (Correa 2007).

Pese a las desconfianzas generadas por Rafael Correa frente a la posible alianza electoral, la CONAIE y Pachakutik deciden respaldar al presidente en su pedido de consulta para la Asamblea Constituyente. Debido a la poca celeridad con la que el Congreso y el Tribunal

Supremo Electoral tramitan este tema, las organizaciones indígenas amenazan con movilizaciones para presionar a los diputados y respaldan la decisión de Correa de crear un tribunal *ad hoc* que agilite el proceso de ser necesario. Otro de los pedidos importantes para los indígenas es que exista una representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afrodescendiente y montubio, caso contrario sus demandas no serían incluidas en el nuevo cuerpo legal (Kipu 49, 2007).

En el mes de febrero el Congreso aprobó la convocatoria a consulta popular, luego de una serie de disputas entre este organismo y el Tribunal Supremo Electoral. El estatuto electoral contemplaba que la Asamblea cuente con plenos poderes pero que respete a las autoridades electas, esto generó que la CONAIE llame la atención a los diputados de Pachakutik así como que se cuestione al primer mandatario por permitir se apruebe bajo esas condiciones que no eran las que se esperaba desde las organizaciones sociales.

Los diputados presentes dieron paso primero a la aprobación de la consulta popular con 57 votos a favor, provenientes de parlamentarios pro constituyente y del Partido Sociedad Patriótica.

En el informe aprobado, se impulsa una Asamblea Constituyente de plenos poderes, pero con la condición de respetar las dignidades elegidas en las últimas elecciones.

Con la aprobación de la consulta popular, ahora al Tribunal Supremo Electoral le corresponde organizar la convocatoria (El Universo 2007,

<http://www.eluniverso.com/2007/02/13/0001/8/41950D290A1A4A3E977EDD2B24BF2A59.html>).

Se generó un amplio respaldo al referéndum por parte de los partidos de centro izquierda quienes realizaron asambleas y reuniones para explicar a las comunidades indígenas lo que implicaba la Asamblea y las posibilidades de cambio. Finalmente el 15 de abril se realizó la consulta popular y se aprobó la instalación de la Asamblea Constituyente con más del 80% de los votos. Enseguida se empezó la conformación de dicha instancia.

Los siguientes meses las organizaciones sociales y políticas inician la búsqueda de alianzas para conformar las listas de candidatos para asambleístas. Por varias ocasiones se vio la posibilidad de que los indígenas establezcan una alianza electoral con el partido de gobierno, para ello, Luis Macas, presidente de la CONAIE, se reunió en Carondelet con varios

funcionarios de Gobierno a quienes le planteó una agenda mínima de entendimiento para concretar un acuerdo con el Régimen. Entre los puntos que se destacan están el de la revisión de las concesiones mineras en todo el país, la no explotación del campo ITT, la aplicación de una reforma agraria integral y la desdolarización, el gobierno acepta algunos de los planteamientos de la CONAIE, sin embargo, a los pocos días se cierra cualquier posibilidad de establecer una alianza electoral sin especificar las razones para dicha negativa.

Paralelamente a esto se realiza un trabajo con las bases indígenas para la construcción de un proyecto de constitución. La intención es que la nueva Constitución incluya temas como pluralismo jurídico, reforma agraria integral con acceso a tierras y agua para las poblaciones indígenas, nacionalización de los recursos naturales y la construcción del Estado Plurinacional, demanda histórica, que se ha venido impulsando desde el levantamiento indígena de 1990.

El 30 de septiembre se realizaron las elecciones de Asambleístas Constituyentes, se designaron 130 escaños, de los cuales el 61% (79 asambleístas) fueron del Movimiento Alianza País, el siguiente partido más votado fue Sociedad Patriótica que obtuvo apenas 18 asambleístas, Pachakutik logró apenas 4 escaños dentro de la constituyente, lo que generó una discusión interna sobre la representatividad y vigencia de esa agrupación política. Pese a los malos resultados, las organizaciones indígenas siguieron confiando en que la Asamblea Constituyente pueda realizar los cambios que el país necesita, para ello realizan la entrega del Proyecto de Constitución del Estado Plurinacional³⁷ que la CONAIE había venido trabajando desde hace varios meses, a los Asambleístas electos.

(...) “Hoy pensamos entregarle a él (presidente Rafael Correa) nuestro planteamiento, pero lamentablemente prefirió oír su misa en Italia, con el Papa. A su vez, el pueblo indígena en ese momento histórico presenta al país un articulado para el cambio definitivo”, Añadió Macas.

La propuesta de reforma constitucional fue entregada al posible presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, quien invitó a los sectores de izquierda a luchar contra la oligarquía. Al acto también acudieron Norman Wray, Mónica Chuji y Virgilio Hernández, virtuales asambleístas electos de PAÍS (Kipu 50 2007, 300).

³⁷ Se puede revisar el documento completo en https://www.yachana.org/earchivo/conaie/propuesta_constitucion_conaie.pdf

Una vez instalada la Asamblea, la relación con el régimen y el Movimiento indígena se va tornando cada vez más tensa, las discrepancias entre la postura gobiernista y las demandas históricas de los pueblos y nacionalidades van siendo más marcadas. Marlon Santi,³⁸ presidente de la CONAIE, denunció hostigamiento por parte del régimen y organizó movilizaciones para respaldar su proyecto de constitución y promover el avance en materia de derechos. Una de esas movilizaciones se realizó en el mes de marzo cuando alrededor de 10000 representantes de las organizaciones indígenas de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, de la Costa y Amazonía, protagonizaron la denominada “Marcha por la Paz y por la construcción de un Estado plurinacional”, se trató de una acción puntual de movilización que respaldaba la entrega del Mandato de Pueblos Indígenas a Rafael Correa, las principales demandas que incluye el mandato era: la administración sostenible del agua, derechos colectivos de los pueblos indígenas (salud, educación, soberanía alimentaria), territorios, recursos naturales (petróleo, madera y minas), administración de justicia indígena, entre otros temas (Kipu 51 2008, 92-93).

Además de movilizaciones masivas para presionar al gobierno, los dirigentes de la CONAIE, realizan acciones de cabildeo directo con los asambleístas para la inclusión de los temas prioritarios para los pueblos y nacionalidades. La declaración del Ecuador como un Estado Plurinacional es el punto de mayor interés para las organizaciones indígenas. El proceso de negociación no fue del todo fácil.

La CONAIE presentó a la Asamblea Constituyente una propuesta integral de Constitución, es decir, trascendió a las demandas y reivindicaciones indígenas, presentando una propuesta constitucional de sociedad. Pero sin duda las organizaciones indígenas impulsaban un proyecto específico el mismo que incluía:

Que se declare al Ecuador como un Estado Plurinacional y que tal declaración constituya uno de los ejes para la estructuración de los derechos, de la organización del poder sea este institucional como territorial y finalmente en el diseño constitucional de la economía.

Ampliar el contenido de los derechos colectivos establecidos en la Constitución de 1998, en especial en temas como la consulta previa, libre e informada y su carácter vinculante; la justicia indígena desde la perspectiva de que se evite que las autoridades indígenas sean criminalizadas por administrar justicia.

³⁸ Asumió su mandato en enero de 2008 en remplazo del líder histórico Luis Macas

Que se establezcan derechos a la naturaleza que permitan establecer cierta armonía entre el ser humano y la otredad.

Que el acceso al agua sea visto como un derecho humano y que su gestión sea exclusivamente pública y comunitaria.

La democratización de los medios y factores de producción, por lo que exigían procesos redistributivos.

El movimiento indígena y en particular la CONAIE, al constituirse en un actor político relevante, sus demandas fueron tratadas de diversa manera, pues dependía del actor político que se trate. Alberto Acosta como Presidente de la Asamblea Constituyente estuvo abierto no sólo a tratar estos temas, sino que creía que era una oportunidad para hacer justicia con estos sectores sociales que históricamente habían sido excluidos, en tal sentido, ejerció cierta influencia con asambleístas de alianza país y del bloque progresista que se conformó al interior de la Asamblea Constituyente, principalmente con Pachakutik y el MPD para viabilizar los temas indígenas. Por su parte, el Presidente de la República, no creía que se debería profundizar en los derechos colectivos, en particular mostraba mucha resistencia sobre el tema de la consulta previa, libre e informada pues se pretendía mantener constitucionalmente un modelo económico basado principalmente en la extracción de recursos naturales, creyendo además, que no puede haber un actor social que pueda oponerse a una decisión tomada desde la esfera estatal (Edwar Vargas, ex asesor Constituyente, en entrevista con la autora, agosto 2016).

En este período político, la acción del Movimiento Indígena está totalmente centrada en el avance en materia de derechos para los pueblos y nacionalidades. Todas sus intervenciones políticas están enmarcadas en lo que determina la ley y las reglas democráticas, sin embargo, siempre que les es posible, recuerdan públicamente su capacidad de movilización e inmediata articulación de sus bases para la implementación de repertorios ya conocidos como son las paralizaciones y levantamientos. Esto se da para generar presión al régimen y lograr introducir sus demandas históricas en el texto constitucional. Además, en el campo de las alianzas y respaldos partidistas, Pachakutik también amenaza con alejarse de las posiciones de Alianza País en el caso de que no se tramiten de forma adecuada temas como la consulta previa para actividades extractivas en territorios indígenas y otros derechos colectivos. Estas posturas generan cada vez más tensión entre el régimen y las organizaciones.

Otro de los temas conflictivos que se trataron en la Asamblea y que generó confrontación con los indígenas fue el tema minero. Durante el mes de abril se debatió el Mandato Minero que

buscaba que las concesiones mineras se manejen de una manera más favorable para el Estado, los indígenas por su parte pedían que se impida la actividad extractiva en sus territorios y cerca de las fuentes de agua. El “paro minero” generó enfrentamientos con la fuerza pública y la amenaza por parte de Correa de enjuiciar a los dirigentes que promuevan la paralización de los servicios públicos.

El presidente Rafael Correa advirtió que no permitirá el cierre de carreteras y atentados contra la propiedad privada durante el paro minero (...) amenazó con sancionar a quienes violen la Ley.

Ayer, manifestó que la Ley prohíbe la paralización de los servicios públicos y que no le temblará la mano para aplicar la Ley, al calificar de “puñado de insensatos” a los organizadores del paro minero en Zamora Chinchipe.

Entre ellos mencionó al ex diputado de Pachakutik, Salvador Quispe, Fernanda Mendieta, Tarquino Cajamarca y otros, de quienes dijo que convocan al parao porque el Gobierno no obedece sus exigencias de “cerrar las concesiones mineras, la nacionalización del petróleo...” Dijo que la población no tiene por qué aguantar a 200 personas “que no representan a nadie” cierren carreteras. “Estos grupos de izquierda hacen más daño que los grupos de derecha” agregó (Kipu 51 2008, 133-134).

El tema ambiental, la consulta previa, la plurinacionalidad y la inclusión del kichwa como idioma oficial generan cada vez mayor confrontación entre la CONAIE y Rafael Correa. El presidente de la República descalifica los pedidos de las organizaciones al considerarlos “novelerías”, mientras que los dirigentes indígenas lo tildan de racista y le solicitan que deje de utilizar el kichwa en sus intervenciones. Frente al constante rechazo a las tesis indígenas, la CONAIE propuso impulsar la campaña por el “no” en el Referéndum para la aprobación de la Constitución, sin embargo decidió desistir de esta postura hasta no conocer el texto integral, también se lamentó la salida de Alberto Acosta de la presidencia de la Asamblea y aseguraron que se debía a las presiones e imposiciones del primer mandatario. Para los indígenas, la postura de Rafael Correa generaba cada vez mayores distanciamientos.

El proyecto de la Constitución que fuimos a entregar a Montecristi, igual le valió. Usted se acordará cuando él se pronunció y dijo (...), el 3% de la población no nos van a imponer al 97%. ¿Qué es Estado plurinacional?, ¿cómo así?, ¿por qué? Yo creo que él tiene no sé si terror o tiene algo en contra del movimiento indígena en sí (Luis Macas, líder indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Una vez concluido el proceso constituyente se inició un trabajo con las bases del movimiento para analizar el contenido de la nueva Carta Magna, el mismo que debía ser aprobado en el mes de septiembre. Posterior a este trabajo, se decidió apoyar el proyecto constitucional, sin embargo se decidió mantener una postura crítica hacia el régimen.

Pero el anuncio del movimiento Pachakutik de apoyar el sí en el referéndum y el temor de que los partidos tradicionales asuman nuevamente el control del Congreso pesó más al interno de la dirigencia indígena.

Cholango explicó que la decisión de la Ecuarrunari no significa entregar un ‘cheque en blanco’ al presidente Correa.

“Este es un proceso histórico de cambio en el que son los pueblos y no las personas los protagonistas” explicó el dirigente (Kipu 52 2008, 52).

Finalmente la Constitución fue sometida a referéndum y aprobada con un 64% del total de los votos. Posterior a ello, el régimen de transición que provocó el cambio de la Carta Magna fue blanco de nuevas disputas, las leyes y designación de autoridades que debían ser tramitadas por la Comisión Legislativa y de Fiscalización de Ecuador (integrada por 76 Asambleístas de electos entre los 130 Constituyentes) no satisfacía las expectativas de las organizaciones sociales puesto que generaba un control absoluto de todas las funciones del Estado por parte del partido de gobierno.

En términos generales, el proceso constituyente implicaba un desafío histórico para los pueblos y nacionalidades indígenas de ser incluidos y visualizados como parte integrante y activa de la vida política y social del país. Sin duda, el mayor logro fue la declaración del Estado plurinacional, demanda que ha sido bandera de lucha del Movimiento Indígena desde su surgimiento en la década de los noventa. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado materializar dicha consagración, por el contrario, el que esté plasmado en el texto constitucional ha reducido las demandas indígenas de carácter estructural. Como afirman sus propios líderes históricos, es necesario retomar un trabajo articulado con las bases para lograr su materialización y aplicabilidad.

El tema es cómo ejerzo, cómo aplico, cómo construyo y desde el poder, llamémoslo así, en lugar de respetar a los pueblos y contribuir para que desde su visión construya en el ejercicio de sus derechos, lo que hace el poder es imponer, reactualizando la visión colonial para el ejercicio de derechos (Nina Pacari, líder indígena en entrevista con la autora, abril de 2015).

En este período, se logra visualizar aún la fortaleza de la estructura organizativa y su respuesta orgánica a los planteamientos desde la organización nacional, todas sus filiales y organizaciones de base se mantienen alineadas y respaldan la postura de una lucha histórica. También se logra ver que, pese al rechazo, a la actitud y ciertos planteamientos políticos del régimen, la CONAIE adhiere a las grandes propuestas correístas pero manteniendo la distancia. Por su parte, el gobierno muestra una actitud casi indiferente a las decisiones o reclamos de los indígenas como una estrategia para demostrar su fortaleza aún sin el respaldo de ese sector social.

Posiblemente uno de las grandes dificultades que atraviesa la organización es la falta de trabajo articulado y permanente de diálogo y socialización con sus bases. Debido a los “tiempos políticos” los dirigentes toman decisiones sin recurrir al consenso que es parte característica de su identidad cultural y como movimiento. Estas acciones generarán posteriormente la división y debilitamiento de la estructura de movilización. La CONAIE, al igual que otras organizaciones sociales, durante este período recibieron una gran cantidad de aportes, técnicos y económicos, que les permitió realizar un trabajo de cabildeo en la Asamblea y plasmar sus demandas en el texto constitucional. Esa capacidad de movilización de recursos y la efectividad de sus repertorios tradicionales lograron ciertos avances en derechos, sin embargo, las ganancias fueron menores de lo esperado.

Me parece que hubo una oportunidad política, la Presidencia de la Asamblea marco cierta apertura a los temas indígenas, a lo cual hay que sumar, la presión social que realizó el movimiento indígena a través de movilizaciones en diferentes momentos en que se desarrolló la Asamblea Constituyente (...)

Uno de los logros es la declaratoria de Estado plurinacional, sin embargo, no paso de ser un calificativo más al carácter del Estado, pues este reconocimiento no fue desarrollado en la estructura de la constitución.

Como derrota se visualiza claramente, el carácter no vinculante de la consulta previa, libre e informada. También se incorporaron en el texto de la Constitución ciertas demandas indígenas, pero en la realidad, estos temas no fueron viabilizados y si lo hacían, eran vaciados de contenido (Edwar Vargas, asesor Constitucional, en entrevista con la autora, agosto 2016).

2. El momento de disputa: episodios de contienda

Como se ha dicho, durante el período de la Revolución Ciudadana, la acción colectiva del movimiento indígena representado por la CONAIE se ha visto reducida, ha existido un

cambio en su forma de actuación y se ha limitado a utilizar los canales formales para la reivindicación de sus derechos. A esto modo de lucha McAdam, Tarrow y Tilly (2005) lo denominaron contienda contenida.

La contienda contenida hacer referencia a aquellos casos de contienda política en los que todas las partes son actores previamente establecidos que emplean medios bien establecidos de reivindicación. Consiste en la interacción episódica y pública, colectiva, entre los reivindicadores y sus objetos cuando: a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es partes de las reivindicaciones; b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de uno de los reivindicadores; y c) todas las partes del conflicto estaban previamente establecidos como actores políticos constituidos (McAdam, Tarrow y Tilly 2005, 8).

Por otra parte, el concepto de ciclo de la protesta establece un momento de cierre de las oportunidades políticas para la actuación de los movimientos sociales y estas se producen por tres aspectos principalmente: 1) represión empleada contra los reclamantes; 2) temor generado en los observantes a causa de la represión; y 3) reformas introducidas por las élites (Tarrow 1997). En el caso aquí analizado, se presentan los tres elementos, por lo que la desmovilización social ha sido generalizada.

Teniendo claro este marco analítico, es importante identificar los principales puntos de conflicto entre el gobierno de Alianza País y la CONAIE para poder entender de mejor manera los episodios de contienda. Aun cuando en el 2012 y en 2015, hay una importante movilización popular por parte de las organizaciones indígenas y sociales, los logros alcanzados han sido nulos en cuanto a impedir la aprobación de leyes y la implementación del modelo de desarrollo. Los temas que han generado algún tipo de acción colectiva han girado, principalmente, alrededor del proyecto político tanto del gobierno como de las organizaciones indígenas. La aprobación de leyes que afectarían a la vida del zonas rurales causaron mayores rechazos, estas fueron Ley de Recursos Hídricos, Ley de Minería, Ley de Tierras y Territorios, Ley de Semillas, consulta previa libre e informada, entre otras; así como de forma particular se generó una confrontación con la CONAIE, por el comodato de la sede de dicha organización, la misma que quiso ser revocada por realizar actividades políticas en el inmueble.

2.1. Episodio 1: Rechazo a las leyes de Minería y Agua

Desde la instalación del “Congresillo”³⁹ las organizaciones indígenas mantuvieron su preocupación y rechazo por el contenido de varias de las leyes que se tramitara de manera urgente por mandato Constitucional. Los temas de Minería, Recursos Hídricos, Soberanía Alimentaria eran de especial preocupación para los indígenas quienes aseguraban que los textos redactados por los Asambleístas contradecían a lo aprobado en la Constitución y afectaba a sus territorios. Sin duda, el tema hídrico constituye uno de los más conflictivos entre la relación gobierno-Movimiento Indígena.

Las provincias del sur del país, especialmente Zamora Chinchipe y Morona Santiago mostraban su total rechazo a la explotación minera a gran escala. Los prefectos⁴⁰ de esas provincias organizaron movilizaciones y bloqueo de carreteras para mostrar su rechazo a los textos legales que se discutían en la Asamblea y que posteriormente pasaron a conocimiento del primer mandatario. En el tema de recursos hídricos, las organizaciones indígenas se oponían a la privatización del recurso así como también a que se los excluya de la administración de los sistemas comunitarios de agua como ha sido parte de su costumbre, la mayoría de canales de riego que abastecen a las comunidades han sido construídas, mantenidas y administradas por las juntas comunitarias del agua.

La acción del movimiento, desde el mes de enero hasta octubre se mantienen en el campo de la acción política institucional con pequeños brotes de contienda y enfrentamientos con la fuerza pública, durante las protestas existe represión estatal y además se amenaza con enjuiciar a los manifestantes. Debido a los rechazos por parte del gobierno central y de la Asamblea de incorporar las observaciones presentadas por los indígenas a los cuerpos legales, los dirigentes de la CONAIE convocan a sus bases a una movilización nacional en rechazo del régimen. Rafael Correa accede a abrir los canales de diálogo si se deponen las medidas de hecho, sin embargo la CONFENIAE rechaza la proposición y existe confrontación entre el gobierno y los indígenas amazónicos.

³⁹ Nombre que se le dio a la Comisión Legislativa y de Fiscalización que se creó como parte del régimen de transición tras la aprobación de la Constitución

⁴⁰ El 26 de abril se realizaron las elecciones generales para la elección tanto de presidente y vicepresidente de la República siendo triunfador Rafael Correa en una sola vuelta con 52% de los votos, además se eligieron 124 asambleístas, Alianza País obtuvo 59 de los 124 escaños que se disputaban y Pachakutik apenas 4. En esa misma fecha también se renovaron prefectos y alcaldes, AP obtuvo 8 prefecturas 72 alcaldías; Pachakutik 5 prefecturas y 26 alcaldías. Los prefectos de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe y de Morona Santiago Marcelino Chumpí, se han constituido como fuertes opositores al régimen de Correa especialmente por su oposición a los temas extractivos.

En las medidas de hecho resultaron heridas 41 personas y se reportó la muerte de Bosco Wizuma por herida de bala, ante el hecho la dirigencia nacional y provincial convocó a sus bases para fortalecer la movilización y el rechazo a la represión ejercida por la fuerza pública.

Marlon Santi, presidente de la Conaie, quien ayer estuvo en Pastaza, afirmó: “Se ha tomado la decisión de que no vamos a ceder ni detener la movilización. Ahora se radicalizará en todas las provincias; hay convocatorias a nivel nacional y regional y tenemos la decisión de la Ecuarrunari de que desde la meda noche entran a la movilización nacional” (Kipu 54 2009, 152).

La exigencia de los indígenas es tratar los contenidos de las leyes exclusivamente con el primer mandatario, ante la negativa de éste de reunirse con las organizaciones en la Amazonía, los dirigentes indígenas acceden a mantener el diálogo en el palacio de Carondelet sin deponer las medidas de hecho. La CONAIE presenta una agenda con 25 puntos a ser tratados. Se logra acordar sobre seis temas.

Acuerdos alcanzados:

1. Impulsar la creación de los principios constitucionales y en especial del Estado Plurinacional e intercultural.
2. El diálogo se articulará entre comisiones de alto nivel con delegados de las organizaciones y del Gobierno.
3. Se fomentará la educación bilingüe y sus autoridades serán electas por concursos de méritos y oposiciones.
4. Se formará una comisión mixta para consensuar la Ley de Aguas.
5. Se encargará a la Comisión de la Verdad investigar la muerte de Bosco Wizuma. La comisión que investigará estos casos estará conformada por dos miembros del Gobierno y dos miembros indígenas.
6. Se revisará la Ley de Minería por una comisión conformada por las dos partes (Kipu 54 2009, 185).

Pese a los logros alcanzados, las propias organizaciones reconocieron que existió cierta debilidad en la organización de las jornadas de protesta. Estas fueron acciones que se desarrollaron principalmente en la Amazonía, mientras que en la Sierra tuvo poca repercusión, pese a que el agua para riego es escasa en algunas zonas de la zona central. La

CONAIE reconoció que hizo falta un mejor proceso de comunicación y socialización con las bases, mientras que los dirigentes de Chimborazo aseguraron que lo acontecido se generó porque el gobierno “compra” a algunas organizaciones de base. La presencia del Estado con obras de infraestructura y de servicios básicos en zonas históricamente abandonadas por los distintos gobiernos también figura como una de las principales causas de la poca movilización social de las bases (Kipu 54 2009, 187).

Durante el año 2010 la conflictividad en torno a la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos continuó. El segundo debate para la aprobación de dicho cuerpo legal debía ser tramitado por la Asamblea en el mes de abril, sin embargo la CONAIE y la ECUARUNARI realizaron una serie de marchas y movilizaciones nacionales para que se incluyan sus planteamientos en dicho cuerpo legal; los enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública son intensas, generando la detención de varios manifestantes y la judicialización de estos, acusados de terrorismo y sabotaje.

Mientras algunos funcionarios de gobierno y assembleístas buscaban canales de diálogo con los indígenas y estos últimos presentaban sus propuestas a la comisión legislativa correspondiente, la presión en las calles continuaba. Como estrategia para reducir la conflictividad, el presidente Correa realiza visitas a las poblaciones indígenas de la provincia de Chimborazo y minimiza el impacto de las movilizaciones.

(...) “El sector indígena no ha entendido que en el país hay un Presidente. Que vayan a amenazar a su casa. A mí no me van a asustar...” dijo ayer el presidente Rafael Correa en Riobamba.

Según Correa, son 1500 personas que quieren generar el caos en el país con las movilizaciones. “LA dirigencia no tiene la capacidad de movilización, la mayoría del pueblo está con nosotros, ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras.” (...)

Según el Presidente, la dirigencia indígena busca manejar la distribución del agua a través de la conformación de un consejo plurinacional. “El agua no es de la Conaie sino de todos” (...)

“Qué elección ha ganado la Conaie que quiere manejar el agua”. (...) Pese a que el Mandatario minimizó la fuerza de las marchas, fuentes de la Presidencia informaron que ayer, pasadas las 17:00, convocó a un comité de crisis para analizar la situación (Kipu 55 2010, 223).

El gobierno cerró cualquier posibilidad de diálogo y llamó a su militancia a un “levantamiento” asegurando que ellos son muchos más. Además se desarrolló toda una campaña mediática para informar sobre la Ley de Recursos Hídricos y desacreditar a los indígenas agrupados en la CONAIE, FEINE y FENOCIN quienes son los actores de las contiendas. El discurso gubernamental cada vez es más agresivo y se replica en todos los miembros de éste para mantener una imagen de coordinación y unidad.

En el mes de mayo, ante las presiones indígenas, el pleno de la Asamblea Nacional suspende la votación de la Ley de Aguas y se plantea el proceso de consulta pre legislativa, los indígenas deciden levantar las medidas de hecho pero exigen la consulta sea vinculante y advierten que se mantendrán vigilantes al proceso. Pese al que se logró ejecutar una movilización en gran parte del país y los resultados de la acción, las organizaciones evidenciaron debilidades en algunas organizaciones indígenas que no respaldaron las decisiones de la ECUARUNARI-CONAIE, muchas de ellas se encontraban en Chimborazo y su negativa a respaldar, estaba dada por la supuesta falta de socialización de las propuestas y distancia de las organizaciones regionales y nacionales y por el respaldo al presidente Correa, por las obras realizadas en esas zonas.

2.2. Episodio 2: La Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos

En el año 2012 la contienda más importante que se generó entre el gobierno y el movimiento indígena fue la “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”,⁴¹ esta se originó como un conflicto local entre el gobierno provincial de Zamora Chinchipe, cuyo prefecto era Salvador Quishpe, y el gobierno central, tras la firma de la concesión minera a gran escala a la empresa china Ecuacorriente para la explotación en la Cordillera del Cóndor. Si bien este fue un hecho coyuntural que precipitó el desarrollo de la movilización, desde la ECUARUNARI, desde hace varios meses atrás se había planificado la realización de una marcha para demostrar la inconformidad con el régimen. En este proceso se fueron sumando otras organizaciones sociales y ecologistas urbanas y rurales.

⁴¹ Como se ha dicho, la participación en estas acciones se realizó de manera personal, no con un interés investigativo sino de colaboración al equipo técnico que trabajaba en la ECUARUNARI. En ese año yo me encontraba laborando para un proyecto del Ministerio del Ambiente, por lo que pude tener la visión de los dos actores en el conflicto. Muchos de los hechos que se narran en este episodio de contienda corresponden a esa experiencia.

La marcha partió el 8 de marzo de 2012 de la comunidad El Pangui en Zamora Chinchipe y llegó a Quito el 22 de ese mismo mes en el marco de la celebración del Día del Agua. Se trató de una manifestación pacífica y de carácter festivo que intentaba demostrar al régimen y a la opinión pública que las organizaciones continúa vivas, que se oponen al gobierno principalmente al modelo económico extractivista y las medidas contradictorias a una ideología de izquierda a la cual dice pertenecer.

Si bien el tema minero y la defensa del agua eran los principales temas en las demandas, la construcción del “Mandato”⁴² contemplaba un total de 19 puntos que fueron construidos, analizados y consensuados mediante talleres y asambleas provinciales y nacionales para identificar las necesidades y problemas en cada uno de los sectores por los cuales atravesaría la marcha.

Si bien es cierto, esta movilización trató de ubicar en la opinión pública los temas mineros y del agua, sin embargo, me parece que el propósito principal fue demostrar fuerza al gobierno nacional, en el sentido de decir, cuidado, estamos aquí, no estamos acabados como ustedes creen, nuestras organizaciones están intactas y lucharemos para defender nuestros derechos y un modelo de sociedad distinta. (...) El movimiento indígena al ser un actor social y político relevante se convirtió en las últimas décadas en el sujeto político que permitía la convergencia de varios actores sociales con sus demandas específicas, en tal sentido, al contar con un mandato tan amplio, permitía articular temas y actores sociales bajo un mismo programa de lucha (Edwar Vargas, ex asesor Constituyente, en entrevista con la autora, agosto 2016).

Rafael Correa, como ya había realizado en otras ocasiones, llamó a la militancia de Alianza País a movilizarse y permanecer en alerta ante los intentos desestabilizadores de las organizaciones sociales.

(...) “No se preocupen, nos encontraran bien parados, más firmes que nunca. El 8 de marzo hemos convocado por el Día de la Mujer, pero en defensa de la democracia, un encuentro multitudinario en la Plaza de la Independencia (Quito)” detallo. El mandatario enfatizó que la medida busca transmitir el siguiente mensaje a las bases de Alianza PAÍS (AP): “A estar movilizadas, preparados, de aquí hasta el 22, 23 de marzo, para que nos encuentres más firmes que nunca, defendiendo nuestra democracia, defendiendo la revolución ciudadana”. Aseveró

⁴² El contenido del mandato puede ser revisado en <http://ftp.kaosenlared.net/kaos-tv/11891-mandato-marcha-plurinacional-por-el-agua-por-la-vida-y-por-la-dignidad-de-los-pueblos>

que la movilización de la Conaie pretende desestabilizar al régimen tal como lo hicieron los indígenas de Bolivia contra el presidente de ese país, Evo Morales (Kipu 59 2012, 31).

Parte de la estrategia de desprestigio que levantó el régimen hacia las organizaciones sociales es, por un lado minimizar el número de participantes y su impacto en la opinión pública y por otro acusarlos de que sus planteamientos son infundados y que responden a un discurso de derecha, relacionándolos con los partidos políticos tradicionales que manejaron al país en el período neoliberal y que reciben recursos económicos de esos grupos de poder, por lo tanto cualquier acción que realicen las organizaciones es con ánimos desestabilizadores, puesto que es la única estrategia que pueden usar estos grupos al nunca han ganado una elección.

La Marcha tuvo un recorrido aproximado de 700 Km y atravesó gran parte de la Sierra del país. El repertorio de una movilización de este tipo no era nueva para el movimiento indígena y tampoco era la última vez que iba a ser usado. Anteriormente por la conmemoración de los 20 años del primer levantamiento indígena se realizó una acción similar hasta llegar a la ciudad de Quito. Este recorrido que partió de la provincia Amazónica de Zamora contó con la participación permanente de alrededor de 400 personas y en cada provincia o cantón eran recibidos por un grupo local de marchantes que se unían a la caminata. Esta acción a su vez combinaba otros repertorios, el más importante y con mayor carga cultural era el de la ceremonia ancestral de energización para que la acción se realice de manera exitosa; además de esto se realizaban concentraciones en donde los dirigentes de las diferentes organizaciones presentes en la movilización emitían discursos a los presentes. Además se realizaron asambleas para la evaluación y definición de estrategias en los tramos siguientes de la marcha. Este repertorio también corresponde a una práctica tradicional de las organizaciones indígenas donde las decisiones son tomadas de manera colectiva y de ser posible, en consenso.

El financiamiento de la movilización estuvo a cargo de los gobiernos locales que impulsaron la acción, como son los de Zamora, Azuay y Cotopaxi, así como también de la solidaridad de las comunidades y pobladores en general. En cada lugar al que llegaban eran recibidos con alimentos donados por los comerciantes de los mercados, de las propias comunidades o de organizaciones fraternas de la localidad, además contaban con la una “vaquita” de papel maché en la cual se podía depositar donaciones de dinero que permitían cubrir otras necesidades de los manifestantes.

Si bien es cierto que con el avance de la marcha se logra evidenciar la fuerza que persiste en las organizaciones sociales, también se hace más evidente sus divisiones en algunas localidades como es el caso de Chimborazo y la capacidad estatal para entregar recursos y organizar contramarchas.

Socialización de leyes y proyectos agropecuarios, de salud, educación y soberanía alimentaria; inscripciones para acceder al bono de desarrollo humano o a crédito estatal se han planificado a nivel interministerial para este mes, coincidiendo con las movilizaciones a favor y en contra del presidente de la República, Rafael Correa.

Una muestra de ello ocurre en la provincia de Chimborazo, donde el Gobierno quiere “visibilizar” su gestión en las comunidades indígenas. (...) Un documento elaborado por el equipo político de Chimborazo (integrado por delegados interministeriales y representantes locales del Ejecutivo) revela directrices específicas para este mes como la “entrega de programas o proyectos concretos” en los cuales debe existir, expresamente, “politización (mensaje político y capitalización)”. (...) La agenda de acciones se ha cumplido hasta ahora de acuerdo a lo dispuesto. Así, el pasado jueves, cuando se iniciaron las manifestaciones, el aporte de los simpatizantes del régimen en Chimborazo fue el viaje de un grupo de mujeres a Quito para conmemorar su día y para “agradecer al presidente” porque ya son algunas las que están “en espacios de poder”, dice Lupe Ruiz, delegada provincial de la Secretaría de los Pueblos (Kipu 59 2012, 86).

Otro ejemplo de esto es la entrega de recursos económicos que realizó el gobierno al Gobierno Provincial de Chimborazo y a 10 municipios por un monto aproximado de 1,7 millones de dólares durante los días de la marcha, estas acciones fueron coordinadas por el Prefecto de esa provincia Mariano Curicama, quien ganó dicho puesto político bajo la bandera de Pachakutik en alianza con el partido de gobierno (Kipu 59 2012, 107). Pese a eso, la marcha logra movilizar alrededor de 70 000 personas durante todos los días que duró la acción.

Los cercos policiales y militares estuvieron presentes durante todo el trayecto así como también los eventos paralelos del gobierno, la presencia de la fuerza pública era, supuestamente para evitar enfrentamientos entre los simpatizantes y opositores del gobierno. En un par de reuniones y acciones de los indígenas se descubrió la presencia de policías infiltrados que se encontraban incluso armados.

Finalmente la marcha llegó a la ciudad de Quito y movilizó alrededor de 25 000 personas, paralelamente en la plaza de la Independencia, frente al palacio de gobierno se realizó un acto en respaldo a la Revolución Ciudadana que contó con cientos de participantes, muchos de ellos funcionarios públicos de se vieron obligados a asistir al evento. La acción concluyó con una caminata dentro de la ciudad, el arribo al tradicional parque de El Arbolito y la entrega del Mandato al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero. Tras algunos enfrentamientos con la fuerza pública por impedir el ingreso a una gran delegación al Palacio Legislativo, los dirigentes indígenas lograron entablar un diálogo con Cordero el cuál se comprometió en revisar los proyectos de ley entregados por los indígenas e impulsar la consulta pre legislativa para la aprobación de la ley de recursos hídricos.

La Marcha mostró que la estructura organizativa de la CONAIE y de sus filiales, especialmente de la ECUARUNARI, aún poseen la fortaleza y la convocatoria necesaria para realizar acciones masivas pese a las rupturas y la acción del gobierno. La estructura de oportunidades políticas no se encontraba el todo abierta, el gobierno contaba con una alta aceptación popular debido a la bonanza económica y su capacidad de implementar políticas públicas en beneficio de una gran cantidad de ciudadanos que por años se habían visto excluidos de la distribución de recursos por parte del Estado, además de un manejo mediático y propagandístico que desprestigiaba a las organizaciones sociales. Por su parte los dirigentes indígenas y sindicales contaron con el respaldo económico y político de varios gobiernos locales que favorecieron el desarrollo de la movilización, así como también de la alta cobertura por parte de la prensa opositora al régimen que logró posicionar sus demandas en la opinión pública, esto generó a su vez que se sumen simpatizantes y solidaridades para el adecuado desarrollo de esta acción.

Es importante mencionar que este repertorio no buscaba una confrontación ni con la fuerza pública ni directamente con el gobierno, no se trataba de una paralización del país como es el fin de un levantamiento indígena o de una huelga sindical, sino de mostrar fortaleza y capacidad de convocatoria. Posiblemente sus demandas no lograron ser tramitadas por la institucionalidad estatal, sin embargo sirvió como ejercicio interno de las organizaciones de regresar a ver sus problemáticas internas y particulares de cada sector para la construcción de un mandato incluyente y abarcador hacia varios sectores. Además la marcha logó “demostrar fuerza y la posibilidad de articular temas desde una diversidad de actores. Si pensamos que a partir de esa movilización, las acciones que se han realizado en estos últimos años, muestra

que esa convergencia se ha mantenido” (Edwar Vargas, ex Asesor Constituyente, en entrevista con la autora agosto de 2016).

El proceso de consulta pre legislativo para la Ley de Recursos hídricos se realizó en el año 2013, sin ser de carácter vinculante y con un lenguaje demasiado técnico como para ser procesado adecuadamente por las comunidades indígenas. Este hecho generó aún más fricciones internas en las organizaciones indígenas. Mientras la ECUARUNARI promovió la no participación en dicha consulta, la CONAIE liderada por Humberto Cholango insistió en que debían participar puesto que era algo que se había promovido desde las organizaciones, esto generó mayores desconfianzas hacia el dirigente por parte de los líderes históricos, sin embargo no se pudo neutralizar sus acciones y muchas de las comunidades indígenas participaron de la consulta.

2.3. Episodio 3: Pequeñas contiendas durante el 2013 y 2014: ITT, educación bilingüe y la casa de la CONAIE

Durante los dos años siguientes, los temas ambientales y extractivos fueron los que marcaron la agenda de las organizaciones indígenas. En el año 2013 la demanda más relevante fue la negativa a la explotación al campo petrolero ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) ubicado en el parque nacional Yasuní, lugar de una gran biodiversidad pero además territorio de los pueblos Tagaeri-Taromenane que viven en aislamiento voluntario. Esta no fue una contienda exclusivamente indígena, ni siquiera fue impulsada directamente por el Movimiento Indígena, por el contrario fue una iniciativa de jóvenes ecologistas principalmente urbanos denominados Yasunidos. A esta iniciativa de no explotación petrolera, se sumaron varios otros sectores incluyendo los sindicales y estudiantiles. La acción de los Yasunidos estuvo encaminada a la recolección de firmas para la consulta popular sobre si se debe o no mantener bajo tierra el petróleo de esta zona de la selva ecuatoriana, a mediados del 2014 se entregaron las firmas respectivas, sin embargo el Consejo Nacional Electoral rechazó el pedido aduciendo inconsistencias en los formularios y falsificación de los mismos. Sin embargo las organizaciones sociales denunciaron la ruptura de la cadena de custodia y la alteración de los documentos. Finalmente el gobierno dio paso a la extracción de crudo de ese parque nacional.

En el 2013, el tema minero continuó siendo relevante, especialmente por los operativos de control de minería ilegal que se realizaban en la Amazonía. El 7 de noviembre de 2013, en un control militar fallece Freddy Taish, de la nacionalidad Shuar Arutam lo que generó la

indignación y reclamo de los miembros de las organizaciones de la zona las que responsabilizaron al gobierno por la muerte. Así como se solicitó el respeto a la actividad minera artesanal ejercida por los pueblos originarios y controles para aquellas actividades que se realizan en sus territorios de manera ilegal.

Otro tema relevante durante el 2013 fue la movilización realizada por la ECUARUNARI, exigiendo se respete Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, puesto que a raíz de la construcción de Escuelas del Milenio en las cabeceras cantonales se cierran las escuelas comunitarias por lo que los niños deben trasladarse varios kilómetros para asistir a clases.

La ECUARUNARI, organización histórica de indígenas de la Sierra, abrió un nuevo frente contra el Gobierno: la defensa del sistema de educación intercultural bilingüe. Hoy, a las 10:00, sus dirigentes marcharán desde el estadio El Arbolito hasta la Corte Constitucional con el fin de presentar una acción por incumplimiento contra el Ministerio de Educación, que ha anunciado una reducción del número de escuelas bilingües. “De acuerdo a las declaraciones del propio ministro -anunció Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari- las escuelas bilingües se reducirán de 19 mil a 5 000 hasta el año 2017” (Kipu 62 2013, 210).

En las últimas acciones desarrolladas por los indígenas se han transformado tanto el actor convocante, así como también los mecanismos empleados. Debido a la postura ambigua de Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, en su relación con el Gobierno Nacional, la mayor parte de acciones han sido asumidas por la ECUARUNARI, sin embargo, debido a la debilidad de sus dirigentes, la falta de recursos económicos, la división de algunas de las bases provinciales y la criminalización de la protesta social, ha generado que la forma de presentar las demandas se transforme. Se ha optado por recurrir exclusivamente a los canales institucionales, es decir se interponen demandas de inconstitucionalidad, de incumplimiento o cualquier otro recurso legal para rechazar las acciones gubernamentales.

Si bien en el pasado también se realizaban estos actos, éstos eran acompañados por multitudinarias marchas y se presionaba en las calles hasta obtener una respuesta. Actualmente los dirigentes realizan el trámite acompañados por un reducido grupo de simpatizantes indígenas y de otras organizaciones sociales y se espera que las instituciones realicen el trámite. Esto muestra un claro repliegue de la acción contenciosa y en estado de pasividad por parte del Movimiento Indígena.

Durante el 2014 la Asamblea Nacional volvió a tratar la Ley de Recursos Hídricos con los insumos que se recogieron de la consulta pre legislativa. En el segundo debate de este proyecto de ley se lograron incorporar algunos temas importantes para las organizaciones indígenas, sin embargo, el presidente de la República, mediante el decreto 310, negó la posibilidad de que se conforme el Consejo Plurinacional del Agua, lo que generó malestar en el Movimiento Indígena y decidieron realizar una nueva marcha en contra de esta ley. Además como parte de estas demandas se incluyen las inconformidades por la propuesta de reelección indefinida, el código del Trabajo y otras medidas gubernamentales, por lo que a esta medida se sumaron organizaciones como el FEINE, Frente Popular, Pachakutik, de la Junta Administradoras del Agua, del Seguro Social Campesino, Federación Médica, UNE, Unión General de Trabajadores.

Al igual que la organizada en el 2012, la marcha partió desde el cantón El Pangui en la provincia de Zamora y recorrió por varias provincias de la sierra hasta la ciudad de Quito. Los repertorios utilizados fueron los mismos que en esa ocasión, se desarrollaron rituales al agua, concentraciones y asambleas en cada una de las localidades a las que llegaban, además el cambio de mando en cada provincia, para que sean los actores locales los que protagonicen cada trayecto de la movilización como muestra de fortaleza y unidad.

La marcha inició el 21 de junio al sur del país y la Asamblea Nacional decidió someter a votación el cuerpo legal el día 25 de junio, cuando los manifestantes apenas habían cruzado por la provincia del Azuay, es decir, aún les faltaba casi 10 días de recorrido, para cumplir con su objetivo. La ley no modificó lo planteado por Rafael Correa mediante el decreto 310 y se mantuvo la idea de una autoridad única del agua.

Entre las competencias y atribuciones que señala el artículo 18 del proyecto de ley – que ahora irá al Ejecutivo para su sanción parcial o total- están: establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica, definir la delimitación de administrativa de las unidades hidrográficas, otorgar autorizaciones para los usos y aprovechamientos del agua, fijar mediante la aplicación de criterios técnicos y actuariales las tarifas para el uso y aprovechamiento productivo, entre otras. (...) También el Consejo Intercultural y Plurinacional que tendrá voz, pero no voto y que estará conformado por representantes de varios sectores involucrados con el agua (Kipu 63 2014, 428).

Las organizaciones indígenas de Chimborazo, Tungurahua, Napo, Cotopaxi e Imbabura que respaldaban al régimen participaron de una celebración organizada por Alianza País luego de la votación. Mientras tanto la CONAIE-ECUARUNARI y los demás marchantes decidieron continuar con su actividad puesto que la movilización tenía varias demandas además del rechazo a la Ley de Recursos Hídricos, además decidieron declararse en desobediencia ante el cuerpo legal que no incluye sus planteamientos. El 1 de julio llegaron a la capital los manifestantes, que a diferencia de la movilización del 2012, se evidenciaba una cantidad mucho menor de manifestantes.

Decenas de grupos sociales e indígenas y de partidos políticos como Avanza se convocaron frente al Palacio de Carondelet con banderas y grandes carteles. El ambiente fue de fiesta ya que se instaló una tarima donde la música llamaba la curiosidad a transeúntes y turistas.

Con la presencia de varias autoridades de la Asamblea Nacional y ministros de Estado, el presidente Rafael Correa saludó a los manifestantes. Delia Caguano, presidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), le entregó una vasija de agua en nombre de sus compañeros.

La dirigente entregó también un manifiesto con 7 puntos que reivindican el apoyo mayoritario al Gobierno. El primer ítem es el respaldo a la Ley de Aguas, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional. “Mashi Presidente, apoyamos y defenderemos esta Ley que nos garantiza vivir dignamente”, expresó Caguano.

El colectivo respalda además el Código del Trabajo; el aprovechamiento de los recursos naturales; el cambio de la matriz productiva; la Ley de Comunicación; la inversión social; y la reelección indefinida (El Telegrafo 2014, http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=wap_news_view&id=2818765531).

Esta acción evidenció, por un lado, la poca capacidad de convocatoria por parte de los dirigentes de la ECUARUNARI-CONAIE para concretar una actividad tan larga como una movilización de 15 días, además de la poca planificación de la misma, puesto que su acción no tuvo ninguna repercusión en la agenda legislativa y el tema convocante de la Marcha fue aprobado a los pocos días de puesto en marcha el repertorio. Por otro lado también se logra ver la mayor fragmentación de las organizaciones de la sierra central puesto que estas fácilmente se movilizan en respaldo del gobierno central contrariamente a lo dispuesto por las

organizaciones nacionales. También es evidente un deterioro del resto de organizaciones sociales puesto que, a pesar de contar con la participación de múltiples sectores, no se logra realizar una acción contundente.

La última confrontación del 2014 entre el gobierno y la CONAIE inició el 11 de diciembre cuando los dirigentes indígenas recibieron la notificación de finalización del comodato que mantenían desde la década de los 90 con el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES) como parte del proceso de lucha que han emprendido las organizaciones indígenas. Según la notificación, el fin del comodato se debe a una necesidad urgente del ministerio, sin embargo los dirigentes indígenas aseguran que es parte de las estrategias del gobierno por debilitar la organización.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) deberá devolver su sede al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La notificación llegó hoy, 11 de diciembre, a Jorge Herrera, presidente de la Conaie. El documento está firmado por el coordinador general Administrativo Financiero, Marco Cazco. Allí se explica que el convenio de comodato entre la Conaie y el entonces Ministerio de Bienestar Social se da por terminado. El movimiento indígena tiene un plazo de 15 días laborables para entregar su edificio matriz en Quito, ubicado al norte en la Av. 6 de diciembre y Granados. El argumento, según indica la resolución, es “la necesidad imprevista y urgente de contar con inmuebles para que sean destinados al funcionamiento de casa de acogida para jóvenes y adolescentes sin referente familiar que han superado la etapa de crisis por desintoxicación” (El Comercio 2014, <https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-abandonar-sede-ecuador-mies.html>).

Esta acción gubernamental generó el despliegue de un sinnúmero de solidaridades, nacionales e internacionales con la organización indígena, quien emprendió una vigilia permanente para no ser desalojada del edificio en donde funcionan sus oficinas. En medio de un ambiente festivo y de actividades artísticas y políticas permanentes se mantuvieron cientos de personas evitando que sean desalojados. Por su parte, el gobierno nacional establece una organización paralela a la CONAIE denominada Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana.

El objetivo de la alianza, según se explicó (Doris Soliz), es aglutinar a las bases del sector indígena y establecer una agenda para consolidar el Estado plurinacional, que manda la Constitución.

(...) El presidente Rafael Correa ha referido que la medida (desalojo de la casa de la CONAIE) fue adoptada porque la Conaie mantenía un “uso político” del inmueble y no un fin organizativo, por el cual fue entregado hace más de dos décadas. ¿Por qué en esta coyuntura desde el Gobierno y desde AP se hace una convocatoria para una alianza indígena? El asambleísta Gilberto Guamangate (AP, antes PK) ofrece esta explicación: “Porque lamentablemente la dirigencia de todas las organizaciones indígenas a nivel nacional no ha tenido la capacidad de convocar ni de impulsar los grandes cambios (...). Vemos con desesperación que no existen propuestas macro que ayuden a enrumbar a este sector (el indígena), y que aporten con propuestas en la construcción del Estado plurinacional” (El Universo 2015, <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/02/nota/4392711/oficialismo-construye-alianza-indigena-paralela-conaie>).

El Movimiento Indígena presentó un recurso legal para que el gobierno analice la situación de su sede. Un día antes de que se cumpla el plazo para el desalojo, la Ministra Betty Tola anunció que no se desalojará a los indígenas hasta no analizar dicho documento y que el trámite demorará al menos dos meses (Ecuavisa 2015). Esta acción se sintió como un triunfo para las organizaciones indígenas y sociales, que además permitió que la CONAIE sea vista como un referente de resistencia ante la política de la Revolución Ciudadana, esta percepción fue ampliada a espacios organizativos y académicos de varias partes del mundo que mostraron su solidaridad y respaldo al Movimiento Indígena que ha sido un referente de lucha por más de 20 años.

600 pensadores, científicos, humanistas, artistas e intelectuales de muchos países, entre ellos Noam Chomsky, Aníbal Quijano, Adolfo Pérez Esquivel, Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, Frei Betto, Elsie Monge y el propio Galeano, han repudiado la decisión de despojar de su pequeña capital a la organización porque se dan cuenta que es una disposición de tinte colonialista, que revela el deseo de terminar con el postulado del Estado Plurinacional que figura en la Constitución de Montecristi (Almeida 2015, <https://lalineadefuego.info/2015/01/20/conaie-carta-a-los-medios-de-comunicacion-por-ileana-almeida/>).

2.4. Episodio 4: Levantamiento Indígena y huelga nacional de agosto de 2015

El año 2015 existieron varios puntos de desacuerdo con el régimen, la Ley Tierras y Territorios, el decreto 16,⁴³ la criminalización de la protesta social y sobre todo las enmiendas constitucionales que incluían la posibilidad de la reelección indefinida de todas las autoridades de gobierno. El 19 de marzo se realizó la primera marcha en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país y fue convocado por un amplio sector. No se trataban de reivindicaciones específicas sino de demostrar el malestar hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Estaban en primer término los trabajadores organizados, en una cantidad superior a la de marchas anteriores, por sus derechos laborales y contra los despidos. También destacó la masiva presencia de estudiantes y jóvenes contra las trabas para el ingreso a la universidad y las reformas educativas que elitizan la educación y la funcionalizan al interés de las grandes empresas capitalistas. Además, la expresión más organizada y consciente de los indígenas y campesinos por la Ley de Tierra y la defensa de los recursos naturales frente la voracidad extractivista. En igual sentido las organizaciones ecologistas y los Yasunidos. También fue visible la presencia de mujeres denunciando el Plan Familia y las declaraciones de Correa y algunos funcionarios gubernamentales de contenido ultraconservador y moralista sobre temas vinculados a al embarazo de las adolescentes y la sexualidad. Los jubilados también mostraron su energía para protestar por el desfinanciamiento y la mala atención del Seguro Social. Se expresaron adicionalmente varios sectores y gremios como el de los médicos, los colectivos GLBT, artistas y trabajadores de la cultura y otros más. Quizá lo que motivó a salir a la mayoría fue gente es el malestar que siente por el impacto del costo de la vida que se verá incrementado por las llamadas salvaguardias a las importaciones. Otro tema clave es el control autoritario que practica el gobierno y la paulatina pérdida de libertades y derechos. Al final el grito que dominaba fue: ¡Fuera Correa Fuera! (Merino Serrano y Solís, 2015, <https://lalineadefuego.info/2015/03/31/la-gran-jornada-de-protesta-nacional-del-19-de-marzo-por-miguel-merino-serrano-y-luis-xavier-solis-t/>).

La marcha que cubrió alrededor de 22 cuadras en el centro histórico de la capital, fueron minimizadas por el gobierno central y como es costumbre, en la plaza de la independencia se realizó un acto con la presencia de simpatizantes del régimen. Los manifestantes no pudieron

⁴³ Se trata de un decreto ejecutivo emitido en el 2013 que regula la formación de organizaciones sociales, todas ellas deben ser aprobadas y reguladas por el Estado y ha servido de instrumento para cerrar a una organización ecologista y amenazar a otras con el cierre, incluidas las indígenas.

ingresar a las inmediaciones del palacio de gobierno y se concentraron en la plaza de San Francisco, la misma que se llenó por varias ocasiones.

Hasta el mes de julio se realizaron varias marchas en la ciudad de Quito, muchas de ellas eran de carácter multitudinario y concentraban principalmente a ciudadanos urbanos no organizados que reclamaban por las enmiendas constitucionales, de forma especial por la intención de abrir la posibilidad a la reelección indefinida. En medio de un ambiente convulsionado las organizaciones sociales hicieron un llamado a una huelga nacional y el movimiento indígena a un levantamiento, el mismo que se realizaría en el mes de agosto. Por su parte el gobierno abrió el diálogo con sectores sociales afines al régimen y desarrolló una serie de eventos en distintas provincias. Los dirigentes indígenas y gremiales de la oposición dijeron que estarían dispuestos a dialogar si se lo hace directamente con el presidente y sobre los planteamientos que ellos tenían, no se llegaron a acuerdos y las medidas de hecho se continuaron planificando.

Por decisión de las bases la marcha indígena partió de Zamora el 3 de agosto,⁴⁴ con el fin de llegar a la capital el 13 de ese mes para coincidir con el paro nacional. La educación bilingüe, la oposición a la Ley de Tierras y Territorios y las enmiendas constitucionales eran los temas impulsados por los indígenas. Los sindicatos de trabajadores reclamaban por la Ley Laboral y por la decisión del gobierno de dejar de aportar el 40% de las pensiones a los jubilados; para los estudiantes la demanda principal era el libre ingreso a la universidad. Nuevamente la convergencia de demandas y actores era la tonalidad de la movilización así como también la utilización de repertorios.

Si bien la marcha desde el sur del país ya se había usado en varias ocasiones en los últimos años, esta vez al tratarse de una huelga y un levantamiento, se volvió a ver un repertorio usado en la década de los 90 que es el bloqueo de las carreteras con grandes piedras y troncos de árboles que eran difícilmente retirados por militares y policías. En la capital, el día 13 de agosto, estudiantes universitarios bloquearon las principales vías de la ciudad y quemaron llantas en varios puntos de la urbe.

⁴⁴ Se acompañó a esta movilización en varios tramos desde la provincia de Chimborazo hasta su llegada a la ciudad de Quito. La experiencia fue registrada en un diario de campo, la misma que se presenta en este trabajo de investigación.

La fuerza pública estuvo presente a lo largo de toda la marcha, con operativos de control a vehículos que transportaban manifestantes así como para impedir el paso a determinados lugares donde se encontraban concentrados los simpatizantes del gobierno. La marcha se nutría en cada ciudad por la que atravesaba, Riobamba y Ambato por ejemplo, contaron la participación de pobladores urbanos que respaldaban la acción, mientras que muchas de las bases indígenas se encontraban en las concentraciones que realizaba el gobierno (Notas del diario de campo, agosto 2015).

Las acciones fueron principalmente pacíficas, sin embargo existieron momentos de confrontación y uso excesivo de la fuerza pública, así como también más de un centenar de detenidos que posteriormente fueron judicializados.

En el Chasqui (Cotopaxi), indígenas de la Sierra centro de Ecuador bloquearon el paso por la vía Panamericana, la principal arteria de conexión entre Quito y el sur de Ecuador. Camiones llenos de militares y policías llegaron a desalojar a los manifestantes para reabrir el paso vehicular. La violencia se desató cuando el Ministro del Interior José Serrano, llegó a la vía El Chasqui. La presencia de Serrano para dialogar con los manifestantes se convirtió en un enfrentamiento entre indígenas y miembros de la fuerza pública. Se registró uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las FFAA y policías en contra de los marchantes, especialmente uso de bombas lacrimógenas, gas pimienta, golpizas y 4 detenciones por el presunto delito de paralización del servicio público establecido en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (...)En horas de la tarde los marchantes tuvieron fuertes enfrentamientos con miembros de la policía nacional en la Plaza de Santo Domingo, La Merced y Plaza Chica, por nombrar algunos. Uno de dichos enfrentamientos frente a la Iglesia de la Merced concluyó con la detención del líder de la Ecuarrunari, Carlos Pérez Guartambel; la periodista y catedrática franco-brasileña Manuela Picq y Katy Betancourt, líder de mujeres de la CONAIE. La detención se produjo cuando un grupo de manifestantes empujaban palos contra un cerco policial. Inesperadamente, varios miembros de caballería y motocicletas arremetieron contra los presentes. En este operativo se detuvieron a varias personas en las calles del Centro Histórico de Quito (Cedhu 2015, http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=50&limitstart=2).

A pretexto de la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi, el presidente de la República declaró el estado de excepción en todo el país, por lo que la represión y criminalización se agudizaron en los días siguientes.

La cifra de detenidos que registró la CONAIE desde el jueves 13 de agosto fue de cerca de 151 personas. La mayoría de detenidos se registraron en Quito, Saraguro y en el Puyo. En contraste un reporte de la Fiscalía dijo que durante los seis días de protestas, en varias provincias del país hubo 111 detenidos. La Fiscalía formuló cargos contra los detenidos por delitos como resistencia a la autoridad y paralización de servicios públicos, entre los más utilizados (Cedhu 2015, http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=50&limitstart=2).

Tras varios días de haber llegado a Quito, los indígenas retornaron a sus comunidades y se declararon en asamblea permanente para estar vigilantes de las decisiones gubernamentales y de la Asamblea Nacional. En septiembre se realizó una nueva jornada de movilización en la ciudad de Quito que convocó a cientos de personas.

En el mes de diciembre se convocó a una nueva jornada de protestas ante la discusión en segundo debate de las enmiendas constitucionales, pese a la presencia multitudinaria de manifestantes la Asamblea aprobó el paquete de enmiendas en las que se incluía la reelección indefinida pero con una transitoria para que no se pueda postular a las elecciones el presidente Correa. Esta jornada de protesta también tuvo detenidos y enfrentamientos con la fuerza pública.

3. Acciones generadas por el gobierno direccionadas al Movimiento Indígena

Claro él también (Rafael Correa), producto de estas movilizaciones, porque si no, no hubiese sido el actual presidente Rafael Correa, por la misma crisis que generó y aparecieron sectores urbanos y sectores rurales a participar en estas movilizaciones y aparece y, claro, como uno se va visiblemente que luchado o que aparece en cierto momento el gobierno de Palacio, como que algún acuerdo, decretos a favorecer de alguna manera a la gente y se cree que va a ser bien las cosas y si hubo un acuerdo para cuando lance la primera vez un candidato, no.

Apoyamos también, votamos también en las elecciones; pero, luego ha tomado otro rumbo, más bien ha criticado negativamente a las organizaciones, a los dirigentes y muchas medidas y muchas normas legales no favorecen a todos los pobres y, particularmente, a los indígenas

como que hemos estado excluidos. Y si no está de acuerdo con su pensamiento, con su política, ha puesto al frente como enemigos, entonces eso, ha demostrado que traicionó también los principios de las organizaciones de la lucha, no está a la altura de que debe responder a las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas y del pueblo en general; pero, como maneja su estrategia política es como que aparece está respondiendo (Pedro León, dirigente indígena de Chimborazo, en entrevista con la autora 24 de abril de 2015).

Lo que manifiesta Pedro León, un dirigente indígena de Chimborazo y profesor de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, resume claramente el cambio en el discurso y accionar de la Revolución Ciudadana, como ya se ha dicho, surge como un líder carismático que logra capitalizar todo un proceso de lucha las organizaciones sociales y de la ciudadanía que no estaban conformes con la “partidocracia” ni con los planteamientos del FMI, se había generado una crisis profunda de institucionalidad que era posible restaurar con un cambio radical del sistema democrático.

Este primero período del gobierno de Rafael Correa comprende los años 2007 y parte del 2008, hasta la salida de Alberto Acosta de la presidencia de la Asamblea Constituyente. Desde la campaña electoral para la segunda vuelta hasta un primer momento de la Asamblea, era necesario contar con el respaldo de las organizaciones sociales y políticas de izquierda que validaran su proyecto político y respaldaran la transformación institucional que se requería. Sin embargo, cuando las demandas sociales y gremiales se alejaban de la idea de proyecto político de Alianza País, sobre todo en cuanto a la matriz productiva y su conflicto con los temas ambientales, se genera un distanciamiento con los movimientos sociales que respaldaban tesis ecologistas.

Para mí, me daba la idea que es un hombre que no tenía ninguna vinculación y no tenía un verdadero interés social en absoluto, siempre estaba con otras cosas en la cabeza. Sabíamos esta actitud de Correa y de la gente que estaba, porque nosotros nos preguntábamos y quiénes estaban alrededor, quiénes... y hablaba de individuos, por ejemplo, de movimientos sociales, quienes están impulsando esto. Al menos desde mi lectura dije este es solo nada más. Y claro empezó en ese momento a fraccionarse el movimiento Pachakutik, en la CONAIE también y ya se dio todo este debilitamiento en el proceso de la campaña, al menos estaban al lado de Correa, pero diciendo que hay que tratar de jalarlo a nuestro lado con este discurso.

Yo creo que con este discurso, desde mi lectura digo y creo que algunos otros compañeros, por más que se dio ya cuando ganó las elecciones en la segunda vuelta, Pachakutik decidió votar por Correa y votamos por Correa, yo también voté ahí la primera y última vez que voté por Correa. La gente estaba muy inquieta, y sobre todo algunos sectores apurados por construir una propuesta y entregarle a Correa y me pareció bien, pensé, no perdemos nada, hay que acercarse y entregar la propuesta.

Desde ahí empezó a decir no, ustedes no van a decirme aquí traigo la propuesta y esto quiero que haga; yo como presidente de la república voy a estudiar, voy a compartir con los demás compañeros y vamos a ver si esto es realizable (Luis Macas, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril 2015).

Como se ha dicho, el modelo postneoliberal impulsa una matriz económica basada en la reprimarización de la economía por lo que es necesario recurrir a la explotación de recursos naturales, mineros principalmente. Por otro lado el gobierno de la Revolución Ciudadana impulsa como parte fundamental de su proyecto político el Sumak Kausay o Buen vivir, un concepto indígena de armonía entre el ser humano y naturaleza. Para que estos dos conceptos puedan ser compatibles, es necesario vaciarlo de contenido y menospreciar cualquier voz contraria a la tesis oficialista. Así inicia un período de confrontación directa con el movimiento indígena y cualquier otro sector que se oponga o cuestione las decisiones del Presidente de la República (Mazzolini 2016).

Ahora cogió por ejemplo la consigna del sumak kawsay y les está degenerando el significado del sumak kawsay, este gobierno lo ha degenerado y es hasta una burla que venga a decir que lo que está haciendo es sumak kawsay, con el endeudamiento y las carreteras ahí, o el sumak kawsay con el extractivismo, degradando las tierras o la firma del TLC quitando la posibilidad de generar ingresos para los pequeños agricultores, o sea eso para mí es una degeneración de lo que es el significado del sumak kawsay, a pretexto de sumak kawsay nos está apaleando. Si yo digo eso no es, y le sigo diciendo a este gobierno haga el sumak kawsay, no lo va a hacer porque no está convencido y no es de él (Blanca Chancoso, Vicepresidenta de la Ecuarrunari en entrevista con la autora, 9 de abril de 2015).

A partir del año 2009 la imagen de Rafael Correa como el líder absoluto se va consolidando, de tal manera que cualquier discrepancia, al interior del partido de gobierno o de la sociedad en general es considerado como un ataque a la imagen del “caudillo”, como una traición

directa o como una declaración de guerra, por lo que debe ser silenciada y minimizada. No existe ninguna posibilidad de descenso o discrepancia.

A diferencia de este gobierno que lleva más de ocho años, que el discurso es de izquierda; que ataca diciendo que *soy de izquierda* y que, efectivamente, todo lo que hace más allá de todas las obras de infraestructura que es una cosa distinta; pero respecto de lo ideológico, es de derecha.

Entonces, los primeros años, todo el que se opone es de derecha. Maniataba, no solo a los indígenas, maniataba al progresismo, a la izquierda que no es única. Nosotros hemos mirado que, dependiendo de ciertas corrientes, las izquierdas son varias pero están apuntalando hacia los cambios estructurales o así era lo que en las universidades nos enseñaron. Entonces, manejarse un discurso de izquierda para atacar, incluido a los de izquierda es porque ya es del otro lado, es de derecha y ya no solo eso sino, lo más grave, mirarle como a enemigo que ya rebasa el sentido de la democracia y es un nacionalismo fascistoide que estaríamos, diríamos, las condiciones son distintas mirándoles, incluso, como gobiernos de corte occidental, de corte neoliberal, de corte... Yo creo que tiene sus matices este gobierno, que también sabe identificarlos muy bien (Nina Pacari, líder indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Pese a este alto nivel de confrontación, continúa teniendo un alto nivel de aceptación y respaldo popular, si bien no cuenta con una base social articulada y organizada, su popularidad y respaldo se deben a las políticas redistributivas impulsadas en los sectores más empobrecidos del país y que históricamente habían sido abandonados por todos los gobiernos. Sin embargo, para poder movilizar a esta base social, en las múltiples contramarchas o eventos de respaldo, fue necesario activar toda la maquinaria gubernamental a través de la entrega de recursos económicos, movilización o amenazas de despidos a los funcionarios públicos, es decir, su respaldo.

Un tercer momento en la transformación de discurso correísta fue precisamente a partir de año 2013 cuando se empiezan a implementar la mayor cantidad de políticas con ideología de derecha y se genera una mayor persecución a los líderes sociales que se oponen a sus posturas. Se deja de recurrir a las Consultas Populares que en el período inicial eran parte importante de su modelo de gobierno, para tramitar temas de reformas constitucionales a través de su mayoría parlamentaria, incluso en contra de la propia legalidad, pero al tener controlados todos los poderes del Estado. Pese a que el lineamiento político es visiblemente

contrario a su postulado inicial, el discurso sigue siendo revolucionario y de izquierda lo que genera cierta confusión en algunos sectores sociales y promueve la división de las organizaciones. Al cooptar dirigentes, el proyecto político y el discurso, un gran parte de la población continúa apoyando a la Revolución Ciudadana. De hecho, la popularidad del presidente Correa es tan alta que genera apasionamientos que promueven una fe ciega por parte de sus seguidores, así como también despierta profundos rechazos.

En este rato, no creo solamente que el impacto del vaciamiento político desde el poder central se está dando sobre el movimiento indígena sino sobre toda la sociedad, es terrible como hay una desorientación total, que aquí solamente hay que mirar las obras como que eso es lo que esperaba hacer y tener el Ecuador. Ver las carreteras, el centro de salud, la escuela (...) Y ahora nos sentimos expropiados de nuestro propio discurso, ahora ya lo utilizan otros y quedamos lejos todavía para poder sosteniendo, no el discurso, sino la propuesta (Luis Macas, líder indígena, en entrevista con la autora, abril 2015).

La acción gubernamental ha impactado en las organizaciones y en la ciudadanía generando una desmovilización generalizada. Decisiones políticas que en el pasado hubieran generado una revuelta social de tal magnitud que derrocaron presidentes, en el gobierno de Correa, en el mejor de los casos, ha promovido contiendas puntuales que no han significado un real impacto en la relación gobierno-movimientos sociales. Así ha logrado concretar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, aprobar leyes como la de las herencias y realizar enmiendas constitucionales que permiten la reelección indefinida.

Ahorita mismo usted sabe que está arrodillado ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario Internacional. Están ya sobre los 35 000 000 millones de dólares de deuda externa, están ayudando a neocolonizar esta tierra, es como un mayordomo de una hacienda, por eso este pueblo está indignado con esta política. (César Buelva, dirigente del Seguro Social Campesino, en entrevista con la autora, agosto de 2015).

Pese a que es evidente la transformación del discurso y la práctica política del gobierno de la revolución ciudadana, tanto el presidente Correa, como sus coidearios continúan sosteniendo que se trata de un proceso revolucionario, que como todo, posee debilidades que deben ser corregidas.

Siempre venimos trabajando en ese sentido, y sobre todo, nosotros como Chimborazo, como movimiento de Pluralidad Nacional Pachakutik siempre hemos estado sentados en el desarrollo y que hoy por hoy muchas propuestas que se desarrollan en este gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo que nosotros estamos mencionando es que todas nuestras propuestas están acogidas en este proceso y en base a eso se está construyendo colectivamente. Claro, por supuesto que aún falta todavía la inclusión, aún falta todavía trabajar mucho en lo que tiene que ver de los pueblos y nacionalidades mismo, aún falta bastante por ejemplo la educación intercultural (Elvira Muñoz, Asambleísta por Alianza País, en entrevista con la autora, mayo 2015).

El gobierno ha implementado varias estrategias para la desarticulación de la organización social, muchos de sus dirigentes reconocen la contradicción en el discurso del gobierno nacional, sin embargo la capacidad de reacción es mínima.

El asunto es que han sido gobiernos y han hecho lo que les ha dado la gana, no es que han hecho la relación. La relación es en el marco de un respeto; ni este gobierno ha podido hacer lo que los indígenas quieren, eso le he dicho yo a los ministros, al propio Rafael Correa, yo he dicho que están en deuda con los indígenas (Miguel Lluco, dirigente indígena, en entrevista con la autora, 2016).

A continuación veremos las principales acciones desarrolladas por la Revolución Ciudadana para el debilitamiento y división de las organizaciones indígenas que son: 1) descorporativización, 2) cooptación y creación de organizaciones paralelas y 3) criminalización de la protesta social.

3.1. Descorporativización

Este gobierno que dice que está haciendo la revolución ciudadana, una revolución no se hace cerrando escuelas, una revolución no se hace dejando en la desocupación y más que todo utilizando a los pobres para ellos estar siempre en el poder (Estuardo Remache, dirigente indígena, en entrevista con la autora, 2016).

Para la Revolución Ciudadana, el que exista corporativismo es peligroso y perjudicial por dos razones: “por un lado pervierte a las organizaciones por la cooptación y manipulación del Estado, y por el otro, contamina de particularismos al Estado borrando una necesaria “separación funcional” con la búsqueda del bien común” (Ospina 2010, 3). El modelo de

Estado que construyó el proyecto político de Alianza País implica la desaparición de cualquier interés particular que pueda opacar un proyecto “histórico y nacional”, por lo tanto, son tratados de igual manera gremios empresariales y financiero que los representantes de sectores populares como los sindicatos de obreros públicos, de maestros y de las organizaciones indígenas.

Para la eliminación de la participación social organizada dentro de las instancias estatales se ha recurrido a dos medidas de carácter legal. Por un lado con la aprobación de la Constitución de 2008, la participación ciudadana está regulada a través Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que selecciona a las personas individuales, sin vínculos partidistas u organizativos directos, a través de los concursos de méritos y oposición, que, como se ha visto en todo su período de funcionamiento, ha dejado serias dudas sobre su efectividad y su supuesta falta de vinculación política, especialmente con el partido de gobierno.

Por otro lado, se han diseñado otras series de leyes y reglamentos que excluyen a las organizaciones sociales, especialmente a las indígenas del manejo de las instituciones que han sido entregadas a estas organizaciones como parte de la renegociación del pacto de dominación en la década de los 90 así por ejemplo:

En junio de 2006 el Congreso Nacional aprobó una Ley Orgánica sobre las instituciones indígenas en el Ecuador impulsada por iniciativa de la CONAIE y de sus diputados. En esta ley se unificaba al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), la Dirección de Salud Indígena (llamada ahora Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador) y al FODEPI (llamado ahora Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador). Estas entidades públicas eran autónomas y no estaban adscritas a ningún ministerio (Congreso Nacional 2007). Se trataba de organizar y unificar las instituciones nacionales dedicadas a políticas indígenas poniéndolas bajo la autoridad de las organizaciones. En las antípodas de esta idea, el gobierno ciudadano eliminó la autonomía de todas las instituciones indígenas y puso todas las políticas bajo la autoridad de los ministros respectivos. Este conflicto se acentuó a fines de enero de 2009 con el anuncio de que no se le entregarían fondos al CODENPE (12 millones de dólares) y que se aceleraría su conversión en el “Consejo Nacional por la Igualdad” previsto en los arts. 156 y 157 de la Constitución de 2008, cuyo directorio estará formado paritariamente por representantes gubernamentales y sociales y su

presidente será el delegado del ejecutivo (es decir, con voto dirimente) (Ospina 2010, 5).

Según los argumentos de la Revolución Ciudadana, la corporativización de espacios como la educación intercultural bilingüe o el sistema de salud indígena, ha entorpecido el adecuado funcionamiento de estas instituciones y se ha transformado en un “botín político” de las organizaciones que la usan de manera clientelar. Bajo esta argumentación se realizaron todas las modificaciones antes mencionadas, pero si se hace una evaluación de su eficacia, tampoco la descorporativización ha mejorado la calidad de la educación o salud indígena, así por ejemplo, Elvira Muñoz Asambleísta indígena de Chimborazo de la alianza AP-MUPP, afirma que la construcción de escuelas en el sector rural no responde a la realidad, principalmente porque los que elaboran las leyes y políticas desconocen la vida rural.

Por supuesto que falta un poco la planificación, en eso siempre estamos coordinando con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, a ratos solamente ven el mapa pensando que a un kilómetro de distancia pueden ir; pero no saben que en ese kilómetro tienen que cruzar ríos, que tienen que cruzar quebradas, que tienen que dar una vuelta, no solo por ese kilómetro sino por 3 kilómetros y no se ha tomado en consideración eso. Yo creo que eso también es solucionable conversando y planificando (Elvira Muñoz, Asambleísta por Alianza País, en entrevista con la autora, mayo 2015).

Por otra parte, el argumento de dejar en libertad a las organizaciones de la manipulación estatal para su fortalecimiento, en la práctica resulta ser todo lo contrario, especialmente con la promulgación del Decreto 16 y sus reformas, que someten a un estricto control por parte del Estado a las organizaciones de la Sociedad Civil, puesto que no solamente deben ser reconocidas legalmente por algún ministerio como era anteriormente, sino que sus estatutos son aprobados bajo un mismo formato y al autoridad tiene el poder de anular su personería jurídica en caso de que se considere que se están alejando de los fines para los que fueron creados, especialmente cuando se trata de su participación actividades políticas. Estas acciones han generado el cierre de una organización ecologista que se oponía a la concesión de nuevos campos petroleros y también a amedrentado a otras organizaciones que generan cualquier tipo de oposición al régimen.

Esta práctica resulta contradictoria con una ideología socialista, a la que dicen adscribirse los miembros de Alianza País, puesto que niegan cualquier tipo de participación y

representatividad, incluso partidaria, a muchos de los sectores históricamente excluidos que no necesariamente se suscriben a los planteamientos de la revolución ciudadana. Esto solamente agrava la crisis de representación que se viene viviendo desde finales de los 90 (Ospina 2010).

Para los pueblos indígenas el no poder decidir sobre su sistema de educación y salud no solamente implica la pérdida de un espacio de poder, sino que además amenaza con el proceso de subsistencia cultural puesto que la educación intercultural bilingüe era pensada como un espacio de reproducción y mantenimiento de los saberes indígenas y que su cosmovisión sea transmitido a las nuevas generaciones.

3.2. Cooptación de dirigentes y creación de organizaciones paralelas

Yo diría que efectivamente, a nivel de gobierno, nos mirarán de pronto desde la inmovilización pero los trabajos que hemos ido realizando este año, se le declaró como el año de la resistencia, el gobierno lo que ha pretendido es cómo acabar o dismantelar con la CONAIE; pero la CONAIE, como le señalé al inicio, no es la suma de individuos, no es 10 o 20 personas para que se pongan a armar otra organización, por eso es un fracaso también lo que el gobierno estaba al frente con unas siete personas ya tales están de responsables y a organizar, cuando ni siquiera tienen que ver nada con la comunidad, por así decirlo (Nina Pacari, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Con el pasar del tiempo, la figura de Rafael Correa se ha venido consolidando como la única voz autorizada dentro del régimen y se han cerrado los canales de diálogo entre la sociedad civil y el régimen. Ante la opinión pública de oposición, esto ha sido un gesto negativo que le da un tinte dictatorial a la administración de Correa, para contrarrestar los efectos que esto pueda causar y para contar con una base social medianamente organizada, el gobierno ha promovido la creación de organizaciones sociales afines a su propuesta política. Así por ejemplo, mientras ha atacado sistemáticamente a la Unión Nacional de Educadores, afín al Movimiento Popular Democrático, el gobierno creó una organización del magisterio paralela que respalde sus decisiones.

En su discurso, Santacruz anunció una agenda de trabajo conjunta entre autoridades educativa y el magisterio nacional para buscar coincidencias y buscar mecanismos para procesar las diferencias. "La Red de Maestros nació con la convicción de ser una organización gremial y clasista que vele por los derechos de los maestros. Nos identificamos con el Buen Vivir,

creemos que la educación de calidad es un derecho de todos y un deber inalienable del Estado, aplaudimos los planes del Gobierno para el sector educativo, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la eliminación del cobro de matrículas, respaldamos la evaluación de los maestros, la capacitación y el desarrollo profesional docente" (El Universo 2015, <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/02/nota/4392711/oficialismo-construye-alianza-indigena-paralela-conaie>).

Una situación similar se vive con el Movimiento Indígena con la creación de la Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana que se formó a finales de 2014 mientras el gobierno y la CONAIE disputaban sobre el comodato de la sede de esa organización indígena. Los planteamientos de esta Alianza estaban encaminados a respaldar las transformaciones emprendidas por el régimen, negaron la representatividad de los dirigentes de la CONAIE y se proclamaron como los reales delegados de los pueblos y nacionalidades.

Un grupo de organizaciones se autoconvocaron hoy conjuntamente con representantes de Alianza PAÍS y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) para dialogar y acordar la creación de un espacio de renovación y trabajo conjunto, en el marco de "aportar a la construcción de la Revolución Ciudadana desde las organizaciones indígenas", según un comunicado de prensa, enviado por PAÍS. "Partimos de constatar que este proceso de cambio que vive Ecuador ha conseguido importantes conquistas y transformaciones para bien de los pueblos y nacionalidades indígenas, y que tiene que continuar y potenciarse con una mayor y mejor participación del Movimiento indígena. Este proceso de cambio reconoce los aportes históricos de las mejores luchas por la justicia y la igualdad", señalan. Los participantes de estas organizaciones rechazan "la manipulación de una falsa dirigencia indígena como representante del Movimiento indígena, que históricamente ha sido diverso y propositivo, jamás aliado de la derecha ni obstruccionista, como la actual vieja y oportunista dirigencia de la Conaie" (El Telegrafo 2014, <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/organizaciones-proponen-alianza-indigena-por-la-revolucion-ciudadana>).

Pese a su aparente independencia y legitimidad, este colectivo indígena esté liderado por Carlos Viteri, quién fue asambleísta por el partido oficialista, así como también la Alianza ha sido organizada y promovida por la Secretaria Ejecutiva de AP, quien en algún momento también formó parte del Movimiento Pachakutik.

Como es evidente, estas organizaciones, al no responder a una demanda específica o poseer un proceso enmarcador fuerte que promueva el proceso organizativo, sino más bien que se generan por la oportunidad de recibir algún beneficio por parte del Estado, tienen muy poca posibilidad de perdurar y estructurarse de manera sólida. Resultan ser solamente una ilusión para mostrar apertura al diálogo por parte del gobierno central y tener un grupo movilizado de forma clientelar que apoye la gestión.

Lo que pasa es que en efecto es una política descorporativizadora, eso es lo que está en el fondo y por eso es que no puede quedar organizaciones propias. Puede dividir organizaciones existentes; pero crear organizaciones propias no puedes, por qué no puedes; porque el corporativismo consiste precisamente en darle a organizaciones formales determinadas, organizaciones gremiales o territoriales, darles atribuciones estatales o cuotas de poder. Pero si tu no le das ningún poder de decisión sobre nada, ni siquiera cómo se van a distribuir el Bono de Desarrollo Humano, ni a qué familia van a ir; si las organizaciones no pueden decidir nada de nada, ni si la escuela se va a mantener o no se va a mantener, a qué se va a organizar la gente. Yo creo que el problema que tiene el gobierno es el que alcanza a dividir; pero, una política que destituye de todo poder político a las organizaciones, es imposible que cree organizaciones leales, porque las organizaciones estarán esperando que les den cosas y se movilizarán para que les den cosas; pero apenas les dejen de dar cosas, van a dejar de existir (Pablo Ospina, docente de la UASB-E, entrevista con la autora, mayo de 2015).

Así la descorporativización junto con la criminalización de la protesta social, la presencia estatal en la zona rural históricamente abandonada con políticas redistributivas pero que no son cambios estructurales y profundo y la creación de organizaciones paralelas, han generado una importante desmovilización y fragmentación de las organizaciones indígenas. En el siguiente apartado se analizará la división generada en la provincia de Chimborazo, identificando los actores y causas de esta ruptura.

3.3. Criminalización de la protesta social

Si bien la criminalización de la protesta social no fue exclusiva del gobierno de la Rafael Correa, en este período se vio un incremento significativo de los procesos judiciales impuestos a ciudadanos que haciendo uso de su derecho a la protesta expusieron sus opiniones contrarias frente a las acciones del gobierno. Todo esto invalidando los logros en cuanto a materia de derechos humanos se logró en el proceso constituyente del 2008, pues la Carta Magna en el Art. 98 expresa:

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos (Asamblea Nacional Constituyente 2008, 68)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la caracteriza como “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querrelas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos s.f., 1)

Las medidas de represalias generalmente esta correlacionadas con los movimientos que se oponen a los proyectos extractivos y todo aquello que vulnere los derechos de la naturaleza y la propiedad de la tierra, pero en este gobierno no solo afectaron a un movimiento social específico sino a todo aquel ciudadano que tuviera una opinión contraria. Se vieron criminalizados líderes y dirigentes sociales, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, periodistas, indígenas y campesinos.

La criminalización de la protesta social sobrepasa las instancias penales pues va de la mano del discurso deslegitimador. En las tan conocidas sabatinas el propio Rafael Correa utilizaba gran parte de su tiempo desprestigiando públicamente a sus detractores.

[...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los izquierdistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno” (...) “Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quien está detrás de todo esto (declaraciones del presidente Rafael Correa, 02 de Diciembre de 2007) (Acción Ecológica 2011, <http://www.accionecologica.org/criminalizados/articulos/1487-ecuador-criminalizacion-de-la-protesta-social-en-tiempos-de-revolucion-ciudadana>).

Ya para el 2012 la CONAIE demandaba el archivo de 204 procesos judiciales que por terrorismo y otros delitos se han iniciado contra compañeros de varias provincias del país.

Los dirigentes indígenas estarían siendo investigados por supuestos delitos de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, obstrucción de vías, delitos contra el ambiente, secuestros, injurias, usurpación, invasión de edificios, tentativas de asesinatos, plagio, atentados contra la propiedad, intimidación y captación ilegal de dinero (La Hora 2012, <https://www.lahora.com.ec/noticia/1101318362/la20criminalizaciefbfbdn20de20la20protesta20social>)

4. El caso de la COMICH como ejemplo de desmovilización indígena

El modelo político implementado por Rafael Correa que incluyó una mayor inversión en el sector social y una presencia permanente de gobierno central en los territorios, impactó en las bases indígenas que ya se encontraban debilitadas desde el período de Gutiérrez. Esto, se suma a las políticas orientadas al disciplinamiento social focalizadas principalmente a los movimientos sociales generaron dos grandes efectos en el movimiento indígena. El primero, que vimos anteriormente en cada uno de los episodios de contienda que fue, por un lado el cambio de la forma de presentar sus reivindicaciones, la mayoría de ellas fue realizada a través de los canales oficiales mediante acciones jurídicas, que si bien es cierto, anteriormente se hacían, este repertorio siempre iba acompañado de una presión callejera con una presencia multitudinaria; en el tiempo de la Revolución Ciudadana, se dio una primacía a las acciones jurídicas y el repertorio de movilización fue marginal y débil, a excepción de casos puntuales.

Por otro lado y posiblemente el efecto que mayor tiempo tarde en ser superado, es la fragmentación y ruptura de las organizaciones de base y de segundo grado que forma la Ecuarrunari, si bien hay varios ejemplos, el caso emblemático en este tema es el de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo y de Pachakutik en esa misma provincia que han roto la estructura orgánica de se ha caracterizado la CONAIE y han decidido apoyar abiertamente al gobierno de Rafael Correa. A continuación se revisa esta problemática.

Yo creo que Correa ha recogido lo que se criticaba en aquellos tiempos a los anteriores, para cooptar y dividir y lo que hizo es mejorar esos mecanismos como por ejemplo dándoles empleo a ciertos profesionales, porque quien no necesita trabajar, que de alguna manera tienen vínculos en las comunidades, con los dirigentes, son familias y en el caso de Chimborazo concretamente, es eso también, es parte de haber cooptado con las candidaturas indígenas y obviamente lo que en su vida han de lograr esos espacios, de pronto tener un espacios,

convertirse en prefecto (...). Eso es lo uno pero así para que hayan logrado, como en el caso de Chimborazo, ha sido que el Movimiento Indígena a partir de los 90 para acá se abrió bastante hacia los aliados, gente de izquierda no indígena, estudiantes o profesionales, intelectuales, de izquierda que les dieron espacio al interior del movimiento indígena, como una confianza y luego utilizaron esa confianza dada, que se les dio, como quien dice se entraron dentro de casa y conocían todo, nuestras debilidades, nuestros vacíos, y con mucha gente que no entendía mucho de esas cosas, quedaron siendo amigos, entonces, luego que para esta gente dichos de izquierda, que estaban juntos que eran aliados o que eran como hermanos, se les abrió los ojos, la oportunidad con este gobierno, entonces para mantenerse en los cargos con este gobierno, y ganarse la confianza de este gobierno, entonces se convirtieron en verdugos de los amigos, así yo digo, se han convertido en verdugos de los amigos y en la organización de querer romper porque como se conocen ya se fueron directamente a entrar y luego plantearse contra los compañeros y también conocen las debilidades, aunque la gente no se venta por un plato de arroz, pero ante las necesidades, si va y le ofrece X cosas igual porque este gobierno ha usado igual el arroz, utilizado cosas para dar, entonces también ante la situación actual, eso ha hecho que tenga facilidades de adentrarse más en el movimiento con estos mecanismos de rompimiento aunque no lo ha logrado todavía (Blanca Chancoso, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 20015).

Para Blanca Chancoso, uno de los factores que ha influido en el debilitamiento de la estructura de movilización indígena ha sido la presencia en el gobierno de personas que anteriormente militaban en Pachakutik y que eran cercanos a las organizaciones. La confianza depositada en esos actores se convirtió en el arma para la fragmentación de las organizaciones indígena principalmente, las mismas que ya se encontraban debilitadas como consecuencia de las alianzas políticas con Gutiérrez. Sin embargo, y como ya se ha dicho anteriormente, la división organizativa que promueve el gobierno de la Revolución Ciudadana responde a un modelo ideológico postneoliberal que requiere del disciplinamiento social. A manera de ejemplo, se revisa el caso de Chimborazo por ser una de las organizaciones que forman parte de la CONAIE, que visiblemente se ha visto más afectada por acción correista.

En el caso de Chimborazo se lo entiende porque ahí está gente como Lluco, él ya lo hizo con el Pachakutik antes, ya en la época de Gutiérrez, ya lo hizo Lluco, entonces lo reciclan a gente como él para el Gobierno es favorable, no importa que haya sido lo que haya sido. Quién era Lluco, defensor del banquero, no, entonces el gobierno manipula todo lo que tiene para dar la formalidad, la legalidad, les dio legalidad al grupo de Lluco y no le da la formalidad a los que no son del gobierno, entonces ellos con esa legalidad, siguen reivindicándose como si fueran

Pachakutik y le han remendado, como dicen los compañeros, con la bandera de Alianza País, prácticamente son de Alianza País, pero también es la actitud de los compañeros que están en la coordinación de Pachakutik, no han hecho mayor cosa como para exigir definición a gente como ellos y les mantienen todavía como miembros, entonces eso ya son cosas que tienen que rendir su cuenta, pero desde mi observación son ellos pero claro, también en el caso del Movimiento ciertos procedimientos ciertos comportamientos que se va cambiando, se va mirando, como que se ha aguantado bastante ahora, no han cambiado mucho de mecanismos, simplemente lo que han hecho es como una retirada, es eso, para mi realmente, porque nosotros antes de la CONAIE, nosotros en la ECUA si se ha mantenido un poco más porque hemos sido más celosos, nos hemos abierto a hacer las alianzas pero no más allá de la sala, máximo hasta la sala, no más allá, entonces si hemos logrado mantener. Incluso con mismos indígenas que no, que ya tenemos duda, no se ha permitido más allá de la sala. En cambio los compañeros posteriores, los dirigentes después de nosotros, en la CONAIE, les dejaron entrar hasta más allá de la sala, a los cuartos íntimos, entonces conocen todo, por eso yo si les califico como los verdugos del movimiento indígena. Y claro ellos bien ubicados en los puestos tienen un patrón para que les alimente bien, entonces ellos no tuvieron ningún empacho de venderse a ese nivel por la confusión que ayudaron a crear internamente (Blanca Chancoso, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

El Movimiento Indígena, nunca, ni en la década de los 90 cuando podía paralizar por completo al país, ha sido una totalidad armónica y unificada, siempre han existido discrepancias y conflictos internos, no solo entre organizaciones nacionales como la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, que en muy contadas ocasiones han actuado de manera consolidada, sino que al interior de sus propias filiales y organizaciones provinciales se han visto discrepancias. En el capítulo anterior, cuando se analizaba el impacto organizativo de la alianza electoral con Lucio Gutiérrez se identificó el fraccionamiento de una parte de las organizaciones de la Amazonía, así como también de ciertas comunidades de la Sierra centro, a esto Blanca Chancoso lo llamó el ciclón político y sus consecuencias han permanecido visibles hasta ahora.

Como se ha visto a lo largo de todo este capítulo, durante los más ocho años de Revolución Ciudadana, la capacidad movilizadora del Movimiento Indígena, así como de otras organizaciones sociales se ha visto visiblemente disminuí a excepción de acciones puntuales pero sin mayores oportunidades de incidir en las decisiones políticas ni colocar temas dentro de la agenda pública. La CONAIE-ECUARUNARI se ha visto cuestionada en sus decisiones

por dirigentes que aparentemente eran parte de sus organizaciones de base, el caso de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, ha sido la más visible y la más significativa por la importancia política de esa provincia y porque ha logrado que un importante grupo de comunidades y organizaciones de segundo grado se alineen con el gobierno nacional e incluso que el Movimiento Pachakutik mantenga una alianza electoral mientras que en el resto del país los indígenas se han mantenido en la oposición.

La división en Chimborazo tiene cuatro actores principales: Delia Caguana, Mariano Curicama y Miguel Lluco en el grupo de los aliados al gobierno nacional y Delfín Tenesaca que respalda las propuestas y el lineamiento ideológico de la ECUARUNARI. Como antecedente, es importante recordad que durante la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, el Movimiento Pachakutik mantuvo alianza electoral con el Movimiento País en determinadas poblaciones donde ambos movimientos poseían debilidad. El Partido Sociedad Patriótica, en el año 2007 aún mantenía una importante votación indígena en esa provincia, por lo que se decidió firmar un acuerdo puntal, el mismo que se rompió posteriormente con las desavenencias entre el movimiento indígena y el gobierno que ya se han expuesto con anterioridad. Pese a ello en varias contiendas electorales Pachakutik Chimborazo ha mantenido esa alianza electoral y tanto dirigentes del Movimiento político como de la organización provincial y el Prefecto han manifestado su respaldo a la revolución ciudadana.

Al realizar el trabajo de campo, cada uno de los actores⁴⁵ presentó su punto de vista y responsabilizaba al otro de las causas de la fragmentación de las organizaciones indígenas, es importante para este trabajo de investigación presentar los distintos puntos de vista desde la propia voz de los actores.

Para Delfín Tenesaca, el problema en Chimborazo se resume en los intereses personales que Delia Caguana y el prefecto Curicama ha manejado y desde esa perspectiva han manejado a las organizaciones a su favor:

⁴⁵ Pese a que se intentó por varias vías entrevistar al prefecto Marian Curicama, resultó imposible realizarlo, sin embargo se logró contar con el testimonio de Miguel Lluco y Delia Caguana por parte del gobierno y de Delfín Tenesaca por parte de la ECUARUNARI.

Primero, la Delia Caguana apareció una chica casi perdida de su identidad. Ella es de Quimiag. Vino, inclusive, no se hablaba el quichua, no vestía como indígena; y vino para formación de una escuela de formación religiosa donde yo estaba dirigiendo y, más tarde, se asumió como una cantora, animadora.

Luego participó, quizás, en varias reuniones, así sucesivamente de la vicaría; pero, desde el inicio, muy conflictiva. Quería generar, quizás, sus cosas y no que otros den opiniones y así, sucesivamente, conocemos algo y, de pronto aparece en un congreso, en el Congreso de Flores. Fui yo nombrado presidente y ella también aparece para asumir una dirigencia también ese rato, dirigencia de la salud. Tres años estuvimos en la dirigencia y, quizás, soportando un poco la presión de ella mismo de ahí con el Ministerio de la Salud, con lo de los yachaks y todo eso; pero podemos nosotros un poco control, es decir, no solamente violencia, ni insulto, ni amenaza, ni partidarios, estamos hablando del 2006. Y después, volvieron a reelegirme y ella empieza a pedir de favores a la gente, a las mujeres para que ella también vuelva a reelegir ella. Y, claro, una organización del CAMASH quizás favorece para decirles ‘bueno, nosotros le vamos a nombrar ojalá pero tienes que cambiar, tienes que llevar adelante, no solamente tener problemas’ y vuelve a ganar, claro.

Lamentablemente las necesidades nos han obligado, cuando fui electo como presidente de la ECUARUNARI, encargo al vicepresidente de esa época (2009); cuando ella comienza a manejar a ese compañero, manejar para su fin para hacer problemas, para hacer líos. Luego, caerles en las engaños, podríamos decir en una formación y en una información de ambiciones, más que todo, diciendo ‘tu vienes para acá, te vamos a dar esto’ y eso cayó en manos del prefecto de Chimborazo que es otra persona que siempre está manejando a la gente, manejando a los grupos y desde ahí comienza a manejarles, quizás, utilizar a la gente y no funcionar ya no con las comunidades, ya no con las organizaciones sino con los funcionarios y el Curicama como es acostumbrado a manejar con su grupo, manejó con los funcionarios del Consejo Provincial y le nombra presidenta del movimiento indígena de Chimborazo. Y, así directamente, después a las manos de Curicama, a las manos de Correa y, ahora, entre los dos también están peleados, lastimosamente, porque los dos están opuestos (Delfín Tenesaca, dirigente indígena, en entrevista con la autora, agosto 2015).

Por su parte Delia Caguana afirma que su vinculación con el régimen de Rafal Correa responde a la propia decisión de las bases por un lado y a responder a los compromisos políticos adquiridos con Alianza País por los acuerdos firmados por el propio Delfín Tenesaca.

A mí me eligieron, así mismo con un compañero de Cacha fue las elecciones y yo gané con casi seis votos porque era tenaz los temas contrarios que trabajaron sin ser Alianza País, sin haber conversado con Correa, a mí me dijo el compañero Delfín, los de la Conaie, los de la Ecuarrunari que soy correísta y yo dije 'jamás he conversado con el presidente, ni conozco, más bien yo siempre he estado en la lucha, en la ley de agua marchando igual, jamás he estado ahí' más bien, gracias a otros compañeros ex dirigentes de la Conaie, siempre hemos caminado juntos pero yo no estuve; pero sin ser nada me acusaron. También a las organizaciones, los mismo dirigentes de la Conaie cuando fuimos a participar en el congreso de la Ecuarrunari, no nos dejaron entrar a decir que son correístas, vende patrias (...) De mi parte no ha habido ningún acercamiento, nunca. Más bien ha sido que entré como presidenta ahí los mismo dirigentes de la Ecuarrunari, de la Conaie nos decían, nos acusaban de que somos correístas, entonces las bases se enojaron públicamente y dijeron vamos con Correa, vamos a reunir con Correa, compañera Delia y yo decía 'no, porque a mí me da vergüenza porque yo antes marchaba contra Correa' dijeron 'no mama Delia, usted es presidenta y por lo tanto vamos' (...) por pedido de las bases vamos y nos metemos ahí y también por presión del prefecto que decía que hay que ir con el gobierno, (...) entonces me metí en eso, entramos por primera vez en enlace sabatino aquí que hubo y conocí al presidente; ahí me dio vergüenza porque yo siempre estaba en contra de él (...), uno si tiene ética y moral, y me llevaron a la fuerza con el pretexto de que el presidente va a dar las casa al movimiento indígena y así también presente la propuesta solo del movimiento indígena, luego se pensó que no valía estar solo sino que otras provincias también quieren unirse al diálogo (Delia Caguana, dirigente indígena Chimborazo, en entrevista con la autora, 2016).

Como dice la propia Delia Caguana, la decisión de vincularse con el gobierno responde por un lado a la presión del Prefecto Curicama y por otra a la oferta de obras anunciadas por el gobierno central, así por ejemplo, el 23 de julio de 2014, el vicepresidente Jorge Glas inaugura la nueva sede de la COMICH en Chimborazo y la dirigente indígena compromete el respaldo de su organización a la gestión gubernamental en todos los aspectos (El Ciudadano 2014, <http://www.elciudadano.gob.ec/el-movimiento-indigena-de-chimborazo-tiene-una-nueva-casa/>). Otro momento importante que visibiliza la vinculación de la COMICH con el gobierno es durante la disputa por la sede de la CONAIE entre esta organización y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuando Caguana afirmó que las bases desconocían la existencia de un segundo inmueble propiedad de la organización nacional y que por tal motivo debían devolver al gobierno el edificio donde funciona sus oficinas.

Pese a esto, en múltiples ocasiones la COMICH negó su vinculación con el gobierno y continuaban participando de las reuniones de la CONAIE y ECUARUNARI, exponiendo tesis a favor del régimen e incentivando a participar en el diálogo con el régimen, así mismo afirmó que era la representante de una alianza entre varias organizaciones provinciales que abarcarían toda la zona centro.

Iba con tesis de gobierno y bueno, eso era cuando estaba entre que si era, que no era; pero, yo creo que, a partir de lo de la casa de la CONAIE, fue tan clara el hecho de ya no engañar y por otro lado, estaba apareciendo como coordinadora de las cuatro provincias Bolívar, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Nosotros conminamos a que, bueno ustedes que son las autoridades de acá de los Panzaleo, ¿ustedes la nombraron?, ¿ustedes la delegaron?, ¿ustedes qué? que nada. Entonces había que precisar y a ver dónde está y la han puesto propias autoridades de las propias provincias porque no le han delegado, no hay ninguna coordinación zona centro, ni nada de eso. No responde a la estructura organizativa. Ahora que quieran engañarle a Correa diciendo que está coordinando y tengan que hacer esfuerzos por sacar algunas gentes pues no y, en la última movilización no les fue bien. (Nina Pacari, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

La figura de Mariano Curicama es muy importante en la división organizativa vista en la provincia de Chimborazo, esta político indígena que tras 10 años en la prefectura y otros más en la alcaldía de Guamote ha logrado consolidarse con una base social importante de corte clientelar.

Mariano Curicama viene de una línea de la Izquierda Democrática que fue alcalde indígena en Guamote por la Izquierda Democrática antes de que exista Pachakutik que, cuando fue Pachakutik, se formó parte del proceso y le decíamos que debe cambiar la modalidad y que debe ser de participación y por eso impulsamos lo de las asambleas cantonales, que fue un impulso por la participación de la propia gente. (...) Mariano Curicama está como prefecto y por lo tanto, el manejo que da es eso, clientelar. El manejo y la habilidad, que según él es la habilidad política no, entonces por esa lado pues; pero también se le ha caído ya la cuestión a nivel de las comunidades que sea el que domine todo y, por lo tanto, en Chimborazo la cosa esté con el gobierno enteramente que no (Nina Pacari, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015).

Según afirma el prefecto, la relación que se mantiene con Alianza País de carácter programático que responde al documento firmado por Delfín Tenesaca y otros dirigentes, no

se trata de estar alineados a la política del gobierno central sino de trabajar en alianza puesto que Rafael Correa ha sido “generoso con Chimborazo”. Así Curicama también afirma que las discrepancias en la provincia responden a intereses personales de varios dirigentes locales.

Miguel Lluco narra lo ocurrido entre el gobierno y Pachakutik y la decisión de respetar la alianza firmada.

En Chimborazo se da una contradicción de la coordinación de Pachakutik, que su coordinador era Ernesto Chávez y el señor prefecto Ab. Mariano Curicama. El señor Chávez que era un trabajador de confianza del señor prefecto se revela ante su jefe y él pasa a la oposición de este gobierno y, para eso ya se dio un hecho en que Delfín Tenesaca había firmado un acuerdo político estando de presidente del movimiento indígena. Él, con Mariano Curicama y Rafael Rosero, parece que tres personas firmaron un acuerdo político de alianza electoral con el actual régimen y esto se había dado en el 2009.

Esto como era público estos hechos me hacen pensar a mí y yo hablo con el Mariano y le digo que qué pasaba, él de prefecto de gobierno de la provincia y el coordinador que era de Pachakutik y que estaba en contra. Entre unas habladas y otras me voy enterando de que el Delfín estuvo de interesado para ser asambleísta y, por algún motivo, no asoma. El momento de prestar la cédula ya para ir a inscribir la lista y le ponen al Gerónimo que era también trabajador del Consejo Provincial, muy cercano al señor prefecto, y el Gerónimo se inscribe para asambleísta; pero dentro del Movimiento País y llega a triunfar, por toda la corriente que tiene Pachakutik en Chimborazo que no se ha debilitado, que se mantiene de principio hasta ahora el electorado. Triunfa Gerónimo y se pone en contra en la Asamblea. Ya estaba el Gerónimo haciendo vocería en contra del gobierno (...) Ahí se autoconvocan los Pachakutiks y me nombran a mí de coordinador de Pachakutik Chimborazo. Como fundador yo lo que hago es buscar el asunto legal y por eso legalizo, tanto en el Consejo Nacional cuanto las cosas que aquí hay que llevar adelante y, por lo tanto, legalizar a Pachakutik no reconocía el Pachakutik nacional, no reconoce la Conaie, no nos reconoce la Ecuarrunari. Estos son los entes sociales y políticos que no nos reconocen y yo solito, sin ninguna alharaca, aquí Pachakutik se mantiene. Firmo dos acuerdos políticos tanto para la una elección y la otra; pero ya acuerdos programáticos, porque yo sí soy el que sé que nuestra propuesta política es que está en la Constitución y eso nosotros debemos interesarnos más en que se cumpla eso y para eso es el asunto programático; pero los señores de Movimiento País no entienden porque ellos tienen una cosa muy diferente (Miguel Lluco, dirigente indígena, en entrevista con la autora, agosto 2016)

Frente a estas decisiones, tanto del brazo político de la CONAIE, como de la organización provincial, se decide expulsar a los dirigentes aunque estos no lo reconozcan así. La COMICH es impedida de participar en las reuniones oficiales del Movimiento y se crea otra organización con las comunidades y OSG que no se alinean con los postulados gobiernistas, así, bajo la dirección de Delfín Tenesaca surge la COSMOVICH, como una alternativa para mantener la organización indígena dentro de la estructura orgánica de la CONAIE.

Cosmovich es una organización de los saldos de esa división. Nace con una proyección de mantenerles, defenderles lo que es la organización del movimiento indígena de Chimborazo, ese espíritu de la organización. Sin ser legal, como organización de hecho, mantiene ahí para escuchar el clamor de la gente, escuchar los problemas de la gente. Quizás sin legitimidad, sin recursos; solamente porque convocamos a nuestros compañeros y compañeras representantes se ha tomado fuerza y ha coordinado con otros sectores.

La palabra es la Coordinadora de las Comunidades, Asociaciones Comunitarias sobre todo de Chimborazo por eso entonces se llama así; pero también nosotros desarrollamos un poco la cosmovisión indígena por eso mismo la sigla es la COSMOVICH o sea vemos desde la Pachamama, desde la naturaleza, desde la organización comunitaria, de los runas, de la organización que debe estar al servicio de la colectividad. El objetivo principal es primero mantener ese espíritu de la organización. Segundo, nosotros mantener en la defensa de la identidad en nuestro pueblo, identidad de lucha, identidad como pueblos, identidad con la madre naturaleza. Y tercero nosotros también exigir a las autoridades que se cumplan con todo lo que es el trabajo que deben hacer las autoridades electas. Gestionar por nuestros derechos pero no como favores ni, quizás, con amarres políticos, ni con procesos electorales sino más bien desde nuestro derecho. Exigencia de nuestros derechos. (Delfín Tenesaca, dirigente indígena, en entrevista con la autora, agosto 2015).

Como se puede ver, la estrategia gubernamental en Chimborazo ha estado encaminada por dos lados, el primero a una activa presencia del Estado a través de proyectos y políticas públicas focalizadas a la población indígena y otras tantas de carácter clientelar como la entrega de una nueva casa para la COMICH; así como una alianza estratégica entre el prefecto y el movimiento de gobierno para contar con una base social significativa; este último actor, a su vez ha recurrido a la cooptación de dirigentes locales para capitalizar su base social y poder responder mejor a las demandas de movilización social por parte del Gobierno Central.

Yo lo que creo es que lo que ocurre es que ese es el único lugar en el cual se logró una cooptación de estructuras, en Chimborazo, y esto es por el prefecto. Si no fuera por el prefecto todos los demás serían, o sea la mujer esta del COMICH es de Mariano Curicama y Miguel Lluco es una persona que ya antes estaba separado del movimiento indígena y no tendría ningún peso político si no fuera por estar aliado al prefecto, entonces aquí el punto central de la división es el prefecto. Como el prefecto está con el gobierno entonces él sí tiene un aparato clientelar propio. Él es un cacique con enorme influencia dentro de las organizaciones, tiene capacidad de organización.

En el único lugar en donde el gobierno ha logrado crear un estructura paralela y que logra dividir paralelamente al movimiento indígena es en Chimborazo. Pero lo que yo te diría es que eso no responde al gobierno, yo te diría que eso es el prefecto. Yo diría que si en algún momento el prefecto se pelea con el presidente, esas bases no se van a ir con el presidente, o sea esas son bases del prefecto. Claro el prefecto, la razón por la cual el prefecto se mantiene con el gobierno es que es un prefecto, muy pragmático, que sabe que puede obtener muchos fondos para muchas obras, precisamente por esa división. O sea, él ya fue ministro en la época de Gustavo Noboa, temas ideológicos no le van a impedir hacer alianza con cualquier gobierno, estoy seguro de que, cualquier gobierno que le prometa lo mismo que este le promete, haría (Pablo Ospina, académico UASB-E, en entrevista con la autora, mayo de 2015).

Ahora bien esta división y toda la presión gubernamental han impactado en toda la estructura de la organización indígena. En el siguiente punto se analizará rápidamente estas afectaciones tanto a la estructura de movilización, como a los procesos enmarcadores que sostienen la acción del Movimiento Indígena a nivel nacional.

5. Sin carpeta y sin bandera: mecanismos causales para entender la desmovilización

Al irse ampliando el ciclo, los movimientos crean también oportunidades para las élites y los grupos de oposición. Se forman alianzas entre los participantes y los desafectos, y las élites de la oposición plantean exigencias de cambio que habrían parecido descabelladas poco tiempo atrás. Las fuerzas gubernamentales responden, bien con reformas, con la represión o con una combinación de ambas. La lógica cada vez más amplia de la acción colectiva conduce a resultados en la esfera de la política, donde los movimientos que iniciaron el ciclo pueden acabar teniendo cada vez menor influencia (Tarrow 1994, 60).

La concepción teórica que realiza Tarrow sobre el ciclo de la protesta parece describir perfectamente la realidad del Movimiento Indígena en el período de la Revolución

Ciudadana. Todo el acumulado de lucha social, de protesta en las calles, fue capitalizado por el Movimiento Alianza País que conformó unas nuevas élites que en la década del 90 y principios de los años 2000 estaban en la oposición al neoliberalismo. Al estar en el poder inician procesos de reforma mediante la implementación de políticas redistributivas y de la criminalización de la protesta social que termina por minimizar la capacidad de influencia de los indígenas agrupados en la CONAIE.

La Revolución Ciudadana no solamente cooptó a varios de los dirigentes y organizaciones indígenas, sino que se apropió de los marcos interpretativos con los cuales se articulaba el movimiento. Los dejó sin una bandera de lucha puesto que el enemigo principal era el neoliberalismo y Rafael Correa inició una batalla en contra del neoliberalismo, al menos en su discurso político. La demanda histórica de la CONAIE era la conformación del Estado Plurinacional que fue adoptada por el gobierno en la Constitución del 2008 aun cuando falte mucho para su real materialización. Aquellos puntos que formaban parte de la agenda reivindicativa de las organizaciones fueron adoptadas por el gobierno de tal manera que parecía que el rechazo al proyecto político de Alianza País era una oposición sin sentido y así se construyó el discurso de desprestigio hacia el Movimiento Indígena.

En un escenario político adverso, la estructura de oportunidades políticas se ha mantenido cerrada a la acción contenciosa de los sectores indígenas. El espacio de confrontación está restringido a algunos canales legales e institucionales, los cuales no procesan del todo las demandas de los grupos opositores. Asimismo, la capacidad de acción se ha visto limitada. Los repertorios utilizados cuando se han logrado realizar movilizaciones han sido repetidos, nada novedosos, a excepción de la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos de 2012 que contó con una gran acogida y el respaldo de los medios de comunicación, gracias a lo cual se logró suspender temporalmente la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Posteriormente a esa acción, se intentó emular ese repertorio con resultados muy limitados y con cada vez mayor visualización de las fragmentaciones internas. Debido a la debilidad de todas las organizaciones sociales, la movilización del 2012 logró también tender puentes de respaldo y solidaridades mutuas con otros sectores como los sindicales, estudiantiles y de mujeres, para hacer frente a la coyuntura de manera articulada, lo que fue ventajoso en cierta medida y perjudicial en otra puesto que las demandas nuevamente eran demasiado amplias y descuidaban las particularidades del sector al que representan.

Por otro lado, al atravesar por un proceso de descorporativización, la posibilidad de presentar propuestas de políticas públicas, reformas legales o proyectos auspiciados por el gobierno, se han visto absolutamente negados, por lo que, incluso para conseguir recursos financieros de la cooperación internacional, sus planteamientos debían ser aprobados por el gobierno central, limitando cada vez más su estructura de movilización de recursos.

La frase “sin carpeta y sin bandera” fue dicha por un dirigente campesino en una conversación informal en la cual describía lo que había significado para su organización el gobierno de Rafael Correa. Pese a ser beneficiario de uno de los proyectos emblemáticos del régimen como era el Plan Tierras,⁴⁶ para este agricultor, la apropiación de discurso y de la institucional que limita la posibilidad de participación a destruido el tejido social, ha generado desconfianza entre los propios miembros de la organización al generar confusión sobre los discursos aparentemente revolucionarios y las acciones llevadas a la práctica. Como se ha visto a lo largo de estas páginas, la estrategia política del gobierno logró limitar la acción de sectores sociales no del todo alineados con su gestión, y su repercusión ha sido tan grande que ha podido incluso romper con algunos de los puntos establecidos en el pacto de dominación negociado en la década de los 90 y 2000. Sin duda, el gobierno de Rafael Correa modificó el pacto, redujo la cuota de poder de las organizaciones indígenas y distribuyó de mejor manera los recursos económicos sin que esto signifique un cambio revolucionario; en términos organizativos se podría decir que se ha generado una importante pérdida para los indígenas.

Sin embargo, es importante reconocer que el proceso de desmovilización de este sector social, se ha generado por factores internos, como por ejemplo una desactualización del proyecto político de la CONAIE en relación a las transformaciones de las comunidades indígenas y las necesidades de su población, un distanciamiento entre la dirigencia y las bases, entre otras cosas.

En el momento actual se vive un proceso de contracción, de refluyo de la acción contenciosa hasta que la organización recupere su capacidad movilizadora, reconstruya sus procesos enmarcadores y genere las condiciones para que la EOP se abra. Por el momento no tiene más

⁴⁶ Proyecto que ejecuta la política de redistribución de tierras agrícolas entre los campesinos y campesinas carentes de ella, para solventar así una verdadera Soberanía Alimentaria. Busca garantizar el acceso a la tierra y cumplir con la función social y ambiental establecidos en la soberanía alimentaria, y la autosuficiencia en la producción de alimentos. <http://plataformacelac.org/política/5>

opción que replegarse hacia sus bases.

Dada las circunstancias de un gobierno fuerte y con pocas miramientos hacia las organizaciones, tampoco la CONAIE puede plantearse estar a la ofensiva, sino que está a la defensiva, está a la lucha como un repliegue político y estratégicos. Los periodos de repliegue, los periodos defensivos no son cosas que uno decide sino que son cosas que te imponen las condiciones en las cuales estás actuando. Y bueno, dadas todas estas condiciones anteriores, ahora existe un periodo de repliegue, ese repliegue obliga a enfocarse más en las demandas, en los cuestionamientos y en las agendas propias del movimiento y menos en las agendas nacional, de todo el país; porque no das abasto, por la organización, la estructura, los cuadros no tienen capacidad, no tienen posibilidades de fijarse en las dos y de atender adecuadamente a las dos, aunque puedas tener criterios de cada una de las políticas gubernamentales, sobre el IESS, sobre las relaciones con China, lo que sea, esos no son temas que normalmente en la comunidades, y en las bases indígenas, tú estás reflexionando cotidianamente. Estas reflexionado cotidianamente otras cosas, otros problemas que son los que la CONAIE debería afrontar, por ejemplo, la CONAIE debería estar completamente metida y (...) trabajando con equipos de trabajo, por ejemplo, en la construcción de CTIs porque esta Constitución permite, lo que no permitía la del 98, que es constituir circunscripciones con un procedimiento establecido en la propia Constitución, se puede constituir. Hay algunos, me parece que cinco, CTIs que están en proceso de, (...) la CONAIE tiene que ir acompañando y aprendiendo del proceso e ir multiplicando este tipo de iniciativas porque es, dentro de todo lo que se ha perdido en la estructura institucional del Estado por la centralización del correísmo, esto es un avance que se puede hacer en medio de ese repliegue generalizado, entonces, hay que apoyar y empujar todo lo que se pueda por ese pequeño beneficio que queda (Pablo Ospina, académico UASB –E, en entrevista con la autora, mayo de 2015).

Como bien lo dice Nina Pacari, la organización ha regresado a ver a su interior, a un trabajo de reconstitución desde dentro que permita volver a identificarse, construir una nueva identidad y trazar el camino para la construcción del Estado Plurinacional.

Los mayores estamos comenzando, como hicimos en los 80 cuando éramos jovencitos pero ahora ya mayores; íbamos a las comunidades e igual con las comunidades a debatir de nuevo toda la cuestión de cuál va a ser la propuesta, cómo debemos, cuáles son nuestros problemas, en fin. Y ahora es cómo vamos a construir porque ya no es que vamos a demandar, cuál va a ser la propuesta sino cómo vamos a construir y proponemos o ejerzamos desde nosotros

respecto a lo que es el ejercicio del Estado Plurinacional (Nina Pacari, dirigente indígena, en entrevista con la autora, abril de 2015)

A modo de resumen, en la tabla siguiente se presenta los principales episodios de contienda protagonizados por la CONAIE en el régimen de Rafael Correa.

Tabla 9. Contienda contenida en la Revolución Ciudadana

Año	Contexto/ EOP	Repertorio	Estructura	Demanda
2009	- Se aprobó mayoritariamente la Constitución de Montecristi. - El Congresillo tramitaba proyectos de ley considerados como urgentes para la creación del nuevo cuerpo legal del país.	Acciones institucionales para mostrar inconformidad con los proyectos de ley. Bloqueo de carreteras en la región Amazónica. Enfrentamientos con la fuerza pública (muerte de Bosco Wisuma)	CONFENIAE	Aprobación de leyes de Minería, Recursos Hídricos y Soberanía Alimentaria desde una perspectiva indígena que no afecte a sus territorios
2010	Segundo debate para la aprobación de la ley de agua	- Marchas en varias regiones del país (fuerte represión policial, detención y judicialización de manifestantes) - Presentación de propuesta de ley a la Comisión Legislativa que tramita la ley	ECUARUNARI CONAIE FEINE FENOCIN	Ley de Recursos Hídricos contemple administración indígena de los canales de riego y autoridad plurinacional del agua
	Se suspende el debate de la ley.	Marchas en varias ciudades		Llamado a consulta prelegislativa de carácter vinculante.
2012	Firma de la concesión minera a gran escala con la empresa china Ecuacorriente para la explotación de la Cordillera del Cóndor	Marcha por el Agua, la vida y la Dignidad de los Pueblos. Caminata pacífica y de carácter festivo que parte del Pangui en Zamora Chinchipe y llega a Quito 15 días después. Ingreso a la capital de 25 mil marchantes.	ECUARUNARI CONAIE	Defensa del agua y los territorios Mandato por la vida de 19 puntos recopilados en las provincias de acuerdo a las demandas locales.
		Gobierno convoca a la militancia y funcionarios públicos a la realización de contramarchas en cada uno de los lugares por donde pasan los manifestantes.		
		Entrega del Mandato al Presidente de la Asamblea Nacional Fernando Cordero		
2013	Fracaso de la iniciativa Yasuní que pretendía recolectar fondos extranjeros para	Pedido de consulta popular para mantener el petróleo bajo tierra en el ITT	Yasunidos CONAIE	No explotación del campo petrolero ITT en

	mantener el crudo bajo tierra			el parque nacional Yasuní
	Controles policiales de minería ilegal generan la muerte de Freddy Taish	Protesta de comuneros	Comunidades de la CONFENIAE	Respeto a la actividad minera artesanal ejercida por los pueblos originarios y controles para aquellas actividades que se realizan en sus territorios de manera ilegal
	Cierre de escuelas bilingües en las comunidades por la construcción de Unidades Educativas del Milenio en las cabeceras cantonales	Movilización para la presentación de una acción de incumplimiento al Ministerio de Educación por el cierre de escuelas comunitarias	ECUARUNARI	Respeto al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
2014	Nuevo tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos por parte de la Asamblea luego de la consulta pre legislativa Presidente de la República, mediante el decreto 310, negó la posibilidad de que se conforme el Consejo Plurinacional del Agua	Marcha que sale desde el Panguí. Casi ninguna repercusión porque la Asamblea tramita la ley cuando la marcha aún estaba a 10 días de llegar a la ciudad de Quito.	ECUARUNARI FEINE Frente Popular CONFEUNASSC	Conformación del Consejo Plurinacional del Agua inconformidades por la propuesta de reelección indefinida, el código del Trabajo y otras medidas gubernamentales
	Notificación de finalización del comodato entre la CONAIE y el MIES por el uso de la sede de esa organización	Toma de la casa y actos de solidaridad a la organización	CONAIE	Mantener la propiedad de la casa entregada en comodato en la década de los 90 como signo de lucha
2015	Desacuerdo con el régimen por la Ley Tierras y Territorios, el decreto 16, la criminalización de la protesta social y sobre todo las enmiendas constitucionales que incluían la posibilidad de la reelección indefinida de todas las autoridades de gobierno	Marchas en varias ciudades del país desde el mes de marzo hasta julio Marcha indígena que partió de Zamora el 3 de agosto. Huelga nacional y levantamiento indígena	CONAIE FUT CEDOCUT Frente Popular	Respeto a la Educación Intercultural. Oposición a la Ley de Tierras y Territorios. Rechazo a las enmiendas constitucionales.

Fuente: Información tomada del trabajo investigativo

Como se ha podido ver a lo largo de estos capítulos, la actividad de la CONAIE ha tenido una importante disminución en su capacidad interpoladora y de movilización. Durante la década

de los 90 del siglo XX, los repertorios de acción colectiva eran contundentes y masivos, logrando posicionar sus demandas en la agenda política nacional. El escenario de acción contenciosa se encontraba abierto, existían condiciones internas como la constitución de una identidad étnica y de clase que motivaba las acciones así como alianzas políticos e intelectuales que posicionaban sus demandas en otras arenas; así también la inequidad social provocada por el modelo neoliberal generó indignación y rechazo a la clase política, haciendo que las contiendas contenciosas iniciadas en 1990, para los primeros años del 2000 se transforme en protesta y genere una incapacidad del sistema político para canalizar esas demandas. Las oportunidades políticas se diversifican y son cada vez más actores, muchos de ellos ciudadanos no organizados, los que presentan sus demandas al gobierno.

La alianza electoral con Gutiérrez y la posterior ruptura, genera por un lado una desconfianza en la sociedad en general al ver a los indígenas organizados en la CONAIE como corresponsables de las medidas económicas adoptadas durante este período y por el cambio de modelo de gobierno. Por otro lado, las prácticas clientelares y la lejanía de los dirigentes y las bases empiezan a debilitar la acción contenciosa del movimiento indígena.

En ese contexto surge el gobierno de la Revolución Ciudadana, que impone un modelo postneoliberal, cuenta con una abundancia económica que el permiten implementar políticas de redistribución de los ingresos y cooptar dirigentes indígenas así como también organizaciones de base, incentivando nuevos cacicazgos en las localidades a través de la entrega de recursos para obras de infraestructura y programas sociales. Además, el capitalismo ingresa cada vez con mayor fuerza en las comunidades indígenas generando una descomunalización y una migración hacia los centros urbanos lo que fracciona aún más la estructura organizativa de la CONAIE.

Todos estos factores influyen en el cambio de contienda, al no tener la suficiente capacidad de movilización para generar presión desde las calles, la CONAIE se ve en la obligación de presentar sus demandas por los canales institucionalizados y tener muy poca capacidad de incidencia en las decisiones políticas tomadas por el régimen, incluso en aquellos temas que les afectan directamente. El movimiento indígena, al igual que muchos otros sectores sociales del país se encuentran en desmovilización debido al cierre de las oportunidades políticas y procesos internos de cada organización.

Para entender este cambio, era necesario verlo de manera procesual, entender que las acciones que se viven en el presente, son el resultado de un acumulado de experiencias y factores que influyen en las condiciones actuales de las organizaciones y no de algo natural o coyuntural del momento político que vive el Ecuador.

Conclusiones

El presente trabajo de investigación ha partido de un modelo analítico que combina tres perspectivas teóricas. Por un lado, parte de la agenda clásica de los movimientos sociales que analiza procesos enmarcadores, repertorios, estructura de movilización y estructura de oportunidades políticas para poder describir las condiciones y las formas en las que actúa el Movimiento Indígena Ecuatoriano representado por la CONAIE. El segundo elemento analítico y el que ordena la narrativa, a través de la identificación de episodios de contienda, es justamente la categoría de la Dinámica de la Contienda Política (McAdam, Tarrow y Tilly 2005) que permite identificar las contiendas transgresiva y contenida en los diferentes períodos de análisis que contempla este trabajo, lo que nos da como resultado el entendimiento de la participación del Movimiento Indígena en la transformación del entorno socio-político en el cual se desenvuelven. El tercer elemento analítico se centra en el ciclo de la protesta (Tarrow 1997) para determinar los momentos de auge y repliegue de la acción contenciosa de la CONAIE.

Temporalmente, este estudio ha realizado una amplia reconstrucción de la vida organizativa del movimiento en tres grandes períodos: el primero constituye el proceso de formación y consolidación desde la década de los 70 aproximadamente hasta el año 2002 que se constituye en el momento de auge y de contienda transgresiva. El siguiente período de análisis comprende los años 2003 – 2006 en donde la principal característica es la transformación de la relación Estado-movimiento social debido a la alianza política que permite que los indígenas lleguen al poder, esto ha generado un impacto importante en sus bases y se empieza a ver un proceso inicial de desmovilización. Finalmente el tercer momento comprende el período de la Revolución Ciudadana en el cual ha existido una cooptación de demandas, discursos y luchas, que sumado al modelo de desarrollo y las políticas direccionadas a las organizaciones indígenas y sociales, han generado un repliegue organizativo.

Durante el primer momento analítico, se observa una apertura de la Estructura de Oportunidades Políticas, dada por un reconocimiento internacional de la lucha indígena a través de la firma del Convenio 169 de la OIT, la presencia de intelectuales y políticos de izquierda que apoyan la consolidación de las organizaciones, así como el apoyo de la iglesia de la teología de la liberación. Además, el modelo neoliberal impuso condiciones económicas y el intervencionismo de los Estados Unidos que generaron procesos de indignación social,

permitieron la constitución de alianzas con determinadas élites sociales e intelectuales y así se logró influir en el sistema político. La represión estatal es intensa pero no demasiada como para eliminar las contiendas transgresivas. Durante estos años se puede observar que, pese a existir algunas debilidades en la estructura de movilización del Movimiento indígena, están articuladas orgánicamente y responden a procesos de toma de decisiones bajo un formato tradicional, es decir, en asambleas y a través de consensos. Esto se ve afectado ya en el período de Lucio Gutiérrez, pero aun así se logra mantener cierta unidad, consenso y capacidad de movilización.

En cuanto a los repertorios, los más utilizados son las movilizaciones y levantamientos indígenas que paralizan gran parte del país, muchos indígenas salen de sus comunidades y suspenden la circulación vehicular en las carreteras que conectan a las provincias de la sierra con la costa y la Amazonía mientras que otros realizan tomas simbólicas de las instituciones gubernamentales en cada una de sus localidades. Un tercer grupo, se dirige a la ciudad de Quito para generar presión en el centro político del país. No se logra visualizar una reestructuración radical en los repertorios durante este período, a excepción de trasladar el lugar de concentración en Quito, del parque de El Arbolito a la Universidad Salesiana por impedimentos de las autoridades durante el gobierno de Gustavo Noboa.

En el período comprendido a los años 2000-2006 se han narrado varios episodios de contienda protagonizados por los indígenas, los cuales en términos generales, han recurrido a los mismos mecanismos: presentación de inconformidad a través de los canales oficiales, contienda callejera en la capital de la República con la participación de otros sectores sociales, radicalización de la protesta mediante la paralización de otras provincias, levantamiento indígena, instalación de las mesas de diálogo con el gobierno. Todos estos mecanismos formaron procesos largos de confrontación con cada uno de los gobiernos desde Jamil Mahuad hasta Alfredo Palacio. Además se recurrió a la participación electoral lo que él permitió ser parte del poder en el gobierno de Lucio Gutiérrez y luego transformar su accionar en oposición al régimen.

Por otra parte, la crisis de representación causada por el neoliberalismo y las protestas populares, generaron las condiciones para que la figura de Rafael Correa surja y se consolide como la alternativa democrática de reforma política, económica e institucional, sin embargo,

al estar alineado a un modelo postneoliberal, cooptó de alguna manera la bandera de lucha y la intervención en las decisiones gubernamentales por parte de las organizaciones sociales.

Durante los diez años de la Revolución Ciudadana, el Movimiento Indígena se vio obligado a replegar su acción contenciosa y pasó de ser transgresiva a ser contenida, así como también vio limitada su participación política mediante carrera electoral, en donde sus resultados no él fueron de todo favorables, por lo que se limitó mucho su actoría en la arena política.

La descorporativización, la presencia estatal en el territorio, la cooptación de dirigentes y la formación de organizaciones paralelas debilitó mucho al Movimiento Indígena, como se puede ver en el caso de la provincia de Chimborazo, que ha sido tradicionalmente el centro articulador de la movilización y la paralización del país, además una de las provincias con mayor presencia indígena. La estrategia en esta localidad estuvo canalizada a través del acuerdo político entre la Prefectura y el Gobierno Central para capitalizarse con las base social, de corte clientelar, que puede movilizar Mariano Curicama luego de diez años de manejo de Chimborazo y de haberse constituido en un nuevo cacique de la política local.

La estrategia de división está dada a través del desprestigio de las organizaciones nacionales por varias vías. La primera es a través de la persecución judicial a sus representantes que se oponen a la reforma emprendida. La segunda se da por la apropiación de los discursos y las demandas históricas de las organizaciones sociales: el presidente Correa aparentemente recoge y trabaja sobre las desigualdades que se generaron en el período neoliberal por lo que cualquier oposición a su gestión, es no solamente absurda, sino que va en contra de los intereses de las propias bases indígenas, lo que genera confusiones y rechazo hacia los dirigentes. La falencia en la dirigencia indígena estaría, en esta línea, en no contar con la capacidad técnica y económica para demostrar la esencia del proyecto correísta en las comunidades. La tercera vía es la utilización de la figura de los caciques locales para romper las bases desde sus propios dirigentes.

Si bien los marcos interpretativos que dieron origen al movimiento indígena aún no se han satisfecho en su totalidad, el reconocimiento del Estado Plurinacional y el mantenimiento de los derechos colectivos en la Constitución de 2008 han generado un vacío en el proyecto político de la CONAIE y sus bases, puesto que la declaración no implica su real construcción.

El reto para la organización está en la búsqueda de los mecanismos para la real materialización de la plurinacionalidad en la sociedad ecuatoriana.

El repliegue de la contienda como parte del ciclo de la protesta, en la que se encuentra actualmente el movimiento indígena, ha generado, no solamente la limitada capacidad modificar las decisiones que se toman en torno a nuevos temas políticos y económicos que puedan afectar a los colectivos indígenas, sino que ha impedido incluso, que puedan negociar la transformación en el pacto de dominación. Si bien han generado, en cierto grado, una mejor distribución de la riqueza, han perdido enormemente en cuanto al acceso al poder y la representación política al interior de la institucionalidad, pero además han perdido el control de instituciones que garantizan la reproducción cultural como es el caso de la educación intercultural bilingüe y el sistema de salud ancestral que dejaron de ser autónomas y pasaron a estar regidas por los ministerios de cada ramo.

Si bien estos factores externos han afectado a la estructura indígena y a su capacidad movilizadora, también ha existido una fragmentación desde adentro.⁴⁷ Su estructura de movilización se sustenta en la base comunitaria, la cual está debilitada por múltiples dinámicas propias de la economía capitalista sobre los campesinos y las lógicas étnicas. Así, Sánchez-Parga considera que la modificación de autoconsumo de comunidad (intercambio, reciprocidad), al mercado de productos y con la migración urbana y costeña a nivel laboral, la modernización de la agricultura “la idea de lo privado, de las ganancias y los provechos, de cálculo y las ventajas comparativas y competitivas irán modificando poco a poco los comportamientos y las mentalidades, e incluso el sistema de valores tradicionales” (Sánchez-Parga 2010, 41). En ese sentido, es necesario replantear el significado de comunidad y su articulación a un proyecto político actual que responda a la realidad que se vive tanto en lo rural como en lo urbano, donde se asientan los indígenas.

Sin duda la década ganada para el correísmo ha sido una de pérdida para las organizaciones sociales en general y la indígena de forma particular. El reto de la investigación en relación a los movimientos sociales ecuatorianos está en la búsqueda de herramientas metodológicas y teóricas más amplias que permitan visualizar a los actores colectivos como representantes dentro de los procesos de democratización de estado y de politización de la sociedad y a la

⁴⁷ El análisis de esta problemática, ha sido uno de los puntos más débiles de esta investigación, sin embargo es necesario considerarla para poder tener una lectura integral de la realidad de la organización.

vez se puedan identificar las transformaciones culturales y materiales que la lucha contenciosa ha generado en las comunidades de base.

Los trabajos en relación los indígenas se han basado en su historia de lucha o a sus manifestaciones culturales, en esta época de cambios sería importante y de gran aporte para la academia y las comunidades, centrarse en realizar análisis en las transformaciones materiales de las comunidades desde la visión integral de la economía política, la antropología y la sociología.

Sin duda este trabajo de investigación tiene muchas limitaciones teóricas y metodológicas. Hubiera sido interesante explorar desde otras entradas analíticas más allá de la acción colectiva y poder tener una mirada más amplia; así como también se pudo haber enriquecido con mayores entrevistas a actores dispares que ampliaran la visión de lo que aquí se trabaja, sin embargo es un intento por entender de manera comparada los distintos mecanismos, episodios, procesos y reconstruir la trayectoria de un actor colectivo que ha marcado la vida política de país y que con seguridad seguirá proporcionando material interesante para futuros análisis.

Glosario

ANAZPPA: Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza del Ecuador

AP: Alianza País

CHIJALLTA FICI: Federación de los pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador

CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador

COMICH: Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo

CONAICE: Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana

CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana

CONFUNASSC: Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino

CORPUKIS: Corporación de Pueblos Kichwas de Saraguro

ECUARUNARI: Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(Ecuador Runakunapak Riccharimuy)

FCA: Federación de Centros Awá

FCG: Federación de Comunas del Guayas

FECAB- BRUNARI: Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar

FECHE: Federación de Centros Chachis del Ecuador

FECUNAE: Federación de Centros de Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana

FEI: Federación Ecuatoriana de Indios

FEINE: Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador

FENOCIN: Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras

FEPROCOL: Federación Provincial de Comunas de Loja

FICSH: Federación Interprovincial de Centro Shuar

FIPSE: Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador

FOA: Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay

FOIN: Federación de Organizaciones Indígenas del Napo

FOISE: Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos del Ecuador

FUT: Frente Único de Trabajadores

GTS: Gobernación Tsáchila

ID: Izquierda Democrática

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

MICC: Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

MICH: Movimiento Indígena de Chimborazo

MIT: Movimiento Indígena de Tungurahua
MPD: Movimiento Popular Democrático
MUPP: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik
OINCE: Organización de Indígenas Cofanes del Ecuador
OISE: Organización de Indígenas Secoyas del Ecuador
ONHAE: Organización de la Nacionalidad Waorani de la Amazonia Ecuatoriana
ONISE: Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador
OPIP: Organización del Pueblo Indígena de Pastaza
OSG: Organización de Segundo Grado
PRE: Partido Roldosista Ecuatoriano
PRIAN: Partido Renovador Institucional Acción Nacional
PRODEPINE: Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros
PS-FA: Partido Socialista Frente Amplio
PSC: Partido Social Cristiano
PSP: Partido Sociedad Patriótica
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIN: Sistema Nacional de Información
UCIA: Unión de Comunidades Indígenas de Azuay
UNE: Unión Nacional de Educadores

Lista de referencias

- Acción Ecológica. 2011. «Ecuador: Criminalización de la Protesta Social en Tiempos de “Revolución Ciudadana”» *acciónecologica.org*. 23 de agosto. Último acceso 3 de octubre de 2017. <http://www.accionecologica.org/criminalizados/articulos/1487-ecuador-criminalizacion-de-la-protesta-social-en-tiempos-de-revolucion-ciudadana>.
- Acosta, Alberto. 2012 *Breve Historia Económica del Ecuador*. 3ra Edición. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Acosta, Alberto y Juan Ponce. «La pobreza en la “revolución ciudadana” o ¿pobreza de revolución?» *Ecuador Debate* (CAAP) (81): 7-20.
- Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. 2011 «Décima primera ronda petrolera licitará 21 bloques surorientales.» *oilwatchlatinoamerica.org*. 25 de octubre. Último acceso 4 de octubre de 2017. <http://www.oilwatchesudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/ecuador/3614-ecuador-decimoprimeraronda-petrolera-licitara-21-bloques-surorientales-en-ecuador.html>
- Aguilar, Susana y Ana Ballesteros. 2005 «El modelo de proceso político a debate. Una explicación alternativa al origen y consecuencia del movimiento social "Nunca Más".» *Reis* (11): 105-136.
- Albornoz, Vicente. 2010 «La pobreza urbana en el Ecuador 1988-2009» *loexplicadores.com*. febrero. Último acceso 20 de agosto de 2017 http://www.loexplicadores.com/vicente/CartaEconomica/201002_La_pobreza_urbana_en_el_Ecuador_1988-2009.pdf
- Almeida, Ileana. 2015 «CONAIE: Carta a los medios de comunicación» *Linea de fuego*. 19 de enero. Último acceso 06 de agosto de 2017 <https://lalineadefuego.info/2015/01/20/conaie-carta-a-los-medios-de-comunicacion-por-ileana-almeida/>.
- Altmann, Philipp. 2013. «El movimiento indígena ecuatoriano como movimiento social.» septiembre. Último acceso 06 de agosto de 2017 <https://www.researchgate.net/publication/256387320>.
- Arteaga Pérez, Javier y Viviane Brachet-Marquez. 2011. *Dominación y Contienda: seis estudios de pugnas y transformación (1910-2010)*. México: Colegio de México.
- Asamblea Nacional Constituyente. 2008. «Constitución de la República.» Montecristi: Asamblea Nacional Constituyente.

- Banco Mundial. 2005 «Ecuador: Evolución de la pobreza.» *siteresources.worldbank.org*. Alfaomega Colombiana. Último acceso 20 de agosto de 2017.
http://siteresources.worldbank.org/INTECUADORINSPANISH/Resources/ECUADOR_Evaluacion_de_la_Pobreza.pdf.
- Barrera, Augusto. 2000 «Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana.» *OSAL* (CLACSO), Junio: 11-16.
- . 2001 «Nada sólo para los indios. A propósito del último levantamiento indígena.» *CLACSO*. junio. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal4/andina.pdf>.
- . 2001. *Acción Colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Quito: Osal, Ciudad, Abya Yala.
- Becker, Marc. 2015. *¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*. Quito: FLACO Ecuador y Abya Yala .
- Bretón, Victor. 2001. *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos: ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo*. Quito: FLACSO - Ecuador, Universidad de Lleida, GIEDEM.
- Buró de Análisis Informativo. 2011. *El gasto público impulsó el crecimiento de la banca en el 2011*. 25 de diciembre. Último acceso 3 de octubre de 2017.
<http://za44.blogspot.com/2011/12/el-gasto-publico-impulso-el-crecimiento.html?m=0>.
- Cartuche, Inti. 2015. *Confrontación CONAIE – Revolución Ciudadana: Transformación de un modo de interlocución política*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Cedhu. 2015. «Cronología del Levantamiento indígena y paro nacional» *cedhu.org*. septiembre. Último acceso 06 de agosto de 2017.
http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=50&limitstart=2.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2014. «Cuestionario de Consulta a los Estados y la Sociedad Civil para la Elaboración del Informe Sobre Criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos a través del Uso Indevido del Derecho Penal.» *oas.org*. agosto. Último acceso 10 de agosto de 2017.
<https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Cuestionario-DEF-2014-es.pdf>.
- Comité de Seguimiento del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana. 2009. Mayo – agosto. Último acceso 25 de agosto de 2017.
http://www.clacso.org/documentos_osal/descargar.php?link=964.pdf&nombre=Ecuador%20Informe%20de%20Coyuntura%20Mayo-Agosto%202009.

- CONAIE. S/f «Organizaciones Filiales» *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador*. Último acceso 30 agosto 2017. <https://conaie.org/organizaciones-filiales/>
- . 1988. *Las nacionalidades indígenas en el Ecuador, nuestro proceso organizativo*. Quito: CONAIE.
- Correa, Rafael. 2010 «Informe a la Nación.». mayo-agosto. Último acceso 02 de agosto de 2017.
http://www.clacso.org/documentos_osal/descargar.php?link=964.pdf&nombre=Ecuador%20Informe%20de%20Coyuntura%20Mayo-Agosto%202009.
- . 2007. «Discurso de Posesión de Rafael Correa Presidente de Ecuador» *Archiv.org*. 15 de enero. Último acceso 1 de agosto de 2017.
http://web.archive.org/web/20080326194018/http://www.rafaelcorrea.com:80/la_noticia/942/Discurso%20de%20Posesi%C3%83%C2%B3n%20de%20Rafael%20Correa%20Presidente%20del%20Ecuador.
- Cucurella, Leonela. 2001. «"...Cuando los gobiernos no entiende..." Entrevista a Ricardo Ulcuango.» En *"Nada solo para los Indios" El levantamiento indígena del 2001: Análisis, crónicas y documentos*, de Pablo Dávalos, Virgilio Hernández, Augusto Barrera, Francisco Hidalgo, Instituto Científico de Culturas Indígenas, Kintto Lucas, Hernán Ramos y Alberto Acosta. Quito: Abya Yala.
- Dávalos, Pablo. 2016. «El posneoliberalismo, apuntes para una discusión. » *Rebellion.org*. 26 de mayo. Último acceso 7 de agosto de 2017.
<http://www.rebellion.org/noticia.php?id=212580>
- Diani, Mario. 2015. «Revisando el concepto de movimiento social.» *Encucijadas: revista crítica de ciencias sociales* (9): 1-16.
- Ecuador inmediato. 2011. «Intervención en campos petroleros es un atentado contra patrimonio "inalienable, irrenunciable e impresindible de Ecuador".» 28 de diciembre. Último acceso 6 de octubre de 2017.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=164279
- ECUARUNARI. 2012. *Una mirada a nuestra historia: Movimiento Nacional Ecuador Runakunapak Rikcharimuy*. Quito: ECUARUNARI.
- Ecuavisa. 2015 « MIES no desalojará a la Conaie de su sede en Quito, anuncia ministra Tola.» *ecuavisa.com*. 05 de enero. Último acceso 06 de agosto de 2017.
<http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/94557-mies-no-desalojara-conaie-su-sede-quito-anuncia-ministra-tola>.

- El Ciudadano. 2015. «En Ecuador la inversión social pasó de 141 a 575 dólares por persona entre 2006-2014.» *elciudadano.gob.ec*. 21 de mayo. Último acceso 1 de octubre de 2017 <http://www.elciudadano.gob.ec/en-ecuador-la-inversion-social-paso-de-141-a-575-dolares-por-persona-entre-2006-2014/>.
- . 2014. «El Movimiento Indígena de Chimborazo tiene una nueva casa» *elciudadano.gob.ec*. 23 de julio. Último acceso 10 de agosto de 2017. <http://www.elciudadano.gob.ec/el-movimiento-indigena-de-chimborazo-tiene-una-nueva-casa/>
- El Comercio. 2014 «La Conaie tiene 15 días para abandonar su sede. » *elcomercio.com*. 11 de diciembre. Último acceso 06 de agosto de 2017. <https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-abandonar-sede-ecuador-mies.html>.
- El Telegrafo. 2014. «Una multitud apoya la Ley de Aguas.» *Ecuador Inmediato*. 03 de julio. Último acceso 06 de agosto de 2016 http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=wap_news_view&id=2818765531.
- . 2015. «Organizaciones proponen alianza indígena por la Revolución Ciudadana.» *eltelegrafo.com*. 23 de diciembre. Último acceso 10 de agosto de 2017 <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/organizaciones-proponen-alianza-indigena-por-la-revolucion-ciudadana>.
- El Universo. 2007. «Congreso aprueba convocatoria a consulta popular.» *eluniverso.com.ec* 13 de febrero. Último acceso 01 de agosto de 2017 <http://www.eluniverso.com/2007/02/13/0001/8/41950D290A1A4A3E977EDD2B24BF2A59.html>.
- . 2015. «Oficialismo construye alianza indígena paralela a la Conaie.» *eluniverso.com.ec*. 02 de enero. Último acceso 07 de agosto de 2017. <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/02/nota/4392711/oficialismo-construye-alianza-indigena-paralela-conaie>.
- . 2015. «Red de Maestros anuncia trabajo conjunto con el Ministerio de Educación.» *eluniverso.com.ec*. 07 de febrero. Último acceso 10 de agosto de 2017 <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/07/nota/4529096/red-maestros-anuncia-trabajo-conjunto-ministerio-educacion>.
- . 2006. «Ganó Correa.» *eluniverso.com.ec*. 27 de noviembre. Último acceso 14 de septiembre de 2017.

- <http://www.eluniverso.com/2006/11/27/0001/8/7665F10B13E34E0A940BF499E5671960.html>.
- Harnecker, Marta. 2010. «*Gobierno de Correa y Movimiento Indígena: Entrevista a Osvaldo León, Ricardo Patiño, Alberto Acosta, Daniel Suárez, Miguel Lluco Y Ricardo Carrillo*». *revelion.org*. 12 de octubre. Último acceso 20 de octubre de 2017.
<http://www.rebellion.org/docs/114792.pdf>
- Jaramillo, Francisco Muñoz, Mario Unda, y Carlos Michelena. 2016 «Ecuador: coyuntura política 2016.» *Sinpermiso*. 12 de diciembre. Último acceso 21 de agosto de 2017
<http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/ecuador-coyuntura-politica-2016>.
- La Hora. 2012. «La criminalización de la protesta social.» *lahora.com.ec*. 23 de abril. Último acceso 2 de octubre de 2017
<https://www.lahora.com.ec/noticia/1101318362/la20criminalizaciefbfbdn20de20la20pr20testa20social>.
- Línea de fuego. 2011. «Borrador de la ley de tierras: palabras de Rafael Correa y Luis Andrango» *lalineadefuego.info*. Octubre. Último acceso 02 de octubre de 2017.
<https://lalineadefuego.info/2011/10/17/borrador-ley-de-tierras-palabras-de-rafael-correa-y-luis-andrango/>
- Macas, Luis. 1999 «Los desafíos del movimiento indígena.» *icci.nativeweb.org*. 1 de abril. Último acceso 03 mayo 2017. <http://icci.nativeweb.org/boletin/abril99/macass.html>.
- Machado, Decio, y Raúl Zibechi. 2016. *Cambiar el mundo desde arriba: Los límites del progresismo*. La Paz: CEDLA.
- Mazzolini, Samuele. 2016. «Revolución Ciudadana y populismo de Laclau: una problematización.» en *La Revolución Ciudadana en escala de grises avances, continuidades y dilemas*, de Matthieu Le Quang (edit), 25-46. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
- McAdam, Doug. 1999. «Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación.» en *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, de John McCarthy Doug McAdam y Meyer Zald, 49-70. Madrid: Istmo.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, y Charles Tilly. 2005. *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Hacer Editorial.
- McAdam, Doug, John McCarthy, y Meyer Zald. 1999. «Oportunidades, estructuras de movilización y porvesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales.» en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, de Doug McAdam, John McCarthy y Meyer Zald. Madrid: Istmo.

- Merino Serrano Miguel y Luis Xavier Soliz. 2015. «La Gran Jornada de Protesta Nacional del 19 De Marzo.» *lalineadefuego.info*. 30 de marzo. Último ingreso 30 de septiembre de 2017. <https://lalineadefuego.info/2015/03/31/la-gran-jornada-de-protesta-nacional-del-19-de-marzo-por-miguel-merino-serrano-y-luis-xavier-solis-t/>
- Montúfar, César. 2006. *Lucio Gutiérrez y el fracaso de un proyecto autoritario. Reflexiones sobre la crisis de legitimidad política en el Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Ospina, Pablo. 2009. «Nos vino un huracán político: la crisis de la CONAIE.» en *Los Andes en movimiento: identidad y poder en el nuevo paisaje político*, de Pablo Ospina, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges. Quito: Corporación Editora Nacional.
- . 2010. «Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana: El Ecuador De Rafael Correa.» *Flacsoacdes.edu.ec*. 13 de enero. Último acceso 08 de agosto de 2017 <http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1263401619.Corporativism.pdf>.
- Pazmiño, Catalina. 2005 «La frágil legitimidad del príncipe democrático.» *Iconos* (Flacso-Ecuador) (23): 27-38.
- Porras Velasco, Angelica. 2005. *Tiempo de indios: la construcción de la identidad política colectiva del movimiento indio ecuatoriano: las movilizaciones de 1990, 1992 y 1997*. Quito: Abya Yala. http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1258&context=abya_yala.
- Ramírez, Franklin. 2000 «El 21 de enero del 2000.» *Osal* (1): 17-22.
- Resina De La Fuente, Jorge. 2015. *La transformación del Estado y el rol del movimiento indígena durante el Gobierno de Correa*. Quito: Abya Yala.
- Romero, Marco. 1998 «Profundo deterioro de la economía e inciertas perspectivas.» *Ecuador Debate* (CAAP) (44): 5-19.
- Sánchez Parga, José. 2005. «Del Conflicto social al ciclo de la protesta.» *Ecuador Debate* (CAAP) (64): 49-72.
- . 2007. *El movimiento indígena ecuatoriano: la larga ruta de la comunidad al partido*. Quito: CAAP y Abya Yala.
- . 2009. «Democracia caudillista y desmovilizaciones sociales en Ecuador.» *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, (24): 147-173. Último acceso 04 de mayo de 2017. <http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n24/art09.pdf>.
- . 2010. *Decline de los conflictos y auge de las violencias Ecuador 1998 - 2008*. Quito: Centro Andino de Acción Popular.

- SENPLADES. 2009. «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural.» *planificación.gob.ec*. Último acceso 23 de septiembre se 2017. http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf.
- . 2017. «Informe a la Nación 2007 - 2017.» *planificación.gob.ec*. Último acceso 23 de septiembre se 2017. <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Informe-a-la-Nacion.pdf>.
- . 2009. *Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución para el Buen Vivir*. Quito: SENPLADES.
- Tarrow, Sidney. 1997. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tello, Edgar. 2012. *Movimiento indígena y sistema político en Ecuador Una relación conflictiva*. Quito: Abya Yala.
- Tuaza Castro, Luis Alberto. 2011. *Reflexiones sobre la crisis del Movimiento Indígena Ecuatoriano desde las bases comunitarias*. Quito: FLACSO Sede Ecuador.
- . 2011. «La relación del gobierno de Rafael Correa y las bases indígenas: políticas públicas en el medio rural.» *Ecuador Debate* (83): 127-150.
- Unda, Mario. 2005. «Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel.» *OSAL: Observatorio Social de América Latina* (CLACSO) (16): 129-139.
- Unda, Mario, y Ellis Bethania. 2010. «Burguesía “ciudadana”, nueva hegemonía, nueva alianza de clases.» *R revista para un debate político socialista* (3): 17-29.

Revistas Kipu citadas

- Abya Yala, 1992. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 18*. Quito: Abya Yala.
- .2000. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 34*. Quito: Abya Yala.
- .2001. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 36*. Quito: Abya Yala.
- .2002. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 40*. Quito: Abya Yala.
- .2003. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 41*. Quito: Abya Yala.
- .2003. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 42*. Quito: Abya Yala.
- .2004. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 43*. Quito: Abya Yala.
- .2005. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 45*. Quito: Abya Yala.
- .2005. *Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 46*. Quito: Abya Yala.

- .2006. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 47. Quito: Abya Yala.
- .2007. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 49. Quito: Abya Yala.
- .2007. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 50. Quito: Abya Yala.
- .2008. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 51. Quito: Abya Yala.
- .2008. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 52. Quito: Abya Yala.
- .2009. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 54. Quito: Abya Yala.
- .2010. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 55. Quito: Abya Yala.
- .2012. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 59. Quito: Abya Yala.
- .2013. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 62. Quito: Abya Yala.
- .2014. Revista Kipu, El mundo indígena en la prensa ecuatoriana 63. Quito: Abya Yala.

Entrevistas

Anaguarqui Valeriana

Buelva César

Caguana Delia

Chancoso Blanca

Delfin Tenesaca

León Pedro

Lluco Miguel

Macas Luis

Muñoz Rosa Elvira

Pacari Nina

Remache Estuardo

Vargas Edwar

Yantalema Gerónimo